

60ª REUNION — 29ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) — SEPTIEMBRE 2 DE 1964

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig y Miguel P. Del Pero

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
ACHIARY, Juan C.
AGUIRRE CÁMARA, José
ALFONSIN, Raúl R.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ANTÓN, Luis
ARIAS, Luis Osvaldo
ARRASCAETA, Félix de
ARROYO, Ramón F.
AVETA, Francisco O.
ÁVILA, Eduardo Miguel
BACCAY, Rodolfo D.
BACHINI, José A.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALESTRA (h.), Juan
BELGRANC RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BERHONGARAY, Pedro J.
BERINI, Carlos J.
BERRINI, Emilio
BILBAO, Saturnino
BOBILJO, Luis Ignacio
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BRAVO, Carlos A.
BRAVO, Héctor F.
BUSACCA, Salvador F.
CACERES, Roberto M.
CAGGIANO, Ángel R.
CALABRESE, Pablo
CALVÓ, Carlos Alberto
CANTONI, Angel Serafin
CARDENAS, Juan Carlos
CARO, José Armando
CARREIRA, Emilio
CASAS, David Jorge
CATALAN, Guillermo
CENTENO, José Isaac
COGGIOLA, Luis S.
COLELLO, Clemente Juan
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTINI, Juan Carlos
CORAL, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
COSTANTINO, Adolfo I.
CHEBLE, Francisco R.
CHRISTE, Jorge J.
DE CARA, José Eduardo
DEL PERO, Miguel P.
DÍAZ, Diógenes C.
DÍAZ O'KELLY, Felipe F.
DI LEO, Amadeo

DOMINGORENA, Horacio O.
DOMÍNGUEZ, Luis C.
ELENA, Osvaldo
FABRIZIO, Luis N.
FERNÁNDEZ, José M.
FERNÁNDEZ, Raúl
FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Isidro
FERRARI, Luis
FERRERA, Jorge W.
FIGUEROA, Jaime Hernán
FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FRAGA, Jorge Horacio
GARAY, Fermín J.
GARCÍA, Horacio
GARIBALDI, Alberto
GARÓFALO, Roberto A.
GHIOI, Américo
GODOY, Ruperto Honorio
GONZÁLEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIÉRREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGLESIAS, Israel
JOFRE, Emilio
LEJARRAGA, Pablo
LESCANO, Edmundo A.
LUCO, Juan A.
LLAVER, Santiago Felipe
LLORENS, Héctor
MAGGI, José M.
MAGLIETTI, Alberto R.
MALDONADO, Carlos A.
MANSILLA, José R.
MARSICO, Adalberto O.
MARTÍNEZ, Ramón S.
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael J.
MÉNDEZ DOYLE, Abel Victor
MIGANNE, Carlos J.
MINSK, Hugo E.
MOLINAS, Ricardo F.
MOR ROIG, Arturo
MUNIAGURRIA, Camilo
MUNIZ, Ramón A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSACCHIO, Vicente M.
MUSTANI, Héctor Francisco
NOUGUÉS, Isaías J.
OCAMPO, Carlos E.
OREJA, Pablo Fermín
ORTIZ HERNÁNDEZ, Ángel H.
PATLIS, León
PEDRINI, Ferdinando

PENA, Roberto M.
PÉREZ, Raúl
PÉREZ GALLART, Alcides B.
PERNASSETTI, Horacio
PESSIN, Felipe
PICADO, Estanislao
PIZARRO, Teodosio F.
POSSE, Melchor F.
RASINES, Osvaldo Gregorio
RENÉ, José María
RIAL, Oscar
RITACCO, Araldo A.
ROBERTO, Mario
RODRÍGUEZ, Rogelio Ramón
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRÍGUEZ VAGARIA, Eduardo
ROIS, Roberto
ROMEU VERDIER, Gabriel
ROSITO, M. Oscar
ROZAUT, Adolfo R.
ROZAS, José E.
RUIZ, Aralio David
RUIZ, José Oscar
SAGO, Fayiz
SANDLER, Héctor R.
SANTA MARIA, Oscar Hipólito
SARRULLE, Oscar E.
SCALITER, Juan
SCARPELLO, Cayetano
SCHAPIRA, David
SCHAPOSNIK, Eduardo C.
SERÚ GARCÍA, Alberto
SOLARI, Eduardo A.
SOLARI, Juan Antonio
TORREIRO, Raúl
TORRIGLIA, Enrique F.
TORTONESE, Dante Oscar
TRÓCCOLI, Antonio A.
VACA LOBO, Juan Manuel
VACCAREZZA, Eduardo H.
VALENTE DE PÉREZ TORT, Lidia
VAZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VENTEMIGLIA, Rogelio A.
VILLANUEVA, Julio A.
VINALS, Fernando J.
ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, EN COMISION:

BO, Ángel
FREGA, José
LEÓN, Luis Agustín
PEREIRA, Antonio
SOLANA, Jorge D.

AUSENTES, CON LICENCIA:

CASTELLAN, Figue' A.
CUERDO, Ramón

AUSENTES, CON AVISO:

BALBOA, Hernán A.
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
GARCIA LEYENDA, F. Rodolfo

GÓMEZ MACHADO, Héctor
LILJESTHÖM, Eduardo R.
MERCADO, José Ignacio
MOSSET ITURRASPE, Mario
PALACIOS, Alfredo L.
REQUENA, Raúl María
SALADO, Francisco A.
TACHELLA, Elíber S. J.
TARULLI, Pascual

AUSENTES, SIN AVISO:

ARANA, Tomás P.
DAMIANI, Salvador
FERNANDEZ MENDY, Julio O.
GALEANO, Roberto A.
LOZANO, Martín
MASSOLO, Eduardo A.
MONTE, Ricardo Alvaro
PEÑA Y LILLO, Sil estre

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría. (Pág. 3053.)
- 2.—Apertura de la sesión. (Pág. 3053.)
- 3.—Moción del señor diputado Alfonsín para que la Presidencia disponga el giro de los asuntos entrados a las comisiones correspondientes. Se aprueba. (Pág. 3053.)
- 4.—Legislación represiva. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la materia. (Pág. 3053.)

5.—Apéndice:

Asuntos entrados:

I.—Poder Ejecutivo:

- 1.—Mensaje: instrucciones a fuerzas de seguridad para que se respeten los fueros parlamentarios en los procedimientos a realizarse. (Pág. 3141.)
- 2.—Mensaje: acusa recibo de la nota por la que se le comunicó la incorporación del señor diputado Amalio David Ruiz. (Pág. 3141.)
- 3.—Mensaje y proyecto de ley: modificación del artículo 157 del Código de Comercio. (Pág. 3141.)
- 4.—Mensaje y proyecto de ley: reformas impositivas. (Pág. 3142.)
- 5.—Mensaje y proyecto de ley: presupuesto y cálculo de recursos para el ejercicio 1964/65, y fijación del monto máximo a que podrá ascender el déficit financiero de explotación de las empresas del Estado. (Pág. 3155.)
- 6.—Mensaje y proyecto de ley: donación al Colegio Militar de la República de Bolivia. (Pág. 3199.)

II.—Comunicaciones del Honorable Senado. (Pág. 3200.)

III.—Dictámenes de comisión. (Pág. 3200.)

IV.—Comunicaciones oficiales. (Pág. 3200.)

V.—Peticiónes particulares. (Pág. 3200.)

VI.—Proyectos de ley:

- 1.—Del señor diputado Fernández Mendi: modificación de los artículos 12 y 18 de la ley 15.414 (Reglamento General de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación). (Pág. 3202.)
- 2.—Del señor diputado Fernández Mendi: incrementación del presupuesto de las universidades nacionales para el ejercicio 1963/64. (Pág. 3202.)
- 3.—Del señor diputado Balboa: pensión al señor Antonio Darío. (Pág. 3203.)
- 4.—Del señor diputado Boffi: pensión a la señora María Inés Torino de Díaz. (Pág. 3203.)
- 5.—Del señor diputado Pérez y otros: subsidio a la Obra Social y de Beneficencia Guardería Infantil San José Obrero, de Alto Verde, Llavallol, Buenos Aires. (Pág. 3203.)
- 6.—Del señor diputado Martínez Raymond: subsidio a la Sociedad Cooperadora del Colegio Nacional Mariano Moreno, de Santa Fe. (Página 3204.)
- 7.—Del señor diputado Bravo (H. F.): creación de la Dirección Nacional de Construcciones Escolares. (Página 3205.)
- 8.—Del señor diputado Belgrano Rawson: subsidio al Colegio Don Bosco de la ciudad de San Luis. (Página 3207.)
- 9.—Del señor diputado Centeno: aumento de pensión a la señora Isabel Romero de Romero. (Pág. 3207.)
- 10.—Del señor diputado Mansilla: subsidio al Club Español Rosario, de Rosario, Santa Fe. (Pág. 3207.)
- 11.—Del señor diputado De Cara y otro: iniciación de las obras de edificación de la Facultad Regional San Nicolás, de la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. (Pág. 3208.)
- 12.—Del señor diputado Tortones: donación de una fracción de terreno al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, de Godoy Cruz, Mendoza. (Pág. 3208.)

—En Buenos Aires, a los dos días del mes de septiembre de 1964, a la hora 16:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Musitani. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Musitani.

Sr. Musitani. — Señor presidente: en virtud de que numerosos legisladores se encuentran reunidos en distintas comisiones de la Honorable Cámara, solicito que se continúe llamando durante media hora más a efectos de obtener quórum.

Sr. Pizarro. — Adhiero a la solicitud del señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia cumple en informar que hay 104 señores diputados en la casa.

Si hay asentimiento, se continuará llamando.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se continuará llamando durante media hora más.

—Se continúa llamando.

—A la hora 16 y 30:

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia informa que en la casa hay 117 señores diputados y 84 en el recinto.

Sr. Musitani. — Hago indicación de que se pase lista.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si hay asentimiento así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se pasará lista.

—Se inicia el pase de lista.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Como ya hay número en el recinto se suspenderá el pase de lista.

2

APERTURA DE LA SESION

Sr. Presidente (Mor Roig). — Con la presencia de 104 señores diputados queda abierta la sesión especial convocada por resolución de la Honorable Cámara a fin de considerar el orden del día 88.

3

MOCION

Sr. Alfonsín. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — Para mocionar en el sentido de que la Cámara autorice a la Presidencia a dar el giro correspondiente a los asuntos entrados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la moción del señor diputado Alfonsín.

—Resulta afirmativa (1).

4

LEGISLACION REPRESIVA

(Orden del día número 88)

I

Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales han estudiado conjuntamente el mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre derogación de normas penales y las iniciativas obrantes en las comisiones; y, por las razones expuestas en el informe escrito reglamentario que se acompaña y las que darán los señores miembros informantes, aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Deróganse los decretos leyes y decretos 4.161/56, 22.490/56, 7.165/62, 8.161/62, 1.296/63, 2.713/63, 788/63, 1.607/63, 3.134/63, 4.200/63, 4.214/63, 4.215/63, 4.778/63, 5.175/63, 5.540/63, 5.541/63 y demás decretos leyes y decretos que contengan sanciones penales, y los artículos 157 y 259 del Código Penal (ley 11.179).

Art. 2º — Decláranse vigentes las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63 y 4.778/63, menos los artículos 8º, 9º, 11, 12, letras a), b) y e), 15 y 17 segunda parte de la ley 13.985.

Art. 3º — Incorpórase al Código Penal, como capítulo V del título de los «Delitos contra el orden público» y bajo el epígrafe de «Otros atentados contra el orden público», el siguiente artículo:

Artículo 213 bis. — Serán reprimidos con prisión de 6 meses a 3 años:

1. Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieren por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas, por el solo hecho de su participación.
2. El que públicamente instigare o participe en actos tendientes a que se aplique un tratamiento desigual a las personas, fundado en motivos religiosos o raciales.
3. Los que, pública o privadamente, instigaren a los militares o a los com-

(1) Véase los asuntos entrados en el Apéndice.

ponentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar.

Art. 49 — Agrégase como última parte del artículo 218 del Código Penal, lo siguiente:

Se aplicarán también a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto.

Art. 59 — Incorpórase al Código Penal, como capítulo IX bis del título «Delitos contra la administración pública», bajo el epígrafe «Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados», los artículos siguientes:

Artículo 268¹. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el funcionario o empleado público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario o empleado público, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

El que diere la dádiva o hiciere la promesa y la persona interpuesta para hacerla o recibirla, serán reprimidos con prisión de uno a tres años.

Artículo 268². — Será reprimido con la pena del artículo 268¹, párrafo 19, el funcionario o empleado público que, con fines de lucro, utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Artículo 268³. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario o empleado público que admitiere dádivas que le fueran entregadas en consideración a su función o empleo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

Artículo 268⁴. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario que debidamente requerido no justificare la procedencia de un aumento excesivo patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con prisión de uno a cuatro años.

Art. 69 — Incorpórase al Código Penal, como párrafo segundo del artículo 261, el siguiente:

Será reprimido con la misma pena el funcionario o empleado público que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Art. 79 — Incorpórase al Código Penal el artículo siguiente:

Artículo 253 bis. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro años el funcionario o empleado público que revelare hechos, actuaciones o documentos que deben quedar secretos.

Art. 89 — Sustitúyense las siguientes penas establecidas en el Código Penal:

La del artículo 256, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años.

La del artículo 257, párrafo 19, primera parte, por prisión de uno a cuatro años, y reclusión o prisión de dos a seis años de la segunda parte. La del párrafo segundo del mismo artículo, por la inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo.

La del artículo 265, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años.

La del artículo 266, por prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años.

La del artículo 267, por las de prisión hasta cuatro años y de inhabilitación hasta seis años.

Art. 99 — Sustitúyese el artículo 302 del Código Penal, por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurren las circunstancias del artículo 172:

1. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de habersele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación.
2. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.
3. El que librare un cheque y diera contraorden para el pago fuera de los ca-

sos en que la ley autoriza a hacerlo o frustrare maliciosamente su pago.

4. El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.

Art. 10. — Sustitúyense las palabras «rebelión en el caso del artículo 226 del Código Penal, sedición en el caso del artículo 229 del Código Penal, asociación ilícita o cualquiera de los comprendidos en el decreto ley 788/63, del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Criminal para la justicia federal y los tribunales de la Capital y los territorios nacionales, reformado por el artículo 24 del decreto ley 2.021/63», por las siguientes:

o cualquiera de los comprendidos en el libro segundo, título VIII, capítulos 2, 3 y 5, título IX, título X, título XI, capítulo 6, 7, menos los casos de los artículos 262 y 264, 8, 9, y 9 bis del Código Penal, o en la ley 13.985.

Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. Sala de la comisión, 29 de julio de 1964.

Juan Carlos Contini. — Carlos A. Bravo. — Adolfo R. Rouzaut. — Eduardo A. Solari. — Angel H. Ortiz Hernández. — Santiago Felipe Llaver. — Mario A. Grau. — Horacio García. — José A. Bachiñi. — David Schapira. — Adolfo I. Costantino.

En disidencia parcial:

Mario Roberto.

INFORME

Señor presidente:

El proyecto de ley que sometemos a consideración de la Honorable Cámara responde a la preocupación democrática que el Poder Ejecutivo nacional se ha propuesto interpretar, al remitirle su mensaje 2.801, del corriente año 1964.

El presente proyecto propone derogar todos aquellos decretos leyes dictados por el Poder Ejecutivo nacional que contienen preceptos de carácter penal, y que importan restricciones para actividades de carácter político o ideológico, restricciones éstas que no son admisibles en el ordenamiento jurídico normal de una comunidad democráticamente constituida.

Por otra parte, se proponen modificaciones al Código Penal que resulten aconsejables de acuerdo al mencionado mensaje del Poder Ejecutivo nacional y de conformidad con el resultado de los estudios realizados en las comisiones donde fue escuchada la opinión de caracterizados tratadistas y autores, incluido el doctor Núñez, autor del dictamen que sirvió de fundamento al Poder Ejecutivo nacional.

Así, se propone como artículo 213 bis del código mencionado, una norma que incrimina a quienes participan en organizaciones de finali-

dades violentas o a quienes instiguen a las discriminaciones raciales o religiosas peyorativas o a la desobediencia militar.

Igualmente, se reprime a los extranjeros residentes en el país que traicionen a la República o tomen las armas contra ella, y se establecen nuevos preceptos para sancionar a los funcionarios públicos que se enriquezcan ilícitamente o a quienes libren creques sin provisión de fondos.

En lo concerniente a los atentados contra la voluntad popular, no se ha considerado conveniente innovar por cuanto el decreto ley que estableció el texto ordenado del régimen electoral nacional ha sido ratificado por la ley nacional 14.467, y en el mismo no se reprimen, por otra parte, actividades ideológicas ni políticas, sino delitos comunes.

El presente proyecto de ley responde, pues, a todas las expectativas inspiradas por el tema con el más amplio espíritu y con la mayor previsión.

Carlos A. Bravo.

II

Dictámenes en minoría

1

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, en minoría, han estudiado conjuntamente el mensaje y proyecto de ley remitidos por el Poder Ejecutivo, sobre derogación de normas penales; y, por las razones que se dan en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante aconsejan la aprobación del dictamen de la mayoría, con la modificación de los artículos 1º y 2º, en la siguiente forma:

Artículo 1º — Decláranse sin validez los decretos leyes y decretos 4.161/56, 22.490/56, 7.165/62, 8.161/62, 1.296/63, 2.713/63, 788-63, 1.607/63, 3.134/63, 4.200/63, 4.214/63, 4.215/63, 4.778/63, 5.175/63, 5.540/63, 5.541-63, y demás decretos leyes y decretos en cuanto modifican el Código Penal, crean tipos de delito y fijan penas; y se derogan las otras disposiciones que ellos contienen.

Artículo 2º — Declárase que han estado en vigencia las disposiciones jurídicas derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63 y 4.778/63; y se derogan los artículos 157 y 259 del Código Penal, y 8, 9, 11, 12, letras a), b) y e), 15 y 17 segunda parte de la ley 13.985.

Sala de la comisión, 30 de julio de 1964.

Adolfo R. Rouzaut.

INFORME

Honorable Cámara:

Los decretos y decretos leyes referidos en el artículo 1º en cuanto modifican el Código Penal, crean tipos de delito y aplican sanciones, están

en contra de las garantías constitucionales de la libertad civil previstas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y por tanto la «necesidad» no ha podido ser el fundamento de su dictado. Por eso, preferimos que la norma proyectada se refiera a la invalidez de esos decretos y decretos leyes y no a la derogación de una norma sin validez constitucional.

El artículo 2º afirma la vigencia de las normas derogadas, modificadas o sustituidas por los decretos declarados sin validez, referidos en el artículo 1º, porque ésa es la consecuencia de su inconstitucionalidad que en esta materia es posible declarar, por ser disposiciones más benignas.

Adolfo R. Rouzaut.

2

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, en minoría, han estudiado conjuntamente el mensaje y proyecto de ley remitidos por el Poder Ejecutivo sobre derogación de normas penales; y, por las razones que darán los señores miembros informantes, aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Deróganse los decretos leyes y decretos 4.161/56, 22.490/56, 7.165/62, 8.161/62, 1.296/63, 2.713/63, 1.607/63, 3.134/63, 4.200/63, 4.214/63, 4.215/63, 4.778/63, 5.175/63, 5.540/63, 5.541/63, y demás decretos leyes y decretos que contengan sanciones penales.

Art. 2º — Decláranse vigentes las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63 y 4.778/63, menos los artículos 222, 223 y 224 del Código Penal (ley 11.729) y artículos 8º, 9º, 11, 12 incisos a), b) y e), 15 y 17, segunda parte de la ley 13.985.

Art. 3º — Déjase sin efecto la expresión «sin ulterior recurso» de los artículos 8º, y 16 del decreto ley 4.805/63.

Art. 4º — Déjase sin efecto la expresión «o cualquiera de los comprendidos en el decreto ley 788/63» del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Penal.

Art. 5º — A los hechos juzgados o pendientes de decisión judicial que estén comprendidos en el régimen de la ley 15.293 les será aplicable el artículo 2º del Código Penal.

Art. 6º — Sustitúyese el artículo 302 del Código Penal por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave:

1. El que librare un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto.

2. El que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo.
3. El que librare un cheque en formulario ajeno.
4. El que librare un cheque a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá, legalmente, ser pagado.

En todos los casos el librador deberá ser informado de la falta de pago mediante protesto u otra forma de interpelación quedando exento de pena si abonare el importe del cheque dentro de las 24 horas siguientes.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 30 de julio de 1964.

José Armando Caro. — Juan Carlos Cornejo Linares. — Héctor Gómez Machado. — Fayiz Sago. — David Jorge Casas. — Horacio O. Domingorena. — Vicente M. Musacchio. — Roberto A. Galeano.

INFORME

Señor presidente:

El proyecto de ley sometido a la consideración de esta Honorable Cámara por el Poder Ejecutivo responde, evidentemente, a los sanos principios democráticos y a la plena vigencia de la Constitución. La potestad legislativa del Poder Ejecutivo, en materia punitiva, es contraria, absolutamente, al sabio principio *nullum crimen nulla poena sine lege*, del que emerge un doble proceso de garantía individual: tener ante sí, predeterminados, los hechos punibles y las penas correspondientes (garantía criminal) y no ser sancionado con penas diversas de las establecidas previamente (garantía penal).

Las razones de necesidad, que son la que estructuran o pretenden estructurar el andamiaje jurídico de los decretos leyes, podrán auspicar su vigencia en otros ordenamientos extrapenales, pero en lo que se refiere al derecho criminal, el principio *nullum crimen nulla poena sine lege*, estampado en el artículo 18 de la Constitución Nacional exige que una ley penal sea una ley *sensu stricto* y no un simple decreto ley, que si bien sustancialmente es un acto legislativo, formalmente es un acto de administración (Bielsa, *Principios de derecho administrativo*, página 123).

La Comisión de Legislación Penal, en presencia del proyecto que se considera y no obstante su íntima convicción acerca de la necesidad de la derogación de todos los decretos leyes y decretos con contenido penal y, más aún, de los sancionatorios de actividades ideológicas, políticas y sociales, solicitó la opinión de los maestros del derecho penal, entre ellos, los profesores Sebastián Soler, Luis Jiménez de Asúa, Fran-

cisco P. Laplaza y Ricardo C. Núñez, así como también de la Confederación General del Trabajo, escuchando así mismo el pensamiento de diversas entidades representativas. Todos coincidieron plenamente en esta urgente e imperiosa derogación.

Con profunda fe democrática sostenemos que la sanción del presente proyecto será la medida más eficaz para el restablecimiento de las instituciones democráticas, para el afianzamiento del orden y, en consecuencia, la paz y la igualdad de derechos entre todos los argentinos.

Si bien es cierto que se reconoce la necesidad de legislar sobre las reformas propiciadas por el Poder Ejecutivo en su proyecto, entendemos que la derogación de los decretos y decretos leyes debe ser un acto autónomo, con la sola excepción de la reforma del artículo 302 del Código Penal por la que se eleva la pena y se reprimen conductas no contempladas en la referida disposición, modificaciones éstas reclamadas por el comercio y aconsejadas por los profesores del derecho penal.

Entendemos que las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo deben ser sancionadas pero conjuntamente con la reforma integral del Código Penal por razones de relaciones sistemáticas y metodológicas.

Fayiz Sago. — José Armando Caro.

3

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, en minoría, han estudiado conjuntamente el mensaje y proyecto de ley remitidos por el Poder Ejecutivo sobre derogación de normas penales; y, por las razones que darán los señores miembros informantes, aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Incorpórase al Código Penal, como capítulo V del título de los «Delitos contra el orden público» y bajo el epígrafe de «Otros atentados contra el orden público», el siguiente artículo:

Artículo 213 bis. — Serán reprimidos con prisión de 6 meses a tres años:

- 1º Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales, que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieran por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas por el solo hecho de su participación.
- 2º El que públicamente instigare o participare en actos tendientes a que se

aplique un tratamiento desigual a las personas, fundada en motivos religiosos o raciales.

- 3º Los que, pública o privadamente, instigaren a los militares o a los componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o a violar los deberes de la disciplina militar u otros deberes inherentes a su estado.

Art. 2º — Agrégase como última parte del artículo 218 del Código Penal, lo siguiente:

Se aplicarán también a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto.

Art. 3º — Incorpórase como artículo 222 del Código Penal (título IX, capítulo 2, del libro segundo), el siguiente:

Artículo 222. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación.

Art. 4º — Sustitúyense las siguientes penas establecidas por el Código Penal:

La del artículo 226, por prisión de dos a diez años.

La del artículo 229, por prisión de uno a seis años.

La del artículo 230, por prisión de uno a cuatro años.

Art. 5º — Incorpóranse al Código Penal, como capítulo IX bis del título «Delitos contra la administración pública», bajo el epígrafe «Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados», los artículos siguientes:

Artículo 268¹. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el funcionario o empleado público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario o empleado público, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

El que diere la dádiva o hiciera la promesa y la persona interpuesta para hacerla o recibirla, serán reprimidos con prisión de uno a tres años.

Artículo 268². — Será reprimido con la pena del artículo 261¹, párrafo 1º, el funcionario o empleado público que, con fines de lucro, utilizare para sí o para un tercero

informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Artículo 268^a. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta por uno a seis años, el funcionario o empleado público que admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su oficio.

El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

Art. 6º — Incorpórase al Código Penal, como párrafo 2º del artículo 261, el siguiente:

Será reprimido con la misma pena el funcionario o empleado público que empleare en provecho propio o de tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Art. 7º — Incorpórase al Código Penal, el artículo siguiente:

Artículo 253 bis. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el funcionario o empleado público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos.

Art. 8º — Sustitúyense las siguientes penas establecidas en el Código Penal:

La del artículo 256, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años.

La del artículo 257, párrafo 1º, primera parte, por prisión de dos a seis años la de la segunda parte. La del párrafo 2º del mismo artículo, por la de inhabilitación especial por dos a seis años en el primer caso y por tres a diez años en el segundo.

La del artículo 265, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años.

La del artículo 266, por prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años.

La del artículo 267, por la de prisión hasta cuatro años y de inhabilitación hasta seis años.

Art. 9º — Sustitúyese el artículo 302 del Código Penal, por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave:

1. El que librare un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto.
2. El que librare un cheque y diere

contraorden para el pago, fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo.

3. El que librare un cheque en formulario ajeno.

4. El que librare un cheque a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá, legalmente, ser pagado.

En todos los casos el librador deberá ser informado de la falta de pago mediante protesto u otra forma de interpelación, quedando exento de pena si abonare el importe del cheque, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Art. 10. — Deróganse los decretos leyes y decretos 4.161/56, 22.490/56, 7.165/62, 8.161/62, 1.296/63, 2.713/63, 788/63, 1.607/63, 3.134/63, 4.200/63, 4.214/63, 4.215/63, 4.778/63, 5.175/63, 5.540/63, 5.541/63 y demás decretos leyes y decretos que contengan sanciones penales.

Art. 11. — Deróganse los artículos 157 y 259 del Código Penal.

Art. 12. — Decláranse vigentes las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63, y 4.778/63, menos los artículos 222, 223 y 224 del Código Penal (ley 11.179), y artículos 8º, 9º, 11 y 12, incisos a), b) y e), 15 y 17, segunda parte de la ley 13.985.

Art. 13. — Déjase sin efecto la expresión «sin ulterior recurso» de los artículos 8º y 16 del decreto ley 4.805/63.

Art. 14. — Déjase sin efecto la expresión «o cualquiera de los comprendidos en el decreto ley 788/63» del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Penal.

Art. 15. — A los hechos juzgados o pendientes de decisión judicial que están comprendidos en el régimen de la ley 15.293 les será aplicable el artículo 2º del Código Penal.

Art. 16. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 29 de julio de 1964.

Guillermo A. Belgrano Rawson. —
Saturnino Bilbao.

INFORME

Señor presidente:

Este despacho no discrepa, en lo fundamental, con el de la mayoría de las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales. No obstante, he creído necesario formularlo separadamente por parecerme de mejor técnica legislativa estructurar las normas positivas que modifican el Código Penal y en los últimos artículos las normas penales que se derogan, como consecuencia de la modificación, y, además, los decretos leyes y decretos que se enumeran.

Participo de la convicción sobre la urgencia de dictar normas que tiendan a proteger la

seguridad social contra cierto tipo de agrupaciones que, sin estar claramente comprendidas en el artículo 210, tuviesen por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas y las cosas, contra la acción individual que tienda a aplicar tratamiento desigual a las personas, fundada en motivos religiosos o raciales y contra la instigación a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar.

Con el mismo criterio, se propicia la agravación de las penas establecidas en los artículos 226, 229 y 230, se modifica el artículo 222 para incriminar el ultraje público de los símbolos nacionales y se estructuran normas que incriminan el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

Debe señalarse que en este despacho se excluye el artículo 268⁴ por establecer una presunción de culpabilidad que contraría un principio procesal penal que ha tenido universal acogida y que, sin excepción, ha sido consagrado por nuestra doctrina, legislación y jurisprudencia.

En lo relativo a la sustitución del artículo 302, se ha preferido incorporar sin modificaciones la norma estructurada en el anteproyecto del doctor Sebastián Soler, que, en todos los casos, exceptúa de pena al librador que abonare el importe del cheque dentro de las veinticuatro horas siguientes del protesto o interpelación.

Se deja así fundado este despacho de minoría, para dar cumplimiento a disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de ampliar verbalmente en su oportunidad los motivos que lo han determinado.

Saturnino Bilbao.

4

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, en minoría, han estudiado conjuntamente el mensaje y proyecto de ley remitidos por el Poder Ejecutivo sobre derogación de normas penales, y, por las razones que darán los señores miembros informantes, aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Deróganse los decretos leyes y decretos 4.161/56, 22.490/56, 7.165/62, 8.161/62, 1.296/63, 2.713/63, 788/63, 1.607/63, 3.134/63, 4.200/63, 4.214/63, 4.215/63, 4.778/63, 5.175/63, 5.540/63, 5.541/63, y demás decretos leyes y decretos que contengan sanciones penales.

Art. 2º — Decláranse vigentes las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63, 4.778/63, menos los artículos 222, 223 y 224 del Código Penal

(ley 11.729) y artículos 8º, 9º, 11, 12, inciso a), b) y e), 15 y 17 segunda parte de la ley 13.985.

Art. 3º — Déjase sin efecto la expresión «sin ulterior recurso» de los artículos 8 y 16 del decreto ley 4.805/63.

Art. 4º — Déjase sin efecto la expresión «o cualquiera de los comprendidos en el decreto ley 788/63» del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Penal.

Art. 5º — A los hechos juzgados o pendientes de decisión judicial que estén comprendidos en el régimen de la ley 15.293 les será aplicable el artículo 2º del Código Penal.

Art. 6º — 213 bis. Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que, en forma individual o colectiva, instigaren, participaren o realizaren actos tendientes a que se aplique un tratamiento desigual o discriminatorio a las personas o entidades fundado en motivos raciales, religiosos, políticos o sociales.

Art. 7º — Sustitúyese el artículo 302 del Código Penal, por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave:

1. El que librare un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto.
2. El que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo.
3. El que librare un cheque en formulario ajeno.
4. El que librare un cheque a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.

En todos los casos el librador deberá ser informado de la falta de pago mediante protesto u otra forma de interpelación quedando exento de pena si abonare el importe del cheque dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Art. 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 31 de julio de 1964.

José Eduardo De Cara. — Camilo Muñagurria.

INFORME

Señor presidente:

El proyecto de ley cuya sanción se aconseja en el dictamen adjunto, constituye una de las últimas etapas que el país está cumpliendo en su marcha hacia el reencauzamiento definitivo de su vida institucional en el marco de la Constitución y en el respeto a la libertad.

La implantación de normas penales, las calificaciones infamantes por sostener una ideolo-

gía, la incriminación del delito de opinión, hechas todas por decretos leyes, no sólo vicia el principio, con jerarquía constitucional, de que no hay crimen ni pena sin ley previa al hecho del proceso, sino que además importa un avance inaceptable sobre la libertad de pensamiento y de opinión.

Por lo expuesto apoyamos la derogación autónoma de los decretos y decretos leyes represivos, con la excepción de la reforma del artículo 302 del Código Penal y la inclusión de un nuevo artículo en el mismo código por el cual se sanciona la discriminación racial. Necesidades imperiosas justifican las excepciones precedentemente señaladas. Con respecto a las importantes reformas propuestas por el Poder Ejecutivo, entendemos por razones metodológicas, que ellas deberán ser tratadas en la oportunidad en que el Congreso trate la reforma integral del Código Penal.

José Eduardo De Cara. — Camilo Muniagurria.

5

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación Penal y Asuntos Constitucionales, en minoría, han estudiado conjuntamente el mensaje y proyecto de ley remitidos por el Poder Ejecutivo sobre derogación de normas penales y, por las razones que darán los señores miembros informantes, aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Incorpórase al Código Penal, como capítulo V del título de los «Delitos contra el orden público» y bajo el epígrafe de «otros atentados contra el orden público», el siguiente artículo:

1. Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales, que, sin estar comprendidos en el artículo 210, tuvieren por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas por el solo hecho de su participación.
2. Los que públicamente instigaren o participaren en actos tendientes a que se aplique un tratamiento desigual a las personas, fundado en motivos religiosos o raciales.

Art. 2º — Agrégase como última parte del artículo 218 del Código Penal, lo siguiente:

Se aplicará también a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho

de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto.

Art. 3º — Incorpórase como artículo 222 del Código Penal (título IX, capítulo 2, del libro segundo) el siguiente:

Artículo 222. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo, el himno de la Nación, monumentos y esculturas de próceres y hechos históricos.

Art. 4º — Sustitúyense las siguientes penas establecidas por el Código Penal:

La del artículo 226 por prisión de 2 a 10 años.

La del artículo 229 por prisión de 1 a 6 años.

La del artículo 230 por prisión de 1 a 4 años.

Art. 5º — Incorpóranse al Código Penal, como capítulo IX bis del título «Delitos contra la administración pública», bajo el epígrafe «Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados», los artículos siguientes:

Artículo 268¹. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el funcionario o empleado público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario o empleado público, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones. El que diere la dádiva o hiciere la promesa y la persona interpuesta para hacerla o recibirla, serán reprimidos con prisión de uno a tres años.

Artículo 268². — Será reprimido con la pena del artículo 268¹, párrafo 1º, el funcionario o empleado público que, con fines de lucro, utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Artículo 268³. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta por uno a seis años, el funcionario o empleado público que admitiere dádivas que le fueren entregadas en consideración a su oficio.

El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

Artículo 268⁴. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un aumento exce-

sivo patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con prisión de uno a cuatro años.

Art. 6º — Incorpórase al Código Penal, como párrafo 2º del artículo 261, el siguiente:

Será reprimido con la misma pena el funcionario o empleado público que empleare en provecho propio o de tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Art. 7º — Incorpórase al Código Penal, el artículo siguiente:

Art. 253 bis. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por uno a cuatro años el funcionario o empleado público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos.

Art. 8º — Sustitúyense las siguientes penas establecidas en el Código Penal:

La del artículo 256, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años.

La del artículo 257, párrafo 1º, primera parte, por prisión de uno a cuatro años y reclusión o prisión de dos a seis años la de la segunda parte. La del párrafo 2º del mismo artículo, por la de inhabilitación especial por dos a seis años en el primer caso y por tres a diez años en el segundo.

La del artículo 265, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años.

La del artículo 266, por prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años.

La del artículo 267, por la de prisión hasta cuatro años y de inhabilitación hasta seis años.

Art. 9º — Sustitúyese el artículo 302 del Código Penal, por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave:

1. El que librare un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto.
2. El que librare un cheque y diere contraorden para el pago fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo.
3. El que librare un cheque en formulario ajeno.
4. El que librare un cheque a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá, legalmente, ser pagado.

En todos los casos el librador deberá ser informado de la falta de pago mediante protesto u otra forma de interpelación, quedando exento de pena si abonarse el importe del cheque dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Art. 10. — Sustitúyense las palabras «rebelión en el caso del artículo 226 del Código Penal, sedición en el caso del artículo 229 del Código Penal, asociación ilícita o cualquiera de los comprendidos en el decreto ley 788/63», del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal y los Tribunales de la Capital y los Territorios Nacionales, reformado por el artículo 24 del decreto ley 2.021/63», por las siguientes: «o cualquiera de los comprendidos en el libro segundo, título VIII, capítulos 2, 3 y 5, título IX, título X, título XI, capítulos 6 y 7 menos los casos de los artículos 262 y 264, 8, 9, y 9 bis del Código Penal, o en la ley 13.985».

Art. 11. — Deróganse los decretos leyes y decretos 4.161/56, 22.490/56, 7.165/62, 8.161/62, 1.296/63, 788/63, 2.713/63, 1.607/63, 3.134/63, 4.200/63, 4.214/63, 4.215/63, 4.778/63, 5.178/63, 5.540/63, 5.541/63 y demás decretos leyes y decretos que contengan sanciones penales.

Art. 12. — Deróganse los artículos 157 y 259 del Código Penal.

Art. 13 — Decláranse vigentes las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63 y 4.778/63 (menos los artículos 222, 223, 224 y 259 del Código Penal, ley 11.179) y los artículos 8, 9, 11, 12, letras a, b y e, 15 y 17 segunda parte de la ley 13.985.

Art. 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 30 de julio de 1964.

Eduardo Miguel Avila. — Jorge I. Christe.

INFORME

Señor presidente:

Atendiendo a la inquietud por un orden jurídico que no sea discriminatorio de las expresiones de carácter político e ideológico, propiciamos la derogación de la legislación represiva dictada por gobiernos que no tenían la plena capacidad legislativa, pero atentos a no descuidar las necesidades de la seguridad pública y la tutela de importantes bienes sociales, hemos proyectado diversos institutos jurídicos o agravados penalidades.

A ese fin, en el artículo primero incorporamos al Código Penal, como artículo 213 bis, la asociación para ejercer violencias en las personas o cosas, que no constituyan delitos de

por sí, e igualmente la instigación o participación en actos tendientes a aplicar un tratamiento desigual a las personas, por motivos religiosos o raciales. Se trata de sancionar conductas proclives a crear en la República un problema, que es cáncer de naciones importantes y que felizmente carecen de asidero en nuestras tradiciones y en nuestra realidad.

En el artículo tercero se reprime el público ultraje a los símbolos nacionales así como a los testimonios conmemorativos de hechos y personas de la nacionalidad.

En los artículos quinto, sexto y séptimo se proyectan prescripciones para sancionar el enriquecimiento ilícito de funcionarios o empleados públicos, con una innovación tan extraordinaria como la que se incorpora al Código Penal como artículo 268⁴, de la que no hay mayores precedentes en la legislación extranjera. De acuerdo con la reforma proyectada se presume como ilícito cualquier aumento excesivo del patrimonio de un funcionario o empleado público, salvo prueba en contrario, a cargo de éste. La inversión de la prueba, en materia penal, que es propia de la legislación excepcional y de emergencia, abarcará en su ámbito a un alto porcentaje de habitantes de nuestro país y será, sin duda, objeto de un estudio exhaustivo por parte de esta Honorable Cámara.

En el artículo noveno proyectamos la reforma del artículo 302 del Código Penal, siguiendo los lineamientos del proyecto del Poder Ejecutivo del año 1960, redactado sobre la base del anteproyecto preparado por el eminente maestro Sebastián Soler. Es obvia la conveniencia de agravar las leves sanciones de nuestro Código Penal.

En la parte final van las disposiciones referentes a los decretos leyes y decretos que se derogan y las que declaran la vigencia de determinados institutos legales.

Consideramos de buena técnica legislativa calificar a nuestro despacho como de reformas al Código Penal, con las lógicas derogaciones que trae apareado todo proyecto de reformas.

Eduardo Miguel Avila.

6

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, en minoría, han estudiado conjuntamente el mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre derogación de normas penales y los proyectos de ley del diputado Alfredo L. Palacios sobre derogación de la ley 13.234 y sobre enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, así como el proyecto de ley del diputado Pablo Lejarraga (454-D-63); y, por las razones que dará el miembro informante, se aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Decláranse nulos y consecuentemente inexistentes, afectados por vicio de inconstitucionalidad por violación de los artículos 18, 67, incisos 11 y 68 a 73 de la Constitución Nacional, los decretos, decretos leyes y/o decretos con fuerza de ley siguientes: 4.161/56; 22.490/56; 7.165/62; 8.161/62; 1.296/63; 2.713/63; 788/63; 1.607/63; 3.134/63; 4.200/63; 4.214/63; 4.215/63; 4.778/63; 5.175/63; 5.540/63; 4.805/63; 5.541/63, como así mismo los decretos, decretos leyes y/o decretos con fuerza de ley que modifiquen el Código Penal, creen delitos y establezcan penas.

Art. 2º — Deróganse las leyes 13.234 (dicta normas para organizar la Nación para tiempo de guerra, las que serán adoptadas desde tiempo de paz) y 13.985 (represión de los delitos contra la seguridad de la Nación).

Art. 3º — En los procesos o penas que reconozcan su origen en el régimen de la ley 15.293, se aplicará la disposición contenida en el artículo 2º del Código Penal.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ramón A. Muñiz.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Todo funcionario o empleado público nacional, provincial, municipal o de instituciones, reparticiones autónomas o autárquicas, sea designado por nombramiento o elección, que se enriqueciere directamente o por interpuesta persona mediante el ejercicio ilegal o deshonesto de su cargo o de la influencia derivada del mismo, o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta por doble tiempo. Si el funcionario fuere designado por elección, o juez o ministro, la pena será de reclusión o prisión de cuatro a doce años e inhabilitación absoluta perpetua.

Art. 2º — Salvo prueba en contrario, se presume enriquecimiento ilegítimo todo aumento de patrimonio, inclusive el del cónyuge si el funcionario fuere casado y no mediare separación, que no proviniere de las siguientes causas:

- a) Emolumentos legales del cargo;
- b) Ejercicio de profesión, oficio o actividad lícita, compatible con la función pública;
- c) Acrecentamiento natural de los bienes que se tenían al asumir el cargo, o que

se adquirieren lícitamente durante su ejercicio, y las rentas que produjeran esos mismos bienes;

- d) Herencia, legado o donación por causa extraña a la función, acreditados por instrumento público;
- e) Ejercicio de derechos legítimamente adquiridos.

Art. 39 — Los que hicieron las dádivas que constituyen el enriquecimiento ilegítimo o formularon las promesas indicadas en el artículo 19, y las personas interpuestas para hacerlas o recibirlas, serán reprimidos como autores principales.

Art. 40 — Los bienes que constituyen el enriquecimiento ilegítimo o su valor cuando ellos hubieren salido del patrimonio del condenado, corresponderán, salvo los derechos de terceros no beneficiados con el delito, al consejo de educación de la jurisdicción respectiva nacional o provincial.

Registro Nacional de Bienes

Art. 59 — Créase con carácter autónomo y con asiento en la Capital Federal, el Registro Nacional de Bienes de los Funcionarios y Empleados Públicos.

El registro estará a cargo de un director, nombrado por el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del Senado, por el término de cuatro años. Será reelegible y a él incumbe proponer el nombramiento del personal correspondiente que le asigne la ley.

Art. 60 — Los funcionarios y empleados comprendidos en esta ley deberán enviar al registro, dentro de los treinta días de asumir sus funciones, una declaración jurada y firmada de todos sus bienes, rentas y deudas y de toda otra asignación que además de los emolumentos del cargo perciban, de cualquier naturaleza que sea, con las especificaciones necesarias para establecer con exactitud la situación de su patrimonio. Cuando fueren casados y no mediare separación, enviarán también la declaración de los bienes, rentas, emolumentos y obligaciones del cónyuge.

Los funcionarios y empleados actuales comprendidos en esta disposición deberán cumplirla dentro de los noventa días de su vigencia. Están exceptuados de declaración y registro de bienes:

- a) Los empleados inferiores que desempeñen simples funciones de auxiliares, ayudantes, escribientes, dactilógrafos y similares;
- b) El personal subalterno de ordenanzas, porteros, choferes, ascensoristas, serenos, guardianes y obreros jornaleros de toda clase;

- c) Las clases y soldados del ejército, de la armada, de la policía y de los cuerpos de seguridad pública y de bomberos.

Art. 70 — Después de registrada la primera declaración prevista en el artículo anterior, toda nueva adquisición, enajenación o movimiento de bienes, así como todo aumento de ingresos por cambio en las tareas privadas o públicas y las que se asumieren con posterioridad, serán igualmente declaradas dentro del plazo de treinta días de producida la modificación.

Art. 80 — Las constancias y asientos del Registro de Bienes serán reservados, pudiendo únicamente comunicarse a requerimiento:

- a) Del funcionario o empleado interesado;
- b) De los jueces competentes;
- c) De los ministros del Poder Ejecutivo de la Nación o de las provincias, cuando se trate de funcionarios o empleados de sus respectivos ministerios o de reparticiones autónomas o autárquicas;
- d) De las Cámaras del Congreso Nacional o respectivas Legislaturas provinciales;
- e) De los intendentes y concejos deliberantes, con relación a funcionarios o empleados de las respectivas municipalidades;
- f) De los tribunales que ejerzan funciones de superintendencia en la administración de justicia, con respecto a funcionarios o empleados de su jurisdicción;
- g) Del ministerio público de la jurisdicción penal;
- h) De los registros provinciales de bienes, con respecto a funcionarios de su respectiva jurisdicción.

Cada vez que el registro proporcione un informe sobre asientos o constancia del mismo, practicará una anotación marginal con especificación del destino del informe y motivo que lo ocasione.

Art. 90 — Los términos «funcionario público» y «empleados públicos» designan, indistintamente, al que de modo permanente o transitorio ejerce funciones públicas dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Nación, de las provincias o de los territorios nacionales, en las comunas y en las reparticiones autónomas o autárquicas creadas por el Estado; ya sea por nombramiento de autoridad competente o por elección popular.

Denuncia

Art. 10. — El director del registro pondrá en conocimiento del juzgado que corresponda todo hecho que, por la confrontación de los asientos o antecedentes reunidos, pueda constituir alguno de los delitos previstos en esta ley, remitiendo con la denuncia, testimonio de las constancias pertinentes.

Art. 11. — Toda persona capaz podrá denunciar al director del registro cualquier hecho que haga presumir la comisión de delitos reprimidos por esta ley, debiendo acreditar su identidad y domicilio.

Formulada la denuncia, el director requerirá de las oficinas públicas que corresponda las informaciones necesarias para comprobar su veracidad, y efectuada la confrontación con los asientos del registro, procederá a poner el hecho en conocimiento del juez competente, enviándole copia de la denuncia, de las informaciones recibidas y de los asientos respectivos.

Actividades prohibidas

Art. 12. — Desde la vigencia de la presente ley, queda prohibido especialmente a todo funcionario y empleado público realizar las actividades siguientes:

- a) Representar o patrocinar, directa o indirectamente, a particulares o a asociaciones o entidades, tengan o no personería jurídica, para la obtención o prórroga de concesiones o franquicias de la administración pública o cualquier otro beneficio que importe un privilegio; o para conseguir la anulación o derogación de actos de la administración o el pago de sumas o entrega de bienes por efecto de la nulidad o derogación de tales actos;
- b) Recibir directa o indirectamente, en forma permanente o transitoria, beneficios originados por concesiones o franquicias otorgadas por la administración pública. Exceptúase el uso personal, sin ningún privilegio, de los servicios públicos que el Estado nacional o provincial o las municipalidades presten en igualdad de condiciones a todos los particulares;
- c) Formar parte o intervenir en la dirección o administración de empresas privadas o mixtas que tengan por objeto explotar concesiones o franquicias de la administración pública. Exceptúanse las funciones que se ejerciten en las empresas mixtas en representación de la administración pública.

Art. 13. — Dentro de los treinta días de la vigencia de esta ley, los actuales funcionarios y empleados públicos comprendidos en alguna de las situaciones previstas en el artículo anterior deberán cesar en las actividades prohibidas. Los nuevos funcionarios y empleados no podrán asumir sus funciones sin cumplir con este requisito.

Otras sanciones

Art. 14. — Será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación absoluta por doble tiempo, siempre que el hecho no constituyere delito de pena mayor:

- a) El funcionario o empleado que dentro de los plazos fijados omitiere cumplir las obligaciones impuestas en los artículos 6º y 13 de la presente ley;
- b) El funcionario o empleado que omitiera maliciosamente las declaraciones previstas en el artículo 7º;
- c) El funcionario o empleado que después de asumir el cargo infringiere la prohibición del artículo 12 de esta ley;
- d) El funcionario o empleado del Registro de Bienes que, teniendo conocimiento de la omisión de declaraciones o de que las presentadas son incompletas o falsas, no denunciare el hecho al director;
- e) El director del registro que no formulare ante los jueces competentes las denuncias que correspondan.

Art. 15. — Será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación absoluta por doble tiempo:

- a) El funcionario o empleado que hiciere falsa declaración de bienes;
- b) El funcionario o empleado del registro que dolosamente omitiere anotar bienes denunciados o hiciere anotaciones falsas.

Art. 16. — Será reprimido con prisión de uno a tres años, y además con inhabilitación absoluta por doble tiempo si fuere funcionario público, el que denunciare falsamente un enriquecimiento ilegítimo.

Art. 17. — Será reprimido con multa de \$ 100.000 a \$ 500.000 e inhabilitación especial por seis meses a tres años, el funcionario o empleado judicial o del Registro de Bienes que, antes de deducirse la acusación por enriquecimiento ilegítimo, publicare o comunicare declaraciones registradas u otras constancias reservadas al Registro de Bienes.

Disposiciones especiales

Art. 18. — Quedan incorporados al Código Penal bajo el epígrafe de «Enriquecimiento ilegítimo y cohecho», en sustitución de su capítulo VI, título XI del libro II, los artículos 1º, 2º, 3º, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la presente ley. Decláranse complementarias del Código Penal las demás disposiciones de la misma.

Art. 19. — Agrégase al artículo 67 del Código Penal el siguiente apartado: «Cuando se tratare de funcionarios que gocen de fueros la prescripción de la acción quedará suspendida mientras duren en sus cargos o hasta que los fueros sean allanados.»

Art. 20. — Cada provincia podrá crear el Registro de Bienes de los funcionarios y empleados de la administración local. Los registros provinciales tendrán las facultades y los deberes, y sus empleados las responsabilidades establecidas en la presente ley para el Registro

Nacional de Bienes y para la dirección y los empleados de éste.

De las declaraciones de bienes y sus ampliaciones formuladas a los registros provinciales, se enviará por éstos copia autenticada al Registro Nacional.

Disposiciones transitorias

Art. 21. — Dentro de los noventa días siguientes a la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo dejará organizado y en funcionamiento el Registro Nacional de Bienes.

Art. 22. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, mientras no se incluyan en la ley del presupuesto, se harán de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Incorpórase al título VIII del Código Penal (Delitos contra el orden público), como capítulo V y bajo el epígrafe de «Otros atentados contra el orden público», el siguiente artículo: «Artículo 213 bis. — Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años los que pública o privadamente instigaren a los militares o a los componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes y/o a violar los deberes de la disciplina militar u otros deberes inherentes a su estado.»

Art. 2º — Agrégase como última parte del artículo 218 del Código Penal (título IX - Delitos contra la seguridad de la Nación. Capítulo I - Traición) lo siguiente: «Se aplicarán igualmente a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales en países en conflicto.»

Art. 3º — Sustitúyese el artículo 302 del Código Penal por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurren las circunstancias del artículo 172:

1º — El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de habersele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación.

2º — El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.

3º — El que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su pago.

4º — El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 30 de julio de 1964.

Ramón A. Muñiz.

INFORME

Señor presidente:

Aunque en lo fundamental las materias tratadas en el despacho de la mayoría son las mismas contenidas en el dictamen que suscribo en disidencia, razones de método, de buen ordenamiento de los textos legales y de índole práctica me inclinaron a preparar tres proyectos de ley.

El primero, compuesto de tres artículos, se limita a las leyes, decretos, decretos leyes o decretos con fuerza de ley que deben ser derogados —caso de las dos leyes que en él se mencionan— o declarados nulos por vicio insanable de inconstitucionalidad, es decir en todos los demás supuestos.

El primer proyecto de ley difiere del despacho de mayoría en cuatro aspectos. Refirmo el criterio que sostuve en ocasión de discutirse, en el seno de la Honorable Cámara, los denominados decretos leyes o decretos con fuerza de ley en el sentido de que cuando estas órdenes del gobernante defacto interesen a lo penal, son nulas, afectadas por vicio de nulidad absoluta e insanable por inconstitucionalidad. (D. de Ses. del 25/6/64. Páginas 1454 y siguientes y páginas 1463 y siguientes).

Además, reclamo como medida impostergable la inmediata derogación de la ley 13.234 (dicta normas sobre organización de la Nación para tiempo de guerra, las que serán adoptadas desde tiempo de paz), conocida con el nombre de «Conintes», en virtud de tratarse de un cuerpo legal que afecta sustancialmente a nuestra organización democrática, severa y reiteradamente repudiado por el pueblo argentino. Están en el recuerdo de todos las persecuciones contra los trabajadores por aplicación de la mencionada ley.

En el mismo artículo primero incluyo entre los decretos leyes que deben ser declarados nulos el que lleva el número 4.805/63, fecha 17 de junio de 1963, por estar, al igual que los demás, alcanzado por el vicio de nulidad por inconstitucionalidad. Importa advertir que el referido decreto dicta normas sobre materia muy importante y delicada, como a la relación con la admisión y expulsión de extranjeros.

Coincido con los propósitos que informan a los artículos 5º y 8º —enriquecimiento ilegítimo

de los funcionarios—, pero discrepo en aspectos de fondo y de forma con el texto proyectado por la mayoría de la comisión. Estimo que los delitos no han sido bien tipificados; que las penas establecidas no guardan relación, por bajas, con la extrema gravedad de los hechos que se quieren reprimir; que se omite la creación del Registro Nacional de Bienes de los Funcionarios y Empleados Públicos y un capítulo sobre denuncia de los hechos delictuosos. Por eso he preferido el proyecto de ley presentado por el doctor Alfredo L. Palacios en representación del bloque de diputados nacionales del Partido Socialista Argentino.

Las disposiciones relacionadas con el libramiento de cheques sin provisión de fondos las reproduzco en mi tercer proyecto de ley, tomándolas literalmente del despacho de la mayoría.

Ramón A. Muñiz.

ANTECEDENTES

1

Visto el pedido formulado precedentemente por la Comisión de Legislación Penal y teniendo en cuenta la conveniencia de asegurar la mayor difusión posible del mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional (derogación de normas penales), especialmente entre instituciones universitarias y centros de estudios especializados,

El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1º — Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares de un folleto conteniendo el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional (derogación de normas penales).

2º — Por la Secretaría Administrativa se adoptarán las medidas pertinentes a los fines del cumplimiento de esta resolución.

3º — Comuníquese.

Sala de la Presidencia, 30 de abril de 1964.

ARTURO MOR ROIG.
Guillermo González.

Buenos Aires, 21 de abril de 1964.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley por el cual, conforme a lo anunciado oportunamente, se solicita la derogación de normas penales que son contrarias a los principios constitucionales, y la sanción de otras que configuran la máxima urgencia en materia de legislación penal de fondo.

1

El proyecto contempla la derogación de todas las normas de ese tipo que no hayan sido establecidas por ley del Honorable Congreso, porque sólo mediante

una ley sancionada de acuerdo a los artículos 18, 67, inciso 11), y 68 a 73 de la Constitución Nacional, pueden establecerse preceptos que, determinando delitos y penas, restrinjan la libertad individual. Al reafirmar el principio de que no hay delito ni pena sin ley previa, el Poder Ejecutivo responde a una muy clara inspiración democrática y a su decisión de asegurar la efectiva vigencia de la Constitución en todos sus ámbitos.

Por eso entiende cumplir, con este acto que evitará para lo futuro la posibilidad de interpretaciones contradictorias en la aplicación de las normas penales, una nueva e importante etapa del afianzamiento de nuestras instituciones republicanas. Dentro de ese criterio, el Poder Ejecutivo estima impostergable la ratificación del status jurídico penal establecido por ley. Pero esto debe hacerse evitando el restablecimiento de algunas disposiciones contenidas en la ley 13.985.

Quiere también, especialmente, que todos los preceptos que castigan la mera opinión sean derogados, porque no son compatibles con el régimen republicano de nuestra Constitución, que asegura la libertad de pensamiento. Propicia, pues, la derogación de los decretos leyes 4.161/56, 2.713/63, 4.214/63 y 5.540/63 y sus ratificatorios, porque, sin ser leyes, establecieron normas de carácter penal e instituyeron sanciones para la sola expresión de las ideas.

2

Al mismo tiempo, considera de toda urgencia el establecimiento de nuevas normas que protejan el orden y la paz en la sociedad, afiancen la autenticidad en la formación del gobierno representativo y aseguren la fidelidad y la honestidad de los agentes de la administración.

Para ello propone un refuerzo del título de los delitos contra el orden público del Código Penal de la Nación para reprimir cierto tipo de conductas que en numerosas ocasiones han perturbado la tranquilidad pública.

El proyecto prevé la incorporación de un nuevo artículo (213 bis) al Código Penal, en el que se castiga a los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin alcanzar la categoría de asociaciones delictivas del tipo del artículo 210, tienen por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas. El artículo 210 reduce el ámbito de la banda o asociación ilícita a los objetivos típicamente delictuales. Sin embargo, también son perturbadores de la tranquilidad pública las agrupaciones permanentes o que actúan en forma eventual y que tienen por finalidad el despliegue de violencias contra las personas o las cosas que no llegan a estructurar delitos definidos por la legislación penal en los términos exigidos por el artículo 210, y que deben ser castigadas no por sus acciones concretas sino por su objetivo violento. El nuevo artículo 213 bis, inciso primero, comprende como actividad punible antes de los actos de ejecución delictiva, la participación en agrupaciones permanentes o eventuales con objetivos de violencia, incluso si esas violencias no llegaran a tipificar delitos particulares. Por supuesto que la forma que hace residir la criminalidad en el hecho en sí de la participación en la agrupación, señala ya que si la actuación del grupo lo lleva a la ejecución de un delito, éste concurre materialmente con el hecho que reprime la nueva norma.

En el inciso segundo del artículo 213 bis se propugna el castigo de los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases,

con lo que se tiende a evitar las graves discordias sociales que involucra la instigación en forma pública a menospreciar una raza determinada o a los adeptos de una religión o a los componentes de un sector social o a que determinados grupos étnicos, religiosos o sociales, se hagan la guerra entre sí. Una regla que indique al pueblo que la ley penal considera como delito la instigación a semejante conducta, ha de servir sin duda para tranquilizar los espíritus y refrenar ese tipo de actos.

El inciso tercero lleva al área del derecho penal el castigo de los que pública o privadamente instigaren a los miembros de los cuerpos armados a desobedecer las leyes o los deberes de la disciplina militar u otros deberes inherentes a su estado. Las fuerzas militares y de seguridad son sagradas en sí mismas cuando se mueven dentro de sus fines propios; por eso, la actividad de los que se ponen en contacto con ellas para sacarlas de sus reales y legítimos objetivos y levantarlas contra las leyes o los deberes dentro de cuyo marco se mueve su acción legítima, debe ser castigada porque perturba en alto grado la paz social.

El proyecto de José Peco y el del Poder Ejecutivo de 1960, contemplan la situación del extranjero que no debe obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, pero que reside en el país, y que toma las armas contra la Nación o coopera con sus enemigos o incurre en otros ataques a la soberanía nacional. El hecho de la residencia crea para el extranjero un vínculo especial con el país. Los derechos y garantías que la ley les reconoce en igualdad, implican la obligación correlativa de respetar la integridad de la Nación que generosamente los acoge. Por eso, mediante un agregado al artículo 218 del Código Penal, se extienden al extranjero residente las penas de los artículos 214 a 218, dejándose a salvo, desde luego, la situación de los nacionales de los países en conflicto y de los funcionarios diplomáticos.

Se proyecta también, como artículo 222 del Código Penal, una norma que castiga el ultraje a los símbolos patrios (proyecto Peco, artículo 312). Se ha considerado más apropiada la fórmula «ultrajare», que la de «menospreciare» contenida en dicho proyecto. Esta norma protegerá los valores de la nacionalidad en su representación simbólica. Desde luego que si el hecho constituye un delito más grave por su forma o lugar de comisión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.

Los acontecimientos que con alguna frecuencia han perturbado la estabilidad de las instituciones constitucionales, han determinado que el proyecto propicie el aumento de las penas establecidas para la sedición y la rebelión en los artículos 226, 229 y 230 del Código Penal.

Se han tenido en cuenta, para ello, las penas contempladas en los artículos 288, 291 y 292 del proyecto de 1960.

El proyecto propone también la represión, dentro del Código Penal, de los delitos contra la voluntad popular en la elección de los representantes del pueblo, para asegurar la protección e intangibilidad de nuestro sistema representativo. Hasta ahora, el resguardo de la expresión de la voluntad popular en las elecciones nacionales, provinciales o municipales, ha estado entregado a las propias leyes particulares sobre la materia, produciéndose la incongruencia de que hechos que tienen las características de delitos de derecho penal común, se convierten en contravenciones particulares a una ley especial. El resguardo de la expresión auténtica de la voluntad popular en la elección de los representantes del pueblo es un

interés de los gobernados como miembros de la sociedad nacional y no como miembros, alternativamente, de esa sociedad o de la sociedad provincial o municipal. Todos los individuos tienen interés en que la forma representativa republicana de gobierno no se altere en ninguna de las esferas jurisdiccionales que establece el federalismo. Para no confundir la verdadera categoría de la delincuencia cuyo castigo se propicia, es preciso tener en cuenta que los delitos comprendidos en este ámbito son distintos por su esencia jurídica de las infracciones particulares a las leyes particulares de elecciones, que no tienden a proteger la voluntad popular en sí, sino la aplicación y el mecanismo de esas leyes.

El proyecto contempla en este punto la protección del acto eleccionario en sí, de la voluntad del elector, de la rectitud de su conducta, la incolumidad del secreto del voto y de los documentos electorales y del escrutinio. Las exposiciones de motivos de los proyectos de José Peco y del Poder Ejecutivo de 1960, y las notas de éste, ilustran acerca del origen de cada disposición y sobre su alcance.

Propone, además, amplias y detalladas normas que contemplan el castigo del enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos y la revelación de hechos, actuaciones y documentos que deben quedar secretos, así como un aumento de las penalidades fijadas para los delitos de cohecho, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y de exacciones ilegales. Su criterio fundamental es que la seguridad del Estado no asienta tanto en la irrazonable represión de los gobernados, como en la severa custodia de los titulares del ejercicio de la función pública.

Propone, por fin, una reforma sustancial al artículo 302 del Código Penal, para asegurar la confianza en el cheque, instrumento imprescindible de la circulación comercial, que había sido alterado por el abuso de una práctica reprochable. La norma propuesta tiende a lograr una mayor eficacia en la represión del delito, aumentando la pena y los casos sancionables previstos en aquel artículo y en el artículo 19 del decreto ley 4.778/63. Se incorpora, por una parte, la pena de inhabilitación, que será un medio eficaz para disminuir la reiteración de este tipo de delincuencia. Se limita, por otra parte, únicamente a la situación prevista por el inciso primero, la posibilidad de abonar el importe del cheque después de la comunicación de la falta de pago; ésta puede realizarse por simple aviso bancario o del tenedor, o mediante cualquier otra forma documentada de interpelación, de manera que sólo se requiere la existencia de una noticia probable remitida al librador, que lo ponga razonablemente en condiciones de enterarse, pero sin necesidad de que sea personalmente informado, lo que en casos de fuga o ausencia puede resultar imposible.

Los restantes incisos, entre los que se incorpora el caso de frustración maliciosa del pago del cheque que antes no había sido previsto, constituyen conductas que, por su específica criminalidad, quedan excluidas de la opción que se otorga por el inciso primero.

La derogación del decreto ley 788/63 impone, por otra parte, la adecuación del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Criminal para la justicia federal y los tribunales de la capital y los territorios nacionales, reformado por el artículo 24 del decreto ley 2.021/63. El proyecto prevé, por ello, su modificación, y determina limitaciones a la excarcelación

para algunos delitos que afectan el orden público y la seguridad de la Nación, y la incolumidad y decencia de la función pública.

3

El Poder Ejecutivo piensa que las nuevas normas deben incorporarse como modificaciones o ampliaciones al Código Penal de la Nación, y dentro de su estructura orgánica. Es necesario restaurar la unificación de la legislación penal de fondo, evitando la dispersión asistemática y sobre todo el establecimiento de «leyes especiales», para casos no previstos como tales por la Constitución, tras las cuales, en no pocas ocasiones, se han ocultado instrumentos de dominación y avasallamiento al federalismo por el desconocimiento de las competencias locales.

Para elaborar este proyecto, el gobierno no ha querido obrar apresuradamente, sino que ha consultado a los especialistas, requiriendo la opinión de distinguidos profesores de derecho penal sobre el «examen y vigencia de la legislación represiva», y pidiéndoles «proposiciones para su reforma y el establecimiento de un régimen penal adecuado a los principios de la Constitución Nacional», según el texto de las notas oportunamente cursadas por el Ministerio del Interior.

Esas consultas, las experiencias recogidas en los proyectos de José Peco y del Poder Ejecutivo de 1960, y especialmente la contestación del profesor Ricardo C. Núñez, cuyo dictamen se acompaña, han ilustrado al Poder Ejecutivo para la elaboración de este proyecto, que responde a una definida orientación: apartarse de la tendencia de la legislación represiva dictada de un tiempo a esta parte a título de protección penal del Estado, iniciando el restablecimiento de un auténtico derecho penal democrático, basado exclusivamente en la ley.

El Poder Ejecutivo anuncia desde ya su propósito de ocuparse con posterioridad de la reforma integral del Código Penal, propiciando su actualización. Pero esta tarea requiere calma, estudio y tiempo, y debe realizarse a la luz de las necesidades demostradas por la práctica, interpretadas mediante la labor judicial, los estudios de los especialistas y los hechos de la vida social, cuyo examen requiere amplitud en los tres sentidos indicados. Supone la consideración, por otra parte, de las necesidades de los organismos administrativos tendientes a practicarla, lo que constituye también una especial preocupación de este gobierno.

Pero considera que no se puede demorar, mientras tanto, el examen, por parte de vuestra honorabilidad, del *status* jurídico penal actual en el ámbito de lo urgente para adecuarlo a los principios democráticos de nuestra Constitución, refirmando la jerarquía de la ley como única fuente del derecho penal, eliminando el delito de opinión y sancionando las normas que la sociedad necesita como protección contra la violencia y el fraude.

Por las razones expuestas, se solicita la aprobación del adjunto proyecto de ley, en la seguridad de que vuestra honorabilidad lo considerará favorablemente, como un medio eficaz para afianzar la vigencia de la Constitución, el orden en la sociedad y la paz y concordia entre los argentinos.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO U. ILLIA.

Carlos R. S. Alconada Aramburú. — Juan S. Palmero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Deróganse los decretos leyes 4.161/56, 2.713/63, 4.214/63, 5.540/63, los decretos leyes que los ratifican, los decretos leyes 788, del 30 de enero de 1963, y 4.778, del 12 de junio de 1963.

Art. 2º — Deróganse los artículos 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 143 del decreto ley 4.034/57 (Régimen Electoral Nacional, texto ordenado), y los artículos 157 y 259 del Código Penal (ley 11.179).

Art. 3º — Decláranse vigentes las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63 y 4.778/63, menos los artículos 222, 223, 224 y 259 del Código Penal (ley 11.179), y los artículos 8º, 9º, 11, 12, letras a), b) y e), 15 y 17, segunda parte de la ley 13.985.

Art. 4º — Incorpórase al Código Penal, como capítulo V del título de los «Delitos contra el orden público» y bajo el epígrafe de «Otros atentados contra el orden público», el siguiente artículo:

Artículo 213 bis. — Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años:

1. Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieren por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas, por el solo hecho de su participación.
2. Los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases.
3. Los que, pública o privadamente, instigaren a los militares o a los componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar u otros deberes inherentes a su estado.

Art. 5º — Agrégase como última parte del artículo 218 del Código Penal, lo siguiente:

Se aplicarán también a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto.

Art. 6º — Incorpórase como artículo 222 del Código Penal (título IX, capítulo 2, del libro segundo), el siguiente:

Artículo 222. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación.

Art. 7º — Sustitúyense las siguientes penas establecidas por el Código Penal:

La del artículo 226 por prisión de dos a diez años.

La del artículo 229 por prisión de uno a seis años.

La del artículo 230 por prisión de uno a cuatro años.

Art. 8º — Incorpórase al Código Penal, como título X bis del libro segundo, bajo el epígrafe de «Delitos contra la voluntad popular», los artículos siguientes:

Artículo 236¹. — El que con violencias, intimidación o amenazas turbare gravemente o impi-

diere la votación o el escrutinio de una elección nacional, provincial o municipal, será reprimido con prisión de uno a seis años.

Artículo 236². — El que mediante violencia, intimidación o amenazas a un elector le impidiere votar o le obligare a hacerlo de una manera determinada, será reprimido con prisión de uno a cuatro años.

Artículo 236³. — Se impondrá prisión de uno a cuatro años al que mediante dádivas o engaños tratare de inducir a un elector a no votar o a votar de una manera determinada.

Artículo 236⁴. — Se impondrá prisión de uno a cuatro años al que suplantara a otro votante, votare más de una vez en la misma elección o votare sin tener derecho a hacerlo.

Artículo 236⁵. — El que por medios ilícitos intentare descubrir la forma en que un elector ha votado, será reprimido con prisión de seis meses a tres años.

El elector que diere publicidad a su voto en el acto de votar, será reprimido con prisión de quince días a seis meses.

Artículo 236⁶. — Se impondrá prisión de dos a ocho años:

1. Al que en la formación de un registro electoral insertare o hiciere insertar o suprimiere o hiciere suprimir nombres indebidamente.
2. Al que de cualquier otro modo falsificare o destruyere, en todo o en parte, un registro electoral, libretas cívicas o actos de escrutinio u ocultare, retuviere o hiciere desaparecer esos documentos de manera que el hecho pueda dificultar la elección o falsear su resultado.
3. Al que sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección, antes de practicarse el escrutinio.
4. Al que sustrajere, destruyere o sustituyere boletas de sufragio desde el momento en que éstas fueron depositadas por los electores hasta la terminación del escrutinio.
5. Al que de cualquier modo falseare el resultado de una elección o tornare imposible el escrutinio.

Artículo 236⁷. — La condena por uno de los delitos previstos en este título a una pena privativa de la libertad no superior a tres años, lleva como inherente la pena de inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos activos y pasivos por el término de cinco años; si la pena privativa de la libertad fuere mayor, la inhabilitación será de diez años.

Art. 9° — Incorpórase al Código Penal, como capítulo IX bis del título «Delitos contra la administración pública», bajo el epígrafe «Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados», los artículos siguientes:

Artículo 268¹. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el funcionario o empleado público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario o empleado público, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

El que diere la dádiva o hiciere la promesa y la persona interpuesta para hacerla o recibirla, serán reprimidos con prisión de uno a tres años.

Artículo 268². — Será reprimido con la pena del artículo 268¹, párrafo 1°, el funcionario o empleado público que, con fines de lucro, utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Artículo 268³. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta por uno a seis años, el funcionario o empleado público que admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su oficio.

El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

Artículo 268⁴. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con prisión de uno a cuatro años.

Art. 10. — Incorpórase al Código Penal, como párrafo segundo del artículo 261, el siguiente:

Será reprimido con la misma pena el funcionario o empleado público que empleare en provecho propio o de tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Art. 11. — Incorpórase al Código Penal el artículo siguiente:

Artículo 253 bis. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el funcionario o empleado público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos.

Art. 12. — Sustitúyense las siguientes penas establecidas en el Código Penal:

La del artículo 256, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años.

La del artículo 257, párrafo 1°, primera parte, por prisión de uno a cuatro años, y reclusión o prisión de dos a seis años la de la segunda parte. La del párrafo segundo del mismo artículo, por la de inhabilitación especial por dos a seis años en el primer caso y por tres a diez años en el segundo.

La del artículo 265, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años.

La del artículo 266, por prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años.

La del artículo 267, por las de prisión hasta cuatro años y de inhabilitación hasta seis años.

Art. 13. — Sustitúyese el artículo 302 del Código Penal, por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurren las circunstancias del artículo 172:

1. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional de curso legal dentro de las veinticuatro horas de habersele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpe-lación.
2. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.
3. El que librare un cheque y diera contra-orden para el pago fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su pago.
4. El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.

Art. 14. — Sustitúyense las palabras «rebelión en el caso del artículo 226 del Código Penal, sedición en el caso del artículo 229 del Código Penal, asociación ilícita o cualquiera de los comprendidos en el decreto ley 788/63», del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal y los Tribunales de la Capital y los Territorios Nacionales, reformado por el artículo 24 del decreto ley 2.021/63, por las siguientes:

o cualquiera de los comprendidos en el Libro Segundo, título VIII, capítulos 2, 3 y 5, título IX, título X, título XI capítulos 6, 7 menos los casos de los artículos 262 y 264, 8, 9 y 9 bis del Código Penal, o en la ley 13.985.

Art. 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Carlos R. S. Alconada Aramburú. — Juan S. Palmero.

2.

Dictamen del profesor doctor Ricardo C. Núñez, director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba a la consulta formulada por el Ministerio del Interior sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Córdoba, diciembre de 1963.

A su excelencia el señor ministro del Interior, doctor Juan S. Palmero.

S/D.

I

OBJETO DE LA CONSULTA

El señor ministro, por nota de fecha 31 de octubre próximo pasado, ha tenido a bien requerir mi colaboración y opinión, como director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre los puntos siguientes, a saber:

Examen y vigencia actual de la legislación represiva.

Proposiciones para su reforma y establecimiento de un régimen penal adecuado a los principios de la Constitución Nacional.

La respuesta exige capítulos separados.

II

VALIDEZ CONSTITUCIONAL ACTUAL DE LOS DECRETOS LEYES REPRESIVOS

La cuestión no debe plantearse respecto de si los decretos leyes represivos dictados por el gobierno defacto, tienen o no vigencia en el período de jure en que nos encontramos. No cabe duda que la situación defacto hizo necesaria, para evitar el caos, la administración del Poder Ejecutivo provisional. Este gobierno dictó durante su administración decretos y decretos leyes, y, al dictarlos, observó las formalidades jurídicas exigibles al Poder Ejecutivo. Esto basta para decir que por lo menos como decretos o reglamentos ejecutivos, esas normas están válidamente incorporadas al status jurídico de la Nación.

Esa no es, sin embargo, la cuestión decisiva actual. Esta, tratándose de normas represivas, plantea el problema en otro punto: la constitucionalidad actual, en el período de jure, de las normas represivas dictadas por el Poder Ejecutivo defacto.

No es discutible que hoy, pasado el período defacto, la Constitución de la Nación rige en su plenitud, sin excepciones fundadas en razones de necesidad derivadas de ese período.

El status constitucional actual no tiene por qué hacerle concesiones a la situación defacto para privar a los habitantes, a partir del 12 de octubre próximo pasado, de lo que para ellos representa una garantía constitucional.

Los artículos 18, 19 y 67, inciso 11, de la Constitución, que le entregan la represión a la ley, cualquiera sea su índole y medida, no admiten, por consiguiente, limitaciones en su aplicación actual. La ley «es una regla de derecho investida con la más alta autoridad pública, la del legislador, o Poder Legislativo. Ningún otro mandato o disposición de otro poder, u órgano del Estado, puede hacer una ley. El Congreso dicta leyes, el Ejecutivo decretos, el Judicial sentencias» (1). Por lo tanto, aquellos artículos exigen que para castigar a una persona la infracción y la pena estén contenidas en una ley formada y sancionada con arreglo a los artículos 68 a 73 de la Constitución, y excluyen que cualquiera otra norma jurídica represente una fuente de represión constitucionalmente válida.

Una de las consecuencias del principio *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*, establecido por los artículos 18 y 19 de la Constitución, es la prohibición del castigo por analogía (2). La prohibición de la analogía funciona tanto para excluir que un hecho no previsto por una ley represiva se castigue con la pena correspondiente a un hecho previsto por esta ley por ser semejante (*analogia legis*); como para impedir que un hecho no previsto como punible por una ley en el sentido constitucional, se castigue por estar reprimido por otra norma a la que, por cualquier razón jurídica, se la asimila a la verdadera ley penal (*analogia juris*) (3). También aquí la pena se funda en una equiparación de situaciones, cuya consecuencia es multiplicar el elenco de delitos y penas más allá de lo que permite su única fuente constitucional: la ley formada y san-

(1) J. V. GONZÁLEZ, *Manual de la Constitución Argentina* (6ª edición), núm. 490. Se entiende que limito la consideración al ámbito de la legislación nacional.

(2) Corte Suprema de la Nación, «Fallos», t. 137; p. 425; t. 150, p. 293; t. 184, p. 116; R. C. NÚÑEZ, *Derecho penal argentino*, t. I, p. 110.

(3) Ver R. C. NÚÑEZ, ob. cit., p. 111.

cionada por el Congreso. Esto último es lo que, precisamente, sucede con la asimilación de los decretos leyes represivos a la ley penal del Congreso.

III

ESTABLECIMIENTO DE UN REGIMEN PENAL ADECUADO A LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCION

Este objetivo exige dos actitudes fundamentales. Por un lado, la restauración de la unificación del derecho penal común en el Código Penal; por otro lado, el abandono del delito de opinión.

1

UNIFICACION DEL DERECHO PENAL COMUN

En orden al derecho penal común, dentro del que caen los delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden y la seguridad pública, etcétera, el Código Penal y las leyes que lo complementan son la única fuente legal de imposición de penas (C. Nac., artículo 67, inciso 11) (4).

La legislación penal especial sólo procede en el ámbito del resguardo de las leyes especiales (o federales) que el Congreso sanciona sobre materias particulares de gobierno, cuya regulación le confieren distintos incisos del artículo 67 de la Constitución. Por ejemplo, la protección penal de las leyes impositivas, económicas, de navegación, de correos, electorales, etcétera, y la regulación represiva disciplinaria militar.

La tendencia a regular la delincuencia común por leyes especiales ha obedecido, en gran parte, a la idea de extender la jurisdicción represiva de los tribunales federales sobre materias que no les corresponden por el carácter de ellas, los lugares o las personas (C. Nac., art. 67, inc. 11). La mala costumbre ha persistido a pesar de que, con motivo de la ley de defensa social número 7.029, de 1910, la Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional esa indebida extensión de la jurisdicción federal (5).

Para evitar confusiones al respecto y poner fin a esa tendencia, es necesario restaurar en su plenitud el principio de la unidad de la legislación represiva común que instauró el Código Penal vigente y a cuyo favor reaccionó ya el proyecto de 1891.

2

EXCLUSION DEL DELITO DE OPINION

A

El delito de opinión no es compatible con el régimen representativo republicano

Si hemos de practicar con lealtad la república representativa, es preciso que dejemos de realizarla de un modo, sustancialmente falso, que la daña en su esencia.

La licitud de todas las opiniones es algo inherente al sistema de gobierno popular. Este exige que, aunque en forma indirecta, el pueblo decida sobre las cuestiones y objetivos que constituyen un programa de gobierno. Para esto son indefectibles la libre información sobre teorías o doctrinas políticas, econó-

micas, etcétera, y la libre expresión del pensamiento de los individuos sobre ellas. Es un deber de los gobernantes posibilitar este desiderátum, respetando y fomentando la incolumidad de los derechos de enseñar y aprender, garantías indispensables para que el pueblo decida consciente y razonablemente sobre las cuestiones y objetivos del gobierno.

El sentido de la dirección gubernamental sobre el asunto se corrompe de modo muy perjudicial para la República cuando el gobierno abandona la actitud de respeto y fomento del acceso del pueblo a las fuentes de información y la sustituye por una actitud policial de selección y prohibición de las ideas y doctrinas. La experiencia de los argentinos ha sido muy dura al respecto. Durante diecisiete años del siglo pasado y doce años muy recientes, la tiranía usó y abusó de la vigilancia de las ideas, y el solo hecho de comulgar con ciertos pensamientos o enseñanzas fue, si no siempre delito tipificado y reprimido, el más odioso y eficaz medio de selección política y social. Pero lo que me interesa subrayar es que ese instrumento de gobierno no curó vicios, sino que engendró muchos, tan graves como la sustitución de la conciencia ciudadana por un servilismo oportunista, y no preservó contra los males que se decía combatir. La dirección coercitiva penal de la opinión del país puede disimular las ideas contrarias al pensamiento oficial, puede impedir su exteriorización y detener la acción que inspiran, pero no puede aniquilarlas o corregirlas. La historia es maestra en este punto.

B

Formas de reprimir las opiniones

No es necesario salir del ámbito de nuestros precedentes para tener una idea clara sobre las formas utilizadas por los gobiernos para castigar las opiniones. Lo han hecho de un modo directo o de un modo indirecto.

a) Modo directo

Las opiniones se castigan directamente cuando se reprime la exteriorización o difusión de las ideas propias sobre determinados asuntos o la exposición de doctrinas políticas, filosóficas, económicas o religiosas. Es lo que hacen la ley 13.569, artículo 3º (6), y los decretos leyes 788/63 (artículos 5º y 18); 4.214/63 (artículos 3º y 8º) y 2.713/63 (artículo 1º).

b) Modo indirecto

Las normas represivas vigentes acusan un modo indirecto de estructurar y castigar el delito de opinión. Ya no declaran delictuoso expresar, enseñar o difundir una idea o doctrina, sino la adhesión a partidos, ideas o doctrinas, o el uso de materialidades significativas de esa adhesión. Los artículos 1º y 3º del decreto ley 4.161/56, vigente en virtud de su ratificación por decreto 7.165/62, y el decreto ley 1.296/62, prevén y castigan un tipo de delito de opinión de esta especie.

C

La exclusión del delito de opinión no deja en libertad de acción a los extremistas

El hecho de que la profesión o difusión de las opiniones o la adhesión a ellas no deba determinar la criminalidad del agente no trae como necesaria con-

(4) Exposición de motivos del proyecto de 1891 (1ª ed.), p. 6; Corte Suprema de la Nación «Fallos», t. 102, p. 112; t. 176, p. 315.

(5) Véase Corte Suprema de la Nación «Fallos», t. 113, p. 263; t. 117, p. 146; t. 120, p. 134; «Jurisprudencia Argentina», t. 1, p. 1. También la exposición de motivos del proyecto de 1891 (1ª ed.), p. 6; edición oficial del Código Penal, p. 113.

(6) Reproducción del proyecto del Poder Ejecutivo del 8 de enero de 1941 (ver EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de derecho penal*, t. V, p. 284, núm. 1244).

secuencia la libre acción de los partidarios de ideas políticas, económicas, religiosas o filosóficas extremas. La acción extrema de infiltración fraudulenta o de violencia subversiva no es conveniente para el pueblo. Ataca, al desordenarla mediante la violencia o falsearla mediante el fraude, la práctica regular de la República.

La acción violenta o fraudulenta de los extremistas, cualquiera sea su carátula, no puede ser amparada o tolerada por el falso slogan de que restringiéndola o controlándola se atacan libertades constitucionales. Cualquiera sea el móvil de la violencia o del fraude, sus expresiones no están amparadas por la Constitución, y es un deber ineludible del Estado oponerse a ellos. Esta oposición no cabe sólo en los tramos delictivos, mediante la represión de su manifestación a través de acciones calificadas por la ley como delitos. Cabe, también, en los tramos de su preparación y organización, mediante la acción preventivo-policial del Estado que resguarda la libertad de las asociaciones o reuniones y el orden público, así como la incolumidad de la estructura subjetiva de la administración pública.

D

Los compromisos internacionales no obligan a instituir el delito de opinión

Los compromisos internacionales no inducen a la Nación a combatir los extremistas totalitarios recurriendo al delito de opinión. Las declaraciones de solidaridad para la preservación de la integridad política de los Estados americanos propugnan la lucha contra la actividad subversiva, violenta o fraudulenta, del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo, preferentemente con medidas de policía preventiva (Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948; Décima Conferencia Interamericana, Caracas, 1954; Segunda Reunión de Consulta entre Ministros de Relaciones Exteriores, La Habana, 1940, y Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Río de Janeiro, 1942).

IV

DECRETOS LEYES MODIFICATORIOS DEL CODIGO PENAL

Con la derogación de la ley 13.569 (artículo 3º) y de los decretos leyes que instauran el delito de opinión, no habrá concluido el problema que el Poder Ejecutivo y el Congreso deben abordar frente al *status* jurídico-penal presente. Para adecuar razonablemente ese *status* a la Constitución, el Congreso debe derogar, ratificar o modificar el contenido de los decretos leyes 788/63 y 4.778/63, que han reformado de manera muy amplia el Código Penal.

V

DECRETO LEY 788/63

Este decreto ley fue dictado el 30 de enero de 1963. Contiene una extensa reforma de los títulos del Código Penal sobre seguridad de la Nación y contra la seguridad y orden públicos, en la medida que los cenáculos del Poder Ejecutivo defacto creyeron necesaria para dotar a la Nación de instrumentos legales adecuados para hacer frente, según se dice en los fundamentos del decreto ley, a la acción subversiva «desarrollada por los enemigos de la democracia y

del mundo libre», en contra de su seguridad exterior y de su paz interior.

La necesidad de una reforma de la naturaleza y extensión de la realizada por el decreto ley 788 se comienza a poner en duda a raíz de la reforma aconsejada por los comisionados de diciembre de 1963 respecto de los delitos contra la seguridad, la salud y el orden públicos, la cual, en cuanto a la sistematización de las materias y a la introducción de nuevos delitos, está muy lejos de los extremos de aquel decreto ley. Pienso, además, por un lado, que debe rechazarse la amplitud que el decreto ley 788 le da al delito de sabotaje; y, por otro lado, que la seguridad de la Nación, el orden público y los poderes públicos, así como el orden constitucional, encuentran una razonable protección represiva dentro del sistema del Código Penal adecuadamente actualizado.

1

LA EXCESIVA AMPLITUD DEL DELITO DE SABOTAJE

El decreto ley 788/63, artículo 12, reprime como sabotaje algunos hechos cuya naturaleza criminal los coloca en otros títulos delictivos. La actitud del legislador no tiene el significado de un simple error jurídico. Se trata de una postura a desigmo: se trata de asignarle mayor gravedad a los delitos y, sobre todo, de justificar, en razón del interés atacado, la jurisdicción federal para conocer y juzgar de ellos. Empero, como lo he dicho, el legislador, así sea el Congreso, no puede ampliar la jurisdicción federal determinada por la Constitución, so pretexto de que la seguridad de la Nación está afectada por un delito que, en realidad, no la ofende (7).

El proyecto Peco no prevé el delito de sabotaje, y el proyecto de 1960 —prescindiendo de las exageraciones propias de los países totalitarios o que se encuentran en distintas circunstancias políticas y militares que el nuestro— lo reduce, justamente, a los casos de violación de contratos de interés militar (artículo 286) y de daño en objetos de interés militar (artículo 287) estando la Nación en guerra.

El artículo 12 del decreto ley 788 sigue la línea del sabotaje estructurada durante la tiranía por el decreto 536/45 (artículo 32), ley 13.985 (artículos 7º a 12) y el proyecto de Código Penal de 1951 (artículos 431 a 439). Estos estatutos prescinden, salvo para agravar el sabotaje, del presupuesto de que la Nación se encuentre en guerra, que es, precisamente, la circunstancia que determina que en una serie de hechos previstos por ellos y por el decreto ley 788, resulten directa e inmediatamente lesivos de la seguridad interior del país. Lo que, con arreglo al artículo 12 de este decreto ley, transforma en sabotaje, en tiempo de paz, hechos cuya naturaleza los coloca entre los delitos contra la propiedad, la administración pública, la seguridad pública o la economía pública, es la finalidad de «impedir o perturbar la seguridad o defensa nacional». Pero este elemento subjetivo no es algo esencial para autorizar la defensa penal de los bienes materiales, de los servicios o actividades a que se refiere el artículo 12 y que, realmente, merecen el amparo de la ley penal. O esos objetos no necesitan de la represión penal, o encuentran protección conveniente y científicamente exacta en otros títulos delictivos.

La protección que discierne el inciso 1º del artículo 12, objetable ya por vaga en su materialidad, es

(7) Ver las citas de la nota núm. 5.

suplantable en tiempo de paz por leyes protectoras de los elementos respectivos y de su radicación en el país.

El atentado contra los servicios públicos o de utilidad pública (inciso 2º) debe considerarse, dentro del sistema del Código Penal, en un capítulo del título de los delitos contra la seguridad pública o común (8). El objeto que ataca el delito es algo que concierne a esta seguridad y es lesionable sin necesidad de que concurra el dolo del que el artículo 12 hace depender la delictuosidad.

El hecho de suscitar alarma colectiva, tumulto o desorden (inciso 3º), corresponde que se estructure como delito contra el orden, tranquilidad o paz públicos. Así lo hacen el Código Penal (artículo 211), los proyectos de Peco (artículo 284) y de 1960 (artículo 270), la ley 15.276 (artículo 1º) y el propio decreto ley 788 (artículo 37). La alarma colectiva, el tumulto o el desorden, incluso como resultado logrado, no atacan de manera segura, a pesar del designio del agente, la seguridad interior de la Nación. Estos efectos, cualquiera que sea el designio del autor, alteran el orden material de la comunidad. Contra ellos resultan adecuadas las penas para los hechos que tienden a lograrlos. Su logro podrá agravar la pena, pero no transformar la naturaleza de la delincuencia.

Los daños a los elementos inherentes a la producción (inciso 4º) y el perjuicio a la economía rural o forestal (inciso 7º) no tiene por qué salir de los límites del daño contra la propiedad (proyecto de 1960, artículo 226, inciso 2º), o del incendio (Código Penal, artículo 186, inciso 2º; proyecto de 1960, artículo 241, letra a), o de la explosión (proyecto de 1960, artículo 242, letra a), o si se quiere seguir al proyecto Peco (artículos 258 y 259), del delito contra la economía pública, por sus efectos sobre la riqueza o el consumo nacionales. En este mismo título debería considerarse la posibilidad de incriminar los atentados a la producción que prevén los incisos 5º y 6º.

Si la Nación está en paz, no resulta necesaria la represión penal, y menos con prisión de 2 a 15 años, de la omisión de abastecimientos o servicios destinados a la seguridad o defensa nacionales (inciso 8º). Para asegurarlos bastan las regulaciones civiles y administrativas, con las sanciones pertinentes. El hecho es punible como sabotaje si la Nación se encuentra en guerra (proyecto 1960, artículo 286). Entonces si se ofende la seguridad de la Nación porque se afecta su acción bélica.

2

LA SEGURIDAD DE LA NACION NO EXIGE LA RATIFICACION DE LOS DISTINTOS TITULOS DEL DECRETO LEY 788/63

El decreto ley 788 debe derogarse. Su ratificación no es exigida por razones de urgencia. Esto se comprende fácilmente cuando se examinan los títulos de los delitos contra la seguridad y el orden públicos, contra la seguridad de la Nación y contra los poderes públicos y el orden constitucional vigentes al dictarse el decreto ley 788, en virtud del Código Penal y de las leyes 13.945 (sobre tenencia y tráfico de armas y explosivos), 13.985 (sobre espionaje y sabotaje) y 15.276 (sobre represión del terrorismo).

(8) Proyecto de 1960, artículo 251. También el proyecto Peco, artículo 225, aunque con distinta nomenclatura.

Todo este sistema represivo, derogado por el decreto ley 788 (artículo 51) —que está constitucionalmente en vigencia, porque una ley sólo se deroga por otra ley—, es sin duda perfectible, pero una labor amplia y provechosa al respecto requiere tiempo y estudio. Una actitud prudente exige que, por ahora, para evitar las malas consecuencias de posibles interpretaciones contrarias sobre su actual vigencia, el Congreso ratifique ese sistema, con las derogaciones y actualizaciones indispensables.

VI

DEROGACIONES INDISPENSABLES

El catálogo de delitos y penas de la ley 13.985 no es totalmente compatible con un derecho penal democrático y científico. En este aspecto debe ser revisado de inmediato, sin perjuicio de que en la tarea de actualización de la legislación represiva, en su integridad, se abandone todo su sistema.

Los artículos 8º, 9º, 11, 12, letras a), b) y e), 15 y 17, 2ª parte, deben derogarse sin tardanza.

El artículo 8º reprime el llamado sabotaje psicológico. El precepto, calificado como un nuevo instrumento de opresión del peronismo (9), constituye un poderoso medio de contralor de las opiniones y acciones individuales. Como defensor me tocó intervenir en casos de esta especie. En realidad, el artículo 8º incursiona en una materia cuya delictuosidad corresponde examinar en el título de los delitos contra el orden público. Pero esta delictuosidad sólo puede declararse, a título de intimidación pública, con ciertos resguardos relativos a los medios utilizados para producir la alarma pública, y de los cuales prescinde el artículo 8º (10).

La regla del artículo 9º es una norma muy propia del autoritarismo o de la tiranía. Ella pretende sustituir la posible impotencia de la autoridad por la delación individual. Pretende que todo el que, por cualquier motivo, entre en «contacto» con un espía o saboteador, lo delate. La regla no requiere que el delator conozca que el sujeto ha cometido o que está por cometer un hecho de espionaje o sabotaje.

El artículo 11, inútil en tiempo de paz, introduce la pena de muerte y resuelve así un problema sólo examinable, con libertad y tiempo, por el Congreso. La derogación del artículo 15 es una consecuencia de la supresión del 11.

Los hechos a), b) y e) del artículo 12 son muestras de una indeseable severidad, que contradice nuestra tradición legislativa.

VII

LA SEGURIDAD EXTERIOR Y LA PAZ INTERIOR DE LA NACION NO QUEDARAN DESGUARNECIDAS

En lo que atañe a la defensa de los intereses relativos a lo que en términos amplios puede comprenderse como seguridad exterior y paz de la Nación, la legislación cuyo mantenimiento provisional propugno no deja al país totalmente desguarnecido.

(9) Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. III, 1951, p. 2310.

(10) Ver R. C. Núñez, Instituto de Derecho Penal, Boletín V, 1959, p. 181 y sigs. Véase también, el informe (p. 6096) y la discusión (ps. 6106 y sigs.) de la ley 15.276, en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados citado.

En cuanto a la seguridad exterior, existen penas para la traición y la conspiración (Código Penal, artículos 214 a 218); penas que resguardan la paz y la dignidad de la Nación en el orden exterior (Código Penal, artículos 219 —sin la modificación de la ley 13.569, artículo 3º—, 220, 221 y 225 —los artículos 222 a 224 fueron derogados por la ley 13.985—); penas aplicables al espionaje (ley 13.985, artículos 2º a 6º, 10 y 12, letras c) y d). Estas penas constituyen una defensa suficiente para la seguridad exterior de la Nación, y, por lo tanto, no se puede decir que se cometa una torpeza al postergar su examen y posible reforma. Además, respecto de la seguridad exterior rigen las disposiciones del Código de Justicia Militar sobre traición (artículos 621 a 625), instigación a cometer actos hostiles (artículos 626 a 628), espionaje y revelación de secretos concernientes a la defensa nacional (artículos 629 a 637) y delitos que afectan las relaciones internacionales de la Nación (artículos 638 a 641).

En lo que respecta a la paz interior, la defensa represiva tampoco quedaría al descubierto. Hasta la sistematización de la defensa de los distintos intereses que el sabotaje abarca en los títulos delictivos adecuados (ver número V, 1) continuarán en vigencia los artículos 7º, 10 y 12, letras c) y d) de la ley 13.985. La delincuencia motivada en causas políticas está reprimida por las penas de la rebelión y sedición (Código Penal, artículos 226, 229, 230, 233, 234 y 235) reforzadas por las reglas del Código de Justicia Militar sobre rebelión (artículos 642 a 652) y delitos contra el régimen constitucional (artículos 653 a 655). Esos resguardos de la potencialidad interna de la Nación (sabotaje) y de su estabilidad constitucional encuentran su complemento en los delitos contra el orden público (Código Penal, artículos 209 a 213, modificados en lo que se refiere a la intimidación pública por la ley 15.276) y la seguridad pública. Esta comprende los capítulos del incendio y otros estragos (Código Penal, artículos 186 a 189), de los delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación (Código Penal, artículos 190 a 197) (11), de la piratería (Código Penal, artículos 198 y 199) y de los delitos contra la salud pública (Código Penal, artículos 200 a 208, modificados por las leyes 11.309 y 11.331).

VIII

NUEVAS NORMAS DE URGENTE SANCION PARA REFORZAR EL RESGUARDO DE LA PAZ INTERIOR DE LA NACION

No me parece que en materia de seguridad exterior de la Nación exista la necesidad de dictar urgentemente nuevas reglas represivas. El estado de paz internacional, la naturaleza y orientaciones del gobierno establecido y la falta de antecedentes demostrativos de la insuficiencia notoria del Código Penal y de la ley 13.985 fundamentan mi opinión.

Me parece, por el contrario, que las últimas experiencias del país exigen algún refuerzo represivo en lo que atañe al mantenimiento del orden interno de la Nación.

(11) El Código Aeronáutico resguarda la navegación aérea (artículos 194 a 198).

El título de los delitos contra el orden público se debe complementar con un capítulo V sobre «otros atentados contra el orden público», en el cual, en un mismo artículo (213 bis), se deben castigar con prisión de un mes a tres años:

- 1º A los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tengan por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas, por el solo hecho de su participación (12).
- 2º A los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases.
- 3º A los que, pública o privadamente, instigaren a los militares o a los componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar u otros deberes inherentes a su estado (13).
- 4º A los que públicamente instigaren a la desobediencia colectiva de las constituciones, leyes, reglamentos, decretos o resoluciones de las autoridades públicas.

Los hechos sub. 1 a 3 vienen perturbando de manera notable la tranquilidad pública del país. El Estado constitucional debe poseer los medios legales para reprimirlos. El hecho del inciso 4º es igualmente dañoso para la paz pública.

A la par de esas normas de resguardo contra las actividades perturbadoras de la paz espiritual del pueblo, tan necesaria para una razonable vida social, es preciso incorporar normas represivas de los delitos contra la voluntad popular.

Los atentados contra la incolumidad de las elecciones de los representantes del pueblo no constituyen materia de las leyes especiales de elecciones nacionales, provinciales o municipales. Los atentados contra la voluntad popular, cuyo castigo propongo, estructuran una delincuencia de tipo común, porque no son simples contravenciones formales a las leyes electorales, sino ofensas a intereses primordiales de los gobernados, cuya existencia no depende de que esas leyes los reconozcan. Me parece que es urgente agregar al Código Penal un nuevo título, el número X bis, que prevea tales delitos. Esa urgencia aconseja incorporar íntegramente, sin modificaciones apresuradas, el título XIII, de la parte especial, del proyecto de 1960, pues a la vez que ya toma en consideración las reglas del proyecto Peco, no ha sido objeto de observaciones en la encuesta realizada a su respecto (14). Para no perturbar el ordenamiento del código, conviene que el contenido de ese título se incorpore mediante el sistema del articulado repetido y numerado, comenzando con el artículo 2.361 y así sucesivamente. Sobre el título que propongo, véanse las exposiciones de motivos de los proyectos de 1960 (número 71) de Peco (número 291 y siguientes) y las notas del primero.

(12) La fórmula es amplia y comprende tanto las agrupaciones «patoteras», como las «tacuaras» y similares.

(13) Proyecto Peco, artículo 299.

(14) Ver *Síntesis de observaciones formuladas y modificaciones propuestas en la encuesta realizada sobre el proyecto de Código Penal del Poder Ejecutivo, año 1960*, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1962.

IX

ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE LOS FUNCIONARIOS
O EMPLEADOS PUBLICOS

La codicia y el ánimo de lucro son fuentes, en el país, de una profunda corrupción de la función pública. El Código Penal no carece de reglas que repriman delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos, motivados por la codicia y el lucro. Pero, desgraciadamente, por un lado, si los gobiernos —de quienes depende en gran medida el descubrimiento y persecución de esos delitos— han hecho algo frente a la situación imperante, ha sido para favorecer la impunidad. Por otro lado, el sistema represivo ha carecido de normas respecto de un importante aspecto de esa delincuencia, como es el que atañe al enriquecimiento ilícito de los funcionarios o empleados públicos.

La situación creada exige un remedio inmediato. Pero el remedio sólo será eficaz si el refuerzo del sistema punitivo se apoya en una rectificación de la conducta administrativa. Es preciso que a la utilización o aprovechamiento lucrativo de la función pública se la comience a mirar y tratar como un delito grave, deshonorante y perjudicial.

Como medida inmediata realizable al margen de una modificación apresurada de todo el sistema establecido por el Código Penal, propongo lo siguiente: por un lado, aumentar las penas del cohecho, de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y de las exacciones ilegales previstas por el código; y, por otra lado, establecer castigos para los hechos que, no constituyendo esos delitos, son modos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios o empleados públicos.

En cuanto al fortalecimiento de las penalidades establecidas por el Código Penal para el cohecho, las negociaciones incompatibles y las exacciones ilegales, me parece razonable lo siguiente: aumentar las penas del cohecho de esta manera: la del artículo 256, a reclusión o prisión de dos a seis años, conservando la medida de la inhabilitación absoluta; la del artículo 258, primera parte, a prisión de uno a cuatro años, ya que no concurre la violación activa de la función pública, y la pena de la segunda parte del mismo artículo, a reclusión o prisión de dos a seis años. Las penas de inhabilitación especial del párrafo segundo del artículo 258 se deben aumentar, en el minimum, respectivamente, a dos y tres años. Aumentar también las penas de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Código Penal, artículo 265), a reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años. Y, finalmente, en las exacciones ilegales, elevar la pena del artículo 266 a prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años; y en el artículo 267, aumentar la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis.

El enriquecimiento ilícito de los funcionarios o empleados públicos es algo en lo que el legislador penal debe intervenir sin demora. A partir del año 1936, el Congreso ha intentado muchas veces establecer penas para ese enriquecimiento. Concordantemente, las iniciativas han proyectado las reglas de tipo administrativo tendientes al control de la situación patrimonial de los funcionarios o empleados. Pero de éstas no me ocupo, pues su materia excede el ámbito de la consulta que me ha sido hecha. Me limitaré a

señalar que las disposiciones de derecho penal común que propongo son de distinto carácter que las disposiciones punitivas que pueden y deben sancionar determinadas contravenciones a esas reglas administrativas (verbigracia, la omisión de denuncia o declaración patrimonial) (15). Las reglas que propongo, así como las contenidas en los proyectos de Peco (artículos 323 y 324) y de 1960 (artículo 346), no persiguen asegurar la acción administrativa tendiente a la aplicación de las regulaciones legales de ese tipo, sino reprimir hechos que ofenden el interés que tiene la sociedad en que los funcionarios o empleados no corrompan la función pública. Conviene, también, que señale que tampoco me ocupo de la falsedad de la declaración de bienes hecha por los agentes de la administración, pues para que ella constituya un delito de falsedad documental (Código Penal, artículo 263), basta una regla administrativa que la exija en un instrumento público (16).

En esta materia me he atenido, una vez más, al criterio, justificado por la urgencia con que deben actuar el Poder Ejecutivo y el Congreso, de servirme, en la mayor medida posible, de los precedentes que me han parecido más meditados y que toman en cuenta lo que antes de ellos se ha hecho en el país.

Me ha parecido que para lograr, dentro de esa urgencia, una legislación represiva sobre el enriquecimiento ilícito, sin vacíos y defectos evidentes, la vía más segura era adoptar en lo fundamental el artículo 346 del proyecto de 1960. Este contempla y delimita con claridad mayor número de hechos punibles que otros precedentes. Sin embargo, no me parece admisible la pena única que establece para todos los casos. He creído conveniente, además, modificar en otros aspectos el texto del proyecto, y presentarlo dividido en varios artículos. He preferido la fórmula «funcionario o empleado público», contenida en otros proyectos y no la de «funcionario público», del proyecto de 1960, para evitar que, a pesar del artículo 77, párrafo 4º, del Código Penal, se interprete que no comete el delito el que, siendo empleado público, no tiene a su cargo el ejercicio de una función pública.

Propongo, en definitiva, que como capítulo IX bis del título de los «Delitos contra la administración pública», del Código Penal se agreguen bajo el epígrafe de «Enriquecimiento ilícito de funcionarios o empleados», los siguientes artículos:

Artículo 268¹.— Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años el funcionario o empleado público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario o empleado público, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

El que diere la dádiva o hiciera la promesa y la persona interpuesta para hacerla o recibirla, serán reprimidos con prisión de uno a tres años.

Artículo 268².— Será reprimido con la pena del artículo 268¹, párrafo 1º, el funcionario o empleado público que, con fines de lucro, utilizare

(15) Ver, por ejemplo, las sanciones del artículo 13 del proyecto, revisado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados (sesiones ordinarias, 1941, orden del día número 212, p. 2231).

(16) Proyecto de 1960, nota al artículo 346.

para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Artículo 268¹.—Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta por uno a seis años el funcionario o empleado público que admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su oficio.

El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

Artículo 268².—Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años el que, al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con prisión de uno a cuatro años.

El artículo 268¹, párrafo 1º, reprime la venta de la influencia que por su calidad se supone tiene un funcionario o empleado sobre otro. He variado la fórmula del proyecto del 60 y he adoptado, en parte, la del artículo 256 del código (cohecho), porque el uso de fórmulas distintas podía inducir a pensar que, en lo que a ellas respecta, sus contenidos son diferentes. Lo que el cohecho del artículo 256 tiene diferente del delito a que me refiero no es lo relativo al modo como el autor recibe el beneficio, sino lo que atañe al objeto del pacto corruptivo: en aquél es el acto funcional; en éste, la influencia como funcionario o empleado para lograr una conducta funcional ajena. Me parece que las semejanzas de ambos hechos exigen penas iguales. El párrafo 2º del artículo 268¹ reprime a los sujetos activos de la acción corruptora (proyecto Palacios, del 9 de agosto de 1961, artículo 3º). La pena menor se explica porque estos sujetos no violan la lealtad funcional o burocrática.

El artículo 268² reprime otro modo de lucrar de los funcionarios o empleados públicos. El delito es grave porque, además de representar violaciones a la fe funcional o burocrática y de la reserva de la información o dato, el hecho puede tener malas consecuencias para la economía general. Se trata de un delito distinto al del artículo 157 del Código Penal. Este artículo castiga la simple violación del secreto relativo a actuaciones o procedimientos oficiales. Razones particulares aconsejan, como lo propongo más adelante, modificar la ubicación y el contenido del artículo 157.

El artículo 268³, párrafo 1º, reproduce, con el agregado de la referencia al «empleado», el tipo delictivo del artículo 259 del código. He aumentado la pena. En el párrafo 2º castigo al que presentare u ofreciere la dádiva. Debe derogarse el artículo 259.

El artículo 268⁴ se refiere al enriquecimiento patrimonial en sentido estricto. La experiencia del país es muy significativa al respecto. A partir de hace no pocos años el cambio de la situación patrimonial de los que han ocupado ciertas funciones o empleos públicos ha sido algo bastante común y evidente. He modificado la fórmula del proyecto de 1960 (artículo 346, letra d). He sustituido la fórmula «incremento considerable de su patrimonio», por la de «un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo». Aquella fórmula deja sin castigo el enriquecimiento efectivo ilícito que no es considerable; y no elimina en la medida conveniente las dificultades que respecto de la prueba de su

existencia ofrece el caso del enriquecimiento disimulado mediante la actuación de un personero o por la asignación de los bienes a terceros. El hecho es grave y merece la pena que propongo. El párrafo 2º castiga a la persona interpuesta, claro está, siempre que obre con dolo.

X

OTRAS NORMAS CUYA SANCION ES URGENTE

El debido y razonable control represivo de la incolumidad de las funciones públicas frente a las acciones ilícitas de sus agentes, exige que el Congreso sancione, por lo menos, además de las que ya he propuesto, otras dos normas.

Una de ellas, formulada ya como agregado al artículo 261 del código por el decreto ley 4.778/63 (artículo 16), está destinada a sancionar como malversador al funcionario o empleado público que empleare en provecho propio o de tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. La fórmula, contenida también por el proyecto de 1960 (artículo 354), es correcta y castiga un hecho bastante frecuente, inmoral y dañoso para el patrimonio fiscal. El decreto ley 4.758 ubica la regla como párrafo segundo del artículo 261, cuya pena le aplica. Esto es correcto.

En segundo lugar, como una nueva y urgente contribución al mejor resguardo de la función pública, se debe sancionar una regla que reprima convenientemente la infidelidad de los funcionarios y empleados públicos respecto de la reserva a que los obliga el cargo. El artículo 157 del código castiga al «que divulgue actuaciones o procedimientos, que por la ley deben quedar secretos». La disposición es poco amplia. No comprende claramente los hechos ni los documentos. Por otro lado el delito es, inexplicablemente, de acción privada (Código de Procedimientos, artículo 73, inciso 3º) (17). Pienso que la función pública debe preservarse penalmente por una acción de oficio contra los funcionarios o empleados infidentes o indiscretos, no sólo respecto de las actuaciones funcionales sino, también, de los hechos o documentos cuyo secreto exige la ley. Me parece que se debe adoptar el artículo 339 del proyecto de 1960, salvo la pena. El artículo debe trasladarse al capítulo del «abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos», bajo el número 253 bis. Propongo la redacción siguiente:

Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos e inhabilitación especial por seis meses a dos años, el funcionario o empleado público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos.

La multa que propongo obedece a la necesidad de no romper por una disposición aislada el equilibrio del sistema que en materia de penas pecuniarias tiene el código. Debe derogarse el artículo 157 del código.

XI

DECRETO LEY 4.778/63

El Poder Ejecutivo designó por el decreto 14.036, de fecha de 20 de diciembre de 1962, una Comisión Asesora en Materia Penal. Esta comisión aconsejó en febrero del corriente año una amplia modifica-

(17) Ver la nota al artículo 339 del proyecto de 1960.

ción del Código Penal. El Poder Ejecutivo no la llevó a efecto, pero el 12 de junio próximo pasado dictó el decreto ley 4.778/63 que reformó diecinueve artículos del código.

Se trata, en general, de reformas que no son imprescindibles o, por lo menos, urgentes. Algunas de ellas introducen reglas contrarias a lo que debe ser (por ejemplo: el párrafo 2º del artículo 29) (18) o de una oscuridad y complejidad tales que resulta fácil prever sus malas consecuencias (el agregado al artículo 40) (19). Otras sólo constituyen, en lo fundamental, consagraciones terminológicas de interpretaciones vigentes (reformas al artículo 58) o, como sucede respecto de casi todas las modificaciones restantes, se trata de reformas cuya consideración corresponde que se haga con más tiempo y estudio como aspectos de la actualización del Código Penal. Esto no se puede hacer en las próximas sesiones extraordinarias. He aprovechado, sin embargo, como se puede ver más arriba, alguna disposición del decreto ley 4.778. Como respecto de ella propongo una norma especial, pienso que el decreto debe derogarse en bloque.

XII

CONCLUSION

Al contestar la consulta del señor ministro lo he hecho restringiéndome a objetivos muy claros: eliminar el delito de opinión; reprimir hechos que, desde hace tiempo, vienen perturbando la tranquilidad pública; dotar al Estado de los medios represivos necesarios para fortalecer la incolumidad del ejercicio de la soberanía popular y, finalmente, aumentar las defensas contra las conductas de los agentes de la administración pública lesionadoras de ésta. Estos objetivos abandonan el sesgo autoritario de la legislación dictada a partir de 1945 en defensa del Estado. Este no se defiende restringiendo irrazonablemente la libertad de los gobernados, sino mediante reglas que depuren el ejercicio de esta libertad y el de la función pública.

Me he abstenido de proponer cualquier otra reforma de la legislación penal porque, como lo he señalado, su actualización no es algo urgente y representa una tarea que requiere tiempo, tranquilidad y estudio.

Saludo al señor ministro con mi consideración más distinguida. — *Ricardo C. Núñez*, director.

(18) El párrafo 2º del artículo 29 propuesto, es una regla que olvida que la cuestión reside en el problema económico que la prisión o reclusión del culpable crea, por lo general, para su familia y para el mismo al readquirir la libertad. Para no perjudicar más esa situación, el perfeccionamiento de institutos y servicios penales debe tener otras fuentes de asistencia que las rentas de los presos.

(19) La regla del artículo 40, párrafo 2º, puede ofrecer muy muchas dificultades. La regla, que comienza por ser el injerto de una agravante de carácter general en el sistema de agravantes particulares del código, posee todos los peligros propios de las circunstancias establecidas como agravantes respecto de cualquier delito en el que concurran. CARRARA señaló hace mucho tiempo los peligros de establecer, sin distinciones, que siempre que concurra una determinada circunstancia, cualquier delito se agrava. Bien puede suceder que ciertos delitos supongan esa circunstancia como elemento constitutivo o presupuesto, y que en otros, con arreglo a sus respectivas naturalezas, no resulte agravadora o carezca de significación (ver *Programa del curso de derecho criminal*, § 887, 1944, 2182 y 3059). Pero, tratándose del agravamiento por «representar el delito una manifestación de delincuencia organizada», a ese peligro general se añaden otros. Da una idea aproximada de ellos, el comentario —hecho sin esta finalidad— de FONTAN BALESTRA, *Reformas del Código Penal*, Abeledo Perrot, p. 123 y siguientes.

I

Prohibición de propaganda peronista

DECRETO LEY 4.161

DEL 5 DE MARZO DE 1956

Visto el decreto 3.855/55, por el cual se disuelve el Partido Peronista en sus dos ramas, en virtud de su desempeño y vocación liberticida, y

CONSIDERANDO:

Que en su existencia política, el Partido Peronista, actuando como instrumento del régimen depuesto, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana, para lo cual creó imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina, artículos y obras artísticas;

Que dichos objetos, que tuvieron por fin la difusión de una doctrina y una posición política que ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino, constituyen para éste una afrenta que es imprescindible borrar porque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la población del país, y su utilización es motivo de perturbación de la paz interna de la Nación y una rémora para la consolidación de la armonía entre los argentinos;

Que en el campo internacional también afectan el prestigio de nuestro país, porque estas doctrinas y denominaciones simbólicas, adoptadas por el régimen depuesto, tuvieron el triste mérito de convertirse en sinónimo de las doctrinas y denominaciones similares utilizadas por las grandes dictaduras de este siglo, que el régimen depuesto consiguió parangonar;

Que tales fundamentos hacen indispensable la radical supresión de esos instrumentos o de otros análogos, y esas mismas razones imponen también la prohibición de su uso al ámbito de las marcas y denominaciones comerciales, donde también fueron registradas con fines publicitarios y donde su conservación no se justifica, atento el amplio campo que la fantasía brinda para la elección de insignias mercantiles;

Por ello,

El presidente provisional de la Nación, en ejercicio del Poder Legislativo,

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º — Queda prohibida en todo el territorio de la Nación:

- a) La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o de propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados, grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo.

Se considerará especialmente violatoria de esta disposición, la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo o la bandera peronista, el nombre propio del presi-

dente depuesto, el de sus parientes, las expresiones «peronismo», «peronista», «justicialismo», «justicialista», «tercera posición», la abreviatura «P.P.», las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales denominadas *Marcha de los muchachos peronistas* y *Evita capitana*, fragmentos de las mismas, la obra *La razón de mi vida* o fragmentos de la misma, y los discursos del presidente depuesto y de su esposa o fragmentos de los mismos;

- b) La utilización, por las personas, y con los fines establecidos en el inciso anterior, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, creados o por crearse, que de alguna manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideología del peronismo;
- c) La reproducción, por las personas, y con los fines establecidos en el inciso a), mediante cualquier procedimiento, de las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los dos incisos anteriores.

Art. 2º — Las disposiciones del presente decreto ley se declaran de orden público y, en consecuencia, no podrá alegarse contra ellas la existencia de derechos adquiridos. Caducan las marcas de industria, comercio y agricultura, y las denominaciones comerciales, principales o anexas, que consistan en las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los incisos a) y b) del artículo 1º.

Los ministerios respectivos dispondrán las medidas conducentes a la cancelación de tales registros.

Art. 3º — El que infrinja el presente decreto ley será penado:

- a) Con prisión de treinta días a seis años y multa de quinientos pesos (\$ 500) a un millón de pesos (\$ 1.000.000);
- b) Además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político o gremial;
- c) Además, con clausura por quince días, y en caso de reincidencia, clausura definitiva cuando se trate de empresas comerciales.

Cuando la infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar como pena accesoria la disolución.

Las sanciones del presente decreto ley no serán susceptibles de cumplimiento condicional, ni será procedente la excarcelación.

Art. 4º — El presente decreto ley será refrendado por el excelentísimo señor vicepresidente provisional de la Nación y por todos los señores ministros secretarios de Estado en acuerdo general.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

ARAMBURU.

Isaac F. Rojas. — Eduardo B. Busso. — Luis A. Podestá Costa. — Laureano Landaburu. — Raúl C. Migone. — Atilio Dell'Oro Maini. — Francisco Martínez. — Luis M. Ygartúa. — Pedro Mendiondo. — Sadi E. Bonnet. — Eugenio A. Blanco. — Alberto F. Mercier. — Alvaro Alsogaray. — Juan Llamazares. — Julio Ali-zón García. — Arturo Ossorio Arana. — Teodoro Hartung. — Julio C. Krause.

Prohibición de expresiones del régimen depuesto, en testimonios o certificados de documentos.

Modificación decreto ley 4.161/56

DECRETO LEY 22.490

DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1956

Atento a la necesidad de ampliar las disposiciones del decreto ley 4.161/56, que prohíbe en todo el territorio de la Nación las expresiones vinculadas al régimen depuesto y a fin de evitar que las mismas sean reproducidas con motivo de la expedición de testimonios o certificados de documentos extendidos durante dicho período,

El presidente provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo,

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º — Incorpórase como párrafo tercero del artículo 2º del decreto ley 4.161/56 el siguiente:

Todo funcionario público que extienda testimonios o certificados de documentos que contengan nombres de provincias, partidos, distritos, ciudades, pueblos, calles, plazas, etcétera y demás designaciones geográficas o de lugares que habiendo sido establecidos por el régimen depuesto hayan sido cambiados por el gobierno de la revolución, así como nombres de instituciones u organismos, públicos o privados, que se encuentren en el mismo caso, deberá sustituirlos por las denominaciones actuales con el agregado entre paréntesis de la cita del presente decreto ley.

Art. 2º — El presente decreto ley será refrendado por el excelentísimo señor vicepresidente provisional de la Nación y por todos los señores ministros secretarios de Estado en acuerdo general.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

ARAMBURU.

Isaac F. Rojas. — Laureano Landaburu. — Luis A. Podestá Costa. — Carlos A. Adrogué. — Alberto Mercier. — Francisco Martínez. — Luis M. Ygartúa. — Pedro Mendiondo. — Sadi E. Bonnet. — Eugenio A. Blanco. — Rodolfo Martínez. — Arturo Ossorio Arana. — Teodoro Hartung. — Julio C. Krause.

(Boletín Oficial del 29 de abril de 1957.)

Prohibición de propaganda peronista

DECRETO LEY 1.296

DEL 15 DE FEBRERO DE 1963

RATIFICASE EL DECRETO 7.165/62

Visto el decreto 7.165, de 24 de julio de 1962, por el cual se restableció el pleno vigor de las normas dictadas por decreto ley 4.161/56, derogado por ley 14.444 y teniendo en cuenta lo dispuesto por decreto 9.747/62,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º—Ratificase el decreto 7.165/62.

Art. 2º—El presente decreto será refrendado por los señores ministros del Interior, Defensa Nacional y Educación y Justicia.

Art. 3º—Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO.

Rodolfo Martínez. — José M. Astigueta.
— Alberto Rodríguez Galán.

(Boletín Oficial del 22 de febrero de 1963.)

Prohibición de propaganda peronista**DECRETO LEY 2.713**

DEL 10 DE ABRIL DE 1963

FÍJASE EL ALCANCE DE LOS DECRETOS LEYES 4.161/56; 1.296/63 y DECRETO 7.165/62. — SUSTITUCION DEL INCISO B) DEL ARTICULO 3º DEL DECRETO LEY 4.161/56; DEROGACION DEL ARTICULO 2º DEL DECRETO 7.165/62

Visto el decreto ley 4.161, del 5 de marzo de 1956; el decreto 7.165, del 24 de julio de 1962, y el decreto ley 1.296, del 15 de febrero de 1963, en lo que concierne a la presencia y actividades de las fuerzas antidemocráticas peronistas en la vida institucional del país, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario complementar dichos decretos a los efectos de alcanzar una correcta y uniforme aplicación de los mismos en todo el ámbito de la República;

Que ello se hace más necesario frente a la vigencia actual del decreto 4.161/56 (decreto ley 1.296, del 15 de febrero de 1963) y lo expuesto en los incisos 6, 7, 8 y 9 del artículo 6º, y del artículo 7º del Estatuto de los Partidos Políticos (decreto ley 12.530/62), en cuanto impiden la reimplantación, bajo forma y apariencias legales, de regímenes contrarios al sistema democrático;

Que las restricciones que imponen los decretos arriba citados alcanzan a las personas, grupos o estructuras responsables del estado de cosas imperante durante el período peronista;

Que queda completamente garantizado el pleno ejercicio de sus derechos, incluido el de organizarse y actuar políticamente como deseen, a todas aquellas personas que manifiestan de manera inequívoca ideas o aspiraciones lícitas, morales y democráticas, totalmente desvinculadas de las prácticas contrarias a este sistema que llevó a cabo el régimen depuesto por la Revolución Libertadora de 1955, es decir, cuando actúen dentro de lo prescrito por la Constitución, el Estatuto de los Partidos Políticos y las demás leyes y decretos vigentes en la materia;

Que las presentes restricciones, para ser efectivas en salvaguardia del patrimonio moral e institucional del país, deben aplicarse en forma permanente;

Por todo ello,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º—Quedan comprendidas dentro de las prohibiciones establecidas por el artículo 1º del decreto ley 4.161/56 y decreto 7.165/62, ratificado por el

decreto ley 1.296/63, y, por lo tanto, sujetos a las penalidades establecidas en el artículo 3º del decreto ley 4.161/56:

1º Los que hicieren de palabra o por escrito la apología del tirano prófugo o del régimen peronista, o del partido disuelto por decreto ley 3.855/55, aun cuando no mediare la existencia de una finalidad de afirmación ideológica o de propaganda peronista.

2º La difusión por cualquier medio o forma en que se efectuase de directivas, declaraciones, entrevistas o actividades del tirano prófugo y que de alguna manera signifiquen injerencia en el plano de lo político o gremial nacional, aun cuando en su divulgación no mediase la existencia de una finalidad de afirmación ideológica o propaganda peronista.

3º El contacto por cualquier medio con el tirano prófugo vinculado a la actividad política o gremial y la actuación de quienes sirviesen de nexo a aquéllas para tales fines y para los previstos en el inciso anterior.

Art. 2º—Sustitúyese el inciso b), del artículo 3º, del decreto ley 4.161/56, por el siguiente:

Además, con inhabilitación por doble tiempo del de la condena para desempeñarse como funcionario público, candidato a cargos públicos electivos o dirigente político o gremial. Dicha inhabilitación no será en ningún caso inferior a dos años.

Art. 3º—Derógase el artículo 2º del decreto 7.165/62, ratificado por decreto ley 1.296/63.

Art. 4º—El presente decreto ley será refrendado por los señores ministros secretarios de Estado en los departamentos de Interior, de Defensa Nacional y de Educación y Justicia, y firmado por los señores secretarios de Estado de Guerra, de Marina y de Aeronáutica.

Art. 5º—Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO.

Enrique Rauch. — José M. Astigueta. —
Alberto Rodríguez Galán. — Benjamín
Rattenbach. — Carlos A. Kolungia. —
Eduardo F. McLoughlin.

(Boletín Oficial del 17 de abril de 1963.)

Prohibición de propaganda peronista**DECRETO 4.215**

DEL 24 DE MAYO DE 1963

REGLAMENTACION DEL INCISO 3º, DEL ARTICULO 1º, DEL DECRETO LEY 2.713/63

Visto: La necesidad de reglamentar lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 1º del decreto ley 2.713, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde al gobierno de la Nación adoptar todas aquellas medidas que tiendan a mantener incólumes los tradicionales lazos de amistad con países amigos;

Que esa tradicional política internacional argentina impone la necesidad de eliminar todo factor de roce

que pueda afectar o debilitar vinculaciones particularmente estrechas en sus relaciones exteriores;

Que el mantenimiento de esos claros objetivos exige la adecuada reglamentación de las disposiciones legales mencionadas, por cuanto los medios de control deben ser establecidos por el Estado de origen de las personas cuyas actividades puedan entorpecer las finalidades precedentemente señaladas;

Que los objetivos fundamentales que se ha fijado el gobierno nacional, tendientes a alcanzar en breve plazo la normalización constitucional, exigen tomar medidas adecuadas para eliminar factores de perturbación en la convivencia de la comunidad argentina y establecer las condiciones que permitan un normal proceso preelectoral;

Que la calidad y naturaleza de los valores que se encuentran contenidos en los objetivos señalados justifican que se establezcan, con carácter transitorio, medidas restrictivas y de control que, en definitiva, sólo podrán afectar a aquellos que pretendieren incurrir en la conducta sancionada por la norma legal que se reglamenta;

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — A partir de la fecha del presente decreto, todo ciudadano argentino que desee viajar directa o indirectamente a España, además de la documentación que determinan las disposiciones en vigencia, deberá contar con una autorización especial que a tal efecto será expedida por la Policía Federal, para los que se encuentren residiendo en el país, o por los consulados argentinos, para los que se encontraran residiendo en el exterior.

Con respecto a los pasaportes oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto determinará el procedimiento y control a establecer, de acuerdo a las finalidades perseguidas por el presente decreto.

Art. 2º — En los casos que así corresponda, en razón de la finalidad establecida en el mismo, y de acuerdo con las instrucciones que dicte el Ministerio del Interior, a partir de la fecha la Policía Federal dejará constancia, en el momento de expedir pasaportes, que dicho documento no habilita para viajar a España.

Art. 3º — Las compañías, empresas, agencias y/o responsables de cualquier medio de transporte al exterior, no podrán expedir pasajes con destino a España a aquellas personas comprendidas en el presente decreto que no cuenten con la autorización especial prevista en el artículo 1º, o en cuyo pasaporte exista la reserva del artículo 2º *in fine*.

Art. 4º — Todo ciudadano argentino, a los efectos de regresar a la República, en todos los casos en que con posterioridad al 17 de abril de 1963, fecha de entrada en vigencia del decreto ley 2.713/63, haya residido, permanecido en o visitado a España, necesitará la intervención en su pasaporte de las autoridades consulares argentinas acreditadas en aquel país, o ante cualquier otro desde donde iniciara el regreso.

Art. 5º — Los capitanes, comandantes, responsables o encargados, así como las empresas o agencias propietarias o consignatarias de cualquier medio de transporte de personas a la República, no podrán transportar a ciudadanos argentinos que, comprendidos en el artículo 4º del presente decreto, no cuenten

en su pasaporte con la intervención consular correspondiente.

Art. 6º — Subsiguientemente a la inspección migratoria tomarán intervención, a los efectos del cumplimiento del presente decreto, las autoridades nacionales que cumplen funciones de policía de seguridad en los lugares habilitados para el ingreso de las personas.

Art. 7º — Caducará automáticamente todo pasaporte que pertenezca a la persona que no cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 1º y 4º. A tal efecto, en los casos en que se compruebe la infracción, las autoridades policiales o los consulados argentinos en el exterior deberán retener, sin excepción, el correspondiente pasaporte.

La sanción establecida en el presente artículo no perjudica el derecho del ciudadano infractor a obtener nuevo pasaporte, en el que se deberá colocar, en el caso de expedirse, la reserva prevista en el artículo 2º *in fine*.

Art. 8º — En los casos en que el transporte de personas se efectúe en contravención a lo dispuesto en los artículos 3º y 5º del presente decreto, los responsables se harán pasibles de las sanciones administrativas que establecen las disposiciones en vigor.

Art. 9º — Las disposiciones del presente decreto no serán aplicables a todas aquellas personas involucradas en el artículo 4º, que se encontraren en viaje o con sus trámites consulares cumplidos, con anterioridad a las cuarenta y ocho horas de la publicación del mismo.

Art. 10. — La vigencia de las normas establecidas precedentemente se extenderá hasta el 12 de octubre de 1963.

Art. 11. — El presente decreto será refrendado por los señores ministros secretarios de Estado en los departamentos del Interior, Relaciones Exteriores y Culto y Defensa Nacional y firmados por los señores secretarios de Estado de Guerra, Marina y Aeronáutica.

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO.

Osiris G. Villegas. — Juan C. Cordini. —
José M. Astigueta. — Héctor Repetto. —
Carlos A. Kolungia. — Eduardo F.
McLoughlin.

(Boletín Oficial del 30 de mayo de 1963.)

Prohibición de propaganda peronista

DECRETO 7.165

DEL 24 DE JULIO DE 1962

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que como consecuencia de la Revolución Libertadora de 1955 y de la disolución, dispuesta por el gobierno surgido de aquélla, del partido político que sostenía al dictador depuesto, se sancionó el decreto ley 4.161/56, prohibiendo la utilización, con fines de afirmación ideológica o de propaganda, de imágenes, símbolos, signos o cualquier otro medio de expresión tendientes a exponer, exaltar o difundir las doctrinas o actividades del régimen derrocado, y estableciendo sanciones penales para quienes infringieran tal prohibición;

Que por ley 14.444, promulgada en julio 1º de 1958, se decidió derogar el decreto ley 4.161/56, por estimar, seguramente, que los recursos mencionados habían sido definitivamente proscritos de nuestras prácticas políticas; pero hechos producidos con posterioridad, especialmente en la campaña electoral que culminó con las elecciones del 18 de marzo último, demuestran acabadamente que subsisten en toda su plenitud y gravedad las razones de orden público y las exigencias democráticas que determinaron la sanción de dicho decreto;

Que, en efecto, el partido disuelto por decreto ley 3.855/55 ha renacido en otras agrupaciones políticas, que, actuando bajo distintos nombres, pero con su misma doctrina, procedimientos y métodos de proselitismo y propaganda, se han sometido en su organización y desenvolvimiento a las directivas del dictador depuesto en 1955, probando con tales actitudes que no constituyen sino meras prolongaciones de aquel partido;

Que en el período previo a los últimos comicios, y aun con posterioridad, tales partidos y otras agrupaciones y personas que inconcebiblemente se confiesen todavía adictas al régimen de oprobio que ensombreció la historia de la República durante un largo período, se han valido de expresiones y otros instrumentos de captación del electorado que el decreto ley 4.161/56 prohibió y sancionó como delitos;

Que el renacimiento de esos métodos de propaganda y exaltación de la dictadura y de la persona que la ejerció; y las dañosas consecuencias que de tal hecho se han derivado para la República, plantean la absoluta necesidad de poner nuevamente en vigor las normas prohibitivas sancionadas por decreto ley 4.161/56; y el actual Poder Ejecutivo tiene atribuciones para hacerlo, no obstante la naturaleza de las disposiciones a adoptar, si se tiene en cuenta la imposibilidad de obtener en las actuales circunstancias la sanción legal que regularmente hubiera correspondido, y el carácter urgente e impostergable de la medida que se trata de sancionar;

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Restablécese, a partir de la publicación de este decreto, el pleno vigor de las normas dictadas por decreto ley 4.161/56, derogado por ley 14.444.

Art. 2º — La prohibición dispuesta por esas normas y las sanciones previstas por el decreto ley 4.161/56 para el caso de infracción alcanzan, así mismo, a la mera difusión, por cualquier medio que ella se efectúe, de las doctrinas y actividades a que dicha prohibición concierne, aunque ella no se realice con fines de afirmación o propaganda.

Art. 3º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 4º — El presente decreto será refrendado por el señor ministro del Interior.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO.

Carlos A. Adrogué.

(Boletín Oficial del 26 de julio de 1962.)

II

Represión del comunismo. — Derogación decreto 8.161/62

DECRETO LEY 4.214

DEL 24 DE MAYO DE 1963

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que es imprescindible dotar al país de un instrumento legal que preserve el orden jurídico y las instituciones democráticas, frente a la acción subversiva del comunismo que se propone abolir los derechos y garantías individuales reconocidos por la Constitución, destruyendo las bases fundamentales de la organización institucional del país a fin de implantar la dictadura comunista;

Que el partido Comunista es una asociación que por sus principios, acción y programa y por su vinculación y dependencia del comunismo internacional es destructivo de nuestra nacionalidad;

Que la acción sediciosa comunista se desarrolla paralelamente a través de un sistema de espionaje mundial, con la participación de una vasta red de agentes a su servicio, con menosprecio de los intereses del país;

Que el comunismo no sólo realiza acción a través de los aparatos clandestinos y políticos específicos, sino que promueve, crea y dirige «organizaciones colaterales», internacionales y nacionales, que sirven a sus objetivos;

Que por lo tanto no sólo debe considerarse acción comunista a la que se realice pública y ostensiblemente, sino también a toda aquella que se desarrolle en beneficio del comunismo, aunque se la pretenda disfrazar tras otros móviles diversos;

Que numerosa y definitiva jurisprudencia argentina, emanada principalmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha conderado al comunismo como ilegal, delictuoso y contrario a la Constitución Nacional, careciéndose hasta el momento de un instrumento jurídico positivo para hacer efectiva la defensa de la sociedad contra dicho delito;

Que nuestro país ha contraído compromisos internacionales expresos contra la acción del comunismo internacional, inspirados en la defensa permanente de la democracia continental;

Que en cumplimiento de dichos compromisos, la República Argentina ha adoptado recientemente ante el comunismo una postura categórica en el plano internacional, que corresponde sea complementada en el plano nacional con medidas del mismo carácter;

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º — Declárase ilegal y, en consecuencia, se prohíbe la actuación en la República Argentina de toda asociación de personas u organizaciones que, bajo el nombre del partido Comunista o cualquier otra denominación, proclame o admita los principios del comunismo internacional en cualquiera de sus formas. Las existentes serán disueltas y liquidadas, con arreglo a las normas contenidas en las leyes vigentes.

Art. 2º — Prohíbese, igualmente, en todo el territorio de la Nación, toda actividad comunista o tendiente a sostener o propiciar la implantación del comunismo.

Art. 3º — Quedan particularmente comprendidos en tal prohibición:

- a) La difusión de la doctrina y propósitos del comunismo realizadas con la finalidad a que se refiere el artículo 2º;
- b) Los actos de proselitismo, adoctrinamiento, ayuda o requerimiento de ayuda para el sostenimiento y expansión del comunismo.

Art. 4º — A los fines del presente decreto ley se reputará «comunista»:

- 1º Toda actividad que tienda a sustituir o reformar el sistema institucional de la Nación o el orden social existente en ella, propugnando en su lugar la implantación de un régimen basado en la doctrina, la plataforma, los programas u objetivos de las internacionales comunistas o del comunismo en cualquiera de sus formas.
- 2º Cualquier persona afiliada a un partido, asociación u organización comunista, nacional o extranjero, sea cual fuere su denominación.
- 3º El que sin estar afiliado a dicho partido, asociación u organización, preste ayuda o colabore con cualquiera de ellos.
- 4º Toda organización, de cualquier clase o naturaleza jurídica, sean cuales fueren sus fines aparentes, que sostenga, propicie, prepare o intente la implantación del comunismo.

Art. 5º — Queda prohibido, a las personas consideradas como «comunistas» por este decreto ley:

- 1º El desempeño en el orden nacional, provincial o municipal, de funciones públicas electivas, administrativas o judiciales.
- 2º El ejercicio de la docencia en establecimientos públicos o privados destinados a impartir enseñanza.
- 3º Desempeñar funciones directivas o representativas en organizaciones educativas, culturales, artísticas, profesionales, patronales u obreras.
- 4º Ser beneficiario de becas otorgadas por instituciones oficiales o subsidiadas por el Estado.

Art. 6º — Prohíbese el ingreso al territorio de la República de los extranjeros que en forma individual o integrando cualquier tipo de organización participen en la difusión o propaganda del comunismo o en la realización de otras actividades comprendidas en el presente.

Esta prohibición no será aplicable a los miembros del cuerpo diplomático o consular o misiones oficiales, ni a aquellas personas cuyo ingreso fuere expresamente autorizado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 7º — Los extranjeros que ingresen al país violando una prohibición expresa adoptada en virtud de lo dispuesto por el artículo 6º serán reprimidos con prisión de un mes a tres años y expulsados del país al término de su condena.

Art. 8º — Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años los que desarrollaren las actividades prohibidas por los artículos 2º y 3º Si el hecho fuere cometido por personas que ejerzan funciones directi-

vas en las organizaciones a que se refiere el inciso 4º) del artículo 4º, la pena será de dos a ocho años de prisión.

Art. 9º — El que públicamente y por cualquier medio hiciere la apología de un delito o de un condenado por un delito reprimido por el presente, será sancionado con prisión de tres meses a un año.

Art. 10. — Los condenados en virtud de las disposiciones de este decreto ley sufrirán las siguientes accesorias:

- 1º Si fueran argentinos nativos o por opción: la inhabilitación para votar y ser elegidos, para desempeñar funciones o empleos públicos, para ejercer la docencia y para desempeñar funciones directivas o representativas en organizaciones educacionales, culturales, artísticas, profesionales, patronales u obreras.

Esta inhabilitación durará el doble del tiempo de la condena, pero nunca menos de cinco años.

- 2º Si fueran argentinos naturalizados: la pérdida de la ciudadanía y la expulsión del país al término de la condena.

- 3º Si fueran extranjeros: la expulsión del país al término de la condena.

- 4º El comiso del material escrito o impreso o de los medios de difusión empleados.

- 5º La clausura hasta por ciento veinte días, de los lugares donde se imprima, edite, expida, venda, distribuya o exhiba este material o medios. En caso de reincidencia, la clausura será definitiva.

- 6º La clausura definitiva, disolución y liquidación si se tratare de organizaciones que se hallaren comprendidas en el artículo 4º, inciso 4º).

Art. 11. — La expulsión del país a que se refiere el artículo anterior será de aplicación optativa por el juez en los casos de extranjeros o naturalizados que antes de cometer el delito hubieran contraído matrimonio con cónyuge argentino o que tuvieran hijos argentinos. En tales supuestos la condena impondrá las accesorias establecidas para los argentinos nativos o por opción.

Art. 12. — En el caso de que un extranjero fuera expulsado del país por aplicación del presente decreto ley y que por el hecho de carecer de documentación habilitante no fuere recibido por país alguno, el Poder Ejecutivo determinará el lugar de su radicación dentro del territorio nacional.

Art. 13. — Las autoridades administrativas competentes procederán al comiso de todo el material de propaganda favorable a las actividades reprimidas por el presente, que se encuentre en el país o que se pretenda introducir en el mismo. También podrán decretar la clausura provisoria de los lugares donde se prepare, imprima, edite, distribuya, venda, emita o exhiba ese material.

Art. 14. — De las medidas que se adopten en virtud de lo dispuesto por el artículo anterior se dará cuenta al juez competente dentro del término de diez días.

Art. 15. — Las sanciones del presente decreto ley no serán susceptibles de cumplimiento condicional ni será procedente la excarcelación.

Art. 16. — Todo funcionario o empleado público que fuere procesado por infracción al presente decreto ley, será suspendido preventivamente en sus funciones.

Art. 17. — Todo funcionario o empleado público que fuere condenado por aplicación de cualquiera de las disposiciones de este decreto ley, será exonerado, sin perjuicio de las sanciones penales que le hubieren correspondido.

Art. 18. — En todo cuanto no fuere incompatible con lo dispuesto en el presente decreto ley se aplicarán, supletoriamente, las disposiciones del Código Penal.

Art. 19. — A la Justicia Federal corresponderá la competencia para conocer en todas las causas que se susciten por aplicación de este decreto ley, sin perjuicio de la que corresponda al fuero militar, en el caso de que los hechos previstos por el presente cayeran dentro de su jurisdicción.

Art. 20. — Deróganse el decreto 8.161/62 y toda otra disposición legal en cuanto se oponga al presente decreto ley.

Art. 21. — Dése oportunamente cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 22. — El presente decreto ley será refrendado por los señores ministros secretarios en los departamentos del Interior, de Defensa Nacional y de Educación y Justicia y firmado por los señores secretarios de Estado de Guerra, de Marina y de Aeronáutica.

Art. 23. — Comuríquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO.

Osiris G. Villegas. — José M. Astigueta. — Mariano Astigueta. — Héctor A. Repetto. — Carlos A. Kolungia. — Eduardo F. McLoughlin.

(Boletín Oficial del 30 de mayo de 1963.)

Represión del comunismo

DECRETO LEY 5.541

DEL 5 DE JULIO DE 1963

NORMAS AMPLIATORIAS DEL DECRETO LEY 4.214/63. DISOLUCION DE DIVERSAS ORGANIZACIONES

Visto el decreto ley 4.214/63, artículo 1º, por el que se declara la ilegalidad y se prohíbe la actuación en el territorio de la República, del Partido Comunista y de toda otra asociación de personas u organizaciones, cualquiera fuere su denominación, que proclamen o admitan los principios del comunismo internacional en cualquiera de sus formas, y que dispone, además, la disolución y liquidación de las existentes en todo el territorio nacional y sanciona a las personas físicas incluidas en el mismo o que lo violen, y

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo nacional debe determinar cuáles son los grupos, entidades, asociaciones u organizaciones directa o indirectamente vinculados al Partido Comunista o que colaboran en su acción;

Que es necesario resolver sobre la situación y destino de los bienes que integran el patrimonio de las organizaciones inculminadas;

Que así mismo, deben adoptarse providencias con respecto al material decomisado, las clausuras, las comunicaciones que debe efectuar la autoridad judicial y un procedimiento acorde con la naturaleza de los delitos contra la seguridad del Estado y represión del comunismo, que implique la implantación

de un proceso de tipo acusatorio, ágil, económico y eficaz, con predominio de las formas de la oralidad, intermediación, concentración y sistema de pruebas basado en la sana crítica e instancia única ante un tribunal colegiado, para lo cual debe también preverse la creación de una sala especial en la Cámara Federal de la Capital, ya que en el interior del país podrán cumplir esas funciones las restantes cámaras federales;

Que todas estas previsiones están inspiradas por razones de necesidad y urgencia que permitan a la Nación tener, de una vez por todas, los instrumentos legales que se refieren a la vasta materia de la seguridad en general y, en particular, a la lucha contra el comunismo, así como también al procedimiento más adecuado y a la correspondiente organización judicial;

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

CAPÍTULO I

Disolución y liquidación

Artículo 1º — Decláranse comprendidas expresamente en las disposiciones del artículo 1º del decreto ley 4.214/63, a las siguientes organizaciones:

Partido Comunista.
Federación Juvenil Comunista.
Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Unión de Mujeres de la Argentina.
Consejo Argentino por la Paz.
Casa de la Cultura Argentina.
Organización de Muchachas Argentinas.
Consejo Integral de la Infancia Argentina.
Asociación de Pioneros Domingo F. Sarmiento.
Federación de Entidades Culturales Judías en la Argentina.
Comisión Nacional por los Derechos de la Juventud.
Asociación Argentina de Cultura China.
Instituto Cultural Argentino-Búlgaro.
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (PRAXIS).
Comité Nacional de Organizaciones Juveniles (CONOJ).
Comisión de Solidaridad con Cuba.
Teatro La Máscara.
Comisión o Cámara Argentina pro Fomento del Intercambio.
Sociedad de Fomento y Biblioteca Cultura y Renovación.
Instituto de Relaciones Culturales Argentina-U. R. S. S.
Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (M. U. C. S.).
Unión Coordinadora de Vecinales.
Club Social y Deportivo Torekyes.
Sociedad Cultural y Deportiva Alejandro Pushkin.
Centro Cultural Búlgaro C. S. Bakovsky.
Asociación Cultural y Deportiva Adelante.
Sociedad Cultural Federico Chopin.
Club Cultural Litauano Kultura.
Sociedad Cultural Nicolás Ostrovski.
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia.

Ello, sin perjuicio de las que sean incluidas en lo futuro, por decreto.

Art. 2º — Los bienes pertenecientes a las organizaciones mencionadas en el artículo anterior y las que se incluyan en el futuro, tendrán el destino que fijaren sus cartas orgánicas, estatutos, reglamentos o contratos, siempre que los mismos no contrarién la moral, el orden público, la ley. Si las cartas orgánicas, estatutos, reglamentos o contratos no previeren el destino de esos bienes o si el cumplimiento de lo que ellos disponen implicare la transferencia de los bienes a personas físicas o jurídicas declaradas como comunistas, serán considerados vacantes y transferidos al patrimonio del Estado.

Art. 3º — A tales efectos, el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, por intermedio de la Inspección General de Justicia, procederá a formar inventario y balance del patrimonio de las agrupaciones que correspondan, adoptando las disposiciones necesarias para que este recaudo se llene en todo el territorio de la Nación respecto de los centros, delegaciones, unidades, comités, consejos, ateneos o cualquier otra índole de organismos de que se trate.

Art. 4º — Facúltase a la Inspección General de Justicia del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación para realizar, según lo exijan las circunstancias, todos los actos conducentes a las transferencias a que se refiere el artículo 2º y, en especial, para adoptar las medidas de seguridad, percibir créditos, realizar pagos y disponer la enajenación de bienes, cuando las circunstancias así lo aconsejaren.

Art. 5º — El Ministerio de Educación y Justicia de la Nación propondrá, por intermedio de la Inspección General de Justicia, al gobierno nacional el destino que deba darse a los bienes a que se refiere el presente decreto ley, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos.

Siempre que sea posible y conveniente la enajenación de ellos, el producido será destinado a solventar los gastos que demande el cumplimiento del presente y a la construcción y/o mantenimiento de los edificios escolares a cargo del Estado.

CAPÍTULO II

Disposiciones especiales

Art. 6º — El material decomisado conforme a lo dispuesto por el artículo 10, inciso 4º, del decreto ley 4.214/63, será remitido a la Secretaría de Informaciones de Estado para su utilización o destrucción, según el caso.

Art. 7º — A los efectos de la clausura definitiva, prevista en esa norma y de la clausura, disolución y liquidación así mismo contempladas en el artículo 10, inciso 6º del decreto ley 4.214/63, los jueces deberán solicitar a ese organismo los correspondientes informes.

Art. 8º — El prefecto nacional marítimo, el jefe de la Policía Federal y el director nacional de Gendarmería, en sus respectivas jurisdicciones podrán librar órdenes escritas y firmadas por ellos para entrar en los domicilios o lugares cerrados, según corresponda, siempre que existiera la semiplena prueba de que en dichos sitios se infringen las disposiciones del decreto ley 4.214/63, y al solo efecto de constituir en arresto a los infractores y a verificar el secuestro de los elementos utilizados por ellos.

Art. 9º — La autoridad judicial que dictare la condena, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 10

y 11, comunicará la misma al organismo donde prestaba servicios el condenado, a la Policía Federal, a la Prefectura Nacional Marítima, a la Gendarmería Nacional, a la Secretaría de Informaciones de Estado, al Registro Electoral y, en su caso, a la Dirección Nacional de Migraciones.

Art. 10. — La autoridad judicial que interviniera en el correspondiente proceso, deberá comunicar el mismo al organismo donde presta servicios el procesado, a los fines de lo dispuesto por el artículo 16 del decreto ley 4.214/63.

CAPÍTULO III

Procedimiento

Art. 11. — Los delitos previstos y reprimidos por los decretos leyes 788/63 y 4.214/63 serán investigados, según el caso, por la Policía Federal, por la Prefectura Nacional Marítima, Gendarmería Nacional y/o policías provinciales, que prepararán el sumario de prevención conforme a las pertinentes disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal.

Art. 12. — Una vez terminado el sumario de prevención será elevado a la correspondiente cámara de apelaciones en lo federal. Su presidente, o el presidente de la sala penal especial, en su caso, una vez recibido el sumario, citará al ministerio fiscal y al imputado a fin de que, en el término de diez días, comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas e interpongan las excepciones y recusaciones que estimen pertinentes.

En las causas procedentes de sede distinta a la del tribunal, el término será de quince días.

Art. 13. — El imputado tendrá derecho a hacerse defender por el abogado de la matrícula que elija o por el defensor oficial. A tal efecto será invitado por el presidente en cuanto se reciba el sumario, y si no lo hiciera en el término de tres días, el presidente le designará de oficio al defensor oficial, salvo que autorice al imputado, a su pedido, a defenderse personalmente.

Art. 14. — El ministerio fiscal y el imputado o su defensor, al ofrecer pruebas, presentarán la lista de testigos, peritos e intérpretes, con indicaciones de los datos de cada uno. También podrán manifestar que se conforman con que en el debate se lean las declaraciones testificales y periciales de la prevención sumaria. En caso de conformidad de las partes a ese respecto, y siempre que el presidente lo acepte, no se citará a los testigos y peritos.

Art. 15. — El presidente ordenará la recepción oportuna de las pruebas ofrecidas y aceptadas, pero el tribunal podrá rechazar la prueba ofrecida que sea impertinente o superabundante.

Art. 16. — Antes del debate el presidente, de oficio o a pedido de parte, podrá ordenar los actos de investigación indispensables que se hubieren omitido o fuere imposible cumplir en la audiencia, o recibir declaración a las personas que presumiblemente no concurrirán al debate, por enfermedad u otro impedimento.

A tal efecto podrá actuar uno de los jueces del tribunal o librarse las providencias necesarias.

Art. 17. — Vencido el término fijado por el artículo 12 y, en su caso, cumplidos los actos de investi-

gación suplementarios, el presidente fijará día y hora para el debate, con intervalo no menor de diez días, ordenando la citación de las partes y de los testigos, peritos e intérpretes que deban intervenir.

Ese término podrá ser abreviado en el caso que medie conformidad del presidente y de las partes.

Art. 18. — El debate será oral, se efectuará a puertas cerradas y continuará durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación, pero podrá suspenderse, por un término máximo de diez días, en los siguientes casos:

1. Cuando deba resolverse alguna cuestión incidental que por su naturaleza no pueda decidirse inmediatamente.
2. Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia y no pueda efectuarse en el intervalo entre una y otra sesión.
3. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención la cámara considere indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública.
4. Si algún juez de la cámara fiscal o defensor se enfermase hasta el punto de no poder continuar su actuación en el juicio, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados.

Art. 19. — La asistencia a la audiencia del fiscal y del defensor es obligatoria. Su inasistencia, no justificada, es pasible de sanción disciplinaria. En este caso el tribunal podrá hacerlos comparecer por la fuerza pública y reemplazarlos en el orden y forma que corresponda, cuando no fuera posible obtener su comparencia.

Art. 20. — El presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas necesarias, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos y declaraciones y moderará la discusión, impidiendo preguntas o derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto el ejercicio de la acusación ni la libertad de defensa.

Art. 21. — Inmediatamente después de abierto por primera vez el debate, serán planteadas y resueltas las excepciones y recusaciones, las cuestiones referentes a la admisibilidad o incomparencia de testigos, peritos o intérpretes, y a la presentación o requerimiento de documentos, salvo que la posibilidad de proponerlo surja en el curso del debate.

A tal efecto las partes hablarán solamente una vez, y por el tiempo que establezca el presidente.

Las resoluciones se dictarán verbalmente, dejándose constancia en el acta.

Art. 22. — Después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales en el sentido de la prosecución del juicio, el presidente procederá a recibir declaración del imputado, a quien le informará detalladamente sobre el hecho que se le atribuye y las pruebas que se aducen en su contra.

Si los imputados fueran varios se podrá alejar de la sala de audiencias a los que no declaren.

En el curso del debate, el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa. Podrá también hablar con su defensor, pero no lo podrá hacer durante su declaración o antes de responder a pregun-

tas que se le formulen. En estas oportunidades nadie le podrá hacer sugestión alguna.

Art. 23. — Después de la indagatoria, el tribunal procederá a recibir la prueba ofrecida u ordenada de oficio, en el orden que disponga el presidente. Los jueces de la cámara y las partes podrán formular preguntas a las partes, testigos, peritos e intérpretes, con la venia del presidente y en el momento que éste considere oportuno.

El presidente rechazará toda pregunta inadmisibles. Su resolución sólo podrá ser recurrida ante la cámara.

Art. 24. — El tribunal podrá ordenar la lectura de los documentos que considere conveniente.

Art. 25. — Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá, sucesivamente, la palabra al ministerio fiscal y al defensor del imputado, para que aleguen sobre la misma y formulen sus acusaciones y defensas.

El presidente podrá fijar prudencialmente un término para las exposiciones de las partes, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas recibidas.

Art. 26. — El secretario del tribunal levantará un acta del debate, que contendrá:

1. El lugar y fecha de la audiencia, con mención de las suspensiones ordenadas.
2. El nombre y apellido de los jueces, fiscales y defensores.
3. Las condiciones personales del imputado.
4. El nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes, con mención del juramento, la enunciación de los otros elementos probatorios incorporados al debate.
5. Las instancias y conclusiones de las partes.
6. La firma de los jueces del tribunal, las partes y el secretario, el cual, previamente, leerá el acta a los interesados.

Art. 27. — Cuando en los casos de prueba compleja el tribunal lo considere conveniente, el secretario resumirá, al final de cada declaración o dictamen, la parte sustancial que deba tenerse en cuenta. También podrá ordenarse la grabación o la versión taquigráfica, total o parcial, del debate.

Art. 28. — Terminado el debate, el tribunal pasará inmediatamente a deliberar en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el secretario.

Si estimare de absoluta necesidad la recepción de nuevas pruebas, o la ampliación de las recibidas, podrá ordenar la reapertura del debate a ese fin.

Art. 29. — El tribunal resolverá todas las cuestiones que hubieren sido objeto del juicio y dictará sentencia por mayoría de votos, valorando las pruebas recibidas y los actos del debate conforme a las reglas de la sana crítica, haciéndose mención de las disidencias producidas.

Cuando en la votación se emitan más de dos opiniones sobre las sanciones que corresponden, se aplicará el término medio.

Art. 30. — Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia, luego de ser convocadas las partes y los defensores. El presidente la leerá ante los que comparezcan.

Cuando la complejidad del asunto, o lo avanzado de la hora hagan necesario diferir la redacción de la sentencia, su lectura se efectuará en una audiencia, que se fijará dentro de un plazo no mayor de cinco días.

Art. 31. — Contra la sentencia de la Cámara Federal o sala especial, en su caso, las partes podrán interponer recurso de nulidad por violación de las formas esenciales del procedimiento o contener éste, defectos de los que por expresa disposición del derecho anulen las actuaciones.

Art. 32. — El plazo para interponer el recurso será de tres días y conocerá de él, en la Capital Federal, la Cámara Federal en pleno, con exclusión de los integrantes de la sala especial; en los demás casos, la Cámara Federal más próxima a la que hubiere dictado la sentencia impugnada.

Art. 33. — El trámite y efectos del recurso serán los establecidos por el Código para el de nulidad, siendo igualmente aplicables las disposiciones referentes al recurso de queja.

Art. 34. — Las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal se aplicarán supletoriamente en cuanto no fueren incompatibles con el presente decreto ley.

CAPÍTULO IV

Tribunal competente en la Capital Federal

Art. 35. — Créase un cargo de fiscal de cámara que actuará ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso-administrativo de la Capital Federal, y en esta última una sala penal especial, de tres miembros, con su correspondiente personal, a los efectos del juzgamiento de los delitos previstos por los decretos leyes 788/63 y 4.214/63.

Art. 36. — Créase a los mismos fines en cada una de las otras cámaras federales de Apelaciones del país, el cargo de un secretario con su correspondiente personal.

Art. 37. — Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto ley y que no fueren cubiertos en la forma establecida por el artículo 5º, se imputarán a rentas generales.

Art. 38. — El presente decreto ley será refrendado por los señores ministros en los departamentos de Interior, Defensa Nacional, Educación y Justicia y Economía, y firmado por el señor secretario de Estado de Hacienda.

Art. 39. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO.

Osiris G. Villegas. — José M. Astigueta. —
Bernardo Bas. — José A. Martínez de
Hoz (h.). — Eduardo B. M. Tiscornia.

(Boletín Oficial del 15 de julio de 1963.)

Prohibición de propaganda comunista

DECRETO 8.161

DEL 13 DE AGOSTO DE 1962

Visto: los decretos 4.965/59 y 5.802/59, por los que el Poder Ejecutivo, en uso de atribuciones que le competen durante el estado de sitio (ley 14.875), prohibió en todo el territorio de la República las actividades comunistas, del Partido Comunista, y de

grupos, entidades o asociaciones, directa o indirectamente, vinculadas a dicho partido, o que colaboren con su acción; y

CONSIDERANDO:

Que a despecho de las disposiciones mencionadas la acción nefasta y subversiva del comunismo persiste y se desenvuelve en diversos sectores del quehacer nacional, en forma ostensible o solapada, aprovechando, para el cumplimiento de sus aviesas finalidades, el difícil momento por el que atraviesa la República;

Que no es en modo alguno admisible que una manifiesta minoría inspirada en doctrinas y directivas foráneas incompatibles con el tradicional estilo de vida de nuestro pueblo y con una tradición nacional que respeta y mantiene, pretenda socavar los cimientos de nuestras instituciones libres, haciendo prosélitos para la causa del totalitarismo y la dictadura;

Que el pueblo argentino vive y quiere seguir viviendo en la libertad y la democracia que le asegura su Constitución y las leyes que en ella se fundan, y no ha de tolerar que agentes de la disolución y el despotismo se valgan de esas garantías para destruirlas, pues no es otro el propósito que persiguen con sus prédicas y con su acción;

Que el nuevo Estatuto de los Partidos Políticos, aprobado por decreto 7.162/62, ha privado al Partido Comunista y a sus afiliados y organizaciones afines, de toda posibilidad legal de actuar en las lides políticas y electorales del país, por considerar que tales entidades, como toda otra que tenga «por objeto el aniquilamiento de la libertad o la instalación de la dictadura arrasando así las instituciones que reposan en el respeto sustancial de los derechos humanos, carecen de «causa lícita», y el Estado se encuentra jurídicamente capacitado para impedir su admisión y funcionamiento». (Fallo de la Corte Suprema Nacional, «in re», Partido Obrero.);

Que conforme con tales normas y antecedentes, es indudable que la acción comunista y la propagación de su doctrina con fines de afirmación ideológica, propaganda o difusión, no sólo constituyen actividades prohibidas por razones de seguridad y orden público vinculadas a la vigencia del estado de sitio, sino que han adquirido consistencia sustancial de transgresiones penales, que deben ser sancionadas como tales en forma adecuada y permanente;

Que se trata de una necesidad pública, que ha de ser satisfecha con urgencia en atención al claro y presente peligro que importa esta actividad para la seguridad y pacífica existencia del Estado; y dado que el Honorable Congreso se encuentra momentáneamente imposibilitado de cumplir con sus tareas legislativas,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Ratifícanse los decretos 4.965/59 y 5.802/59, cuyas normas, así como las del presente, tendrán vigor en todo el ámbito de la Nación y se considerarán de orden público, no pudiendo alegarse contra ellas la existencia de eventuales derechos adquiridos.

Art. 2º — Queda prohibida la utilización o reproducción, con fines de afirmación ideológica, de pro-

paganda o difusión, sea por personas de existencia visible o por las de existencia jurídica, públicas o privadas, grupos de ellas, asociaciones, sindicatos, partidos políticos o sociedades civiles o comerciales, de cualquier imagen, símbolo, signo, expresión significativa, doctrina, artículo u obra artística, o que pretenda tal carácter, referentes al comunismo, o al Partido Comunista, nacional o internacional o a cualquier organización comunista, legal o ilegal, o colateral, a un gobierno comunista, o al movimiento comunista mundial, o que represente una continuación encubierta de cualquiera de ellos.

Art. 3º—Caducan a partir del presente decreto todas las marcas de industria y comercio, y prohíbese el uso, así mismo, de las denominaciones comerciales, principales o anexas que consistan en expresiones, imágenes, símbolos y demás objetos señalados en el artículo precedente.

Art. 4º—El que infrinja las normas del presente decreto será penado:

- a) Con prisión de treinta días a diez años y multa de cinco mil pesos (\$ 5.000) moneda nacional a un millón de pesos (\$ 1.000.000) moneda nacional;
- b) Además, con inhabilitación absoluta por triple tiempo del de la condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político o gremial;
- c) Además, con clausura por treinta días y, en caso de reincidencia, clausura definitiva, cuando se trate de empresas comerciales o civiles.

Cuando la infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar como pena accesoria la disolución.

Las sanciones del presente decreto no serán susceptibles de cumplimiento condicional, ni será precedente la excarcelación.

Art. 5º—Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 6º—El presente decreto será refrendado por el señor ministro del Interior.

Art. 7º—Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO.

Carlos A. Adrogué.

(Boletín Oficial del 18 de agosto de 1962.)

Represión del comunismo

DECRETO 5.540

DEL 5 DE JULIO DE 1963

NORMAS REGLAMENTARIAS DECRETO LEY 4.214/63.
DEROGACIÓN DEL DECRETO 15.211/59

Visto el dictado del decreto ley 4.214 de fecha 24 de mayo de 1963 y la publicación del mismo en el Boletín Oficial del 30 de mayo de 1963, y

CONSIDERANDO:

La necesidad de proceder a la reglamentación del mismo para lograr su efectiva y concreta aplicación,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º—La reputación de «comunista», a que se refiere el artículo 4º del decreto ley 4.214/63, con relación a lo dispuesto por el artículo 5º del mismo, deberá ser efectuada, en forma fundada, precisa y circunstanciada, por la Secretaría de Informaciones de Estado, conforme a las funciones que le otorga a la misma el decreto ley 4.500/63.

A tal efecto, dicho organismo, coordinará y centralizará la reunión de antecedentes de cada caso con los servicios de informaciones integrantes de la Comunidad Informativa y otras reparticiones públicas.

Los casos referidos a personas pertenecientes a la Administración Pública, serán comunicados por la Secretaría de Informaciones de Estado a la autoridad que corresponda, quien procederá conforme lo disponga su respectiva reglamentación en materia de sumarios y disciplina.

Antes de la resolución definitiva de aquélla se dará vista del sumario a la Secretaría de Informaciones de Estado, en el caso que la prueba producida hubiere dervirtuado la imputación.

Para el caso de que no hubiere tal reglamentación o que la persona reputada como «comunista», no fuese funcionario o empleado público, tendrá derecho a oponer las defensas y pruebas que estime pertinentes ante la Secretaría de Informaciones de Estado, que a tales fines le hará saber los cargos que obraren en su contra.

La resolución final de ese organismo con respecto a tal reputación, podrá ser recurrida por el interesado mediante los recursos a que hubiere lugar.

Art. 2º—Para desempeñar cargos en la Administración Pública, será necesaria la presentación de certificados de conducta expedidos por la Policía Federal y/o los organismos competentes y la constancia de la información de los antecedentes producida por la Secretaría de Informaciones de Estado y demás integrantes de la Comunidad Informativa.

Art. 3º—Los ministerios de Interior y de Relaciones Exteriores y Culto tomarán de inmediato todas las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º del decreto ley 4.214/63 en los casos que le fueran pertinentes, debiendo a tales efectos coordinar su acción con la de la Secretaría de Informaciones de Estado.

Art. 4º—Todo proyecto de acuerdo, convenio o tratado a firmarse con gobiernos de otras naciones u organismos internacionales y que se refieran al ingreso de extranjeros a la República, así como toda disposición de carácter general en el mismo sentido, será consultado con la Secretaría de Informaciones de Estado a los fines establecidos en el artículo 6º del decreto ley 4.214/63 y el artículo 2º del decreto ley 4.500/63.

Art. 5º—Así mismo, los acuerdos, convenios y tratados celebrados con gobiernos de otras naciones u organismos internacionales y disposiciones de carácter general referentes al ingreso de extranjeros a la República, serán consultados con la Secretaría de Informaciones de Estado a los fines indicados en el artículo anterior y por si fuera menester su revisión.

Art. 6º—A los efectos de lo dispuesto por los artículos 7º, 10, incisos 2º y 3º y 11 del decreto ley 4.214/63, la dirección del establecimiento penitenciario donde cumpla la pena el condenado, deberá comunicar

con una antelación mínima de 30 días a la fecha del vencimiento de la condena, esta circunstancia a la Dirección Nacional de Migraciones, Policía Federal y/o policías nacionales que corresponda, para la adopción de las medidas pertinentes para la efectivización de la inmediata expulsión del país del condenado.

Art. 7º — La Secretaría de Informaciones de Estado, llevará un registro de todos los locales que fueren clausurados, conforme a lo dispuesto por el artículo 10, inciso 5º y de las organizaciones mencionadas en el artículo 4º, inciso 4º, ambos del decreto ley 4.214/63.

Art. 8º — A los fines dispuestos en el artículo 12 del decreto ley 4.214/63, el extranjero que tuviese que estar radicado en el territorio nacional, estará sometido a las prescripciones de los decretos 19.935/49 y 4.112/58.

Art. 9º — Las autoridades administrativas que procedan al comiso y clausuras provisorias previstas en el artículo 13 del decreto ley 4.214/63, deberán comunicar las mismas a la Secretaría de Informaciones de Estado, dentro del término de 10 días de efectuados.

Art. 10. — Derógase el decreto 15.211/59.

Art. 11. — El presente decreto será refrendado por los señores ministros secretarios de Estado en los Departamentos del Interior, Defensa Nacional, Educación y Justicia y Relaciones Exteriores y Culto, y firmado por los señores secretarios de Estado de Guerra, Marina y Aeronáutica.

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO.

*Osiris G. Villegas. — José M. Astigueta. —
Bernardo Bas. — Juan C. Cordini. —
Héctor A. Repetto. — Carlos A. Kolun-
gia. — Eduardo F. McLoughlin.*

(Boletín Oficial del 15 de julio de 1963.)

III

Ley de seguridad del Estado

DECRETO LEY 788

DEL 30 DE ENERO DE 1963

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que nuevas formas de acción subversiva desarrolladas por los enemigos de la democracia y del mundo libre, del cual somos parte integrante, tornan perentoria la necesidad de dotar a la Nación de instrumentos legales adecuados para hacerles frente;

Que esa acción subversiva se traduce en hechos que amenazan su seguridad exterior, e inciden sobre uno de los objetivos fundamentales de la política defensiva, que es el mantenimiento de la paz interior;

Que estos hechos representan la materialización de doctrinas foráneas que atentán contra nuestra forma de vida;

Que nuestro país, en la Primera Reunión de Consulta (Panamá, 1939); la Segunda Reunión de Consulta (La Habana, 1940) y la Tercera Reunión de Consulta (Río de Janeiro 1942), refirmó la determinación de preservar y defender las instituciones democráticas fundamentales de los pueblos del continente y de protegerlos de actos subversivos, cualquiera fuere su naturaleza;

Que iguales principios inspiraron la Resolución XXXII, sobre «Preservación y Defensa de la Democracia», adoptada por la Novena Conferencia Inter-

nacional Americana (Bogotá, 1948), y, especialmente, la Resolución VIII («Fortalecimiento de la Seguridad Interna») de la Cuarta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de cuyo contenido resulta que ese fortalecimiento de la seguridad interna (Resolución VIII), está funcionalmente vinculado al fortalecimiento y ejercicio efectivo de la democracia (Resolución VII);

Que en la época en que fue sancionado el Código Penal no era previsible la aparición de esas fuerzas políticas que habrían de traer un nuevo concepto de guerra y cuyas técnicas y recursos las erigirían en una amenaza de tal peligrosidad, que las disposiciones de la ley, relativas a los delitos contra la seguridad de la Nación, resultan insuficientes;

Que las medidas de seguridad que se adopten para mantener el orden público deben estar dirigidas a disuadir a quienes en forma concertada alteran la paz social y hacen vivir al país en un permanente estado de confusión colectiva, con el fin de quebrar las bases institucionales sobre las cuales se asienta;

Que las actuales previsiones legales sobre traición, espionaje, sabotaje, delitos contra la paz y las relaciones internacionales de la Nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional, contra la seguridad pública y de los transportes, telecomunicaciones y otros servicios públicos, contra la salud pública y contra la tranquilidad pública, son manifiestamente insuficientes, tanto en la determinación de las figuras delictivas como en las escalas penales que consagran;

Que la actual dispersión de los preceptos penales sobre la materia hacen necesario su reunión en un todo orgánico que permita concretar una unidad de criterio sobre las referidas materias,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

TÍTULO I

Delitos contra la seguridad de la Nación

CAPÍTULO I

Traición

Artículo 1º — Al argentino que tomara las armas contra la Nación o se uniere a sus enemigos prestándoles ayuda o socorro, se le impondrá reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua.

Las mismas penas se aplicarán cuando los hechos previstos en este artículo fueren cometidos por un extranjero que debiere obediencia a la Nación por razones de su función o empleo público, o cuando se cometieren contra un aliado de la Nación en guerra contra un enemigo común.

CAPÍTULO II

Otros delitos contra la seguridad exterior de la Nación

Art. 2º — Al argentino que cometiere un hecho dirigido a someter, total o parcialmente, a la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad, se le impondrá reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetuas.

Art. 3º — Al argentino que mantuviere inteligencia con otro Estado o entidad extranjera o internacional, o sus intermediarios, para procurar o impedir que otro Estado se alie a la Nación, o que ésta declare o mantenga la guerra o la neutralidad, se le impondrá reclusión o prisión de ocho a veinte años e inhabilitación absoluta por doble tiempo.

Art. 4º — Al argentino que cometiere un hecho dirigido a desconocer la soberanía nacional, aunque fuere cuestionado por otros Estados, sobre territorios o mares declarados nacionales, se le impondrá prisión de uno a siete años e inhabilitación absoluta por doble tiempo.

Art. 5º — Al argentino que publicare o difundiere, por cualquier medio, doctrina o manifestaciones encaminadas a sustituir la soberanía nacional por otra extranjera, se le impondrá prisión de seis meses a tres años e inhabilitación absoluta por doble tiempo.

Art. 6º — Al extranjero que debiere obediencia a la Nación por razón de su función o empleo público, y al extranjero residente en el país que cometiere alguno de los hechos previstos en los artículos 2º y 5º, se le impondrá la pena que los mismos establecen, según corresponda.

Art. 7º — Al extranjero residente en el país que tomare las armas contra la Nación o prestare ayuda o socorro a sus enemigos, se le impondrá reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y, en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua.

Art. 8º — Al que, por actos hostiles no aprobados por el gobierno nacional, noticias o informaciones falsas o tendenciosas, o valiéndose de otros medios normalmente idóneos, diere motivo al peligro de que otro Estado o entidad extranjera o internacional emprenda la guerra contra la Nación, realice actos hostiles o aplique cualquier género de sanciones contra ella, se le impondrá prisión de cinco a doce años e inhabilitación absoluta por doble tiempo.

Si además, el agente mantuviere inteligencia con otro Estado o entidad extranjera o internacional, o sus intermediarios, la pena será de reclusión o prisión de diez a veinte años e inhabilitación absoluta por doble tiempo.

Si, como consecuencia de la conducta del agente, resultare la guerra, se realizaran actos hostiles o se aplicaren sanciones a la Nación, la pena será de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetuas.

Art. 9º — Al que tomare parte en una conspiración de dos o más personas para cometer los delitos previstos en los artículos 1º a 8º, se le impondrá, por ese solo hecho, reclusión o prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta por doble tiempo.

Podrá quedar exento de pena el que revelare la conspiración antes de que ésta sea descubierta.

CAPÍTULO III

Espionaje

Art. 10. — Se impondrá prisión de dos a quince años al que:

1º Realizare cualquier acto dirigido a obtener o revelar, o facilitar la obtención o revelación de informaciones, documentos u objetos que deben permanecer secretos en interés de la seguridad, de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación.

2º Se introdujere con violencia, engaño o clandestinamente en lugares, zonas o medios de transporte, en los cuales estuviere prohibido

el acceso en interés de la seguridad o defensa nacional, o fuere hallado en los mismos en posesión injustificada de elementos idóneos para cometer los hechos previstos en el inciso anterior.

3º Sin permiso de autoridad competente, representare, describiere, por cualquier medio o método, documentos, lugares, zonas, obras o materiales, o realizare operaciones topográficas o geológicas donde tales datos estuvieren prohibidos en interés de la seguridad o defensa nacional.

4º Copiare, imitare, publicare, vendiere, distribuyere o tuviere en su poder las representaciones o datos a que hace referencia el inciso anterior.

5º Desde una aeronave en vuelo, violando una prohibición dictada por razones de seguridad o defensa nacional, tomare vistas fotográficas o cinematográficas de cualquier lugar del país.

6º Esté vinculado a un organismo, asociación, institución o persona que desarrolle actividades de espionaje, teniendo conocimiento de ellos.

7º Habiendo entrado en contacto con un espía y conociendo la calidad de ese agente, no lo comunicare a las autoridades civiles o militares.

La misma pena se impondrá al que cometiere los actos enumerados precedentemente contra una potencia aliada a la Nación en guerra con un enemigo común.

Art. 11. — Se impondrá prisión de seis meses a cinco años al que:

1º Encontrándose lícitamente en posesión de informaciones, documentos u objetos que deben permanecer secretos, por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, hiciere posible su conocimiento por terceros;

2º Teniendo la custodia o vigilancia de lugares, zonas o medios de transporte de acceso prohibido, por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, hiciere posible o facilitare que un tercero cometa los delitos previstos en los incisos 2º y 5º del artículo 10.

CAPÍTULO IV

Sabotaje

Art. 12. — Se impondrá prisión de dos a quince años al que, para impedir o perturbar la seguridad o defensa nacional:

1º Destruyere, deteriorare, inutilizare, ocultare o hiciere salir del país elementos destinados a ella;

2º Desorganizare los servicios públicos o de utilidad pública o perturbare su funcionamiento;

3º Suscitare alarma colectiva, tumulto o desorden;

4º Destruyere, deteriorare o inutilizare materias primas, productos elaborados o extraídos, maquinarias o cualquier medio necesario para la producción;

5º Desorganizare o perturbare la actividad productiva, el almacenaje, transporte, distribución de materias primas, productos elaborados o extraídos, maquinarias o cualquier medio necesario para la producción;

- 6º Instigare a persistir en una paralización de la actividad productiva si se hubiere intimado su reanudación por orden judicial o cuando esa paralización haya sido declarada ilegal por autoridad competente;
- 7º Propagare en vegetales o minerales una enfermedad o, por cualquier medio, perjudicare la agricultura rural o forestal o el patrimonio zoológico de la Nación;
- 8º Estando obligado al suministro de abastecimiento o prestación de servicios destinados a la seguridad o defensa nacional, los hiciere cesar, disminuir o retrasar;
- 9º El que es vinculado a un organismo, asociación, institución o persona que desarrolle actividad de sabotaje teniendo conocimiento de tales actividades;
10. El que habiendo entrado en contacto con un saboteador, y conociendo la calidad de ese agente, no lo comunique a las autoridades civiles o militares.

La misma pena se impondrá al que cometiere los actos enumerados precedentemente contra una potencia aliada a la Nación en guerra con enemigo común.

Art. 13. — Al que por imprudencia negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo cometiere los hechos previstos en el artículo anterior, se le impondrá prisión de seis meses a cinco años.

CAPÍTULO V

Delitos contra la paz y las relaciones internacionales de la Nación

Art. 14. — Al que realizare desde territorio argentino actos dirigidos a derrocar o suprimir por la violencia el gobierno de otro Estado con el que la Nación mantuviera relaciones amistosas, se le impondrá prisión de seis meses a tres años.

Art. 15. — Se impondrá prisión de seis meses a tres años.

- 1º Al que ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno de un Estado extranjero con el cual mantuviera relaciones amistosas la Nación;
- 2º Al que ofendiere en su dignidad o decoro al jefe de un Estado en misión oficial o declarado huésped oficial o a un representante diplomático extranjero acreditado en el país, comprometiendo las relaciones amistosas de la Nación;
- 3º Al que violare las inmunidades de un jefe de Estado o representante diplomático extranjero.

Art. 16. — Al que, encargado por el gobierno argentino de una negociación con un Estado extranjero la condujere de un modo perjudicial a la Nación, apartándose de sus instrucciones, se le impondrá prisión de tres o diez años.

Art. 17. — Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años.

- 1º Al que, invocando indebidamente la representación de otro gobierno, realizare en el territorio de la Nación, actos oficiales en nombre de aquél;
- 2º Al que exigiere el cumplimiento de órdenes o resoluciones emanadas de un Estado o gobierno extranjero que sean incompatibles con la soberanía nacional, y al que facilitare o asegurare su cumplimiento.

TÍTULO II

Delitos contra la seguridad interior de la Nación

CAPÍTULO I

Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional

Art. 18. — Se impondrá prisión de uno a siete años:

- 1º Al que preconizare o difundiere métodos, sistemas o doctrinas mediante los cuales, por el empleo de la violencia, se propusiere suprimir o cambiar la Constitución Nacional o algunos de sus principios básicos;
- 2º Al que, con el mismo propósito, introduzca, imprima, publique, edite, haga circular, expida, venda, distribuya o exhiba cualquier material escrito o impreso u otro medio de difusión, o teng o emplee sin autorización legal una estación transmisora de telecomunicaciones;
- 3º El que organizare, constituyere o dirigiere una asociación, grupo o entidad que tuviere como objeto visible u oculto alcanzar algunas de las finalidades mencionadas en el inciso 1º, y al que formare parte de la misma conociendo sus propósitos.

Art. 19. — Al que usare públicamente uniforme, símbolos o distintivos de organizaciones cuyos fines fueran contrarios a la Constitución o a las leyes de la Nación, se le impondrá prisión de seis meses a dos años.

CAPÍTULO II

Delitos contra la paz interior y la dignidad nacional

Art. 20. — Se impondrá prisión de uno a cuatro años:

- 1º Al que promoviere discordias o antagonismos entre los distintos cuerpos, institutos u organismos públicos, civiles o militares, poniendo en peligro la paz interior;
- 2º Al que injuriera a algún miembro de las fuerzas armadas o de seguridad a cometer actos de indisciplina o desobediencia a sus superiores jerárquicos o a los poderes públicos, nacionales o provinciales.

Si como consecuencia de los hechos previstos en los dos incisos anteriores resultare la lucha armada entre habitantes de la Nación, se impondrá prisión de tres a diez años.

Art. 21. — Al que incitare a la desobediencia colectiva de leyes, decretos u ordenanzas citadas por la autoridad competente, se le impondrá prisión de seis meses a tres años.

Art. 22. — Al que ultrajare públicamente a la Nación, o a cualquiera de sus símbolos, se le impondrá prisión de uno a cuatro años.

TÍTULO III

Delitos contra la seguridad pública

CAPÍTULO I

Estragos

Art. 23. — Al que causare incendio, explosión, inundación u otro estrago, con peligro común para las personas o los bienes, se le impondrá prisión de ocho

a quince años. La pena será de diez a veinte años de reclusión si el hecho se cometiere en archivos, bibliotecas o museos públicos o de acceso público; en arsenales, astilleros o parque de artillería; en aeródromos, estaciones o puentes; en redes de telecomunicaciones; en fábricas o depósitos de explosivos inflamables o combustibles; en establecimientos o redes de energía; en explotaciones mineras o de hidrocarburos, oleoductos, gasoductos, refinerías o altos hornos; en bosques, explotaciones agrícola-ganaderas; o en almacenes o depósitos de artículos de primera necesidad.

Art. 24. — Al que destruyere o inutilizare diques u otras obras destinadas a la defensa común de las personas o de los bienes, de modo que hiciere surgir el peligro de que se produzca un estrago, se le impondrá prisión de cinco a quince años.

Al que tratare de impedir u obstaculizar los trabajos de defensa o salvamento con motivo del estrago, se le impondrá prisión de tres a diez años.

Art. 25. — Al que con el propósito de crear un peligro común para las personas o los bienes introdujere al país, fabricare, suministrar, adquiriere, transportare o tuviere en su poder sustancias explosivas, asfixiantes, tóxicas o inflamables u otras susceptibles de producir estragos, elementos para prepararlas o instrumentos para su empleo, se le impondrá prisión de dos a ocho años.

Art. 26. — Si de los hechos enumerados en los artículos 2 y 24 resultaren lesiones de las previstas en los artículos 90 y 91 del Código Penal, la pena será de quince a veinticinco años de reclusión o prisión. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de reclusión o prisión perpetua.

Art. 27. — Al que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo causare alguno de los hechos previstos en el presente capítulo, se le impondrá prisión de seis meses a tres años.

Si resultaren lesiones de las previstas en los artículos 90 y 91 del Código Penal, la pena será de uno a cuatro años de prisión. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de uno a seis años de prisión.

CAPÍTULO II

Delito contra la seguridad del transporte, telecomunicaciones y servicios públicos

Art. 28. — Al que dañare o destruyere, en todo o en parte, medios de transporte por tierra, agua, aire, instalaciones de servicios públicos de telecomunicaciones, agua, luz, energía o calor, gas o elementos necesarios para su funcionamiento, con peligro común para las personas o los bienes, se le impondrá prisión de cuatro a diez años.

Art. 29. — Al que, fuera de los casos previstos en el artículo anterior, impidiere, interrumpiere o perturbare el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o el de servicios públicos de telecomunicaciones, agua, luz, energía, calor o gas, con peligro común para las personas o los bienes, se le impondrá prisión de cuatro a diez años.

Art. 30. — Si de los hechos previstos en los artículos 28 y 29 resultare descarrilamiento, colisión, naufragio o varadura, accidente aéreo u otro desastre con peligro común para las personas, la pena será de diez a veinte años de prisión. Cuando resultaren lesiones de las previstas en los artículos 90 y 91 del Código Penal, la pena será de quince a veinticinco años de reclusión o prisión. Si resultare la muerte

de alguna persona, la pena será de reclusión o prisión perpetua.

Art. 31. — Al que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo cometiere alguno de los hechos previstos en el presente capítulo, se le impondrá prisión de seis meses a dos años.

Si resultaren lesiones de las previstas en los artículos 90 y 91 del Código Penal, la pena será de uno a tres años de prisión. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de uno a cuatro años de prisión.

TÍTULO IV

Delitos contra la salud pública

CAPÍTULO I

Difusión de agentes patógenos

Art. 32. — Al que difundiere agentes patógenos, con peligro común para las personas, se le impondrá de cinco a quince años de prisión.

Cuando resultaren lesiones de las previstas en los artículos 90 y 91 del Código Penal, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de reclusión o prisión perpetua.

Art. 33. — Si el hecho se cometiere por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, la pena será de prisión de seis meses a tres años.

Si resultaren lesiones de las previstas en los artículos 90 y 91 del Código Penal, la pena será de uno a cuatro años de prisión. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de uno a seis años de prisión.

CAPÍTULO II

Alimentos y medicamentos nocivos

Art. 34. — Se impondrá prisión de tres a diez años al que:

- 1º Envenenare o adulterare de modo peligroso para la salud, agua, sustancias alimenticias o medicinales u otros productos destinados al consumo o utilizados en él.
- 2º Tuviere en depósito, pusiere en venta, vendiere, distribuyere o suministrare dichas aguas, sustancias o productos envenenados o adulterados por otro o alterados de modo peligroso para la salud.
- 3º Elaborare, pusiere en venta, vendiere, distribuyere o suministrare agua, sustancias alimenticias o medicinales u otros productos destinados al consumo o utilizados en él, ocultando su carácter peligroso para la salud.
- 4º En ejercicio, autorizado o no, de comercio de sustancias o productos medicinales, los elaborara en forma cualitativa o cuantitativa distinta a la prescrita en su fórmula declarada o en la receta médica, de modo que resultaren peligrosos para la salud, o los tuviere en depósito, pusiere en venta, vendiere, distribuyere o suministrare en tales condiciones.

Cuando resultaren lesiones de las previstas en los artículos 90 y 91 del Código Penal, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

sión o prisión. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de reclusión o prisión perpetua.

Art. 35. — Al que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo causare alguno de los hechos previstos en el artículo anterior, se le impondrá prisión de seis meses a dos años.

Si resultaren lesiones de las previstas en los artículos 90 y 91 del Código Penal, la pena será de uno a tres años de prisión. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de uno a cuatro años de prisión.

TITULO V

Delitos contra la tranquilidad pública

Art. 36. — Al que instigare públicamente de modo peligroso para la tranquilidad, a la violación de los derechos y garantías expresamente enumerados en la Constitución Nacional y los que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno; y a las luchas raciales, religiosas o de clase, se le impondrá prisión de seis meses a tres años. Si se instigare a la lucha armada, la pena será de dos a siete años de prisión.

Art. 37. — Se impondrá prisión de seis meses a tres años, al que con el fin de infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, empleare medios normalmente idóneos para producirlo. Cuando para ello se empleare armas de fuego, explosivos, agresivos químicos o materias afines, la pena será de tres a nueve años de reclusión o prisión.

Art. 38. — Se impondrá prisión de tres a nueve años:

- 1º Al que difundiere procedimientos para causar estragos o para fabricar materiales destinados a producirlos.
- 2º Al que, fuera de los casos previstos por la ley o sin la debida autorización introdujere al país, exportare, fabricare, transportare, vendiere, transmitiere por cualquier otro título, empleare o tuviere en su poder explosivos, agresivos químicos o materiales afines, sustancias o instrumentos destinados a su fabricación o empleo; armas, municiones, elementos nucleares y demás materiales considerados como de guerra.

Art. 39. — Al que, fuera de los casos previstos por la ley, o sin la debida autorización, introdujere al país, exportare, fabricare, transportare, vendiere, transmitiere por cualquier otro título, empleare o hiciere acopio de armas, municiones, explosivos, agresivos químicos y demás materiales considerados como de uso civil, se le impondrá prisión de seis meses a tres años.

TITULO VI

Disposiciones generales

Art. 40. — Los hechos dolosos a que se refieren los Títulos IV y V, corresponderán al régimen establecido por este decreto, cuando se cometieren para impedir o perturbar la seguridad o la defensa nacionales; y los culposos cuando por imprudencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamen-

tos o de los deberes a su cargo, el agente diere ocasión a que se cometan los hechos dolosos informados por el mencionado propósito de impedir o perturbar la seguridad o la defensa nacionales.

Art. 41. — Las penas establecidas en los artículos precedentes se elevarán en su caso, hasta en la mitad de su máximo cuando el delito se cometiere:

- 1º En tiempo de guerra, salvo que fuere de aplicación el Código de Justicia Militar y éste dispusiera pena mayor.
- 2º Con abuso de función, empleo, estado o misión.
- 3º Con violencia o intimidación en las personas; efracción de los límites o defensa o escalamiento.
- 4º Al servicio o en interés de un Estado, gobierno o entidad extranjera o internacional, o sus intermediarios.

En estos casos, se aplicará además, inhabilitación absoluta perpetua.

Art. 42. — La condena por los delitos previstos en esta ley, llevará como accesoria la inhabilitación especial o absoluta por doble tiempo de la condena. La inhabilitación absoluta contendrá además la prohibición de presidir o dirigir toda clase de empresas, sociedad o asociaciones. Si el condenado fuere extranjero o argentino naturalizado, cumplida la pena se procederá a su expulsión de la República, previo retiro en su caso, de la ciudadanía.

Art. 43. — Incurrirá en las mismas penas establecidas para los autores de los delitos previstos en esta ley:

- a) El que propusiere o instigare a cometerlos aunque la proposición o instigación no hubiere dado resultado;
- b) El cómplice;
- c) El que apoye, financie o contribuya a financiar la ejecución de los hechos. Si se tratara de una persona jurídica será pasible del retiro de la personería jurídica y su disolución, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los miembros culpables;
- d) El autor de tentativa, cuando haya sido cometido con el fin de espionaje o sabotaje.

Art. 44. — Al que tuviere conocimiento de la comisión de alguno de los delitos previstos en esta ley y omitiera dar aviso a la autoridad se le impondrá prisión de tres meses a dos años. Si estuviere obligado a denunciarlo por su profesión o empleo, la pena será de seis meses a tres años de prisión. Si quien hubiere incurrido en la omisión fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, adoptante, adoptado, hermano, afín de línea recta o colateral en segundo grado del agente, quedará exento de pena.

Art. 45. — La conspiración para cometer los delitos previstos en la presente ley, será castigada con las penas fijadas, reducidas en un tercio. Si la pena fuere de reclusión o prisión perpetua se aplicará la reclusión o prisión de seis a doce años.

Art. 46. — Quedará exento de sanción penal el que habiendo incurrido en los actos calificados como delitos por esta ley, los denuncia ante las autoridades civiles o militares en tiempo para evitar sus resultados. Podrá ser declarado exento de sanción penal todo aquel que luego de haber consumado el delito lo denuncie a las autoridades civiles o militares y procure el arresto de los autores o cómplices.

Art. 47. — Cuando los delitos previstos en la presente ley fueran ejecutados fuera del territorio del

país, pero sus resultados debieran producirse en éste, sus autores quedan igualmente sujetos a sus disposiciones y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes. Se aplicará asimismo esta ley a todo aquel que en territorio argentino cometa actos de espionaje o sabotaje al servicio o en beneficio de un estado extranjero contra otro estado extranjero.

Art. 48. — Los autores, cómplices, partícipes o encubridores de los delitos a que se refiere esta ley, no gozarán de los beneficios de la excarcelación bajo caución que establece el artículo 376 y sus concordantes del Código de Procedimientos en lo Criminal para la justicia federal, tribunales ordinarios de la Capital, ni de los de la condenación condicional que establece el artículo 26 del Código Penal, salvo en el caso del artículo 13.

Art. 49. — La aplicación de la presente ley estará a cargo de la justicia federal. Los tribunales militares la aplicarán también dentro de su jurisdicción, salvo que el Código de Justicia Militar estableciera una pena más grave.

Art. 50. — Las causas pendientes por aplicación de la ley 15.293 continuarán sustanciándose por el procedimiento establecido por dicha ley hasta su terminación.

TITULO VI

Disposición complementaria

Art. 51. — Deróganse los artículos 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196, 200, 201, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, del Código Penal (ley 11.179); las leyes 13.985 y 15.293 y toda otra disposición legal en cuanto se opongan a la presente.

Art. 52. — Oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 53. — El presente decreto será refrendado por los señores ministros secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, Defensa Nacional, Educación y Justicia y firmado por los señores secretarios de Estado de Guerra, de Marina y de Aeronáutica.

Art. 54. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUMD.

Rodolfo Martínez. — José M. Astigueta.
— Alberto Rodríguez Galán. — Benjamín Rattenbach. — Carlos A. Garzoni.
— Eduardo F. McLoughlin.

(Boletín Oficial del 2 de febrero de 1963).

DISPOSICIONES DEROGADAS

CODIGO PENAL, LEY 11.179

TITULO VII

Delitos contra la seguridad pública

Capítulo I. — Incendios y otros estragos

Artículo 186. — El que causare incendio, explosión o inundación, será reprimido:

- 1º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si hubiere peligro común para los bienes.
- 2º Con reclusión o prisión de tres a diez años el que causare incendio o destrucción por cualquier otro medio:

- a) De cereales en parva, gavillas o bolsas, o de los mismos todavía no cosechados;
- b) De bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados;
- c) De ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados;
- d) De la leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio;
- e) De alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados;
- f) De los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores, cargados, parados o en movimiento.

3º Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería.

4º Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro de muerte para alguna persona.

5º Con reclusión o prisión de ocho a veinte años, si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona.

Artículo 187. — Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo precedente, el que causare estrago por medio de sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundación de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción.

Artículo 188. — Será reprimido con prisión de uno a seis años el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que éstos se produzcan.

La misma pena se aplicará al que, para impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, sustrajere, ocultare o hiciere inservibles materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la defensa referida.

Artículo 189. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos.

Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cuatro años.

Capítulo II. — Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación

Artículo 190. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que inutilizare o destruyere, en todo o en parte, las vías u obras destinadas a la comunicación pública por tierra o por agua, o impidiere o estorbare la ejecución de las medidas adoptadas para la seguridad de las mismas.

El máximo se elevará a seis años, si resultare peligro para las personas. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión.

Artículo 191. — El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerlo descarrilar, será reprimido:

- 1º Con prisión de seis meses a tres años, si no se produjere descarrilamiento u otro accidente.
- 2º Con prisión de dos a seis años, si se produjere descarrilamiento u otro accidente.
- 3º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del accidente, resultare lesionada alguna persona.
- 4º Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si resultare la muerte de alguna persona.

Artículo 192. — Será reprimido con las penas establecidas en el artículo anterior en sus casos respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de un telégrafo o teléfono destinado al servicio de un ferrocarril.

Artículo 194. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que ejecutare cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una nave o construcción flotante o a detener o a entorpecer la navegación.

Si el hecho produjere naufragio, avería o varamiento, la pena será de tres a doce años de reclusión o prisión.

Si el accidente causare lesión a alguna persona, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

Artículo 196. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que, por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo.

Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a cuatro años.

Capítulo IV. — Delitos contra la salud pública. — Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas.

Artículo 200. — Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

Artículo 201. — Las penas del artículo precedente serán aplicadas al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.

TITULO IX

Delitos contra la seguridad de la Nación

Capítulo I. — Traición.

Artículo 214. — Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública,

que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro.

Artículo 215. — Será reprimido con reclusión o prisión perpetua el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes:

- 1º Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad.
- 2º Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República.

Artículo 216. — Será reprimido con reclusión o prisión de uno a ocho años, el que tomare parte en una conspiración de dos o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución.

Artículo 217. — Quedará eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad antes de haberse comenzado el procedimiento.

Artículo 218. — Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán, también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la República, en guerra contra un enemigo común.

Capítulo II. — Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.

Artículo 219. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que por actos hostiles, no aprobados por el gobierno nacional, diere motivo al peligro de una declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero.

Si de dichas hostilidades resultare la guerra, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión.

Comete también delito y será castigado con prisión de seis meses a un año:

- a) El que publique o difunda por cualquier medio manifestaciones que pongan en peligro la neutralidad de la Nación frente a otras potencias en conflicto bélico o las relaciones amistosas con países extranjeros;
- b) El que publique o difunda por cualquier medio doctrinas o manifestaciones encaminadas a sustituir la soberanía nacional por otra extranjera, a derrocar el gobierno o a destruir o reemplazar la libertad establecida en la Constitución por un régimen de fuerza.

Artículo 220. — Se impondrá prisión de seis meses a dos años, al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la República y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes de mar o tierra o los salvoconductos debidamente expedidos.

Artículo 221. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las inmunidades del jefe de un Estado o del representante de una potencia extranjera.

Artículo 223. — Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo, el que por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio.

Artículo 224.—Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que indebidamente levantara planos de fortificaciones, buques, establecimientos, vías u otras obras militares o se introdujere con tal fin, clandestina o engañosamente, en dichos lugares, cuando su acceso estuviere prohibido al público.

Artículo 225.—Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que, encargado por el gobierno argentino de una negociación con un Estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial a la Nación, apartándose de sus instrucciones.

LEY 13.985

REPRESIÓN DE LA TRAICIÓN, ESPIONAJE Y SABOTAJE

Artículo 1º—Las acciones u omisiones previstas en la presente ley que constituyan ayuda y socorro a los enemigos de la Nación, serán calificadas de traición cuando hubieran sido cometidas por argentinos o por cualquier persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública.

Espionaje

Art. 2º—Será reprimido con prisión de uno a diez años el que procurare, buscare, revelare, remitiere o aprovecharse noticias, documentos, informaciones u objetos de orden político, social, militar o económico que deban permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación.

Art. 3º—Será reprimido con prisión de dos a quince años el que cometiere los delitos previstos en el artículo 2º sirviéndose de su empleo, función, estado o misión.

La pena será de ocho a veinticinco años de prisión, o prisión perpetua, si el agente actuare al servicio o en beneficio de una potencia extranjera.

Art. 4º—Será reprimido con prisión de uno a ocho años el que con cualquier ardid o engaño o mediante efracción o escalamiento se introdujere en una obra cualquiera de defensa, puesto, servicio, depósito, almacén, construcción de defensa nacional, o en todo otro establecimiento militar; o en un barco, aeronave, vehículo, servicio o establecimiento industrial organizado o empleado por la autoridad competente en el interés de la defensa nacional.

Art. 5º—Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el que careciendo de permiso de autoridad competente, tomare fotografías, ejecutare dibujos, operaciones topográficas, geológicas o reproducciones, por cualquier medio o método, de zonas, obras o materiales situados dentro de un radio prohibido por la autoridad en razón de la defensa nacional.

En igual pena incurrirá el que copiare, imitare, vendiere, distribuyere, publicare o retuviere dichas reproducciones.

Art. 6º—Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años todo aquel que sin autorización para ello entregue, remita, comunique, publique o difunda datos económicos, políticos, militares, financieros o industriales que sin ser secretos o reservados, no estén destinados a su publicación o divulgación, y de los cuales haya tenido conocimiento o se le hubieren confiado en razón de su empleo, función, estado o misión.

Sabotaje

Art. 7º—Será reprimido con prisión de uno a veinticinco años el que por cualquier medio desorganizar, destruir, deteriorar o inutilizar, en todo o

en parte, temporal o definitivamente, documentos, objetos, materiales, instalaciones, servicios o industrias de cualquier naturaleza, con el propósito de perturbar, retardar o impedir el desarrollo militar, económico, financiero, social, científico o industrial de la Nación.

Cuando los actos fueran realizados al servicio o en beneficio de una potencia extranjera, se podrá imponer al culpable prisión perpetua.

Art. 8º—Será reprimido con prisión de uno a ocho años el que por cualquier medio provoque pública alarma o deprima el espíritu público causando un daño a la Nación.

Disposiciones generales

Art. 9º—Será reprimido con prisión de un mes a cinco años el que, habiendo entrado en contacto con un espía o saboteador, y conociendo la calidad de ese agente, no lo comunique a las autoridades civiles o militares.

Art. 10.—Será reprimido con prisión de un mes a cinco años, o con multa de 100 a 10.000 pesos el que por imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de los reglamentos permitiese o facilitase la comisión de cualquiera de los actos previstos por esta ley.

Art. 11.—En los casos de los artículos 2º, 3º, 4º y 7º, cuando el delito fuere cometido en tiempo de guerra con grave daño para la Nación o sus aliados, se podrá aplicar reclusión perpetua o pena de muerte.

Art. 12.—Incurrirá en las mismas penas establecidas para los autores de los delitos previstos en esta ley:

- a) El que instigare a cometerlos aunque la instigación no hubiere dado resultado;
- b) El cómplice o encubridor. El encubrimiento no será penado cuando lo cometan el cónyuge, los consanguíneos y afines en línea ascendente o descendente, los hermanos o los afines colaterales en segundo grado;
- c) El que esté vinculado a un organismo, asociación, institución o persona que desarrolle actividades de sabotaje o espionaje, teniendo conocimiento de tales actividades;
- d) El que apoye, financie o contribuya a financiar la ejecución de los delitos. Si se tratare de una persona jurídica será pasible del retiro de la personería, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los miembros culpables;
- e) El autor de tentativa, cuando haya sido cometida con fin de espionaje o sabotaje.

Art. 13.—La condena por los delitos previstos en esta ley, llevará como accesoria la inhabilitación especial o absoluta hasta por doble tiempo de la condena, según la gravedad del caso. La inhabilitación absoluta contendrá además la prohibición de presidir o dirigir toda clase de empresas, sociedad o asociación.

Cuando el delito se hubiere cometido al servicio o en beneficio de una potencia extranjera, corresponderá siempre la accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua.

Si el condenado fuera extranjero o argentino naturalizado, cumplida la pena se procederá a su expulsión de la República, previo retiro, en su caso, de la ciudadanía.

Art. 14.—Quedará exento de sanción penal el que habiendo incurrido en los actos calificados como delito por esta ley, los denuncie ante las autoridades civiles o militares antes de haberlos consumado.

Podrá ser declarado exento de sanción penal todo aquel que luego de haber consumado el delito lo denuncié a las autoridades civiles o militares y procure el arresto de los coautores o cómplices.

Art. 15. — La prescripción de la acción y de la pena en los casos que corresponda pena de muerte se regirá por las disposiciones pertinentes del Código de Justicia Militar.

Art. 16. — Cuando los delitos previstos en la presente ley fueran ejecutados fuera del territorio del país, sus autores quedan igualmente sujetos a sus disposiciones y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes. Se aplicará así mismo esta ley a todo aquel que en territorio argentino haya cometido actos de espionaje o sabotaje al servicio o en beneficio de un Estado extranjero contra otro Estado extranjero.

Art. 17. — La aplicación de la presente ley estará a cargo de la Justicia Federal. Los Tribunales militares la aplicarán también dentro de su jurisdicción.

Art. 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 27 de septiembre del Año del Libertador General San Martín, 1950.

Trámite legislativo

CAMARA DE DIPUTADOS. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, 6 de setiembre de 1950.

Consideración por la Cámara constituida en comisión, y aprobación 7/8 de setiembre de 1950.

SENADO. — Despacho de la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos, consideración y sanción, 27 de setiembre de 1950.

LEY 15.293

LEY DE EMERGENCIA SOBRE REPRESIÓN DEL TERRORISMO

Artículo 1º — Esta ley es de emergencia y tiene por objeto reprimir las actividades terroristas en todo el territorio de la República, en cuanto atenten contra la seguridad de los bienes o de las instituciones de la Nación.

Art. 2º — Al que causare incendio, explosión, inundación u otro estrago, con peligro común para las personas o los bienes, se le impondrá reclusión o prisión de ocho a quince años. La pena será de diez a veinte años de reclusión o prisión si el hecho se cometiere en archivos, bibliotecas, museos o cualquier otro lugar de acceso público; en arsenales, astilleros o parques de artillería; en aeródromos, estaciones o puertos; en redes de telecomunicaciones; en fábricas o depósitos de explosivos, inflamables o combustibles; en establecimientos y redes de energía; en explotaciones mineras o de hidrocarburos; oleoductos, gasoductos, refinerías o altos hornos; en bosques, explotaciones agrícola-ganaderas o depósitos de artículos de primera necesidad.

Art. 3º — Al que destruyere o inutilizare diques u otras obras destinadas a la defensa común de las personas o de los bienes, de modo que hiciere surgir el peligro de que se produzca un estrago, se le impondrá reclusión o prisión de cinco a doce años.

Al que tratare de impedir u obstaculizar los trabajos de defensa o salvamento, con motivo de los hechos previstos en el artículo 2º y en el presente, se le impondrá reclusión o prisión de tres a diez años.

Art. 4º — Si de los hechos enumerados en los artículos 2º y 3º de esta ley resultare la muerte de

alguna persona, la pena será de reclusión o prisión perpetua; y si causare lesiones de las previstas en los artículos 90 ó 91 del Código Penal la pena será de reclusión o prisión de quince a veinticinco años.

Art. 5º — Se impondrá reclusión o prisión de cuatro a diez años:

- a) Al que, con peligro común para las personas o los bienes, dañare o destruyere, en todo o en parte, medios de transporte por tierra, aire o agua, instalaciones de servicios públicos de telecomunicaciones, agua, luz, energía o calor, gas o elementos necesarios para sus respectivos funcionamientos;
- b) Al que por cualquier medio doloso impidiera, interrumpiere o perturbare el funcionamiento de los mencionados elementos de transporte o instalaciones de servicios públicos.

Art. 6º — Si de los hechos previstos en el artículo anterior resultare descarrilamiento, colisión, naufragio o varadura, accidente u otro desastre con peligro común para las personas, la pena será de diez a veinte años de reclusión o prisión. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de reclusión o prisión perpetua; y si causaren lesiones de las previstas en los artículos 90 ó 91 del Código Penal la pena será de reclusión o prisión de quince a veinticinco años.

Art. 7º — Se impondrá prisión de seis meses a tres años al que, con el fin de infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, empleare medios normalmente idóneos para producirlos.

Cuando para ello se empleare arma de fuego, explosivo, agresivo químico o materia afín sin ocasionar un peligro común, la pena será de tres a nueve años de reclusión o prisión.

Art. 8º — Se impondrá reclusión o prisión de tres a nueve años:

- 1º Al que difundiere procedimientos para causar estragos o para fabricar materiales destinados a producirlos.
- 2º Al que, fuera de los casos previstos por la ley o sin la debida autorización, introdujere al país, exportare, fabricare, transportare, vendiere, transmitiere por cualquier otro título, empleare o tuviere en su poder explosivos, agresivos químicos o materias afines, sustancias o instrumentos destinados a su fabricación o empleo; armas, municiones, elementos nucleares y demás materiales considerados como de guerra.

Art. 9º — Al que, fuera de los casos previstos por la ley o sin la debida autorización, introdujere en el país, exportare, fabricare, transportare, vendiere, transmitiere por cualquier otro título, empleare o hiciere acopio de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos o materias afines, considerados como de uso civil, se le impondrá prisión de seis meses a tres años.

Art. 10. — Las penas establecidas en los artículos precedentes podrán elevarse, en su caso, hasta la mitad de su máximo, cuando el delito se cometiere:

- 1º En tiempo de guerra, salvo que fuere de aplicación el Código de Justicia Militar y éste dispusiere pena mayor.
- 2º Con abuso de función, empleo, estado o misión.
- 3º Con violencia o intimidación en las personas, efracción de los límites o defensas o escalamiento.

4º Al servicio o en interés de un Estado, gobierno o entidad extranjeros o internacionales, o sus intermediarios, salvo que el hecho constituyera un delito más grave. En cualquier caso se aplicará además la inhabilitación absoluta perpetua.

Art. 11.— Cuando el delito fuere cometido por el agente en ejercicio de actividad reglamentada, se le impondrá además inhabilitación especial por doble tiempo de la condena.

Art. 12.— Excepto en los casos previstos en el artículo 278, primer párrafo, del Código Penal, se impondrá prisión de tres meses a dos años al que tuviere conocimiento de la comisión de alguno de los delitos previstos en esta ley y omitiere dar aviso a la autoridad cuando estuviere obligado a hacerlo por su profesión o empleo.

Art. 13.— La proposición o la conspiración para cometer los delitos previstos en la presente ley será castigada con las penas fijadas, reducidas en dos tercios. Si la pena fuere de reclusión o prisión perpetua se aplicará reclusión o prisión de cinco a doce años.

Art. 14.— Los autores, cómplices, partícipes o encubridores de los delitos a que se refiere esta ley no gozarán de los beneficios de la excarcelación bajo caución que establece el artículo 376 y sus concordantes del Código de Procedimientos en lo Criminal para la justicia federal y tribunales ordinarios de la Capital, ni de los de la condenación condicional que establece el artículo 26 del Código Penal, con excepción de los casos del primer párrafo del artículo 7º de la presente ley.

Art. 15.— Será competente para entender en las causas originadas por los delitos configurados en las normas precedentes, cualquiera sea el lugar en que se cometan, la justicia nacional en lo federal, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

Art. 16.— El procedimiento será sumarisimo y verbal, dejándose constancia en actas de las actuaciones esenciales.

Art. 17.— Los actos esenciales del proceso y la recepción de la prueba deben efectuarse bajo la dirección inmediata del juez, en las audiencias que éste designe para la realización de cada acto o conjunto de actos.

Art. 18.— El juez, que no podrá coartar el derecho de defensa, tiene amplias facultades para esclarecer los hechos por los medios legales que considere más aptos y adoptar medidas tendientes a la más rápida sustanciación de la causa, desestimando sin otro trámite las articulaciones improcedentes o manifiestamente dilatorias y reduciendo las formalidades al mínimo indispensable.

La realización de las diligencias probatorias propuestas por las partes queda librada al criterio del juez, pero deberá dejar constancia, en su caso, de las razones por las cuales las desestima.

Art. 19.— Los recursos deducidos contra las interlocutorias dictadas por el juez no interrumpen el curso del proceso; los autos sólo se elevarán al superior una vez pronunciada la sentencia definitiva, oportunidad en que la cámara resolverá sobre todas las impugnaciones que hubieran sido formuladas.

Art. 20.— Dentro de las veinticuatro horas contadas desde que el imputado se encuentre a disposición del juez, éste le tomará declaración indagatoria, a la que podrán asistir el fiscal y el defensor. Si para

este acto o cualquier otro que corresponda a la sustanciación del proceso no compareciere el defensor de parte, se dará inmediata intervención al defensor de oficio, a quien, a tal efecto, se le acordará nuevo plazo.

El juez requerirá a las partes, previa vista de las actuaciones, para que expresen si objetan su competencia, si existe alguna nulidad procesal o alguna causa extintiva de la acción. Sólo se considerarán esas objeciones si fueren presentadas en forma fundada.

El juez resolverá dentro de cuarenta y ocho horas sobre las objeciones especificadas, notificando a las partes; dejará constancia de los recursos que se dedujeren y continuará el trámite requiriendo a las partes para que ofrezcan dentro de cinco días la prueba instrumental, pericial o testimonial de que intenten valerse, la que proveerá de inmediato.

Art. 21.— Transcurrido el plazo a que se refiere la última parte del artículo anterior, el juez fijará audiencia para la producción de la prueba. En ella:

1º El juez examinará personalmente a los testigos, pudiendo admitir también la declaración de los no ofrecidos oportunamente si la misma revistiere importancia para la decisión de la causa.

2º Los peritos leerán las conclusiones de sus informes y suministrarán las explicaciones que les solicite el juez de oficio o a petición de parte. La pericia deberá ser agregada al expediente.

3º Cuando el juez estime que la prueba acumulada resulta suficiente para esclarecer debidamente los hechos, declarará clausurada su producción; dejará constancia de las objeciones de parte, si las hubiere, y de los recursos que se interpusieren, y ordenará la inmediata continuación de trámites de la causa. Los autos serán puestos en secretaría por el término de tres días, donde podrán ser examinados por el fiscal y el defensor. Vencido este plazo, el fiscal deberá presentar su requisitoria dentro del término de tres días; de ella se dará vista al defensor por el mismo plazo.

Art. 22.— Cumplidos los trámites que establece el artículo anterior, si no estimare necesario disponer medidas para mejor proveer, el juez dictará sentencia fundada y por escrito, dentro del plazo de cinco días. Proveerá de antemano la citación de las partes a los efectos de la notificación de la sentencia.

Art. 23.— Los recursos de nulidad y apelación deberán ser deducidos dentro de los tres días de la notificación de la sentencia.

Art. 24.— Llegado el expediente a la cámara, el apelante podrá fundar su recurso en el término de cinco días improrrogables a partir de la fecha en que se lo notifique y se encuentren los autos en el tribunal, y éste resolverá previamente los recursos interpuestos contra las interlocutorias dictadas por el juez. En caso de admitir alguna de las medidas de prueba que hubieren sido desestimadas en primera instancia, o de disponer otras a los fines de mejor proveer, dispondrá la producción de las mismas con presencia del fiscal de cámara y el defensor. Con las nuevas pruebas producidas se correrá traslado por 48 horas sucesivamente al fiscal y al defensor, quedando con la presentación de los respectivos escritos lista la causa para definitiva. De no admitirse

la producción de ninguna prueba, la cámara dictará sentencia sin otro trámite.

Tanto en uno como en otro caso, la sentencia deberá dictarse dentro de los diez días de quedar para definitiva.

Art. 25.—Si se hubiese impuesto pena de reclusión o prisión perpetua, haya o no recurso, los autos serán siempre remitidos al superior, que deberá expedirse sobre el fondo de la causa y la aplicabilidad de la pena.

Art. 26.—Se aplicarán supletoriamente los preceptos del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital Federal, en cuanto no fueren incompatibles con lo dispuesto por la presente ley.

Art. 27.—Esta ley se aplicará a los hechos delictuosos ocurridos desde su promulgación y por el término de tres años cualquiera fuere la fecha de su juzgamiento. Igualmente, las penas aplicadas por imperio de la presente ley se cumplirán totalmente hasta su extinción, en la forma y término dispuestos en la misma. Durante el lapso aludido, quedan suspendidas en su aplicación todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley. Las disposiciones de carácter procesal sólo se aplicarán, por el contrario, durante el plazo de tres años. Los hechos que se juzguen con posterioridad serán sustanciados con las leyes procesales comunes, pero aplicando las penas determinadas en esta ley.

Art. 28.—Las causas pendientes ante los consejos de guerra especiales constituidos con arreglo a lo dispuesto por el decreto 2.639/60, continuarán en trámite y serán falladas por éstos. Contra la decisión definitiva dictada en dichas causas, habrá un recurso para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos del contralor de la calificación legal de los hechos declarados probados y de la revisión de las penalidades aplicadas. Este recurso podrá deducirse también contra las sentencias firmes de los tribunales militares dictadas como consecuencia de la vigencia del decreto 2.639/60.

Los recursos mencionados deberán interponerse dentro de los diez días de notificada la sentencia, y en el supuesto de sentencias firmes a la fecha de la promulgación de esta ley, dentro de los veinte días a contar de su vigencia.

Art. 29.—Se aplicarán las disposiciones del Código Penal siempre que no fueren incompatibles con las de la presente ley o no se opongan a la misma.

Art. 30.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 21 de julio de 1960.

Trámite legislativo

CAMARA DE DIPUTADOS. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, 1º de junio de 1960.

Despacho de las comisiones de Legislación Penal, Asuntos Constitucionales y Defensa Nacional, O/D 1/1960.

Consideración y aprobación: 9, 15, 22, 23 y 30 de junio de 1960.

CAMARA DE SENADORES. — Consideración por la Cámara constituida en comisión y sanción, 21 de junio de 1960.

Promulgada por decreto 9.313/60, con observaciones al segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 28.

Seguridad del Estado

DECRETO LEY 1.607

DEL 1º DE MARZO DE 1963

ACLARASE EL ARTICULO 51 DEL DECRETO LEY 783/63

Visto lo propuesto por el señor ministro secretario de Estado en el departamento de Defensa Nacional,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º—Déjase establecido que en el artículo 51 del decreto ley 783, del 30 de enero de 1963, donde dice 118, debe decir 188; y donde dice 124, debe decir 214.

Art. 2º—Oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 3º—El presente decreto será refrendado por los señores ministros secretarios de Estado en los departamentos de Defensa Nacional y de Interior.

Art. 4º—Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO.

José M. Astigueta. — Rodolfo Martínez.

(Boletín Oficial del 7 de marzo de 1963.)

DECRETO 3.134

DEL 24 DE ABRIL DE 1963

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que es propósito y deber fundamental del Gobierno asegurar la tranquilidad, la paz interior y el respeto por la persona humana y sus derechos esenciales;

Que la actividad que desarrollan los grupos denominados «Tacuara» y «Guardia Restauradora Nacionalista», en cuanto se manifiesta por agresiones personales y reiterados actos de violencia, pone en serio peligro aquellos principios básicos de la Nación;

Que el encauzamiento de la vida institucional del país exige una efectiva garantía de seguridad y libertad para todos los ciudadanos que desean convivir con respeto e igualdad;

Que es inconcebible que en una sociedad jurídicamente organizada se atente contra el pluralismo ideológico, político o religioso que constituye la base de una estructura democrática;

Por ello, y atento a las facultades conferidas por el estado de sitio,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º—Prohíbese en el territorio de la República Argentina toda actividad de los grupos «Tacuara» y «Guardia Restauradora Nacionalista».

Art. 2º—Los locales de las agrupaciones a que se refiere el artículo anterior, serán clausurados por la autoridad competente.

Art. 3º—Comuníquese.

GUIDO.

Enrique Rauch.

IV

Estado de sitio

DECRETO LEY 4.200

DEL 23 DE MAYO DE 1963

ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION NACIONAL.
DERECHO A SALIR DEL PAIS. — REGLAMENTACION

Visto el derecho de opción para salir del país que acuerda el artículo 23 de la Constitución Nacional a las personas arrestadas o trasladadas por disposición del Poder Ejecutivo, y

CONSIDERANDO:

Que el derecho de salir del país que acuerda el artículo 23 de la Constitución Nacional está sujeto, como todos los demás derechos, a reglamentaciones razonables;

Que dicho derecho constituye una modalidad del que acuerda el artículo 14 a todos los habitantes, sujetándolo a las leyes que reglamenten su ejercicio, condición que debe regir con mayor razón bajo la situación excepcional del estado de sitio, atentos los fines de orden público a que obedece esta institución;

Que en las circunstancias por que atraviesa el país y ante la necesidad primordial de preservar condiciones de tranquilidad interna que permitan cumplir el plan político adoptado por el gobierno, debe reglamentarse el derecho de salir, del artículo 23, de modo de conciliarlo con el interés general;

Que se conforma al requisito de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional la reglamentación que, habida cuenta de la situación de hecho señalada y los peligros inherentes a la acción desarrollada por exiliados desde lugares próximos a nuestras fronteras, tanto más cercanos en razón del progreso alcanzado por los medios de comunicación y difusión, establezca que durante la vigencia del estado de sitio el Poder Ejecutivo podrá supeditar la autorización para salir del país al compromiso de quienes formulen la opción de no residir en países limítrofes hasta su regreso al país;

Que la grave emergencia a que se refiere el considerando 3º del presente justifica, así mismo, como medida excepcional ajustada a la actual situación y al cumplimiento de la finalidad esencial del plan político, también aludido en el considerando mencionado, que la efectividad de las autorizaciones para salir del país pueda postergarse hasta la realización del próximo acto electoral;

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º—Durante la vigencia del estado de sitio el Poder Ejecutivo podrá supeditar la autorización para salir del país del artículo 23 de la Constitución Nacional, al compromiso que las personas que formulen la opción asuman por escrito, de no residir en países limítrofes con la República Argentina hasta su regreso al ésta.

Art. 2º—El Poder Ejecutivo podrá limitar, hasta el día 8 de julio de 1963, la efectividad de las autorizaciones que conceda para salir del país, cuando considere que ello es necesario para asegurar la normalidad del proceso electoral en curso.

Art. 3º—Esta reglamentación de orden público será aplicable a todos los casos en que no se haya hecho efectiva la autorización para salir del país.

Art. 4º—Este decreto será refrendado por los señores ministros secretarios de Estado del Interior y Defensa Nacional.

Art. 5º—Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO.

Osiris G. Villegas. — José M. Astigueta.

(Boletín Oficial del 30 de mayo de 1963.)

Estado de sitio

DECRETO LEY 5.175

DEL 26 DE JUNIO DE 1963

RECURSOS DE HABEAS CORPUS Y DE AMPARO MOTIVADOS POR MEDIDAS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL. — LOS AGENTES FISCALES Y PROCURADORES FISCALES SERAN PARTE NECESARIA EN LOS MISMOS

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que la vigencia legal del estado de sitio importa la suspensión de las garantías constitucionales y, bajo ese régimen, el Poder Ejecutivo está facultado para adoptar todas aquellas medidas que reputé necesarias a fin de asegurar la tranquilidad pública y encuadren en el artículo 23 de la Constitución Nacional;

Que, como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia, la apreciación de las circunstancias y motivos determinantes de dichas medidas es facultad privativa del Poder Ejecutivo y, como tal, excluida de revisión por el Poder Judicial, con sujeción a los principios que informan la división de poderes establecida por la Constitución;

Que, con arreglo a la doctrina sustentada por el alto tribunal, el contralor del Poder Judicial sobre los actos de ejecución del estado de sitio sólo es admisible cuando ellos resulten clara y manifiestamente irrazonables, es decir, cuando impliquen medios que no guarden relación alguna con los fines del artículo 23 de la Constitución Nacional;

Que, en virtud de las circunstancias excepcionales que determinan tales medidas del Poder Ejecutivo y las exigencias inherentes al mantenimiento del orden público que con ellas se procura satisfacer, las decisiones contrarias a su validez no deben enervar su efectiva vigencia hasta tanto se agote por vía de recursos todas las instancias judiciales;

Que, por otra parte, es necesario asegurar y regular la intervención del ministerio fiscal en todas las causas judiciales en que se cuestione la validez o se pretenda promover el cese de las órdenes dictadas en uso de las atribuciones a que se refieren los considerandos anteriores, a fin de que tales actos del Poder Ejecutivo sean defendidos por sus representantes naturales y puedan llegar a conocimiento de los tribunales superiores en caso de resultar invalidados en cualquier instancia inferior,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º—Los agentes fiscales y procuradores fiscales serán parte necesaria en todo recurso de habeas corpus o acción de amparo motivados por medidas que hubiere adoptado el Poder Ejecutivo nacional invocando las atribuciones que le competen

durante la vigencia del estado de sitio. Será nula y carecerá de *imperium* cualquier decisión judicial dictada sin haberse dado tal intervención a los fiscales o en la cual no se hiciese constar que éstos han sido oídos.

Art. 2º—Los agentes y procuradores fiscales están obligados a sostener la validez de dichas medidas y a deducir, contra toda resolución judicial que la desconozca, los recursos previstos por la legislación en vigencia, los que serán concedidos con ambos efectos.

Art. 3º—Derógase toda disposición legal que se oponga a lo dispuesto en el presente decreto ley.

Art. 4º—El presente decreto será refrendado por los señores ministros secretarios en los departamentos del Interior, Defensa Nacional y Educación y Justicia.

Art. 5º—Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO.

Osiris G. Villegas. — José Manuel Astigueta. — Bernardo Bas.

(Boletín Oficial del 28 de junio de 1963.)

V

Código Penal

DECRETO LEY 4.778 DEL 12 DE JUNIO DE 1963

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 29, 40, 58, 80, 126, 166, 167, 173, 184, 238, 245, 259, 261, 277, 280 y 302. — DEROGACION DE LOS ARTICULOS 64 y 165

Visto el informe y proyecto sobre reformas al Código Penal elevados por la Comisión Asesora en Materia Penal, instituida por decreto 14.036 de fecha 20 de diciembre de 1962, y

CONSIDERANDO:

Que, sin perjuicio de proseguir el estudio de las reformas integrales proyectadas para la legislación represiva por dicha comisión, cuya aplicación dependerá de la posibilidad de contar con los institutos que la misma indica, es necesario sancionar desde ya algunas de esas reformas con el propósito de intensificar la lucha contra el delito;

Que, en este sentido, se estima preciso imponer a los condenados a reclusión o prisión el deber de contribuir pecuniariamente a la formación y mantenimiento de institutos y servicios penales, mediante la aportación periódica de parte de sus rentas; agravar las sanciones para los casos en que el delito cometido demuestre la existencia de una asociación organizada para delinquir; simplificar el trámite relativo a la unificación de penas, y derogar la norma que actualmente permite extinguir la acción penal por el pago voluntario de la multa prevista por la ley;

Que, así mismo, es preciso agravar determinadas sanciones, como las previstas para el homicidio cometido por odio racial o religioso, o por varias personas; incriminar el proxenetismo, reestructurar las normas relativas a robos calificados y falsas denuncias; incrementar las penas relativas a los atentados a la autoridad consistentes en motines carcelarios, y contemplar con especial atención los delitos de los funcionarios públicos que aprovechan sus cargos para lucrar en detrimento del país, las formas actuales de la estafa, particularmente en lo relacionado con la compraventa

de bienes, muebles e inmuebles, las evasiones violentas y los delitos que se cometen por la emisión de cheques sin fondos;

Que, en este orden, se aceptan las conclusiones propuestas por la comisión asesora, excepto en lo relativo a cheques, en que se consideran más convenientes, por su mayor severidad, las normas contenidas en el proyecto de reformas enviado por el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación, con fecha 10 de noviembre de 1960;

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º—Sustitúyese el artículo 29 del Código Penal por el siguiente:

Toda sentencia condenatoria ordenará las restituciones e indemnizaciones civiles debidas a la víctima como consecuencia del delito, que hubiesen sido reclamadas en la forma establecida por las leyes de procedimiento; fijándose prudentemente el monto de las indemnizaciones, en defecto de plena prueba.

Cuando la condena sea a reclusión o prisión, la sentencia ordenará al condenado que, mientras dure la pena, deposite trimestralmente y con destino a un fondo que se aplicará a la creación y perfeccionamiento de institutos y servicios penales, el diez por ciento de sus rentas, las que serán prudentemente estimadas, en defecto de plena prueba. Este depósito deberá ordenarse, aunque la sentencia suspenda el cumplimiento de la pena.

Art. 2º—Agrégase al artículo 40 del mismo código, como segundo párrafo, el siguiente:

Cuando el delito represente una manifestación de delincuencia asociada organizada, la pena se aumentará en un tercio; pero no podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate.

Art. 3º—Sustitúyese el artículo 58 del mismo código por el siguiente:

También se aplicarán las reglas precedentes, cuando, después de una condena impuesta por sentencia firme, se juzgue a la misma persona por otro u otros hechos distintos; y cuando se hubiese dictado dos o más sentencias firmes sin aplicar dichas reglas.

En tales casos, a petición de parte u oficiosamente, se dictará sentencia única, sin alterar las declaraciones de hecho contenidas en las demás.

El pronunciamiento de la sentencia única corresponderá al juez que haya impuesto la pena mayor, salvo en los dos casos siguientes:

1º Cuando la pena mayor se hubiese impuesto por la justicia federal y ésta no pudiera intervenir en el proceso correspondiente al otro u otros hechos, en virtud de cláusula constitucional que reserve su juzgamiento a los tribunales locales, en cuyo caso la sentencia única será dictada por la justicia nacional ordinaria o por la provincial, según se trate.

2º Cuando la pena mayor se hubiese impuesto por justicia provincial y el conocimiento del otro u otros hechos correspondiera a la justicia nacional, federal u ordinaria, no encontrándose impedida la justicia federal por la

razón expresada en el inciso anterior; en cuyo caso la sentencia única será dictada por la justicia nacional, aunque esta sentencia comprenda delitos cuyo conocimiento, ordinariamente, exceda la competencia del juez que deba intervenir.

Art. 4º — Derógase el artículo 64 del mismo código.

Art. 5º — Sustitúyese el inciso 2º del artículo 80 del mismo código por el siguiente:

Al que matare a otro con alevosía o ensañamiento, por precio, promesa remuneratoria, sevicias graves, impulso de perversidad brutal, codicia, placer; o por veneno, incendio, inundación, descarrilamiento, explosión o cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos; o para excitar o satisfacer deseos sexuales.

Art. 6º — Agrégase al artículo 80 del mismo código, como último párrafo, el siguiente:

Podrá aplicarse lo dispuesto en este artículo al que matare a otro por odio racial o religioso; o cuando en el hecho intervengan dos o más personas.

Art. 7º — Agrégase al artículo 126 del mismo código, como segundo párrafo, el siguiente:

La misma pena se aplicará al que hiciere de la prostitución ajena su medio habitual de vida.

Art. 8º — Derógase el artículo 165 del mismo código.

Art. 9º — Sustitúyese el artículo 166 del mismo código por el siguiente:

Se aplicará reclusión o prisión de cinco a quince años:

1º Si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91.

2º Si el robo se cometiere en despoblado, con armas o con intervención de tres o más personas.

Art. 10. — Sustitúyese el artículo 167 del mismo código por el siguiente:

Se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años:

1º Si se cometiere en poblado, con armas o con intervención de tres o más personas.

2º Si se perpetrare con perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de lugar habitado o de sus dependencias inmediatas.

3º Si concurriere alguna otra de las circunstancias enumeradas en el artículo 163.

Art. 11. — Agrégase al artículo 173 del mismo código, como inciso 11, el siguiente:

El que, habiendo firmado boleto de venta de una cosa, mueble o inmueble, y recibido total o parcialmente su precio, durante la vigencia de aquél y por acto voluntario imposibilitare la transferencia del dominio en las condiciones establecidas en el mismo.

Art. 12. — Sustitúyese el inciso 4º del artículo 184 del mismo código por el siguiente:

Cometer el delito en despoblado y con intervención de tres o más personas.

Art. 13. — Sustitúyese el artículo 238 del mismo código por el siguiente:

La prisión será de seis meses a dos años:

1º Si el hecho se cometiere a mano armada.

2º Si se cometiere por tres o más personas.

3º Si el culpable fuere funcionario público.

4º Si el delincuente pusiere manos en la autoridad.

La pena será de uno a cuatro años de prisión si el hecho se cometiere mediante motín carcelario.

En el caso de ser el reo funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena.

Art. 14. — Sustitúyese el artículo 245 del mismo código por el siguiente:

Se impondrá prisión de dos meses a un año al que denunciare falsamente un delito, imputándolo o no a persona determinada, ante la autoridad competente, aunque esa denuncia también configure otro delito.

Art. 15. — Agréganse al artículo 259 del mismo código, como párrafo segundo y tercero, los siguientes:

Será reprimido con prisión de dos a seis años, e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que, para lucrar o hacer lucrar a otro, utilizare informaciones o datos que sólo hubiera podido conocer con motivo de su cargo.

Será reprimido con la misma pena el funcionario público que, durante su desempeño o dentro de los tres años siguientes a su cesación en la función pública no quisiere o no pudiese justificar, ante la autoridad competente, cualquier incremento importante de su patrimonio, producido durante su desempeño y comprobado por dicha autoridad.

Art. 16. — Agrégase al artículo 261 del mismo código, como segundo párrafo, el siguiente:

La misma pena se aplicará al funcionario público que empleare en provecho propio o de tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Art. 17. — Sustitúyese el inciso 3º del artículo 277 del mismo código por el siguiente:

Guardar, esconder, comprar, vender, recibir en prenda, cambio o donación los efectos sustraídos.

Art. 18. — Sustitúyese el artículo 280 del mismo código por el siguiente:

El que hallándose legalmente detenido se evadiere con fuerza en las cosas, será reprimido con prisión de seis meses a dos años.

Si se evadiere con violencia en las personas, causando o no lesiones de las previstas en el artículo 89, la pena será de uno a tres años de prisión; si causare lesiones de las previstas en el artículo 90, la pena será de dos a seis años de prisión; si causare lesiones de las previstas en el artículo 91, la pena será de tres a diez años de prisión; y si causare la muerte, la pena será de cinco a quince años de prisión.

Art. 19. — Sustitúyese el artículo 302 del mismo código por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave:

- 1º El que librare un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto.
- 2º El que librare un cheque y diera contraorden para el pago fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo.
- 3º El que librare un cheque en formulario ajeno.
- 4º El que librare un cheque a sabiendas de que al tiempo de presentación no podrá legalmente ser pagado.

En todos los casos el librador deberá ser informado de la falta de pago, mediante protesto u otra forma documentada de interpelación, quedando exento de pena si abonare el importe del cheque dentro de las veinticuatro horas subsiguientes.

Art. 20. — El presente decreto ley será refrendado por los señores ministros secretarios de Estado en los departamentos de Interior, Defensa Nacional y Educación y Justicia.

Art. 21. — Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO.

*Osiris G. Villegas. — José M. Astigueta.
— José Mariano Astigueta.*

(Boletín Oficial del 19 de junio de 1963.)

DISPOSICIONES DEROGADAS

Código Penal

Artículo 64. — La acción penal por delito reprimido con multa se extinguirá en cualquier estado del juicio por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente al delito y de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Artículo 165. — Se impondrá reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio.

VI

Extranjeros

DECRETO LEY 4.805

DEL 17 DE JUNIO DE 1963

ADMISION, PERMANENCIA Y EXPULSION. — NORMAS REGLAMENTARIAS

Visto la necesidad de reglamentar la admisión, permanencia y expulsión de extranjeros, y

CONSIDERANDO:

Que la legislación existente sobre la materia está constituida por un conjunto asistemático, y en ciertos casos contradictorio, de normas reglamentarias, que han desvirtuado los lineamientos esenciales de la Ley de Inmigración 817;

Que resulta imprescindible adecuar las normas de la Ley de Inmigración, dictada hace más de ochenta años, a las reales necesidades del problema migratorio en nuestro país;

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma reiterada y constante, ha reafirmado «la facultad de la Nación para regular y controlar el ingreso de extranjeros, conforme con los preceptos constitucionales, del modo y en la medida que lo requiera el bien común en cada circunstancia», así como «que la atribución del Estado en punto a la admisión de extranjeros, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución Nacional, implica la de expulsión de los que han entrado en el territorio nacional sin cumplir con los requisitos legales» (Fallos de la Corte Suprema de Justicia, t. 171, pág. 310; t. 183, pág. 373; t. 188, pág. 325 y t. 200, pág. 99);

Que «el derecho de la Nación a regular y condicionar la admisión de extranjeros no es compatible con los derechos individuales consagrados por la Constitución Nacional, cuyo artículo 14 no ampara al extranjero que logra ingresar al país eludiendo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Inmigración y su reglamentación, y la autoridad competente para exigir y verificar el cumplimiento de dichos requisitos, lo es para obtener la reconducción del inmigrante en ese caso» (Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, t. 205, pág. 628);

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º — La admisión, permanencia y expulsión de extranjeros en el territorio de la República, cualquiera fuera la forma o condición de su ingreso, quedan subordinadas a las disposiciones de la ley 817 del presente decreto ley y de las respectivas reglamentaciones.

Art. 2º — La Dirección Nacional de Migraciones será el organismo competente para entender en la consideración y otorgamiento de permisos de ingreso al país de extranjeros, que otorguen permanencia definitiva o temporaria; así como para conceder radicaciones definitivas y prórrogas de permanencia y controlar su ingreso y permanencia en el país.

Art. 3º — Exceptúase de lo dispuesto precedentemente a los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros y funcionarios de organismos internacionales, acreditados en el país, mientras duren en sus funciones, y a aquellos en tránsito por territorio argentino, así como a los extranjeros que sean titulares de visas diplomáticas oficiales o de cortesía, cuya fiscalización estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 4º — El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por intermedio de los funcionarios consulares competentes, podrá autorizar directamente el ingreso de extranjeros con permanencia temporaria, por un período no superior a seis meses, salvo cuando convenios suscritos por el país establezcan períodos superiores, así como el ingreso de turistas, sin perjuicio del control pertinente de la Dirección Nacional de Migraciones.

Art. 5º — Las respectivas reglamentaciones, dictadas o a dictarse, determinarán los requisitos necesarios y las condiciones de admisibilidad a que se ajustará el ingreso de extranjeros, así como las causas de inhabilidades y los plazos de permanencia en casos de admisión temporaria.

Art. 6º — La Dirección Nacional de Migraciones considerará ilegal el ingreso o permanencia en el país de todo extranjero que hubiere ingresado sin someterse a contralor migratorio, o por lugar no habilitado al

efecto, no cumpliere con los requisitos legales que condicionan el ingreso y permanencia de extranjeros, o permaneciere en territorio de la República vencido el plazo de permanencia autorizado.

Art. 7º — La Dirección Nacional de Migraciones, al declarar ilegal el ingreso o permanencia en el país de un extranjero, podrá disponer la expulsión del mismo del territorio de la República, con destino a su país de origen o procedencia, o a otro que lo admitiese, en el plazo perentorio que fije a tal efecto, pudiendo ordenar, además, mediante resolución fundada, la detención del mismo hasta que se haga efectiva la expulsión, a las autoridades nacionales que cumplen funciones policiales, las que deberán prestar inmediata colaboración y mantener a los detenidos alojados en sus respectivas dependencias.

Art. 8º — De las resoluciones de la Dirección Nacional de Migraciones que dispongan la expulsión o detención de un extranjero, en función de lo establecido por el artículo 7º, podrá interponerse recurso de apelación fundado, dentro del plazo perentorio de cinco días de notificada la resolución, por ante el Ministerio del Interior, el que, previo requerimiento de los antecedentes, deberá resolver en el plazo máximo de diez días, sin ulterior recurso.

Art. 9º — Policía Federal, Prefectura Nacional Marítima y Gendarmería Nacional, a los efectos dispuestos en la ley 817, el presente decreto ley y sus reglamentaciones, cumplirán funciones de Policía Migratoria Auxiliar, en sus respectivas jurisdicciones.

Art. 10. — El capitán, comandante o responsable de todo medio de transporte de personas para o desde el país, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, o las compañías, empresas o agencias propietarias, explotadoras o consignatarias del medio de transporte, serán responsables por la conducción de pasajeros y tripulantes en condiciones no reglamentarias, así como del cuidado y custodia de los pasajeros y tripulantes, hasta que los mismos hayan pasado el examen de contralor migratorio. Al rehusar la autoridad migratoria la admisión de cualquier persona, el capitán, comandante o responsable del medio de transporte, o las compañías, empresas o agencias, en su caso, quedarán obligadas a reconducirla a su costa fuera del territorio de la República, en el mismo medio de transporte en que llegó, o en otro, dentro del plazo perentorio que se le fije a tal efecto.

Art. 11. — Todo medio de transporte de personas al país o desde el mismo, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, o la compañía, agencia o empresa propietaria, consignataria o explotadora de un medio de transporte de personas al país o desde el mismo, quedan obligadas a transportar a su cargo, en el plazo que se le fije, fuera del territorio de la República, a todo extranjero cuya expulsión resuelva y su transporte disponga la Dirección Nacional de Migraciones, al país de su nacionalidad o de su procedencia, o a cualquier otro país que lo admitiese, hasta un máximo de un pasajero por viaje, cuando la capacidad del medio de transporte no exceda de 40 (cuarenta) plazas y de dos personas cuando la capacidad fuera superior. El límite dispuesto precedentemente no regirá para los casos de aquellos extranjeros que hubieren sido transportados al país en el mismo medio en que debe efectuarse la reconducción. Cuando se tratare de núcleos familiares, deberá disponerse que la salida se efectúe por el medio de transporte que tenga mayor capacidad.

Art. 12. — Las obligaciones emergentes de los artículos 10 y 11 serán consideradas cargas públicas.

Art. 13. — La Dirección Nacional de Migraciones podrá imponer cauciones, en efectivo o documentarias, a las empresas, compañías o agencias propietarias, consignatarias o explotadoras de cualquier medio de transporte, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de reconducir que dicte en virtud del cumplimiento del artículo 10 y hasta un máximo de cincuenta mil pesos (\$ 50.000), por cada caución, de acuerdo con la respectiva reglamentación, la que establecerá las modalidades, plazos y condiciones de su prestación y los requisitos para su cancelación y devolución.

Art. 14. — La falta de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 13, o la violación o no cumplimiento de las disposiciones emergentes de la ley 817, del presente decreto ley y de las respectivas reglamentaciones, serán sancionadas, previo procedimiento sumario, por la Dirección Nacional de Migraciones, con multa de hasta veinte mil pesos (\$ 20.000), por cada infracción, la que será aplicable a los capitanes, comandantes o responsables del medio de transporte, y a las compañías, empresas o agencias propietarias, consignatarias o explotadoras del medio, graduándose la misma de acuerdo con los antecedentes del infractor.

Art. 15. — En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 13, así como a las sanciones que se apliquen en función del artículo 14, la Dirección Nacional de Migraciones podrá disponer directamente por sí y mediante resolución fundada, la interdicción provisoria de salida del territorio o de aguas jurisdiccionales argentinas del medio de transporte correspondiente, la que se hará efectiva por medio de las autoridades que cumplen funciones de Policía Migratoria Auxiliar, sin perjuicio de perseguir judicialmente, por la vía de apremio, el cobro de la multa o caución impuesta.

Art. 16. — De las resoluciones de la Dirección Nacional de Migraciones que impongan multas o cauciones, o hagan efectiva la interdicción de salida que establece el artículo 15, podrá interponerse recurso de apelación por ante el Ministerio del Interior, dentro del término perentorio de cinco días de su notificación, previo depósito o prestación de la caución impuesta. El Ministerio del Interior resolverá en definitiva sin ulterior recurso.

Art. 17. — Las multas se depositarán en efectivo en una cuenta especial a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, las que se destinarán al pago de los gastos de expulsión y reconducción de extranjeros, cuando fuere necesario.

Art. 18. — Todo extranjero «residente permanente», que permanezca fuera del territorio de la República por un período continuado mayor de 24 (veinticuatro) meses, pierde, de pleno derecho, su calidad de tal y, en caso que desee reingresar al país, deberá solicitar nuevo permiso a la autoridad migratoria, la que para resolver valorará su situación familiar en el país, su domicilio, la sede de sus negocios, profesión y antecedentes personales.

Art. 19. — Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior a aquellos extranjeros «residentes permanentes» que necesiten permanecer fuera del territorio de la República por razones de salud, de estudio, familiares, profesionales o de negocios, por períodos continuados superiores a los 24 (veinticuatro) meses, quienes deberán acreditar, antes del vencimiento de dicho plazo, ante funcionario consular argentino, las circunstancias de excepción señaladas y presentar pasaporte, cédula de identidad argentina

y certificado de viaje otorgado o revalidado por la Policía Federal.

El funcionario consular actuante retendrá el certificado de viaje y otorgará en su reemplazo una certificación en la que conste el plazo de extensión de su permanencia en el exterior que se autoriza, el que no podrá ser superior a 12 (doce) meses, salvo el caso de estudios, en que podrá ser de hasta 36 (treinta y seis) meses.

Art. 20.—Los extranjeros que, en virtud del artículo anterior, hubieran obtenido autorización de extensión de permanencia en el exterior, podrán reingresar dentro de ese plazo con la sola visación de residentes permanentes en sus pasaportes y munidos de cédula de identidad argentina y la certificación consular que establece el artículo 19.

Art. 21.—Los extranjeros residentes permanentes, que permanezcan fuera del territorio de la República por períodos no superiores a los 24 (veinticuatro) meses, podrán reingresar con la sola visación consular de residentes permanentes en sus pasaportes y munidos de cédula de identidad argentina y certificado de viaje.

Art. 22.—Los extranjeros residentes permanentes, que permanezcan fuera del territorio de la República por períodos no superiores a los 180 (ciento ochenta) días, podrán reingresar en tal carácter sin necesidad de visación consular, munidos de pasaporte válido de su nacionalidad, cédula de identidad argentina y certificado de viaje.

Art. 23.—Los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y Culto podrán establecer, por resolución conjunta, excepciones a lo dispuesto por los artículos 18, 19, 21 y 22.

Art. 24.—Las autoridades nacionales que cumplan funciones de Policía Migratoria Auxiliar dejarán constancia de la salida de las personas del país en su pasaporte, mediante sello que individualice el lugar y fecha de salida y la autoridad interviniente.

Art. 25.—Las disposiciones del presente decreto ley son de orden público.

Art. 26.—Derógase toda disposición que se oponga al presente decreto ley.

Art. 27.—El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a Rentas Generales.

Art. 28.—Oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 29.—El presente decreto ley será refrendado por los señores ministros secretarios en los departamentos de Estado de Guerra, Marina y Aeronáutica. Exteriores y Culto y firmado por los señores secretarios de Estado de Guerra, Marina y Aeronáutica.

Art. 30.—Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO.

Osiris G. Villegas. — José M. Astigueta.
— Juan C. Cordini. — Héctor A. Repetto. — Carlos A. Kolungia. — Eduardo F. McLoughlin.

(Boletín Oficial del 22 de junio de 1963.)

Sr. Presidente (Mor Roig).— En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado Carlos Bravo.

Sr. Bravo (C. A.).— Señor presidente: considera hoy la Cámara despachos que tienen una importancia singular y una trascendencia extra-

ordinaria para el futuro de la vida política de la República. La tan esperada, la muy postulada derogación de la llamada legislación represiva, que tanta expectativa había despertado en el país, por la que tanto habían pregonado todas las agrupaciones políticas, con insistencia terminante algunas, entra hoy en una etapa definitiva de su sanción, con la esperanza de que ella contribuya a la pacificación definitiva del país.

Debe señalarse —porque cumple a la lealtad hacerlo— que todos los integrantes de los partidos políticos representados en el seno de las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales trabajaron con dedicación, ahínco, preocupación y seriedad.

Es necesario, en primer lugar, porque así lo impuso la realidad que vivimos, señalar que el señor presidente de la comisión, diputado Caro, trabajó con cordialidad, amenidad y amabilidad con todos los legisladores, auspiciando desde el primer momento una labor que se logró llevar a feliz término gracias a su tesitura de caballero.

Pero el señalar el comportamiento del señor presidente no importa mengua de las actitudes que tuvieron los otros legisladores que integraron las comisiones. Todos se distinguieron por igual en cuanto a preocupación, seriedad y sobre todo extraordinaria buena voluntad, de la que tanto está necesitando la Nación para poder resolver los grandes problemas que la preocupan.

Al seno de las comisiones se llamaron a grandes especialistas del derecho. En las reuniones de los días 17 y 24 de junio y 21 de julio concurren los profesores Jiménez de Asúa, Sebastián Soler y Ricardo Núñez, de la ciudad de Córdoba este último, inspirador del proyecto que nos remitiera con su mensaje el Poder Ejecutivo.

También fue escuchada la opinión de diferentes organismos, unos a través de memoriales y otros, como la CGT, organismo obrero, en forma verbal. Esta última se hizo presente en el seno de la Comisión de Legislación Penal asesorada por sus letrados patrocinantes.

Todas esas opiniones han sido seriamente escuchadas, como lo he establecido a priori, y atendidas sus sugerencias en la medida que pueden compaginarse con la preocupación fundamental de quienes orientaron los despachos. He de decir que para nosotros, para los hombres de la Unión Cívica Radical del Pueblo, este paso que damos es el cumplimiento de objetivos claramente determinados en nuestra plataforma electoral para la campaña que culminó el 7 de julio de 1963, cuando establecíamos que auspiciábamos, para «preservar la paz interior y recuperar la fe pública» y para afirmar la soberanía nacional, entre otros conceptos, la derogación de la llamada legislación represiva, con estas palabras: «Política de pacificación nacio-

nal; afianzamiento de las libertades del ciudadano; preservación de la democracia; eliminación definitiva de todas las formas de coacción y de violencia.» Legislación adecuada a los fines y principios consagrados por la Constitución Nacional.

Este postulado de nuestro partido —es importante señalarlo— no era exclusivo de nuestra agrupación. Todos los partidos políticos de orientación democrática en la República habían protocolizado en sus plataformas electorales pensamientos similares, y en cuanto a la abolición de las leyes llamadas represivas, postularon todos, de idéntica forma, la derogación. Por ello considero que el paso que en este momento da la Honorable Cámara no es la obra de un partido, no es la acción única de un gobierno, sino el movimiento unánime de los partidos políticos argentinos, ya que todos contribuyen por igual, en plena conciencia de sus responsabilidades, a dar este paso que es calificado como fundamental para la pacificación de la República.

El mensaje del Poder Ejecutivo, que lleva el número 2.801, consigna que «quiere también especialmente que todos los preceptos que castigan la mera opinión sean derogados, porque no son compatibles con el régimen republicano de gobierno que nuestra Constitución asegura y con la libertad de pensamiento», y auspicia la derogación.

Francisco Ayala, en su obra *Historia de la libertad*, ha señalado que «los principios políticos» que desarrolló Rousseau en su *Contrato Social* encontraron aplicación más o menos exacta en los países de la cultura occidental durante el siglo XIX, dando lugar al régimen de gobierno llamado constitucional y creando un tipo de Estado denominado «Estado de derecho»; Estado de derecho que no implica más que la sumisión del poder político al orden jurídico establecido; Estado de derecho que se crea para hacer más efectiva y perfecta la realización del derecho, no siendo el derecho otra cosa que la manifestación de la libertad del individuo.

Tiene el Estado de derecho —que vivimos hoy en esta Argentina, principalmente a partir del 12 de octubre del año próximo pasado— dos grandes principios orientadores de su acción: la garantía de la libertad individual y la división de los poderes. Este último es el legado de la Revolución Francesa de 1789. Esos principios de la división de los poderes y la garantía de la libertad individual son los que conforman el sistema democrático de gobierno, al que adherimos sin hesitación alguna todos los hombres que estamos hoy en este Parlamento, por cuanto así lo han pregonado todos en los discursos que se pronunciaron hasta el día de la fecha.

Ese Estado de derecho, que es la afirmación de la libertad, presupone vivir no sólo en libertad sino también dentro del orden político de la democracia. Libertad y democracia son consus-

tanciales con los sistemas de gobierno constitucionales y republicanos.

Esa libertad del hombre, que he señalado como fundamental en los sistemas de gobierno republicanos, constitucionales y democráticos, no la contemplan las normas penales que establecen los delitos de opinión, cualquiera sea su origen, sea que provengan de decretos leyes de gobiernos defacto o que hayan sido sancionadas por el Congreso. Y porque no conforman al sistema democrático de gobierno es que hoy nos disponemos a derogarlas, para erradicarlas definitivamente de la legislación argentina.

Es de señalar que esas normas penales que vamos a derogar, para proscribirlas de la legislación del país, respondieron a un principio o a un concepto totalitario, por cuanto tenían por principal preocupación —y así lo dijo el profesor Sebastián Soler en su exposición— afirmar, defender al Estado, en detrimento de la personalidad humana, que para nosotros es lo fundamental. Son las mismas normas que estuvieron vigentes en los Estados totalitarios de Europa, concepto éste de Estado totalitario cuya denominación, en principio, le corresponde a Benito Mussolini, pero que también imperó en la Alemania nazi y en la España falangista. Este concepto de afirmación y defensa del Estado —importante bien jurídico cuya tutela nosotros no dejamos de reconocer— al constituirse en la principal preocupación en detrimento del individuo, como lo he afirmado, está estableciendo la diferencia entre el llamado derecho penal de las dictaduras, sobre el que existe abundante bibliografía, con el derecho penal de las democracias, que es el que nos interesa y el que quiere restaurar en la República Argentina nuestro Poder Ejecutivo, como lo dice claramente en su mensaje.

La legislación de orientación totalitaria se distingue siempre por ser contraria al sistema liberal de gobierno en lo político, es decir que está en contra del liberalismo político y, en consecuencia, contra la trilogía clásica que proclamara la Revolución Francesa de «libertad, igualdad y fraternidad». En consecuencia, esa ideología totalitaria que se preocupa por sancionar los delitos de opinión, es decir, sanciona el pensamiento y las ideas, las que más que al campo de los hechos corresponden al terreno de lo metafísico, son contrarias a la libertad, porque niegan al individuo auspiciando únicamente la defensa del Estado. Están en contra de la igualdad, porque distingue entre los adictos y los adversarios. No tiene el derecho penal el carácter de objetividad y generalidad que es el que corresponde, sino que hay un derecho para los partidarios y otro para los adversarios, aunque la norma vigente en el país sea la misma.

Todo esto, como lo recordamos argentinos y extranjeros en este país y en el exterior, ha dado lugar a torpes conducciones políticas, que sólo sirvieron para traer la desgracia a la República.

Frente a esto debemos reaccionar como lo estamos haciendo en el presente.

Sobre todo, este derecho penal es contrario al principio de la fraternidad, porque el rigorismo de las normas establece sanciones para los meros delitos de opinión, o sea para los simples pensamientos, y porque aplica la pena de muerte por causas políticas, que es una de las más grandes aberraciones en el derecho penal.

En franca oposición a ese sistema, la democracia anhela un derecho penal de marcado carácter de generalidad, un derecho penal objetivo, que no esté al servicio de una clase dirigente, como decía Ihering en su famoso pensamiento, sino que esté al servicio de la generalidad del pueblo y sea igual para todos.

Afirma José Peco, en una frase que tiene extraordinario valimiento doctrinario, que los códigos penales son el termómetro de las democracias y de las libertades; y nosotros queremos que nuestro Código Penal marque siempre el camino de la libertad, a la que servimos con toda lealtad y amor. La democracia, lo debo decir, está indisolublemente unida a la libertad, y cuanto hagamos para afirmar ésta, la libertad, en el campo político, social y económico de la democracia, será poco, y será en este período en que vivimos y por siempre, la preocupación fundamental de los argentinos.

No debemos olvidar, por cierto, que el significado de las palabras cambia y se transforma con la acción del tiempo. Recuerdo las afirmaciones de Huizinga en su famosa obra *Otón de la Edad Media*, cuando expresa que así como las estaciones cambian por acción de la naturaleza, también las ideas deben presentarse con nuevos ropajes. También el concepto de la democracia política, que en su hora y en su momento, al impulso del pensamiento burgués de la Revolución Francesa, y llevado por el Código de Napoleón, se expandió por todo el mundo y sirvió para satisfacer las exigencias de un momento, debe ser transformado.

Aquella expresión famosa de Lincoln, que pronunciara en el campo de batalla de Gettysburg, convertido a la sazón en cementerio nacional, creyendo que el mundo la iba a olvidar y que sólo iba a recordar el acontecimiento histórico, de que el «gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo» no desaparezca de la faz de la tierra, que es, al decir de Burdeau, la definición más válida, más simple y más cierta de la democracia, debe actualizarse.

El pueblo de la Revolución Francesa de 1789 no siempre es el mismo pueblo, y no es el pueblo que hoy está postulando las redenciones democráticas en toda la tierra. Cuando hablo de toda la tierra me refiero en especial al mundo occidental, donde existe la libertad.

Esas tres libertades, con ese concepto de pueblo y de libertad política, deben ser completadas. Para que a los delitos de opinión no sea necesario sancionarlos en los códigos, para que

los pueblos sirvan con lealtad a la democracia, deben ser completadas por aquellas libertades que Roosevelt establecía en su mensaje famoso de 1941 al Parlamento de su país y al mundo libre: liberarnos del miedo, de la miseria y de la necesidad.

El mundo avanza inexorablemente de la democracia política hacia la democracia social. Y entonces, adhiriendo a la democracia social, debemos hacer realidad ese pensamiento de Fadda y Benso de que derecho que no mire a la defensa del hombre, como hombre en la vida social, no es derecho. Es entonces obligación de las clases dirigentes que tienen responsabilidad por la marcha del país, preocuparse por resolver los grandes problemas sociales de la hora, que no pueden ni deben ser siempre preocupación exclusiva de un gobierno, ni siquiera de un partido que apoya a ese gobierno, sino de todos los habitantes de la Nación.

Nosotros, como radicales, cuando expresamos estos pensamientos estamos reviviendo aquella frase famosa de Martí, refiriéndose a las revoluciones americanas, que no fueron un simple cambio de gobierno sino un cambio de ideas, una transformación ideológica. Y si la Declaración de los Derechos Humanos en diciembre de 1948, proclamó la liberación contra el miedo y la miseria, como lo quería Franklin Delano Roosevelt, hoy todos debemos luchar con desigualado ahínco, poniendo nuestro fervor y todo nuestro amor para liberar al hombre del común afirmando su libertad del temor y la miseria.

Quiero repetir un concepto expresado por Burdeau en su obra *La democracia*: la imagen del ciudadano que nos legó la Revolución Francesa, de ese ciudadano abstracto que amaba la libertad y estaba dispuesto a servirla en el terreno de las declaraciones formales, ha sido reemplazada hoy por lo que él denomina el hombre situado. El hombre situado es el hombre tal cual se nos presenta en su vida en sociedad, con su egoísmo, con su miseria, con sus necesidades y con sus sufrimientos. Es un hombre que ansía el mundo mejor; es un hombre que está dispuesto a evadirse de este estado de miseria y abrazar cualquier ideología que le prometa una esperanza, aunque las promesas no queden más que en el campo de las esperanzas.

Todos los hombres de gobierno deben comprender que su obligación fundamental, en afirmación de la libertad, es procurar satisfacer las exigencias de esos hombres que en este mundo padecen. Y con tolerancia, con serenidad, con ponderación y con comprensión debemos legislar para que la pesada carga del dolor humano no siga agobiando en esta tierra a tantos seres. Así habremos obtenido, con una legislación democrática y una acción social en lo económico, la pacificación de los argentinos.

Nosotros damos este paso con plena responsabilidad, con toda serenidad y con toda ponderación. No tiene —se impone decirlo— menzuras intereses, porque es la posición objetiva de una agrupación que ama a la democracia y que tiene devoción por la libertad, y que quiere que en la Argentina todos seamos iguales ante la gran responsabilidad. No será la obra exclusiva de nosotros —lo dije al principio de mi exposición—, porque también la postulan, la quieren y la pregonan otras agrupaciones políticas con igual fervor que nosotros. Pero estos anhelos de paz, concordia, democracia y fraternidad sólo se concretarán mediante obligaciones recíprocas y la comprensión de todos los partidos políticos y de todos los habitantes del país.

De nada valdrá que unos quieran la paz y otros ansien la guerra, porque siempre habrá guerra, que es lo negativo. De nada valdrá que unos quieren la libertad y otros la nieguen, porque se hace pesado el camino de la lucha por la libertad. No hay que olvidar los padecimientos de aquel anciano canciller inglés, Chamberlain, cuando quería y postulaba de buena fe la pacificación en una Europa convulsionada, y tenía frente a sí las hordas fascistas y nazis dispuestas a arrasar todo el continente. Y al final, la falta de comprensión, de tolerancia y de buena voluntad de los que estaban destinados a ser beneficiarios de la paz trajo el caos, la desorganización y la guerra.

Que esto no suceda en la Argentina. Que todos, olvidando el pasado y, sobre todo, los hechos negativos del pasado, mirando hacia el futuro, con la frente bien alta y plena de responsabilidad, comprendamos el paso que darán esta Honorable Cámara y todos los partidos políticos. Así, de hoy en más, todos viviremos en paz, en concordia y en libertad, con la frente bien alta, en el juego limpio, limpiísimo, que se impone en una auténtica democracia, con partidos serios y responsables. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

El otro principio que había enunciado, el del sistema constitucional, es el de la división de los poderes, que enunciara Montesquieu en su *Espíritu de las leyes*.

Y porque los decretos leyes son contrarios al principio que he enunciado, al no haberse respetado el artículo 18 de la Constitución Nacional; porque corresponde al Congreso, de acuerdo con el artículo 67, inciso 11, de esa misma Constitución, sancionar las leyes fundamentales, y porque el procedimiento para ello está señalado en los artículos 68 a 73, es que procuramos derogar hoy esos decretos leyes que establecen sanciones penales.

Uso la denominación «decretos leyes» porque creo que ha tenido aceptación universal y ha adquirido ya ciudadanía en la rama del derecho. Sé que existen otras denominaciones, como

«decretos leyes defacto», «decretos leyes usurpadores», etcétera, aspectos que ya han sido tratados en esta Cámara.

En el debate sobre la validez de los decretos leyes también se ha pronunciado el cuerpo. En las sesiones del 25 de junio y del 2 y 3 de julio se fijaron diversas posiciones, que van desde la que sostiene la invalidez absoluta de los decretos leyes hasta la que reconoce que continúa su vigencia. No he de volver sobre este punto, que creo ya superado por el debate anterior; sólo he de decir que la tesis de la invalidez de todos los decretos leyes implica para mí una posición iluminista, carente de realidad, de esa realidad que muchas veces es más poderosa que todas las ideologías. De cualquier manera, la Cámara estableció que los decretos leyes continúan vigentes, con referencia a los dictados por el gobierno provisional desde el 23 de marzo de 1962 hasta el 11 de octubre de 1963, en cuanto ellos no sean expresamente derogados por este Congreso. El artículo 29 de la sanción aclaraba que la disposición que comento no importaba pronunciarse sobre la constitucionalidad, validez y oportunidad de los decretos.

Ese pronunciamiento es el que nos obliga a nosotros a dar ahora este paso. Lo ha explicado con suma claridad en su momento nuestro distinguido colega y profesor de derecho constitucional doctor Rouzaut, en su exposición del día 25 de junio, a mi juicio, concisa y definitiva. Adoptando este procedimiento se evita la posibilidad de una inestabilidad jurídica de perniciosas consecuencias y se facilita la labor de los jueces que deben aplicar las normas jurídicas, contribuyéndose así a una administración de justicia mucho más clara y más precisa.

Teniendo en cuenta que los decretos leyes tienen vigencia hasta que sean derogados por una ley, procedemos con este despacho a dar ese paso. Lo ha expresado el Poder Ejecutivo en su mensaje. Señala allí que entiende que el proyecto que consideramos viene a clarificar la dispersa legislación penal vigente y a darle mayor organicidad, evitando, en la medida de lo posible, el deterioro del Código Penal.

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires había establecido en 1962, en una de sus ponencias, que la tarea legislativa —la concepción, redacción y sanción de las leyes— implica el uso de una técnica cada día más compleja por los progresos de la ciencia y las transformaciones de la vida social, función que impone no sólo conocimiento de las disciplinas jurídicas sino el manejo de un lenguaje apropiado, severo, preciso y claro. La improvisación, la oscuridad, la ausencia de una visión integral, la discrecionalidad, se acreditan día a día y amenazan la obra del legislador más cauto y más diligente. Y agrega: «El cumplimiento de los preceptos constitucionales exige, hoy más que nunca, un procedimiento que no sólo los respete y resguarde en su sentido, sino

que facilite y promueva una legislación clara, coherente y eficaz.» Por eso se procura, con el paso que va a dar la Honorable Cámara, conferir mayor organicidad a la legislación penal vigente y, en la medida de lo posible, aunque no se alcance la perfección, restaurar el Código Penal del país, que había sufrido demasiados —si es que puede utilizarse correctamente esta palabra— injertos que le hicieron perder su unidad. En una palabra, se procura que las virtudes de una buena legislación, que son: unidad, sistematización y técnica, recuperen vigencia en el ámbito penal argentino.

De todas maneras, malgrado las opiniones dispersas y en contra que puedan existir, lo que no se puede negar es que este proyecto del Poder Ejecutivo le da al Código Penal una organicidad muy superior a la que tenía hasta este momento por las modificaciones. Por otro lado, los profesores consultados —en especial el doctor Jiménez de Asúa— al hablar de los decretos leyes, en lo relativo a su derogación, propiciaron que se derogara expresamente el mayor número de ellos. En una palabra, que la derogación de los mismos debía hacerse en forma taxativa. Este aspecto fue considerado en el seno de la comisión, y en él coincidieron todos sus integrantes.

Se procuró incluir en el despacho todos los decretos leyes sancionados por el gobierno defacto último. Sobre ese aspecto debo decir que existe unanimidad de opiniones. El artículo que se refiere a la derogación de los decretos leyes ha contado con unanimidad. Es así como en el artículo 1º del despacho se propicia la derogación de los siguientes decretos: el 4.161, del 5 de marzo de 1956, que prohíbe la propaganda peronista, que no permite la utilización de las imágenes y símbolos del peronismo, que prohíbe usar las palabras «peronista», «peronismo», «Perón», «justicialista», las letras PP y cantar las marchas «Los muchachos peronistas» y «Evita capitana», decreto que fue declarado de orden público y en el que se establecían penas que oscilaban entre treinta días y seis años de prisión e inhabilitación, en su caso; el decreto 22.490, que ampliaba las disposiciones contenidas en el anterior y obligaba a los funcionarios públicos a sustituir en los testimonios que otorgaran, las palabras «Perón», «Eva Perón» o las denominaciones que habían sido utilizadas por el peronismo y que fueron cambiadas por la Revolución Libertadora; se deroga también el decreto 7.165, del 24 de julio de 1962, que establecía la vigencia del 4.161, que he mencionado en primer término, y que había sido derogado por la ley 14.444; se deroga el decreto 1.296, del 15 de febrero de 1963, que ratifica el decreto 7.165, lo que se debe a que este último decreto fue dictado estando en el gobierno el presidente Guido, o sea el gobierno defacto, pero mientras funcionaban las Cámaras, que no habían sido disueltas todavía,

lo que ocurrió el 6 de septiembre de 1962 por el decreto 9.204; se deroga así mismo el decreto 8.161, del 13 de agosto de 1962, que prohíbe la propaganda peronista; el 2.713, del 10 de abril de 1963, que fija el alcance de los decretos leyes 4.161, 1.296 y 7.165.

Se deroga también el decreto ley 788, dictado con fecha 30 de enero de 1963, llamado ley de seguridad del Estado. Aparte del procedimiento de su sanción, sus antecedentes son de marcado carácter totalitario, importando el traslado, en gran medida, de la legislación falangista española, que a su vez ya se había traído al país a través del decreto 536 del año 1945.

Se derogan, así mismo, el decreto 3.134, de prohibición de la actividad de los grupos Tacuara y Guardia Restauradora Nacionalista; el 4.200, del 23 de mayo de 1963, por el que se permitía al Poder Ejecutivo, durante la vigencia del estado de sitio, supeditar la autorización para salir del país, que establece el artículo 23 de la Constitución Nacional, a que los interesados se comprometieran a no residir en un país limítrofe; el decreto 4.214, del 24 de mayo de 1963, de represión del comunismo, derogatorio del decreto 8.161/62, y el decreto 4.215, sobre prohibición de la propaganda peronista.

También se derogan el decreto 4.778, del 12 de junio de 1963, por el que se modificaron diversos artículos del Código Penal; el decreto 5.175, del 26 de junio de 1963, relativo al recurso de hábeas corpus y al recurso de amparo, estableciendo que los agentes fiscales son parte de los mismos y están obligados a apelar o deducir recursos contra todas las resoluciones que se dictaren; el decreto 5.540, del 5 de julio de 1963, que reglamenta el decreto ley 4.214, referente a la represión del comunismo y de la propaganda comunista; el decreto 5.541, del 5 de julio de 1963, que contiene normas ampliatorias del decreto 4.214; y, por último, los artículos 157 y 259 del Código Penal, relativos a la violación del secreto y al uso abusivo de informaciones por parte de los funcionarios públicos, respectivamente.

Por el artículo 2º del despacho se declaran vigentes las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 778/63 y 4.778/63, menos los artículos 8º, 9º, 11, 12 letras a), b) y e), 15 y 17, segunda parte, de la ley 13.985, que adquiere vigencia.

El artículo 8º de la ley 13.985, referente al sabotaje, reprime al que provocare pública alarma o deprima el espíritu público causando un daño a la Nación, verdadero delito de opinión; el artículo 9º reprime a quien habiendo entrado en contacto con espías o saboteadores, y conociendo esa calidad, no la comunique a las autoridades; el artículo 11, al que en tiempo de guerra y en el caso de los artículos 2º, 3º, 4º y 7º, cometiere los delitos que enuncian, se le aplicará la pena de muerte, que es contraria a la legislación argentina, así como al espíritu de

la Constitución, que expresamente la proscribiera. El inciso a) del artículo 12 se refiere a la instigación para cometer delitos especificados por la ley de seguridad del Estado; el inciso b) se refiere al cómplice o encubridor, y el inciso e) al autor de tentativa cometida con fin de espionaje o sabotaje, los que incurrirán en las mismas penas establecidas para los autores de los delitos previstos en la ley 13.985.

El artículo 15, que establecía la pena de muerte para los delitos que esa ley incriminaba, se registró por la justicia militar, y el artículo 17, segunda parte, es el que obligaba a los tribunales militares a aplicar la ley para los hechos cometidos dentro de su jurisdicción. Reitero que en este aspecto existe unanimidad en todos los despachos, que proponen derogar idénticas disposiciones.

Pero el Poder Ejecutivo, consecuente con las ideas que el profesor Núñez ha expuesto en su dictamen, entiende que es necesario reforzar las normas represivas en la legislación penal argentina. Por ello, en sustitución de algunas de las disposiciones derogadas, se postulan otras, las primeras de las cuales son creación exclusiva del profesor Núñez.

Se incorpora al Código Penal como capítulo V del título VIII un artículo 213 bis que, bajo el epígrafe de «Otros atentados contra el orden público», establece lo siguiente: «Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años: inciso 1: Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieren por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas, por el solo hecho de su participación.» Como lo he expresado, el profesor Núñez es el creador de esta norma. El profesor Jiménez de Asúa, en la exposición que efectuó ante la Comisión de Legislación Penal, se mostró contrario a incluir esta disposición en el Código Penal por cuanto entendía que los casos contemplados en este inciso estaban comprendidos en el artículo 210 del Código, que se refiere a la asociación ilícita. Hay que meditar mucho sobre esto y hacerlo a fondo, fueron sus palabras.

La CGT, que también hizo llegar su opinión, se manifestó contraria a esta inclusión y postuló la no sanción de la misma.

El profesor Soler expuso en su informe la inconveniencia de la inclusión de este inciso.

Repito que no existen al respecto antecedentes nacionales ni extranjeros. Se trata, en consecuencia, de una nueva figura criminal que tampoco se inspira en los artículos 124 y 125 del Código Penal alemán, como se dice en el informe que hizo llegar a la comisión la Liga por los Derechos del Hombre. En el código alemán se castiga la participación públicamente en organizaciones para ejercer la violencia, pero en esa legislación esas asociaciones deben ser establecidas públicamente y es uno de sus requisitos

que la violencia se ejercite en común. El artículo 210 del Código Penal argentino, que se refiere a la asociación ilícita, exige cierta permanencia y que el elemento subjetivo, o sea la intención criminal, sea para delinquir, aparte de otras circunstancias que ha establecido la doctrina.

El inciso que comento se refiere exclusivamente a los que, sin tener intenciones delictivas —es decir donde el elemento subjetivo de delinquir no es lo fundamental—, participen en asociaciones sancionadas. En esta figura jurídica el elemento subjetivo es el de ejercer violencia aunque no constituya delito, como ocurre con los integrantes de las patotas y los grupos de Tacuara, que perturban la tranquilidad del país y causan disturbios; se impone, entonces, que para salvaguarda de la paz pública y para evitar la alteración del orden sean castigados, y por consiguiente se procede a incriminarlos en la forma que establece el artículo 213 bis, en su inciso 1.

El inciso siguiente de ese mismo artículo ha quedado redactado en el dictamen de mayoría en la siguiente forma: «El que públicamente instigare o participare en actos tendientes a que se aplique un tratamiento desigual a las personas, fundado en motivos religiosos o raciales.» Ha sido modificado así el texto original del mensaje del Poder Ejecutivo que establecía: «Los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases.»

Esta modificación se debe al distinguido colega y representante de los partidos de centro, doctor Bilbao, que fue quien proyectó la redacción actual, que nos parece más apropiada.

Con esta modificación se suprimió la referencia a la lucha de clases, de acuerdo con el pensamiento de todos los legisladores de la comisión. Los diputados de la Unión Cívica Radical del Pueblo que la integramos lo hicimos por una resolución de nuestro bloque. La eliminación de este concepto de la lucha de clases fue postulada también por todas las personas consultadas, no sólo por profesores del derecho penal, y por supuesto por la CGT, que fue la que formuló la principal objeción.

Hemos eliminado el concepto de lucha de clases porque creemos que no es conducente incriminar la misma para poner fin a las rebeldías que vienen desde la antigüedad y que existieron en todos los tiempos. Para proscribir la lucha de clases no bastan las meras disposiciones del Código Penal; lo que se precisa en el país y en todos los países son legislaciones adecuadas, democráticas —como dije al principio de mi exposición— que contemplen las necesidades de los trabajadores y brinden soluciones justas a los padecimientos humanos. Entonces, no tendremos necesidad, como los Estados totalitarios, de buscar sanciones en procura de afirmar, por otra parte, la hegemonía de otras clases sociales que no son las de los trabajadores.

Si bien la CGT postuló la eliminación de la expresión «lucha de clases», se mostró especialmente conforme con el resto de la redacción del inciso, es decir, que se sancionaran las discriminaciones raciales y religiosas. Pero, además, este concepto de la lucha de clases que hemos eliminado no era tampoco una creación originaria que se protocolizara por primera vez en una ley como ocurre en este proyecto del Poder Ejecutivo. Ese concepto proviene del artículo 36 del decreto 788 que había establecido los delitos contra la tranquilidad pública y había fijado penas de prisión de hasta tres años a los que lo cometieran, y también del artículo 69 del decreto 536 del año 1945, que imponía de seis meses a tres años de prisión a los que instigaren, públicamente y de modo peligroso para la tranquilidad, las luchas raciales, religiosas o de clases.

El doctor Peco también se había mostrado contrario ya en su proyecto a que se establecieran conceptos de esta naturaleza; pero voy a omitir mayores referencias al respecto, porque creo que son conocidas por todos los señores legisladores.

Queda, entonces, en el artículo redactado, en que se incriminará con prisión de 3 meses a 6 años al que públicamente instigare o participe en actos tendientes a que se aplique un tratamiento desigual a las personas, fundado en motivos religiosos o raciales. Y esto es lo correcto.

Esto responde al sagrado principio de la igualdad, que es consecuencia necesaria de la libertad, inherente a un sistema republicano de gobierno. El tratamiento desigual a las personas es írrito a la Constitución Nacional, la que prescribe que todos los habitantes son iguales ante la ley. Ello responde al pensamiento de Alberdi, Echeverría y otros grandes pensadores argentinos, como el mismo Sarmiento y, sobre todo, porque en la Argentina no existen prerrogativas de sangre ni de nacimiento, como lo dice nuestro texto constitucional; y porque levantar en la República la bandera restauradora de un nacionalismo exagerado, que importe la diferencia de los argentinos en cuanto a su raza, origen o color, no sólo no conforma nuestras más hermosas tradiciones, sino que es la negación de la paz y de la concordia que deben existir entre los argentinos.

No se puede perseguir a unos porque no pertenezcan a la misma creencia religiosa o a la misma raza que otros. No pueden olvidarse las palabras de Shakespeare en boca de Shylock, cuando decía: «¿Acaso el judío no padece los mismos fríos, no siente las inclemencias de las mismas estaciones y no tiene las mismas necesidades fisiológicas de alimentarse? ¿No siente sentimientos la madre frente a los hijos y los hijos frente a sus padres?» ¿Por qué esas di-

ferencias raciales en el país, por qué esas diferencias religiosas?

Si bien nosotros hemos proclamado la religión católica apostólica como la protegida por el Estado argentino, no debemos olvidar que en el país existe la más absoluta libertad de cultos, que estamos obligados a defender y a procurar que se respeten los diversos cultos.

Tengo sobre mi banca una serie de antecedentes vinculados con los artículos 16 y 19 de la Constitución Nacional, es decir, cómo se fue estableciendo la libertad religiosa y el derecho del apostolado en el país y cómo ahora, a través de asociaciones, de agrupaciones que no sienten la responsabilidad que pesa sobre ellas, se trata de alterar la paz de la República y romper la armonía entre los argentinos.

Para afianzar y consolidar la unión nacional, la paz interior y justicia es que el Poder Ejecutivo ha creído necesario proscribir las discriminaciones raciales y religiosas, incriminándolas a través del Código Penal. Y para que la aplicación sea más exacta y no cree dificultades en la actuación de la justicia, la mayoría de la comisión —incluyendo en ella a los representantes de UDELPA— aceptó la sugestión formulada por el representante del sector de la Federación de Partidos de Centro, quedando el artículo redactado en la forma que he mencionado.

Sr. Luco. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Bravo (C. A.). — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — En el orden de ideas que está exponiendo el señor diputado, quiero preguntarle si no le parece que se completaría su pensamiento agregando al inciso 2º, como lo tiene proyectado el despacho que él firma, la penalidad prevista también para aquellos que públicamente instigaren o participaren en actos tendientes a que se aplique una discriminación especial por causas políticas. Todos los bloques han coincidido en la idea central de derogar la legislación represiva del pensamiento político, trasladando algunas normas penales, según la opinión del sector que firma el primer despacho, al Código Penal. Yo estimo que esta última idea podría completarse con la incriminación de los actos de quienes instigaren o participaren en la discriminación por causas políticas; coincidiendo con lo que el señor diputado acaba de exponer en materia de discriminación racial o religiosa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Carlos Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Ruego al señor diputado Luco que cuando consideremos en particular el despacho vuelva a formular su planteo, y en esa oportunidad le daremos nuestra opinión.

Sr. Luco. — Como no, señor diputado.

Sr. Bravo (C. A.). — El inciso 3 del artículo 213 bis establece que serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años «Los que, pública o privadamente, instigaren a los militares o a los componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar.» Con respecto a este inciso debo consignar que cuando se escucharon las opiniones vertidas en el seno de la Comisión de Legislación Penal por las personas invitadas a concurrir, no se analizó la cláusula en particular, quizás debido a la preocupación de los señores diputados por indagar opinión sobre otros aspectos del proyecto del Poder Ejecutivo.

Debo expresar que la CGT, por intermedio de su asesor, el doctor José E. Terza, fue quien dio una contertación categórica a la pregunta, diciendo que eso era una cuestión de política criminal.

En el mensaje con que el Poder Ejecutivo elevó al Congreso el proyecto se hace hincapié en este inciso, entendiendo que resulta esencial para terminar con las alteraciones del orden que se han producido de continuo en el país, alteraciones de las que tantos recuerdos tenemos los argentinos. El pasado inmediato está preñado de revoluciones, de asonadas y de golpes militares; los hombres de los partidos políticos llegaron muchas veces a los cuarteles en procura de soluciones por la fuerza de las armas para problemas políticos que no encontraban adecuada respuesta en el ámbito de la República.

En el mensaje del Poder Ejecutivo se destaca que el inciso 3 del artículo 213 bis lleva al área del derecho penal el castigo de los que, pública o privadamente, instigaren a los miembros de los cuerpos armados a desobedecer las leyes o los deberes de la disciplina militar u otros deberes inherentes a su estado. El proyecto del Poder Ejecutivo ha sido en cierta medida limitado en el despacho de la comisión, eliminándose la expresión «otros deberes inherentes a su estado», por considerarla poco clara o poco conducente a la finalidad que se persigue, que es la de evitar que en lo sucesivo se procure con tanta frecuencia restaurar el estado policial.

El artículo 4º del despacho establece la misma penalidad para los extranjeros residentes en el territorio de la República, salvo lo prescrito por los tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. Debo decir que esta ampliación de la responsabilidad penal, no sólo para el súbdito sino para el habitante extranjero que debe obediencia a la Nación, estaba ya en el proyecto del doctor Peco y también en anteriores antecedentes. No es posible que quienes están en la República Argentina y se encuentran obligados por vínculos de permanencia y afectivos no tengan ninguna responsabilidad. En esta materia se efectúa una adecuación al artículo 103 de la Constitución Nacional.

El artículo 4º tiene bastantes antecedentes en el país, y a través de la redacción del despacho tiene una adecuación más exacta, con lo que se procura ajustarlo más al verdadero espíritu del artículo 103 de la Constitución.

En el mensaje del Poder Ejecutivo figura un artículo 222 que dice: «Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación.» Este artículo fue considerado en el seno de la comisión, y no obstante las atendibles opiniones del mensaje del Poder Ejecutivo y las valiosas razones que lo informan y no existir dudas de que este delito debe ser considerado entre los que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, porque el hecho incriminado así lo demuestra, por una razón de cordialidad, para no afectar susceptibilidades que consideramos respetables, hubo opinión general en el sentido de eliminarlo. No obstante, debo decir que quien ultraje los símbolos de la patria, la bandera, el escudo o el himno debe merecer, pese a no estar incriminado en el código, el más absoluto de los repudios, porque es una de las ofensas más torpes que se pueden cometer.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado: ha vencido el término que le correspondía para el uso de la palabra.

Varios señores diputados. — Que se le prorrogue.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar si se prorroga el término de que disponía el señor diputado Bravo para su exposición.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Agradezco a la Honorable Cámara la gentileza que acaba de tener con el diputado que habla.

En el artículo 7º del mensaje se propicia un aumento de pena para los delitos de rebelión y sedición, que comprenden los artículos 226, 229 y 230 del Código Penal.

Debo expresar que, no obstante que el mensaje del Poder Ejecutivo no ha hecho más que reproducir el proyecto confeccionado por el doctor Soler, que hizo suyo la comisión penal del anterior período legislativo, no hemos considerado que esto sea de tanta urgencia para que fuera sancionado en este preciso momento. Creemos que los delitos que ahí se contemplan son de tal naturaleza que hacen fundamentalmente a las concepciones ideológicas de sus autores, y la autoría de los mismos no ha de variar en ningún momento, sea grande o pequeña la pena, porque cuando un hombre de armas toma la decisión de rebelarse lo hace en un acto de profunda fe y no mide las consecuencias. No va a tener en cuenta, por cierto, esas disposiciones del Código Penal o las penas que le puedan corresponder el día de mañana, porque

cuando se rebela o subleva está jugando su dignidad y la particular comprensión del momento en que toma esa decisión. Por eso en el despacho no lo hemos contemplado. El proyecto de Sebastian Soler, que se seguía en este caso establecía las mismas sanciones.

También trae el proyecto de ley del Poder Ejecutivo un capítulo especial destinado a los delitos contra la voluntad popular, que no hemos contemplado en el despacho. Es interesante mencionar cuál era la preocupación del Poder Ejecutivo en esa iniciativa. Los delitos contra la voluntad popular están destinados a salvaguardar la integridad de nuestro sistema representativo y republicano. Corresponde al Congreso de la Nación el establecimiento de penas, cualquiera sea la naturaleza de los delitos, y se quería dar a los hechos ahí contemplados sanciones penales de la categoría de ley de la Nación, porque las diversas leyes electorales que se dictaron para la Nación o para las provincias contemplaban las infracciones, en los aspectos y las formas en que lo hacía el proyecto del Poder Ejecutivo, como mera falta, vale decir que eran sancionados como contravenciones y no como delitos. Por otra parte, al existir leyes provinciales y leyes nacionales, hechos de la misma naturaleza, que tenían la misma intención, y que debían ser sancionados de idéntica manera, merecían sanciones distintas, haciéndose una diferenciación que una buena técnica legislativa imponía corregir. El mensaje del Poder Ejecutivo es claro al respecto y no creo del caso repetirlo; sólo he de señalar que esto también estaba en el proyecto del año 1960.

Hay un capítulo especial del informe que consideramos, que se refiere al enriquecimiento ilícito, que lleva el número 9 en el mensaje del Poder Ejecutivo. Este capítulo iría bajo el título «delitos contra la administración pública» y bajo el epígrafe de «enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados». Se compone de varios artículos, agrupados bajo el número 268, incorporados al código como capítulo 9 bis del título VI del Código Penal.

Contemplar este aspecto es fundamental para los radicales del pueblo. No he de leer los términos del mensaje del Poder Ejecutivo al respecto, pero sí decir que el enriquecimiento ilícito de los funcionarios es en nuestra República, desde hace varios lustros, uno de los espectáculos más degradantes y más perniciosos para la fe de la ciudadanía. Lejos de recriminarse o castigarse a los que hacen de la función pública el medio fácil para obtener ingentes fortunas, pareciera, hasta hace poco, que se los estuviera gratificando o aplaudiendo. Se llega a la función pública para servir a la ciudadanía, al país y a la nacionalidad, y con el solo afán de hacer posible el enriquecimiento más grande y legítimo que pueden tener todos los hombres: el de servir a la gloria para que los argentinos tengamos en nuestra prosapia una sola hidal-

guía, la de la honradez, la hombría de bien. Y aquí ha estado sucediendo lo contrario. Hombreres que se enriquecieron a través de la función pública aparecen después como grandes benefactores del país, como grandes benefactores de los deportes y de la vida social, cuando solamente han entregado a ella la vigésima parte de lo que han robado y obtenido a través de la función pública. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*) Es muy fácil regalar lo que no es de ellos. Así se regalan millones de pesos a clubes, a instituciones, pero se roba por cientos de millones de pesos a la República y, lo que es más grave, al pueblo.

Creemos que éste es el momento más oportuno para establecer sanciones contra los autores de hechos de esta naturaleza. Pensamos que debe modificarse en ese sentido el Código Penal, sobre todo cuando la responsabilidad del gobierno corresponde a los hombres de la Unión Cívica Radical del Pueblo.

Nosotros no permitiremos bajo ningún concepto, por más amigo y por más querido que sea un funcionario, inclusive que sea nuestro más apreciado familiar, que en la función pública se cometan las desviaciones que se han hecho en el pasado. Esos hechos rompen la fe del pueblo.

Todo el mundo se horroriza cuando un hombre, con ensañamiento y alevosía mata a otro hombre; cuando un padre mata a un hijo, o cuando un hijo asesina al padre. Todos estos crímenes horribles merecen la reprobación de los hombres; pero ante estos crímenes nadie siente la necesidad de emularlos o de imitarlos. Para esos crímenes hay castigos severísimos, y sabemos que no se repiten, salvo que algún sujeto tenga una deformación mental. Pero no se castiga a los que roban al país, que cometen con ello el más brutal, el más grave y el más alevoso de los crímenes, porque están destruyendo la fe de la argentinidad, es decir, la fe del país y de su porvenir. Por eso hay que castigar esos hechos, que son más perniciosos por la gravedad del ejemplo.

Muchos han sido los proyectos que se han presentado en este sentido. En la lista que he preparado figura un sinnúmero de proyectos. En primer término debo mencionar el de nuestro distinguido colega, el señor diputado Palacios, así como también el del ex diputado nacional Carlos Humberto Perette, actual vicepresidente de la Nación. Pero también en esa lista figuran proyectos que han sido sancionados por el Senado o por la Cámara de Diputados, pero que por diversas razones no han tenido aprobación definitiva. No voy a fatigar a la Honorable Cámara leyendo estas iniciativas. En esa lista que he elaborado he incluido cronológicamente todas las iniciativas que se han presentado en esta materia. Tal vez estos antecedentes puedan servir para el debate en particular.

El artículo 5º de nuestro despacho postula la incorporación al Código Penal de la siguiente cláusula: «Artículo 268⁴. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario que debidamente requerido no justificare la procedencia de un aumento excesivo patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público.»

Este artículo ha merecido algunas objeciones en el seno de la comisión, en especial por legisladores que son contrarios a su sanción. Se aduce que importa la inversión de la prueba, que se impone una prueba negativa, que no tiene antecedentes en el país.

Aquí no hay inversión absoluta de la prueba: se trata de un delito por omisión y no para cualquiera sino para los funcionarios públicos que no pudieran justificar el origen de su fortuna.

Quiero significar que este artículo tiene antecedentes legislativos en el país, en especial los proyectos de los señores diputados Palacios y Perette.

El artículo 6º del despacho incorpora al Código Penal, como párrafo segundo del artículo 261, el siguiente: «Será reprimido con la misma pena el funcionario o empleado público que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.»

Este artículo es interesantísimo, señores diputados. Tiende a desterrar de las funciones públicas el abuso de los funcionarios que utilizan los medios que paga el Estado con los dineros del pueblo para satisfacer sus necesidades personales y las de su familia. Con él se evitará que empleados del Estado deban construir caminos o viviendas para funcionarios que luego los utilizarán para sí, o que los medios de locomoción del Estado, que tiene el funcionario a su disposición para el cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo, sirvan para satisfacer las exigencias de sus familiares o para pasear a sus parientes.

Debemos propender a que el empleado público lleve una vida seria y de austeridad en el cumplimiento de sus funciones. Llamo la atención sobre este punto para señalar que en este gobierno no habrá benevolencia para los funcionarios superiores, los correligionarios o colegas de partido que transgredan esta norma, de modo que cualquier ciudadano del país podrá denunciar en el futuro a quien utilice los servicios públicos para su uso personal y no para sus funciones.

Me complace sobremanera que este artículo se incorpore a la legislación penal del país.

Sr. Sago. — Si me permite, señor diputado...

El artículo que acaba de leer el señor diputado fue proyectado en 1960 por el doctor Soler, y

la correspondiente iniciativa tuvo entrada en la Honorable Cámara. Es de esa fuente de donde ha tomado el Poder Ejecutivo esta disposición con respecto al enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.

Quiero además dejar aclarado que nuestro Código Penal también castiga dicho enriquecimiento. De las palabras del señor diputado parecería desprenderse que hoy el Estado se encuentra sin protección y que cualquier funcionario puede robar impunemente. No es así; está contemplado el delito en la legislación vigente, y hay muchos antecedentes...

Sr. Nogués. — Pero no hay ningún sancionado.

Sr. Bravo (C. A.). — Su afirmación es exacta, señor diputado Sago: existe en el Código Penal una disposición que contempla el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Pero existe de una manera restringida, con referencia al cohecho y otras figuras conexas. La disposición no tiene la amplitud de la que proyectamos ahora, y eso ha sido conversado en la comisión.

Sr. Sago. — El proyecto de 1960...

Sr. Bravo (C. A.). — Ya voy a mencionar varios artículos de ese proyecto, señor diputado. Lo que estoy tratando de señalar es que no constituye una legislación vigente en el país. Eso no se puede negar.

Sr. Sago. — Perdóneme el señor diputado, pero sí hay una legislación vigente en el país.

El decreto 4.778/63, que por este dictamen vamos a derogar, establece en su artículo 15, como agregado al artículo 259 del Código Penal, lo siguiente: «Será reprimido con prisión de dos a seis años, e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que, para lucrar o hacer lucrar a otro, utilizare informaciones o datos que sólo hubiera podido conocer con motivo de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario público que, durante su desempeño o dentro de los tres años siguientes a su cesación en la función pública, no quisiera o no pudiese justificar, ante la autoridad competente, cualquier incremento importante de su patrimonio, producido durante su desempeño y comprobado por dicha autoridad.»

Esta disposición rige actualmente, señor diputado, a través del decreto 4.778/63, de modo que a los ladrones se los puede castigar hoy como corresponde.

Sr. Bravo (C. A.). — Me hago cargo de que el decreto 4.778, que modifica una serie de artículos del Código Penal, establece la disposición a que el señor diputado acaba de hacer referencia, pero no debe olvidarse que de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Nacional quedan formulados respecto a esos decretos leyes una serie de planteamientos que se basan en el principio de *nulla poena nullum crimen sine lege*. Y la resolución de la Cámara, que en algún momento tendrá sanción definitiva, porque aún no la tiene, establece que continúan vi-

gentes. En cuanto a su validez, nada ha dicho la Cámara, pero pueden ser declarados inconstitucionales en cualquier momento.

Sr. Sago. — Pero la mayoría de la Cámara ha resuelto que esos decretos leyes tienen vigencia hasta ahora.

Sr. Bravo (C. A.). — Sin afán de querer aventurarme con respecto a las resoluciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, entiendo que tienen vigencia y en cuanto a la validez de esos decretos, se trata de una cuestión que deben resolver los jueces.

Sr. Sago. — La justicia resuelve.

Sr. Bravo (C. A.). — Lo que nosotros procuramos con este artículo es darle sanción legislativa, es decir, que emanen del poder que les corresponde, de acuerdo al orden constitucional argentino.

Hay también un artículo 253 bis, que corresponde al 7º del despacho, que establece: «Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro años el funcionario o empleado público que revelare hechos, actuaciones o documentos que deben quedar secretos.» Esto está relacionado con uno de los artículos que derogamos anteriormente, y al que se le da otra redacción.

El artículo 8º del despacho se refiere a la sustitución de penas, que en el mismo se detallan. Antes de considerar este artículo 8º del despacho, he de señalar que por una omisión involuntaria de los integrantes de la Comisión de Legislación Penal, en el mismo figura mencionado el artículo 257, cuando en realidad debe ser el artículo 258 del Código Penal.

Por el artículo 8º del despacho se sustituyen las siguientes penas establecidas en el Código Penal: la del artículo 256, es decir, la de cohecho, que se castigaba con prisión de seis meses a dos años, por reclusión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años; la del artículo 258 —ya he aclarado que está mal mencionado en el despacho— que eleva el tiempo exigido para la prescripción de un mes a dos años, a uno a cuatro años, y en el caso de que sea un juez el que incurriera en el cohecho la prisión será de dos a seis años, en el primer caso, siendo antes de uno a cuatro años, e incrementándose también la pena de inhabilitación especial de tres a diez años en el segundo caso, que anteriormente era de uno a diez años. En este aspecto se elevan únicamente los mínimos dejándose igual el máximo de los castigos. Por el artículo 265 del capítulo VIII del Código Penal, del mismo título, que se refiere a las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, también se elevan las penas, que eran de uno a dos años, llevándolas de dos a seis años y la inhabilitación, que era de uno a cinco años, se eleva de tres a diez años. Por el artículo 266 se incrementa la prisión que era de uno a seis meses, por la de uno a tres años. Todos estos artículos, así como

el 267, que se refieren a las exacciones ilegales, se distinguen por la elevación de las penas. Se quiere castigar, como lo dice el mensaje del Poder Ejecutivo, de forma más severa los delitos que allí se contemplan.

Vamos a considerar el artículo 9º del despacho, que se refiere al artículo 302 del Código Penal, esto es, al libramiento de cheques sin fondos. El artículo 302 del Código Penal había motivado numerosas dificultades interpretativas, generando dudas y contradicciones por la redacción originaria del año 1922. Se introducen ahora diversas innovaciones para procurar resolver los problemas planteados por esas interpretaciones tan disímiles a que he hecho referencia.

Por el inciso 1º del artículo propuesto se establece previamente el artículo: prisión de 6 cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de habersele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación, será reprimido en la forma que establece previamente el artículo, prisión de 6 meses a 4 años. De esta forma, no se plantean cuestiones de parte general como se hacía en el proyecto del año 1960; se suprime la palabra «giro», igual que en ese proyecto, para que únicamente quede la expresión «cheque», interpretando como tal al documento que reúne los requisitos del Código de Comercio, a fin de que no haya ninguna cuestión interpretativa respecto de los aspectos formales o no formales del mismo. No puede haber un cheque penal y un cheque comercial.

El despacho contempla también el aspecto del uso de formulario ajeno sin autorización, materia que había dado lugar a interpretaciones liberativas del castigo, por cuanto excluye el caso de autorización legítima, o sea que se castiga a quien librare un cheque en formulario ajeno sin autorización expresa, según lo dispuesto por el inciso 4º del nuevo texto propuesto para el artículo 302 del Código Penal.

El inciso 3º, por su parte, castiga a quien librare un cheque y frustrare maliciosamente su pago, situación que también había dado lugar a muchas interpretaciones por cuanto, anteriormente, se castigaba solamente a los que habían librado el cheque careciendo de fondos.

El despacho, que mantiene la redacción originaria contenida en el proyecto del Poder Ejecutivo, resuelve, de esta manera, el problema de las cuentas clausuradas, porque se supera la controversia del año 1922, con el inciso 2º de este artículo. Cualquiera sea la interpretación que se dé al texto de 1922, la posición de los que creen que deben existir fondos, como la de los que no exigen este requisito, queda contem-

plada en los incisos 1º y 4º, según la interpretación y resuelve el problema.

También da solución a la situación que planteaba la quiebra y lo hace de manera clara y categórica. Los incisos 1º y 2º contemplan este aspecto. Los fondos de las quiebras están inmovilizados por disposición de la ley y quien a sabiendas de esto libra un cheque incurre en la responsabilidad criminal consiguiente. Con esto se procura dar seriedad a este instrumento público, que se ha utilizado en forma tan variada, y ha servido para tantos hechos bochornosos o delictivos en estos últimos tiempos. Trae una innovación con respecto al protesto. Al igual que el decreto ley 4.778/63, lo suprime, y establece que si dentro de las 24 horas de habersele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario o cualquier otra forma documentada de interpretación no lo abonare, se encuentra incurso en el delito. Es dable advertir que sólo en el caso que contempla el inciso 1º se concede esa tolerancia de 24 horas, ya que en los casos contemplados en los incisos 2º, 3º y 4º, por la naturaleza especial de los delitos, no debe acordarse esa gracia.

Sr. Gutiérrez. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Bravo (C. A.). — Sí, señor diputado.

Sr. Gutiérrez. — Desearía que el señor diputado me aclarase si en el caso del inciso 2º del nuevo artículo 302 que se propone es necesario, para que se configure el delito, que no existan fondos. Porque el inciso dice: «...que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado», y no se aclara si es necesario que existan o no fondos suficientes.

Sr. Bravo (C. A.). — En el proyecto de 1922 se planteó la cuestión de que la existencia o inexistencia de fondos variaba completamente la responsabilidad del librador del cheque. La comisión, siguiendo el criterio del doctor de la Rúa, expuesto en un trabajo confeccionado especialmente para esta ocasión, resuelve categóricamente la situación, ya que entiende que es secundaria la existencia o inexistencia de fondos. Lo importante es el conocimiento que tiene el librador de que el cheque no podrá ser cobrado. Aquí se castiga al que libra un cheque sabiendo que no podrá ser hecho efectivo aunque existan fondos, porque, por ejemplo, ellos pueden estar inmovilizados por una situación de quiebra, concurso civil u otra.

Por último, el artículo 10 del proyecto establece que se sustituyen las palabras «rebelión en el caso del artículo 226 del Código Penal, sedición en el caso del artículo 229 del Código Penal, asociación ilícita o cualquiera de los comprendidos en el decreto ley 788/63», del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Criminal para la justicia federal y los tribunales de la Capital y los territorios nacionales, reformado por el artículo 24 del decreto ley 2.021/63, por

las siguientes: «o cualquiera de los comprendidos en el libro segundo, título VIII, capítulos 2, 3 y 5, título IX, título X, título XI, capítulos 6, 7, menos los casos de los artículos 262 y 264, 8, 9 y 9 bis del Código Penal, o en la ley 13.985».

En una palabra, se modifican las excarcelaciones, y en vez de mencionarlas en el Código de Procedimientos por artículos o por la denominación de los capítulos, como aparecen en la redacción actual, se hace referencia a los títulos del Código de Procedimientos.

Este artículo ha sido observado por varios tratadistas que fueron consultados en la Comisión de Legislación Penal, porque dicen que la excarcelación es una facultad privativa de los jueces y que no se pueden incrementar las penas establecidas en el Código Penal eliminando la excarcelación del Código de Procedimientos porque ello importaba, para ciertos delitos, estar castigando a priori.

No obstante, la mayoría de la comisión ha creído que debe modificarse este aspecto. Todos sabemos que una cosa son las posiciones teóricas de los profesionales y tratadistas de derecho y otra distinta el aspecto real de la aplicación de la justicia. Los jueces, por una imperiosa necesidad originada en el cúmulo de trabajo en todos los casos en que es procedente la excarcelación, la conceden, sin analizar con la profundidad suficiente —y no es por mala voluntad, repito— el caso que tienen para su planteamiento. Es así que personas que luego deben ser condenadas a prisión recuperan su libertad en forma provisional y, posteriormente, hay que ordenar la detención, que en la mayoría de los casos no se llega a hacer efectiva en el momento debido, y se produce, entonces, la prescripción de la pena. Por estas razones hemos establecido esa modificación.

De esta manera concluyo mi informe en general del dictamen de la mayoría. Quiera el destino que algunas de las palabras que he mencionado al principio de mi exposición les corroboren los tiempos que vienen y que todos, con plena responsabilidad de la obligación que tenemos, contribuyamos por igual a pacificar al país. Que nadie utilice esto que concede la democracia de buena fe y objetivamente como medio o procedimiento para destruir a la democracia.

Abolimos los delitos de opinión, porque estamos enamorados de este modo de vivir que es la democracia, y porque amamos la libertad, sabemos que ella es su mejor escudo frente a los ataques de los que la pretenden destruir. Porque la libertad con la libertad se defiende. Así habremos de marchar en paz, sin preocupaciones, nosotros, como partido que ha ungido al Poder Ejecutivo, y los demás partidos que nos acompañan en esta responsabilidad de hacer el futuro de la Argentina. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Sago.

Sr. Sago. — Trataré de ser lo más breve posible en este informe en general. Como lo ha dicho el señor diputado Bravo, se ha trabajado con intensidad en la comisión, aunque con cierta lentitud. Se ha llamado a distinguidos penalistas, que han dado su opinión, y, coincidiendo con muchos de ellos, el informe de nuestro bloque —de la Unión Cívica Radical Intransigente—, el del Justicialismo y el del MIR establecen la necesidad inmediata de la derogación de las leyes represivas, para luego realizar un estudio profundo de las reformas que han sido enunciadas por el señor diputado Bravo.

Más importante que la discusión en general será el debate en particular, por cuanto se van a considerar más de treinta artículos que van a ser injertados en el Código Penal y que van a cambiar su fisonomía, modificando, incluso, muchas figuras jurídicas y creando una distorsión, como lo probaré más adelante.

Todos los sectores de opinión creen que a través del Código Penal puede cambiarse la suerte del país; creen que con una simple cláusula de ese código se pueden suprimir los delitos. Por ejemplo, si se roban muchos automóviles llegan muchos pedidos a la Cámara para que se establezca una pena rígida creyendo que así desaparecerán esos robos. Y no es así.

El Código Penal es la parte de la legislación más importante que debe dictar la Cámara, porque marca los límites de las garantías individuales del ciudadano. Cada término, cada expresión mal colocada puede servir para una injusticia. Por eso es necesario conocer en qué se funda este derecho que tiene la Cámara de dictar una reforma o una ley penal.

No nos vamos a conformar con suprimir un decreto represivo para sancionar nuevas leyes represivas. Tenemos que ir al fondo del problema y analizar como corresponde, de acuerdo con el mandato de la Constitución, por qué el Estado es el único productor de normas penales. No existen normas privadas en derecho penal y la única fuente de producción es el Estado, como lo señala la Constitución en su artículo 67, inciso 11, al decir que es el Congreso el encargado de dictar los códigos de Minería, Penal, Civil y de Comercio. Ese es un llamado de atención importante que está en contra de la disposición de los «decretos leyes represivos».

La creación de figuras delictivas y la amenaza de imponer una pena es una actividad típicamente pública del Estado, es la expresión de su máximo poder interno. No refleja el brazo armado del Estado, con respecto al individuo, una expresión mayor de potencia que una cláusula penal. Regula la conducta social de sus habitantes a través de una serie de valorizaciones que la misma Constitución determina.

En sus Declaraciones, Derechos y Garantías, la Constitución establece las condiciones que

debe tener cada cláusula penal. Tutela los valores más altos del individuo de una democracia.

Por eso, para que se cometa el delito, fundamentalmente se necesita la característica de la exterioridad. No hay delito interno, no hay delito de opinión; tiene que haber una acción o una omisión que lo provoque, y eso está bien protegido en el artículo 19 de la Carta Fundamental, cuando dice que «las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios». Este artículo me permite, como argentino, pensar como quiera, tener la ideología que quiera, utilizar cualquier idea, inclusive la extremista, mientras no la practique por medio de hechos violentos, por fraude o engaño. Ahí está el límite que la Constitución pone al legislador y al mismo Estado.

Inmediatamente tiene otro gran principio de reserva, que también forma parte de las garantías constitucionales, el artículo 18, que determina que «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso». *Nulla poena, nulla crimen sine lege*, principio básico de la legislación penal que hay que tener muy en cuenta para en el futuro no cometer los errores que se vinieron cometiendo, porque la ley que exige la Constitución debe ser —como ella lo manda— dictada por este Poder Legislativo y no por un simple decreto ley de un Poder Ejecutivo.

«Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe.» Otro principio de reserva de la Constitución Nacional de que nos habla el artículo 19. El derecho penal objetivo es el límite estricto de la facultad de reprimir. Por eso hay que buscar un derecho penal eficaz, que no sea ni muy fuerte ni muy débil.

En los distintos aspectos de la vida, el Estado sabe lo que tiene que proteger. Pero también se van produciendo distorsiones a través del mundo, y cuando estos principios se van dejando de lado, entonces el individuo deja de ser el verdadero bien defendido; ya no es el individuo el bien protegido, sino que pasa a serlo el Estado. Entonces estamos como en los regímenes totalitarios, como en la Alemania nazi o en la Rusia soviética, donde, además de penas dictadas con posterioridad al hecho del proceso, también se utiliza la analogía como sistema para aplicar penas. Nosotros sabemos que nuestro Código Penal, nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia impiden que por analogía se condene a cualquier individuo, analogía que puede establecerse a través de una ley semejante, (analogía legal) o a través de una ley que, sin serlo, analógicamente lo parece, como en el caso son estos decretos leyes que, evidentemente, es un tipo de analogía jurídica.

La Constitución de 1949, tildada por muchos de totalitaria, sin embargo llevó en su artículo 29 la expresión estable de que «los jueces no podrán ampliar por analogía las incriminaciones legales», porque en la República, decididamente hay conciencia clara con respecto a cómo deben ser las normas penales y con respecto al principio de reserva que tiene cada ciudadano.

El derecho penal está referido a las libertades individuales. Por eso es tan importante; por eso cada cláusula pone el dedo en la llaga, y por eso debemos meditar en profundidad antes de dictar una ley, por menos sospechosa que sea, o un simple artículo.

Además, desde hace cincuenta años a estos principios fundamentales de la ley penal se les ha agregado otro principio claro que sostiene todos los tratadistas, el de la «tipicidad» y el adecuamiento de la norma a la conducta delictiva. No se puede dictar normas que no respondan a un tipo justo y exacto que permita condenar al individuo, cuando encuadre en la figura.

El legislador debe estar, entonces, atento a estos principios de la jurisprudencia y de la doctrina que hacen a las libertades esenciales del hombre, para luego dictar con tranquilidad, con seriedad y tras mucho estudio, las cláusulas indispensables a fin de que en manera alguna se coarten los derechos del ciudadano.

Dije recién que cuando el valor protegido por el derecho no es el individuo, pasa a serlo el Estado. Entonces viene la distorsión de los delitos y de las penas, y sucede lo que en el caso actual en que por una alarma, un tumulto o un desorden, se castiga a un individuo hasta con quince años de prisión, en tanto que los delitos más graves, que atañen a la esencia de la vida y de la moral argentinas, están descuidados dentro del Código Penal. Esto es influencia de la posguerra.

Los regímenes más democráticos del mundo también han aprovechado la coyuntura para dar a sus gobiernos democráticos sostenes de fuerza, representados por leyes de represión, leyes bien dictadas, ya que apuntaban al problema del comunismo o de otros extremismos. Pero incluso en los Estados Unidos, donde el comunismo sí es un problema, existe la independencia del individuo y de su forma de pensar. ¿Y por qué es así? Porque todos estos sistemas extremistas no pueden ser anulados por un código penal ni por una ley, ya que ello corre por cuenta del resorte administrativo. En Norteamérica los comunistas tienen la obligación de indicar «correspondencia comunista», y utilizar el correo para sus comunicaciones y piensan dentro de su libertad con todo el derecho que les da la Constitución; hasta tanto no obren en forma engañosa, violenta o fraudulenta, tienen el derecho a la libertad, por cuanto no existe allí el delito de opinión.

Los vientos de estos regímenes totalitarios aún no se han disipado ni en Norteamérica ni en Sudamérica, y a veces influyen en nuestra legislación. Este hecho lo reconocemos incluso durante los años en que sentados aquí tuvimos la responsabilidad de dar algunas leyes que implicaban la represión de determinados delitos; pero esas leyes deben ser —y lo fueron— de carácter provisional, por dos o tres años, para terminar con una etapa de terrorismo. Por ello, hay que tener mucho cuidado cuando se cambia fundamentalmente la estructura de un código, porque de ese modo las normas reciben aplicación en todo el país, como corresponde de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución, a través de los propios órganos provinciales.

Lo que los gobiernos defacto han buscado con la represión de estos delitos fue tener la posibilidad de quitar a las provincias el derecho de juzgarlos, para convertirlos a todos en delitos federales. Esa es la trampa que existe en muchas leyes, y que debemos dejar de lado.

La pena debe surgir como una función necesaria de defensa social. No hay que hacer ilusiones las garantías constitucionales, y tampoco hay que pedirle al Código Penal prosperidad, ya que ésta debe desarrollarse a través de otras leyes fundamentales que corresponde al Poder Legislativo adoptar. Cuando las protestas económicas constantes de distintos sectores son justas, hay que aceptarlas e, incluso, alentarlas; en ninguna forma reprimirlas. Hay que buscar las soluciones sociales indispensables; dar solución económica para que entonces distintos sectores, reunidos a través de sus propias instituciones, realicen la protesta como corresponde, y como lo permite la Constitución.

Pero no busquemos, a través del Código Penal, la creación de figuras peligrosas, como, por ejemplo, cuando se establece la figura de la «agrupación ilícita», muy en el aire —luego la voy a analizar—, por cuanto no se aclara que ese «hecho de violencia contra las personas o contra las cosas» que pueda ser ejecutado por un gremio estudiantil u obrero, legítimamente, esté exento de castigo.

Todo esto hay que analizarlo, porque nosotros legislamos, pero los gobiernos se suceden en la República, y los que hoy son mayoría deben pensar que están legislando para que gobiernen los que hoy son opositores, y no dar la posibilidad de que otro gobierno fuerte falte el respeto a todos los derechos ciudadanos.

El hombre que tiene ideales políticos no va a dejar de luchar, ni siquiera ante la pena de muerte. Jiménez de Asúa recuerda que un escritor italiano decía: Mis hijos tienen muchas cabezas —los hijos eran las ideas—. Me matarán a mí, pero seguirán mis ideas.

Los hombres que actuamos en política sabemos que contra la convicción no vale ninguna amenaza, ni la pena de muerte. Por lo tanto, no busquemos desarraigar los extremismos a través de una ley penal, porque a veces la apli-

cación puede ser injusta. La mayoría de las veces va a ser injusta, y la gente con menos posibilidades económicas, la gente más abandonada, aquella que ni siquiera a veces puede recurrir al abogado, es la que se ve perjudicada por expresiones imprecisas de este tipo que se incorporan al Código Penal.

Entramos al problema de los decretos leyes penales, que distorsionan la vida de la República. No sé cómo pueden actuar nuestros jueces a través del cúmulo de las distintas expresiones que se van sucediendo en estos decretos, que no voy a mencionar porque han sido citados por el señor diputado Bravo. Algunos hacen mención de «delincuencia asociada organizada», expresiones nuevas en la jurisprudencia, en la doctrina y en la ley de nuestro código.

En una de esas tandas de derogaciones de artículos se llega al caso, que subsiste, de que se derogó el artículo 200 del Código Penal sin que se lo reemplace, quedando, por lo tanto, sin pena en la República, desde hace varios meses, el delito de envenenamiento de aguas o de medicinas. Vale decir, que un farmacéutico que vende una medicina que no corresponde —que a veces en vez de mil pesos le cuesta trescientos— queda sin sanción en nuestro Código.

No se puede legislar a través de decretos leyes, ni injertando una serie de artículos que reprimen veinte o treinta delitos, sino que debe hacérselo en forma orgánica, teniendo en cuenta el esquema total del Código.

La mayoría va a cometer en este instante un error, al introducir en forma un poco ligera todos estos puntos que ha enunciado. Lo estamos viendo a través de lo sucedido con los decretos leyes. Hay superposiciones constantes. Recién el señor diputado Bravo leyó seis u ocho decretos de represión del comunismo y del peronismo; se los utilizaba con sentido psicológico. Cada hombre fuerte que estaba detrás del gobierno sentía la necesidad de reprimir y de lanzar un nuevo decreto, y así se fueron superponiendo. También así quedaron sin sanción algunos delitos fundamentales.

Entiendo que no es la época ideal para que vengamos a decir que nuestro proyecto, al que consideramos más orgánico, es el mejor, porque deroga lisa y llanamente las leyes represivas y propone entrar al estudio profundo del Código. No lo es porque esta misma Cámara tuvo que tratar los temas de los guerrilleros y de los atentados, y vivió un clima especial.

Pero es inexacto, también, que en el Código actual no haya sanción para estos casos. El Código actual es bueno. Voy a leer luego algunas opiniones de Soler y de otros, como Jiménez de Asúa y el mismo Ricardo Núñez. Protege el orden jurídico. Además, quedan leyes represivas de todo tipo, como la ley 13.224 —a través de la que se dictó el plan Conintes— la ley de la SIDE y una serie de leyes de tipo represivo que no han sido derogadas. Vale decir, que el orden

jurídico, el bien público y el Estado quedan sobremedida defendidos. No hay necesidad de crear otras figuras laterales. Sobran las que actualmente tenemos. Además, es necesario entrar a una sincera unificación del Código Penal, porque los decretos leyes represivos hicieron que una subversión tal reine en este instante en el derecho penal que solamente la drasticidad nos dará la posibilidad de reencontrarnos con los viejos conceptos de nuestro Código Penal y con una legislación acorde con la jerarquía de nuestros penalistas y con los conocimientos que la cátedra enseña todos los días en las distintas universidades.

El delito de opinión, cuya abolición en su mensaje propugnó el doctor Ricardo Núñez, le permitió, sin embargo a éste, decir que la exclusión del Partido Comunista de la actividad política trajo otra forma de sanción: al uso de emblemas y símbolos. «Ya no se castigaba —dice— por enseñar, sino por simples manifestaciones partidarias de una doctrina. Considero que esas, son formas indebidas de castigar una opinión, y he propugnado su supresión en defensa de la República, en defensa del saber y de la cultura del pueblo. Con esto yo no propugno ni pretendo que el Estado permanezca impasible frente a la acción nociva de los totalitarismos, vengan de donde vinieren, porque distingo claramente lo que es aprender y enseñar de lo que es manifestación de ideologías mediante fraude, por ejemplo, la infiltración fraudulenta en la enseñanza, de las doctrinas autoritarias o de lo que es acción violenta ejecutiva de las ideas. El fraude y la violencia, no sólo van contra la Constitución, sino contra toda regulación del orden, pero éste es un resorte administrativo y no un resorte penal. Yo les puedo asegurar a ustedes que el Estado no va a quedar desguarnecido porque el Congreso sancione una ley derogatoria o que saque la duda sobre la vigencia de este tipo de decretos leyes, porque esas ideas extremistas pueden tener varios tipos de manifestación.»

Lo mismo dice Soler cuando se le pregunta concretamente si cree que derogándose todas las leyes represivas el Estado quedaría indefenso. Y son muchos los autores que señalan que el Código vigente puede ser mejorado, pero que fundamentalmente él es la única arma represiva que nos debe regir.

Además, no permitamos que por no aplicar otras disposiciones de la Constitución, como el estado de sitio, establezcamos algo así como un estado de sitio para algunas personas. En determinado momento si el gobierno se ve obligado a establecer el estado de sitio, tendrá en las instituciones que lo integran, como en este Parlamento, el aval correspondiente para suspender las garantías. Pero no establezcamos a través de la reforma de un código, realizada apresuradamente, una situación permanente de tal naturaleza. Cuando sea necesario, sería prefe-

rible aplicar el estado de sitio, si es que ello permite el juego de leyes más benévolas y más acordes con nuestra tradición y nuestra doctrina, usando por excepción la suspensión de garantías.

Yo me pregunto si a veces no estamos en el juego de palabras. Derogamos ahora los decretos leyes, que, como se dijo recién, pueden ser declarados inválidos por la justicia, y así fue hecho en muchas provincias y juzgados nacionales, porque la Constitución exige una ley con todas las condiciones establecidas por el artículo 68 y subsiguientes de la misma. Pero yo me pregunto si se está en la derogación de los «decretos represivos» para dictar luego «leyes represivas». Los sé francos y sinceros a los señores diputados, pero yo también he sido oficialista y conozco que la apelación a la necesidad que trae muchas veces el Poder Ejecutivo, puede llevar, en un arranque de fe y de confianza, a cometer algunos errores.

En el análisis tranquilo de la discusión en particular señalaré mis dudas a lo largo de distintos artículos.

El Código Penal que nos rige contiene todas las figuras jurídicas que razonablemente debe contener una ley de fondo.

Considero que este debate versará, más que sobre el tema específico de la reforma parcial del Código Penal, sobre temas políticos respecto de nuestro pasado, de la legislación represiva anterior, cuando lo que debemos propiciar y exigir de este Parlamento es que dicte leyes para el futuro, con las nuevas figuras delictivas que los nuevos tipos de delito van exigiendo; porque no debemos olvidar que nuestro Código data de 1921.

Yo voy a proponer, concretamente, que luego de la derogación de las leyes represivas, para que nadie dude de que todos los intereses jurídicos del Estado serán bien protegidos, sin descuidar la necesidad del mantenimiento del orden público, la Honorable Cámara solicite al Poder Ejecutivo la realización de sesiones extraordinarias a los efectos de tratar el nuevo Código Penal argentino, cuyo proyecto fuera enviado por el Poder Ejecutivo en 1960, y cuyo autor es el doctor Sebastián Soler.

Este proyecto tiene dos años de discusión parlamentaria, y fue analizado por una comisión integrada, incluso, con hombres que entonces estaban en la oposición, como los señores Carlos Perette, hoy vicepresidente de la República; Lavalle, actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires; Carlos Becerra y Mario Roberto, actual diputado nacional. La comisión era presidida por el distinguido ex diputado Bulit Goñi.

La Comisión de Legislación Penal convocó entonces a miembros conspicuos de la universidad nacional y estuvo, en rigor, integrada por un grupo de hombres deseosos de enseñar y aprender. El problema se llevó, incluso, a la radio, a la televisión y a los diarios. Pienso que

no debe haber un trabajo mejor hecho por una comisión parlamentaria en los últimos años. Dieron su opinión penalistas de la talla de Enrique Aftalión, Luis Jiménez de Asúa, Ricardo C. Núñez, Ricardo Levene, Isidoro Debenedetti, Francisco Laplaza, Nerio Rojas, Guillermo J. Ouviñas, Guillermo Valerga Aráoz, Roberto Terrán Lomas, Luis Argüello, Luis C. Cabral, Jorge M. Gallegos, Mario I. Chichizzola, Juan Carlos Cisneros, Alberto S. Millán, Tiburcio Alvarez Prado, Alfredo Orgaz, Horacio S. Maldonado y Salvador M. Losada, fiscal de la justicia nacional.

Además han sido consultadas distintas instituciones, como el Colegio de Abogados de La Plata, la Universidad Nacional del Noroeste, la Policía Federal, la Universidad del Salvador, la Universidad Nacional de Córdoba, a través de su Facultad de Ciencias Médicas, y la Corporación de Abogados Católicos.

A disposición de los estudiosos y de los señores diputados existe en la Cámara la «Síntesis de las observaciones formuladas y de las modificaciones propuestas en encuestas realizadas sobre el proyecto de Código Penal del Poder Ejecutivo», de 1960, tanto en lo referente a la parte general como a la parte especial. Allí figuran los comentarios efectuados por cada una de estas instituciones y por cada uno de los penalistas cuya opinión fuera recabada. Figura también la contestación de Sebastián Soler, y la discusión habida en el seno de la comisión, porque se tomó versión taquigráfica de sus reuniones. Están allí, en definitiva, dos años de trabajo de una comisión.

Por eso, entiendo que hace a la sistemática, a la seriedad del Parlamento, a la exigencia misma de la República, que a veces nos exige la reforma al Código Penal —como en los casos de corrupción habidos en Florencio Varela, a mediados del año anterior, o en el caso actual de los guerrilleros—, el tratamiento de esa iniciativa, cuyo trabajo ha sido hecho en gran parte.

Si nosotros, inmediatamente después de derogar las leyes represivas fijamos fecha para discutir el proyecto de nuevo código, este año o el que viene, habremos cumplido fundamentalmente, no sólo con el pueblo, sino también con todos los bienes jurídicos que la opinión está pidiendo que actualicemos en su defensa. Porque yo entiendo que las penas tienen, sí, importancia, cuando están niveladas, equilibradas, cuando no existe una distorsión entre las penas y los delitos, como ocurre en la actualidad. Volvemos así, como dije recién, a nuestro viejo sentido del derecho penal, de aplicar al delincuente las normas más benignas y de actualizarlas como corresponde, es decir, luego de un debate pura y exclusivamente específico, y no como el de esta sesión, que indudablemente degenerará en uno de tipo político, o, por lo menos, tendrá un gran sentido político.

Habiendo ya informado en general nuestro despacho, quiero hacer algunas referencias con respecto a las medidas legales que creemos de urgencia. En nuestro dictamen, establecemos la necesidad de seguir legislando sobre el cheque, porque la derogación de la legislación actual en esa materia significaría la única discontinuidad jurídica producida por la sanción, y nosotros somos decididos partidarios de la continuidad jurídica. Por eso extrajimos del propio código de Soler, que es el que oportunamente considerará la Cámara, las disposiciones referentes al cheque, que son, en definitiva, las que sirvieron también de base para el proyecto existente en la actualidad y para el que presentó el Poder Ejecutivo.

Pero hay algunas figuras delictivas algo peligrosas. «Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años —dice el proyecto del Poder Ejecutivo, mientras que el proyecto del sector del radicalismo del pueblo habla de seis meses a tres años— los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieren por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas, por el solo hecho de su participación.» Se trata de una figura que no es típica, que no es adecuada y que no se puede aplicar. El caso está contemplado en el artículo 210 del Código Penal, sobre la asociación ilícita, disposición que rige actualmente y que resulta más amplia e integra mejor la figura. Con la norma proyectada podría entenderse que cualquier huelga sindical o estudiantil significaría el ejercicio de violencias contra las personas o contra las cosas.

Sigue diciendo el dictamen de mayoría que también será reprimido «el que públicamente instigare o participare en actos tendientes a que se aplique un tratamiento desigual a las personas, fundado en motivos religiosos o raciales». No estamos en contra de la aplicación de una norma de este tipo; estamos en contra del momento en que se la quiere sancionar y también en contra de la sistemática utilizada.

Tengo sobre mi banca la declaración de las Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial, a la cual ha adherido el Estado argentino. Oportunamente pediré su inserción porque nuestro bloque está completamente de acuerdo con los conceptos que en ella se expresan.

Lo que quiero destacar es que la irrupción masiva de todas las figuras que estoy comentando en el Código Penal, tal como se proyecta ahora, es decir, como en la época de los decretos leyes, en que eran injertadas veinte o treinta disposiciones en el código, no corresponde a esta altura de los acontecimientos, porque no existen hechos suficientemente graves como para justificarla.

Además, el tercer inciso proyectado en el artículo 39 del dictamen de mayoría tiene su base en el decreto 788/63, ya que es reproducción casi textual de su artículo 20, inciso 2º. Eso me induce a pensar que estamos derogando los decretos represivos, pero que al mismo tiempo estamos sancionando algunas disposiciones de represión que son excesivas para las necesidades actuales del país.

Quiero aclarar también otro aspecto. Hace unos momentos el señor diputado Bravo, con su característica fogosidad, acusó casi sin excepciones a la administración pública argentina. Es lo que nos ocurre a todos cuando no hemos sido gobierno. Pero es peligroso realizar incriminaciones sin hacer la salvedad de que la gran mayoría —yo diría el 95 por ciento— de nuestros hombres públicos, de la gente que anduvo por la administración, pasó por el barro sin embarrarse y tiene las manos limpias y los bolsillos vacíos.

Yo recuerdo cuando se crearon comisiones investigadoras, y lo recuerdo para que sirva de antecedente, encargadas de examinar el enriquecimiento ilícito de algunos diputados, a los que luego de dos, tres y más años de cárcel hoy los veo en mi pueblo, trabajando más que antes, en la medicina u otras tareas, a fin de poder vivir. Son injusticias de un pasado que yo he integrado, pero que espero nos sirva de experiencia, porque por dos o tres hombres que roban en la administración pública no puede llevarse a cabo una política de bajeza, de un adversario que castiga y castiga sin dar tregua y trae, como consecuencia, un estado de ánimo que hace aparecer a todos los que estuvieron antes que ellos, como representantes del peculado, del cohecho y la vergüenza.

Han transcurrido ocho o diez meses de este gobierno; existen leyes represivas, y nosotros, como el que más, queremos que caigan los culpables. No hay ningún aspecto en el que nosotros no queramos ver a los ladrones fuera de la prisión, sea respecto al petróleo o a cualquier otro ámbito. Defendemos una política petrolera de autoabastecimiento, no a los contratos ni a los que son acusados de haber robado. Lo habrán hecho. Nos interesa la política seria, porque tras de un gobierno se ha jugado mucha gente decente. Hubo gobiernos como el de la provincia de Buenos Aires, que también integraron el señor presidente y el señor diputado Bravo desde la oposición —porque entiendo que un gobierno está compuesto también por los opositores— que fue ejemplo de realización y honestidad. Ese es el concepto del tipo de democracia que yo quiero para mi país, y lo señalo aquí con un poco de dolor, al oír cargos indiscriminados.

Cuando se investigó el asunto del Pájaro Blanco se produjo una situación que puedo calificar de patética y donde nada hubo deshonesto. Por eso me opongo en este instante a que dictemos

leyes como ésta. En el proyecto sobre enriquecimiento ilícito que envía el Poder Ejecutivo, y cuyas cualidades destacó el señor diputado Bravo, se hace la inversión de la prueba, vale decir, que si un ciudadano cualquiera denuncia que un funcionario se ha enriquecido sin causa, éste debe demostrar de dónde viene ese dinero. Y yo digo por la experiencia, que del escándalo contra ese ciudadano se enterará todo el mundo, pero de la aclaración posterior de que ha obtenido su dinero por medios honestos, se enterarán unos pocos.

Para que en la República haya democracia de conciencia debe existir un mutuo respeto, que se deben entre sí los distintos sectores. Respeto y admiración debe existir entre nosotros, porque, en definitiva, cada uno sabe con qué sacrificios está actuando por la imposición de una idea. Cada uno cree que la suya es la mejor, pero lo menos que pueden exigir los luchadores, los políticos, es el respeto por sus ideas y para con la conducta de cada uno.

Según este proyecto, al hombre millonario, al que está en las grandes alturas de la economía argentina, fácil le será, si es que ha robado, demostrar que sus ganancias las ha obtenido de sus grandes empresas, porque todavía nuestra ley de monopolio no ha determinado cuándo son lícitas o ilícitas las grandes estructuras o los poderes monopólicos de nuestra patria. Y quienes integran varias compañías, ¿qué problema tienen en este caso?

Pero la inversión de la prueba se vuelve dura para el hombre común, para el ciudadano que ha sido titulado de ladrón, y luego del escándalo difícil le será mostrar su decencia, aunque la pruebe.

Para imponer este sistema, que no lo eludo —porque entiendo que el hombre que se dedica a la política o ejerce una función pública tiene el doble deber de ser ciudadano y de servir a sus ciudadanos, y el Estado está para servir a los ciudadanos—, habría que establecer antes que nada la obligatoriedad del derecho a réplica, respecto del cual el señor diputado Domingorena presentó un proyecto en años anteriores, al que se opuso la oposición de entonces. El derecho a réplica es el derecho que tiene el ciudadano injuriado a que se publique gratuitamente en el diario, o se propale por la radio por la que se difundió la injuria, la aclaración correspondiente si resulta ser un ciudadano digno.

Estoy de acuerdo con la exigencia de que se requiera de quienes ejercen funciones públicas, una y otra vez, la rendición de cuentas. Pero antes que castigar hay que preservar a la administración pública. Este es un país de sospechados, y la gente cree que todos los que llegan al gobierno, cualquiera que sea el partido político al que pertenezcan, están ahí para enriquecerse. Sobre este aspecto voy a llamar a los señores diputados a la reflexión cuando se trate en particular.

Reitero que la parte fundamental de este debate será el de la discusión en particular y yo desearía la tranquilidad y la expresión concreta de los distintos bloques, dejando de lado cualquier discusión política.

Los delitos contra la voluntad popular han sido dejados de lado; no obstante que el Poder Ejecutivo los remitió, la mayoría los desechó porque no los considera importantes. Como sostiene Soler, si algo puede ser importante en este instante es el delito de estelionato, referidos a esas grandes estafas que se hacen con las ventas de tierras y edificios pignorados contra las que hay poca protección en nuestro Código Penal. Todo lo demás puede quedar de lado, en beneficio de la sistemática.

Con respecto al enriquecimiento ilícito quiero agregar que se va a cometer un error, que señalo a los efectos de que la mayoría reflexione. Se reforman las penas de los artículos 256 y 257, con lo cual vamos a llegar a lo siguiente:

El artículo 256 dice: «Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el funcionario público que, por sí o por persona interpuesta, recibiére dinero o cualquier otra dádiva o aceptase una promesa directa o indirecta para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.» El artículo 258 dispone: «Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que directa o indirectamente diere u ofreciera dádivas a un funcionario público para que haga u omita un acto relativo a sus funciones. Si la dádiva se hiciera u ofreciera a un juez, la pena será de un mes a cuatro años de prisión. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial, en el primer caso, por seis meses a seis años y, en el segundo, por uno a diez años.» Y el artículo 259 establece: «Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiera dádivas que le fueren presentadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.»

Vale decir que los artículos 256, 258 y 259 se superponen con los artículos que ahora se in-jertan: 268¹, 268² y 268³. Para arreglarlo, no encontraron mejor forma que elevar las penas del artículo 256, quedando tres o cuatro delitos castigados en igual forma, cuando lo que correspondía era derogar algunos para imponer otros. Toda vez que se hace una reforma de este tipo, cuando son treinta y cuatro o treinta y cinco los delitos que hay que considerar, ocurren estas cosas y se sufren todas estas superposiciones.

Para terminar, quiero decir que lo más importante del Código Penal está reflejado en el resguardo de las libertades ciudadanas, de los derechos, declaraciones y garantías, según la expresión de nuestra Constitución. Solamente con la verdad política y la convicción de que únicamente todos juntos, sin distinción de hijos

y entenados y con el más profundo respeto mutuo podremos lograr la grandeza que nuestra patria requiere, podemos encarar la solución de estos problemas. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig).—Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

Sr. Bilbao.—Señor presidente: el despacho que informo es coincidente con el despacho de la mayoría de las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales en cuanto por ambos se derogan normas represivas creadas por decretos leyes y decretos dictados por gobiernos defacto, y se introducen reformas en el Código Penal para regular la punibilidad de las infracciones que atacan directa e inmediatamente la seguridad de los derechos naturales y sociales de los individuos.

Coincide también nuestro despacho con otros dictámenes en minoría en el primer aspecto, de manera que sobre la materia —como ya lo han destacado otros oradores antes que yo— no se han producido discrepancias fundamentales.

No obstante estas coincidencias, hemos debido formular con el señor diputado Belgrano Rawson un despacho independiente, porque nos ha parecido de mejor técnica legislativa en el ordenamiento de las normas enunciar primero las que modifican el Código Penal y posteriormente señalar las normas penales que se derogan como consecuencia de las primeras y derogar también las normas penales introducidas por vía de los decretos leyes y decretos. De no haber mediado esta discrepancia, que es más de forma pero que nosotros hemos considerado importante, hubiera bastado señalar nuestra divergencia con el despacho de la mayoría consistente en la supresión del artículo 268⁴ y en sustituir el artículo 302 del Código Penal por la norma estructurada en el anteproyecto de que es autor el doctor Sebastián Soler.

Expresado así, de modo esquemático, el contenido de nuestro despacho, voy a entrar a considerar el tema de los decretos leyes y decretos represivos en cuya derogación coinciden todos los dictámenes sin excepción.

Conviene advertir que no sólo se derogan decretos leyes y decretos penales emanados de gobiernos defacto, sino también algunas disposiciones legales, como los artículos 8º, 9º, 11, 12, incisos a), b) y e), 15 y 17, segunda parte, de la ley 13.985, sobre espionaje y sabotaje, porque en ellos, como en muchos de los decretos leyes y decretos penales que se enumeran en el artículo 10 del despacho que informo, se instituye y reprime el llamado delito de opinión.

Con respecto a este delito me voy a permitir leer parcialmente lo manifestado por el doctor Ricardo C. Núñez al evacuar la consulta que le formulara el ministro del Interior. Señala allí que «la licitud de todas las opiniones es algo inherente al sistema de gobierno popular. Este exige que, aunque en forma indirecta, el pueblo decida sobre las cuestiones y objetivos que

constituyen un programa de gobierno. Para esto son indefectibles la libre información sobre teorías o doctrinas políticas, económicas, etcétera, y la libre expresión del pensamiento de los individuos sobre ellas. Es un deber de los gobernantes posibilitar este desiderátum, respetando y fomentando la incolumidad de los derechos de enseñar y aprender, garantías indispensables para que el pueblo decida consciente y razonablemente sobre las cuestiones y objetivos del gobierno».

El mismo penalista, después de señalar la dura experiencia de los argentinos, con respecto a este tema, termina diciendo: «Pero lo que me interesa subrayar es que ese instrumento de gobierno no curó vicios, sino que engendró muchos, tan graves como la sustitución de la conciencia ciudadana por un servilismo oportunista, y no preservó contra los males que se decía combatir. La dirección coercitiva penal de la opinión del país puede disimular las ideas contrarias al pensamiento oficial, puede impedir su exteriorización y detener la acción que inspiren, pero no puede aniquilarlas o corregirlas. La historia es maestra en este punto.»

Estamos con la derogación de toda norma que consagre el delito de opinión y que lo reprima con penas, sin temor a fomentar la libre acción de los extremismos políticos, económicos, religiosos o filosóficos, que constituyen un problema totalmente distinto.

No se trata de consagrar la libertad de acción de los extremismos, sino la libertad de opinión, que es un problema totalmente distinto.

La necesidad de abolir el delito de opinión no es el único motivo por el cual deben derogarse los decretos leyes y los decretos sobre materia penal que se mencionan en el artículo 10 de nuestro despacho. Se trata de decretos leyes y de decretos muy especiales por la materia que tratan y porque nuestro régimen constitucional contiene disposiciones que limitan la potestad represiva del Estado, para garantizar los derechos naturales y sociales de los individuos. Los artículos 67, inciso 11, y 108 de nuestra Carta Magna confieren al Congreso de la Nación la facultad exclusiva de dictar el Código Penal y las leyes que lo complementan; es decir que el derecho penal común, que es parte del derecho penal sustantivo, sólo puede ser establecido por el Poder Legislativo.

Esta garantía, llamada de legalidad, trasciende del texto del artículo 18 de la Constitución, que dispone que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. En consecuencia, tanto la infracción penal como su pena son materia privativa del Poder Legislativo y extrañas a la facultad ejecutiva. Es necesario que exista una ley que califique de delictuoso un hecho y que establezca una sanción al violador. El Poder Ejecutivo no puede crear delitos ni sancionar penas, y el Poder Judicial no puede aplicar estas últimas sin que exista una ley que

las haya establecido antes de la ejecución del hecho.

Esta garantía de legalidad se asienta en el principio de la división de los poderes del gobierno, principio fundamental del derecho público y que es el carácter más saliente que permite distinguir los gobiernos libres de los gobiernos despóticos.

Alguien ha dicho que la libertad no existe en un pueblo donde el poder que ejecuta la ley tiene el derecho de transformar en ley toda su voluntad. La atribución de dictar la ley penal debe estar al margen del arbitrio circunstancial del Poder Ejecutivo. En consecuencia, toda norma penal que no haya sido sancionada por los órganos legislativos no puede ser reconocida como fuente válida de infracciones y de penas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta el año 1947, negó al Poder Ejecutivo *de facto* facultades legislativas penales, y lo hizo por ser contrario al artículo 18 de la Constitución. Posteriormente, modificada la constitución del alto cuerpo con el propósito de que respondiera a las finalidades políticas del Poder Ejecutivo, declaró la validez de los decretos leyes penales y su vigencia después del período *de facto*, sin necesidad de la ratificación del Congreso. Se pretendió fundamentar esta doctrina argumentando que el requisito de la ley anterior que establece el artículo 18 de la Constitución queda cumplido mediante una norma penal emitida por el Poder Ejecutivo antes del hecho de la causa. Se desconoció de esta manera el sentido histórico del principio de defensa de los gobernados, tanto respecto del Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, porque, como lo declara la doctrina unánime, la vigencia de la garantía de legalidad penal en períodos *de facto* encuentra su fundamento jurídico en la estructura republicana que continúa teniendo el Poder Judicial; lo que implica que con la Corte Suprema a la cabeza, en esos períodos *de facto* subsiste el Poder Judicial como garantía de las libertades de los gobernados frente al Poder Ejecutivo.

La garantía de legalidad penal históricamente tiende a proteger al individuo frente a los poderes Ejecutivo y Judicial, entregando la facultad legislativa penal a un tercer poder que sea ajeno a las actividades de ejecución y de aplicación de las leyes, para interponer —como dice Nuñez—, como seguridad, una regla objetiva de decisión que determine los hechos punibles y las penas que les corresponden.

Por lo demás, cualesquiera hayan sido las razones de necesidad en que se fundamentaron los decretos leyes y los decretos penales, no pueden ya invocarse pasado el período *de facto*, cuando debemos esforzarnos en fortalecer la normalidad institucional mediante la vigencia plena de la Constitución en un aspecto tan im-

portante como el que estamos considerando. Esto debe ser así, y con mayor razón si se advierte que la seguridad exterior y la paz interior de la Nación no quedarán desamparadas.

Las penas establecidas por el Código Penal constituyen una defensa suficiente, a las que se adicionan las establecidas en el Código de Justicia Militar y en la ley 13.985, como lo demuestra acabadamente el doctor Núñez al evacuar la consulta del señor ministro del Interior a la que hice referencia con anterioridad.

Las reformas al Código Penal mencionadas en el anteproyecto del Poder Ejecutivo originaron discrepancias fundamentales en el seno de las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales que las estudiaron. No fueron pocos los que, en definitiva, juzgaron inconveniente y hasta peligroso introducir modificaciones parciales en el Código Penal y que, por lo tanto, las proyectadas por el Poder Ejecutivo debían ser postergadas para cuando el Congreso considerara la conveniencia o no de la reforma general del Código Penal.

Sobre la cuestión fueron consultados varios distinguidos penalistas que nos hicieron el honor de concurrir al seno de la Comisión de Legislación Penal para pronunciarse sobre el tema. Escuchamos así las ilustradas exposiciones que evacuando la consulta hicieron los doctores Luis Jiménez de Asúa, Sebastián Soler, Francisco P. Laplaza y Ricardo C. Nuñez. Todos ellos coincidieron en hacer un distinguo esencial para resolver con acierto este problema, discriminando el aspecto técnico y el aspecto político. Desde el primer punto de vista estimaron que toda reforma parcial debía realizarse con extrema cautela, para evitar que el conjunto perdiera la orientación esencial que lo inspira. Desde el segundo punto de vista, algunos omitieron expresarse, en tanto que otros estimaron que la oportunidad y conveniencia de las reformas propiciadas es una cuestión esencialmente política y que era al legislador a quien competía hacerse juicio y proceder en consecuencia.

En el despacho que informo se aceptan sólo algunas de las reformas al Código Penal propiciadas en el proyecto del Poder Ejecutivo. Sin dejar de apreciar que las leyes penales no resuelven por sí solas los problemas políticos, sociales, económicos y éticos, y que el establecer penas o hacerlas más severas no es suficiente para extirpar la delincuencia, hemos aceptado como conclusión válida, la de que siempre una ley penal que califique un hecho como delictuoso y establezca una pena tiene un valor de prevención general que contribuye a evitar que muchos delincan. Esta con usión, por otra parte, es la que convalida racionalmente la legislación penal, lo que no implica desconocer que sean necesarias otras medidas, y entre ellas, primordialmente, la acción preventiva policial por parte del Estado.

En resumen, la necesidad y la conveniencia de introducir reformas parciales al Código Penal, no obstante reconocer que nuestro código es apto para reglar las sanciones a que se hacen acreedores los delinquentes, es una apreciación de índole esencialmente política que debemos hacer como integrantes de esta Honorable Cámara, con propósito levantado, sin especulaciones de tipo partidista e inspirados por la preocupación de contribuir en alguna medida a acrecentar la protección de los derechos naturales y sociales de los gobernados y a preservar el orden público.

En el despacho que informo, por otro lado, las modificaciones que se introducen al Código Penal no cambian su orientación doctrinaria ni alteran los principios que lo inspiran. Si la Honorable Cámara acepta esas reformas a nuestro Código Penal, éste continuará siendo expresión del derecho penal sustantivo común, inspirado en el principio de culpabilidad y en sistema de las penas paralelas, porque las reformas propuestas —a algunas de las cuales me referiré de inmediato para subrayar su significación— persiguen el propósito de adecuar nuestra legislación penal a una realidad social que no fue prevista, ni pudo serlo, hace más de cuarenta años, cuando fue sancionada.

En el artículo 1º del despacho que informo se incorpora al capítulo 5º, del título «De los delitos contra el orden público» y bajo el epígrafe «Otros atentados contra el orden público», el artículo 213 bis. Los penalistas consultados, cuyos nombres ya he dado con anterioridad, cuando fueron interrogados sobre si el artículo 210 —que reprime con reclusión o prisión de un mes a cinco años al que tomare parte de una asociación o banda de tres o más personas, destinada a cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación— comprende o no a las agrupaciones permanentes o eventuales que tuvieran por finalidad el ejercicio de la violencia contra las personas o las cosas por el solo hecho de su participación, a qué se refiere el inciso 1º del artículo 213 bis de nuestro despacho, cuando fueron interrogados esos penalistas, repito, contestaron, en forma no muy categórica, diciendo que tal vez una justa interpretación del artículo 210 permitiría una respuesta afirmativa.

Es que en materia penal rige el principio que prohíbe aplicar la ley por analogía, principio derivado de la orientación liberal y humanista de nuestro derecho penal y de la garantía de legalidad que consagra el artículo 18 de la Constitución Nacional. Es necesario y urgente que en nuestro Código Penal exista una disposición inequívoca que establezca el carácter delictuoso de las agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tengan por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas y que impongan

penas a los que participen en ellas, por el solo hecho de participar.

Por la inexistencia de una disposición tan clara como ésta, porque no surge claramente que el artículo 210 comprenda las agrupaciones permanentes o eventuales a que refiere el artículo 213 bis del despacho y porque se ha respetado siempre el principio que prohíbe la aplicación analógica de la ley penal, los jueces han debido sobreseer o absolver a personas que, sin embargo, han atentado gravemente contra el orden público.

En el inciso 2º del artículo 213 bis, se reprime con prisión de seis meses a tres años al que públicamente instigare o participare en actos tendientes a que se aplique un tratamiento desigual a las personas fundado en motivos religiosos o raciales, disposición que creemos conveniente introducir en el Código Penal para proteger la libertad individual, la igualdad ante la ley y la libertad de culto, garantías consagradas por nuestra Constitución Nacional y violadas por un tipo de delincuencia que ha aflorado en nuestro medio social, principalmente alentado por extremistas foráneos. El genocidio, que en otras naciones ha tenido y tiene extrema gravedad, en nuestro medio social se viene manifestando, introduciendo un factor de disociación y de alteración del orden público que debe ser reprimido.

En el proyecto del Poder Ejecutivo se reprime la instigación, pero no la realización de actos tendientes a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases. Como se advierte, en el despacho que informo se ha suprimido la lucha de clases, porque podría dar lugar a la introducción de un nuevo delito de opinión, habida cuenta de que las doctrinas socialistas hacen un aspecto fundamental de la existencia de las clases y de las luchas entre las mismas. Reprimir la discriminación religiosa y racial, empleando esta denominación demasiado lata, que puede dar lugar a interpretaciones encontradas y también a abusos lamentables, no nos ha parecido prudente. Nos parece, en cambio, que el hecho inculminado debe ser concretado con precisión y hemos creído que ese hecho es la instigación o la acción que tiende a dar a las personas un trato desigual, fundado en motivos religiosos y raciales.

En el inciso 3º del artículo 213 bis se reprime a los que pública o privadamente instigaren a los militares o a las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar u otros deberes inherentes a su cargo. Es evidente que este tipo de instigación constituye un motivo de grave alteración del orden público, que no configura claramente la rebelión o la sedición, pero que constituye sí un tipo de actividad que propende a lo que en la jerga popular se denomina el «golpismo». Esto, es claro, sin desconocer el derecho que tenemos todos los habitantes de un país que

se da un régimen democrático y libre a reaccionar contra la opresión.

Las demás reformas parciales del Código Penal serán materia de consideración en el examen en particular. Pero estimo conveniente referirme en esta fundamentación en general al artículo 5º, por el que se incorporan al Código Penal, como capítulo IX bis del título «Delitos contra la administración pública», bajo el epígrafe «Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados», varias disposiciones coincidentes con el despacho de mayoría, que tienden a eliminar el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, por entender que no son suficientes las disposiciones que nuestro Código Penal contiene sobre cohecho, negociaciones incompatibles y prevaricato. Se encara así uno de los problemas que viene preocupando al país desde hace mucho tiempo y en pro de cuya solución se han presentado numerosas iniciativas al Congreso de la Nación, entre las cuales citaré el proyecto del señor diputado Corominas Segura, incorporado en el Diario de Sesiones, tomo III, página 73, año 1936; el del senador Landaburu, del año 1938; el del señor diputado Yadarola, del año 1948; el del Poder Ejecutivo, en carpeta desde 1960; el del diputado nacional Rojas, también en carpeta desde el año 1960; el del diputado nacional Perette, en carpeta desde el año 1960; el del senador Palacios, también en carpeta desde el año 1961; el del diputado Berra, en carpeta desde 1961; el proyecto del diputado Emilio Jofré, presentado en el actual período legislativo, etcétera.

También hay trabajos importantes, como el realizado por el Instituto de Estudios Legislativos, de la Federación de Colegios de Abogados, en carpeta desde 1941 y el proyecto del Instituto de Estudios Legislativos publicado en «La Nación» el 12 de marzo del corriente año.

Todas estas citas, fragmentarias desde luego, demuestran que el grave problema del enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos es de antigua data. Esto determinó que uno de los penalistas que nos hizo el honor de asesorarnos comentara, con aguda ironía, que la mejor manera de corregir este tipo de delincuencia era recomendando a los gobernantes extrema cautela y celo en el nombramiento de funcionarios y empleados...

Pero volvamos al despacho, para subrayar que en él se suprime el artículo 268⁴ del dictamen de la mayoría, cuyo texto es el siguiente: «Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario que debidamente requerido no justificare la procedencia de un aumento excesivo patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público.»

Se advierte que mediante este artículo se introduce en nuestra legislación penal el delito de sospecha, y que se lo reprime con una pena más

grave que la establecida contra el funcionario o empleado que admitiere dádivas que le fueran otorgadas en consideración a su función o empleo, y con pena igual a la que reprime al funcionario o empleado público que por sí o por persona interpuesta recibiera dinero o cualquiera otra dádiva, o aceptara una promesa directa o indirecta para hacer valer la influencia derivada de su cargo, o para el que, con fines de lucro, utilizara para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado, de los que haya tomado conocimiento por razón de su cargo.

Pero lo más grave no es la equiparación de penas para reprimir actos positivos delictuosos y la mera sospecha, sino que por vía del artículo 268⁴ se desconoce un principio que ha tenido acogida en nuestro derecho procesal penal desde 1889, año en que el Código de Procedimiento Penal de la Capital Federal implantó, con alcances de regla general, el principio *in dubio pro reo*, que se aceptó en forma indiscutida como una de las consecuencias de la orientación liberal y humanista de nuestro derecho penal.

Adviértase que bastaría un aumento excesivo patrimonial y la no justificación de su procedencia ante un requerimiento, para que se estime ya consumado el delito de sospecha, que se reprime con severidad, lo que importa tanto como validar la inversión de la prueba. Por ello mismo, otro principio tradicional de nuestro derecho penal sería vulnerar; el que consagra la presunción de inocencia de toda persona, que sólo puede ser destruido por prueba en contrario, prueba que debe ser aportada por la acusación, para obligar al reo a probar su inocencia, como única manera de evitar incurrir en el delito y en la sanción penal pertinente.

Además de estas razones, existen otras igualmente valederas que fundamentan la exclusión del artículo 268⁴. El delito de sospecha puede dar lugar a que se atente contra la libertad de las personas sospechadas en momentos en que se interrumpe la normalidad institucional del país por revoluciones o golpes de Estado. Las pasiones exacerbadas, en tales circunstancias, encontrarán, en el delito de sospecha, sin lugar a dudas, un instrumento muy eficiente para consumir persecuciones y venganzas, pues el aumento patrimonial del funcionario o empleado se calificará con ligereza de excesivo, y entonces procederá la represión, que no contribuirá por cierto a afianzar la justicia sino a dar expansión a los impulsos apasionados de los perseguidores.

Para terminar, debo hacer una breve referencia a la modificación del artículo 302 del Código Penal, proyectada en el artículo 9º de nuestro despacho, que adopta la forma que contiene el anteproyecto del doctor Soler de reforma integral del Código Penal. No nos ha parecido justo que, en el dictamen de mayoría, la exención de pena en favor del librador del cheque que abonare su importe dentro de las veinticuatro horas siguientes al protesto o a la interpelación, se

límite al primer caso de los cuatro contemplados en el artículo respectivo. Debemos tener en cuenta que la norma del artículo 302 del Código Penal tiende a proteger al cheque como instrumento de pago, e indirectamente a la actividad comercial y económica que se beneficia con ese instrumento. Se trata, más que de una norma propia del derecho penal sustantivo común, de una norma del derecho penal contravencional, porque tiende, más que a proteger los derechos sociales y naturales de los individuos, a regular la punibilidad de una infracción al orden, en una actividad comercial o económica, estructurada por el Estado para el logro del bienestar general. Y si la norma tiene esa finalidad, el librador del cheque que abonara su importe dentro de las veinticuatro horas posteriores al protesto o a cualquier otra forma de interpelación, debe quedar exento de pena en todos los supuestos, porque ha cesado la perturbación que provocara al orden de la actividad comercial y económica instrumentado para el bienestar general.

Dejo así fundamentado en general nuestro despacho, y quedo a disposición de la Honorable Cámara para, cuando se considere en particular, hacer las aclaraciones que los señores diputados consideren necesarias.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado De Cara.

Sr. De Cara. — Señor presidente: «Nada atenta más contra el orden social que las arbitrarias restricciones de la libertad.» Esto decía nuestro líder Lisandro de la Torre, en 1936, en oportunidad en que en el Senado de la Nación se discutía un proyecto de ley de represión del comunismo.

En este momento resulta oportuna la cita, desde que hoy no solamente tratamos de la simple derogación de las leyes represivas, sino de la plena vigencia de las libertades públicas dentro del ámbito constitucional. El Poder Ejecutivo, al enviar el proyecto de ley al Congreso, cumple con el imperativo constitucional de asegurar la unión nacional, de defender la justicia, de consolidar la paz interior. Bien está que así sea. Para los demócratas progresistas esto constituye un imperativo.

El XIV congreso nacional del Partido Demócrata Progresista estableció en su plataforma lo siguiente: 1º, real y efectiva vigencia del régimen democrático, republicano y federal establecido en la Constitución; 2º, supresión de toda la legislación que so pretexto de salvaguardar el orden o la seguridad afecte gravemente los derechos y garantías de la Constitución Nacional; 3º, libre acceso de todos los partidos políticos a la elección de gobernantes y representantes, sin otra condición que su lealtad y adhesión a los principios esenciales del sistema democrático, verbigracia, respeto de los derechos humanos, pluralidad de los partidos,

división de los poderes del Estado, principio de representatividad.

Así, hemos sostenido a lo largo de nuestra vida cívica el respecto esencial a los derechos que establece la Constitución Nacional y el libre acceso del pueblo a la elección de sus autoridades. Nuestro pensamiento en la materia, en oportunidad de que la Cámara trata la derogación de las leyes represivas y, más aún, de las libertades públicas argentinas, es bien concreto y específico. Somos partidarios de la derogación lisa y llana de las normas represivas, con la excepción de incorporar simplemente al Código Penal un nuevo artículo que incrimina la discriminación racial y además mantener la reforma del artículo 302, en lo que se refiere a cheques. No somos partidarios ni del proyecto del Poder Ejecutivo, ni del despacho de la mayoría, en cuanto establecen nuevas figuras delictivas en el Código Penal. Entendemos que en alguna medida debe terminar esa política de parches y remiendos a una estructura jurídica como es la del Código Penal.

Existe en la Honorable Cámara, precisamente en la Comisión de Legislación Penal, un magnífico trabajo. Me refiero al proyecto de Código Penal que enviara en 1960 el Poder Ejecutivo de aquel entonces y que pertenece al profesor Sebastián Soler. Ese proyecto es una magnífica obra jurídica. Debemos tener en cuenta que a través de estos años y sobre el mismo proyecto se han realizado estudios fundamentales. Han sido consultados eminentes tratadistas de derecho, magistrados, colegios de abogados y todas aquellas personas que en alguna medida tienen sobradas razones para opinar en esta materia. No entendemos cómo es posible que existiendo en la Cámara un trabajo de esa relevancia, se pretenda en este momento introducir reformas parciales al Código Penal. Probablemente, señor presidente, esto sea uno de los tantos resabios del pasado que agobian a la vida política del país.

No podemos comprender cómo es posible introducir reformas parciales a un código que necesita, en esencia, ser totalmente renovado. En este sentido nuestro sector apoyará la moción que oportunamente formuló el señor diputado Sago, de que se requiera del Poder Ejecutivo, entre los asuntos a tratar en las sesiones extraordinarias a que seguramente será convocado el Honorable Congreso, la inclusión de proyecto de nuevo Código Penal, para dar seguridad y estabilidad a nuestra endeble democracia, que va camino de su perfeccionamiento.

Entendemos que los decretos leyes de carácter represivo incluidos en el artículo 1º del proyecto que trata la Honorable Cámara deben ser derogados. ¿Por qué? Simplemente, porque son anticonstitucionales. Ellos violan los artículos 18 y 67, inciso 11, de la Constitución Nacional, que prohíben al Poder Ejecutivo legislar

en materia penal. Esta es una facultad del Congreso. La jurisprudencia, la doctrina, y los miembros de esta Cámara y de todos los partidos políticos que aquí se encuentran representados, así lo entienden, de ahí que la derogación de este artículo 1º cuenta con la unanimidad de los señores diputados.

Sobre esto me voy a permitir leer, con autorización de la Presidencia, la opinión autorizada del profesor Jiménez de Asúa, quien oportunamente fue consultado en la Comisión de Legislación Penal. El profesor Jiménez de Asúa sostiene lo siguiente: «Sobre los decretos leyes hubo siempre una opinión que no se puede considerar mayoritaria, sino que se puede decir que es *communis opinio auctoritas* en el sentido de que los decretos leyes en materia penal son ilícitos. Desde mi punto de vista los decretos leyes penales no son legítimos y, por consiguiente, el derogarlos se hace urgente. Considero que el que debe derogarlos es el Parlamento, y si dentro de esos decretos leyes hubiera algo aprovechable, luego se lo podría convertir en ley. En el momento actual la derogación de los decretos leyes me parece que ya no es una disposición ejemplar, sino de rigor científico.»

Igual criterio sustentó el profesor Sebastián Soler y el propio informante del Poder Ejecutivo, doctor Ricardo Núñez. De manera que sobre la materia, y con las medulosas exposiciones de los que me han precedido en el uso de la palabra, este aspecto queda perfectamente claro. Todos los partidos políticos y los sectores de opinión, la doctrina y la numerosísima jurisprudencia de los tribunales nacionales y aun de la Corte, son completamente claros en la materia: deben ser derogados.

Además, y esto es fundamental, señor presidente, estas normas penales, que seguramente van a ser derogadas, no se adecuan a los principios penales que informan la legislación de un país democrático, puesto que establecen el delito de opinión, que ningún Estado democrático puede admitir ni consentir. La vigencia plena del derecho y de las garantías constitucionales debe ser cierta y efectiva en profundidad. Así lo requieren la tranquilidad, la paz y el prestigio de la República. El país —como alguna vez he dicho— no se conforma con una mera apariencia de legalidad, quiere la vida desenvolviéndose en la plenitud del orden jurídico. La opinión, el pensamiento como concepto, y su exteriorización, en ningún caso pueden constituir delito. No se puede crear un delito de pensamiento; sólo los dictadores proceden así. Es absurdo crear un delito de comunismo, de fascismo o de peronismo; sólo en los Estados totalitarios del pasado o del presente se persigue el pensamiento. Las democracias sólo reprimen hechos delictuosos, previstos y tipificados previamente. Y para esta clase de hechos, señor presidente, basta con el Código Penal.

Yo sé que diversos sectores de la vida argentina están preocupados por la derogación de las normas penales. Están preocupados por que se permita actuar nuevamente al comunismo o se quiten los obstáculos legales que existen para que el partido peronista haga su propaganda y actúe en el país. Esto es absolutamente comprensible si estimamos que esos sectores de opinión no están íntimamente compenetrados con el proceso democrático que rige actualmente la vida de la Nación.

Hemos sostenido constantemente la necesidad del reencuentro del país con sus instituciones democráticas. No podemos aceptar de ninguna manera este tipo de legislación represiva que invalida el pensamiento y que erige en delito la simple opinión. Son necesarios los hechos, y para eso está el Código Penal.

Lento y preñado de sufrimientos ha sido el camino que ha recorrido la humanidad para plasmar y fijar en las constituciones y leyes fundamentales los derechos esenciales de los individuos. La incriminación previa, el juzgamiento por jueces naturales, la defensa en juicio de los derechos, el derecho de no declarar contra sí mismo, la inviolabilidad del domicilio y de la persona, la libertad de pensamiento y de credo, en suma, han logrado en gran parte su reconocimiento en todos los países civilizados de la tierra en esta etapa de la evolución de la humanidad.

El reconocimiento de estos derechos esenciales de la persona humana constituye uno de los productos más nobles de la cultura y del derecho como parte de esa cultura. Ella surge del principio de los tiempos y se elabora a través de los siglos en constante evolución. Pueblos antiguos hicieron aplicación del concepto de la incriminación previa como garantía de los derechos. Ya el Código de Hamurabí enumera delitos y fija penas; griegos y romanos dieron suma importancia a la voluntad del ciudadano y apreciaron que la mejor forma de asegurar su libertad era la directa intervención popular en la elaboración de las leyes. Así nace el principio de la soberanía del pueblo.

En Roma, la Ley de las Doce Tablas se dictó debido a la exigencia de los plebeyos que querían la codificación y publicación de las leyes. Nerón —según dice Estrada—, a fin de seducir a Roma, prometió ante el Senado, al enunciar sus planes de gobierno, el juzgamiento de los ciudadanos por jueces designados antes del hecho de la causa. En Roma nadie podía ser condenado sin ser oído, y el domicilio del ciudadano era inviolable. Las leyes Valeria y Portia —dice Tito Livio— protegían la inviolabilidad del ciudadano y en el Digesto se encuentra legislado un principio del actual hábeas corpus.

Pero todo esto no era suficiente valladar contra el despotismo. Fue necesario que el hombre buscara, a través de la libertad política, el amparo de la libertad civil. Fue necesario que el pueblo interviniera en la formación de las leyes

y en su administración, hecho que quedó concretado en la teoría de la división de los poderes, base esencial del sistema republicano y que estos decretos leyes que consideramos vulneran.

La Carta Magna de 1215, la Constitución de Virginia de 1786, la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787 y, por sobre todo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, representan la culminación de la línea evolutiva de los derechos individuales. Su mérito fundamental consiste en haber sistematizado principios que garantizan las libertades individuales y el gobierno del pueblo. Estos principios no son meramente el fruto de la razón, sino en gran parte el fruto de la historia, el producto de la experiencia y del sufrimiento del hombre a través de los siglos, en su constante y renovada lucha por la libertad. De ahí ha nacido el magnífico principio de que la autodeterminación de cada uno es la regla de la vida privada; que el gobierno es el agente del pueblo, y que el derecho protege a los ciudadanos contra el desvío de los gobernantes.

El factor esencial en el desenvolvimiento histórico y en la evolución de los derechos ha sido la libertad de pensamiento, y su medio de expresión, la palabra oral y escrita. De ahí que todas las dictaduras hayan pretendido siempre coartarla. Entre nosotros, producida la Revolución de Mayo, fue permanente preocupación de sus prohombres asegurar a los habitantes del país el goce de las libertades públicas. El reglamento orgánico de 1811, al par que estableció la división de poderes, base del sistema republicano, aseguró el goce de la libertad individual. El estatuto provisional del mismo año; el proyecto de la Sociedad Patriótica, de 1813; las leyes dictadas por la Asamblea del año XIII, que establecen la igualdad y proclaman la libertad de pensamiento al abolir el tribunal de la Inquisición; el Estatuto Provisional de 1815; el Reglamento Provisorio de 1817, y las Constituciones de 1819 y 1826 aseguran en forma concreta las libertades individuales y, por sobre todas las cosas, la libertad de pensamiento.

En esas disposiciones se encuentran los antecedentes directos de los actuales artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Así mismo, las constituciones de los veintidós Estados americanos sustentan iguales principios.

De manera que queda clara, precisa y concretamente establecido que el delito de opinión no es propio de las democracias, y sí de las dictaduras. Y nosotros, representantes del pueblo y de un país democrático, hemos venido a derogar las leyes que lo establecen.

En los Estados Unidos de América, en diversas oportunidades, también se ha planteado esta cuestión de si puede la democracia admitir en su seno sectores o partidos que luchen contra ella. Sobre esta materia, la Corte de los

Estados Unidos se ha pronunciado en diversas circunstancias.

No ignoramos que estas fuerzas deletéreas que operan en virtud de normas democráticas persiguen su destrucción. Acaso, señor presidente, ¿no es una de las bases fundamentales de la democracia permitir la exteriorización de esos principios y combatir los hechos? A eso tiende precisamente nuestro despacho, a la derogación lisa y llana de las leyes represivas, porque entendemos que los totalitarismos, cualquiera que sea su origen, deben ser combatidos en otra forma dentro de la democracia.

El sector demócrata progresista no acepta, por ejemplo, la inclusión del llamado artículo 213 bis, porque estima que las sanciones y la incriminación que él prevé —que, por otra parte, consideramos defectuosa— se encuentran perfectamente contempladas en el actual artículo 210 del Código Penal. Así lo entienden Soler y Giménez de Asúa.

Con respecto al apartado segundo de ese artículo 213 bis, consideramos que es plausible la iniciativa del Poder Ejecutivo en cuanto ataca un mal que se está generalizando en nuestro país —me refiero a la discriminación racial—; pero no estamos de acuerdo con su redacción, y por eso hemos propuesto la siguiente: «Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que en forma individual o colectiva instigaren, participaren o realizaren actos tendientes a que se aplique un tratamiento desigual o discriminatorio a las personas o entidades, fundados en motivos raciales, religiosos, políticos y sociales.»

Extendemos también el concepto a los motivos políticos, porque esencialmente en los últimos tiempos hemos visto este tipo de segregación, que no puede darse en la vida de un país democrático. La violencia por motivos raciales ha aflorado en los últimos tiempos; organizaciones de tipo extremista, como Tacuara y otras, han sido objeto de atención por parte de los poderes públicos en razón de los atentados que se han producido por motivos raciales.

Estas organizaciones que actúan en la clandestinidad son un peligro para el país, y si tenemos en cuenta que, según nuestro Preámbulo constitucional, hemos llamado a todos los hombres del mundo que quieran habitar esta tierra nuestra y contribuir con su esfuerzo a su progreso, debemos establecer normas que incriminen la discriminación racial, que no es propia de la mentalidad de nuestro pueblo y de nuestra tradición democrática.

Es oportuno traer a colación la declaración de las Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial. La asamblea general de las Naciones Unidas aprobó, por unanimidad, el 20 de noviembre de 1963, la declaración sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial. Al tomar esa determinación, refirmó los principios incorporados en la carta de las Naciones Unidas y la

declaración universal de derechos humanos, en el sentido de que todos los seres son iguales en dignidad y en derecho.

Esta declaración de las Naciones Unidas sobre eliminación de las formas de discriminación racial es un documento de suma importancia. Este organismo internacional ha advertido la forma en que en el Estado contemporáneo se procede en este sentido. Y el señor diputado Molinas, oportunamente, solicitó a la Cámara la incorporación de esa declaración en el Diario de Sesiones para conocimiento general.

De manera que queda bien claro el sentido que hemos querido dar a la inclusión y como excepción, dentro del Código Penal, a la tipificación de este delito.

Además, hemos sostenido la necesidad de incluir dentro del Código Penal, el artículo 302, que trata de los cheques y de la incriminación del libramiento de cheques sin fondos.

Nadie ignora que en el país este delito se comete con demasiada frecuencia y perturba las relaciones económicas. Por esa razón hemos contemplado también esa excepción para dar continuidad jurídica a la actual legislación.

No aceptamos la inclusión dentro del Código Penal de los otros delitos que establece el despacho de mayoría, como, por ejemplo, los delitos contra la voluntad popular, la corrupción de funcionarios, las negociaciones incompatibles con la función pública; y no los aceptamos precisamente porque somos partidarios de que la Honorable Cámara trate el nuevo Código Penal, en el que están incluidos y perfectamente tipificados estos delitos, cuya especificación ha sido tomada, en su mayor parte, del proyecto Soler por el Poder Ejecutivo. De manera que, por una cuestión de organicidad y para dar solidez a la estructura jurídica penal que el país requiere, somos partidarios de la sanción de un nuevo Código Penal. Y que sea de inmediato, señor presidente, porque no podemos dar largas a este asunto. La sociedad debe estar protegida y debe estarlo orgánicamente.

Comprendo que subyacente al tema de la derogación de los decretos leyes está el tema político. ¿Cómo no habría de estarlo si entre los decretos leyes que la Cámara va a derogar se encuentran los que proscriben al partido comunista y al partido peronista, o les impiden actuar! ¿Cómo no van a estar preocupados distintos sectores de la vida argentina frente a esta medida! Es que el pasado nos va embargando completamente, y yo diría que casi estamos, en alguna medida, sumergidos en el pasado. Este debate así lo demuestra.

Antes de tratar el tema de la derogación de las leyes represivas yo hubiera preferido que en la sesión de la fecha y en la que la Cámara destinó al tema de los guerrilleros hubiésemos tratado las leyes para el desarrollo del país y su programación. Eso es lo que hace falta. Eso es lo positivo. Ese es el futuro. Esto es el presente imbuido de pasado. Si se hubiera produ-

cido lo otro, seguramente en una sola sesión, dada la coincidencia de opinión de los sectores de la Cámara, estas leyes hubieran sido derogadas a través de un dictamen de aquellos que el cuerpo aprueba sin discusión, puesto que todos estamos de acuerdo en esa necesidad.

Pero el pasado surge constantemente: el pasado de opciones, el pasado de odio, el pasado de venganza, porque somos incapaces de abordar el futuro o porque hay intereses en que esto no ocurra.

Nuestro líder Horacio Thedy produjo en 1961 un documento de carácter fundamental. En aquella oportunidad él decía lo siguiente: «Es necesario afianzar las instituciones de la democracia. Nosotros queremos vivir en libertad bajo el pleno imperio de la Constitución y de las leyes, gozando de todos sus beneficios y cumpliendo con todos los deberes, pero sin réprobos ni elegidos. Esto quiere decir que el orden jurídico de la democracia no es compatible con las proscripciones políticas ni con la suspensión indefinida de los derechos y garantías constitucionales. Debemos, además, tener la fuerza de aceptar que todos deben gozar de los beneficios de la libertad y de la democracia. La superioridad de nuestro modo de vivir sobre los totalitarismos es, precisamente, nuestra posibilidad de convivir en paz con todas las ideologías. Por lo demás, la democracia se defiende en la medida que demuestra ser un régimen eficaz para alcanzar formas de vida libre y de un alto nivel económico y social, sin necesidad de recurrir a las persecuciones ni a las represiones políticas.»

En este momento de la vida del país todos estamos pensando en el retorno o en el no retorno; estamos pensando en términos de pasado. ¡Por qué todos los sectores de la vida política argentina no pensamos en el futuro! ¡Por qué no pensamos en suprimir la ignorancia, la enfermedad y la miseria! ¡Por qué todos los argentinos volvemos al viejo esquema del odio! ¡Por qué tratamos la derogación de leyes represivas en un largo debate, cuando deberíamos tratar las leyes del progreso y del futuro!

Una nueva generación adviene a la vida política del país. Ignora los odios y los rencores del pasado. Quiere construir un nuevo futuro sobre el resentimiento del pasado. Quiere que el país progrese, quiere vivir en paz y quiere vivir en libertad. Quiere vivir la vida de la democracia sin retornos, sin totalitarismos, sin pasado, sin odios, sin rencores. Eso es lo que quiere esta hora de la vida argentina.

Días pasados, la Cámara toda escuchaba la medulosa palabra del siempre ilustrado profesor y diputado Ghioldi. Era como escuchar en alguna medida la voz de la conciencia. En aquella oportunidad, el profesor Ghioldi decía que no debíamos practicar la política del avestruz, es decir, esconder la cabeza ante el peligro. Y yo entiendo que esto es una gran verdad.

Alguna vez los argentinos, de una vez por todas, debemos ser sinceros con nosotros mismos.

¿Qué país queremos para el futuro? Queremos el país del pasado, el país de las frustraciones y rencillas o el país donde todos, codo con codo, luchemos por el futuro. A mí no me interesan, ni le interesa al partido político en cuyo nombre hablo, todas esas cosas del pasado sino en la medida de su neta, categórica y real superación. No podemos construir el futuro sobre bases tan inciertas. No podemos aceptar esta pasividad con que se mueve la vida oficial argentina. Es necesario que nuestra democracia se vigorice y transite los caminos del porvenir sobre la base concreta de una profunda renovación de todas las estructuras de la vida argentina. ¡Cómo vamos, señor presidente, a emparchar este Código Penal que tiene cuarenta años! ¿Por qué no tratamos el nuevo Código Penal, que ya está prácticamente estudiado por la comisión? Ese código enmendado es el pasado, y eso es lo que nosotros no queremos, señor presidente.

Por otra parte, esto que estoy diciendo no es una novedad. Las fuerzas que no respetan a la sociedad, las fuerzas del odio, del resentimiento y del totalitarismo, avanzan constantemente porque no encuentran dentro de la estructura actual de la sociedad las leyes que les permitan su evolución. La estructura de la sociedad contemporánea exige no olvidar que la subsistencia de la libertad requiere una nueva definición en el nuevo montaje de las circunstancias históricas, pues éstas dan un significado especial a los efectos que la libertad produce. La ausencia de igualdad y de seguridad de las estructuras de la democracia, tal como las masas la experimentan, suponen que el juicio sobre su contenido y sobre su realidad se funden en premisas enteramente distintas para un obrero o para un hombre de letras. Desgraciadamente, viven en dos mundos distintos, y el contacto entre los mismos es de carácter fragmentario para que una interpretación común de la libertad pueda ser normalmente válida para ambos. Hay que entender la idea de la libertad no como un concepto abstracto, propio de la concepción política del siglo XIX, sino que hay que entenderla en el terreno de su aplicación práctica, con el propio dinamismo que exige que esté relacionado con una igualdad de carácter sustancial al que tienen derecho todos los habitantes de un país democrático. Se trata de dar contenido a la democracia por encima de lo meramente formal; se trata de que el pueblo experimente esencialmente seguridad y bienestar dentro de la libertad. Libertad y seguridad no son formas antagónicas, sino que deben conjugarse en la dialéctica de la democracia que la hora reclama dentro de una concepción altruista y humana de la democracia social.

Este es el pensamiento de la democracia progresista, que no es de hoy sino de siempre, por-

que siempre hemos estado mirando al futuro. Ya De la Torre, en aquel debate que recordé al comienzo de mi exposición, decía: «Los perseguidos mantienen sus mismas ideas; disminuyen su número, en todo caso, cuando se reducen las condiciones de miseria y de opresión y cuando se enseña a leer y a pensar al pueblo.»

De manera que nuestro pensamiento tiene su continuidad histórica, porque somos un partido y un movimiento político que aspira hacia el futuro, que aspira a realizarse y a vivir en un país en libertad, sin réprobos y oprimidos, donde todas las expresiones del pensamiento se conjuguen en la acción, donde podamos luchar mano a mano con las fuerzas que quieren destruir la democracia.

¿Pero cómo vamos a luchar contra esas fuerzas, si no somos capaces de dar al hombre argentino el mínimo indispensable para vivir? Y si no somos capaces de hacerlo, entonces sí las fuerzas totalitarias nos van a avasallar. ¿Cómo no nos van a avasallar si hombres que pensamos igual sobre la democracia y la libertad somos incapaces de construir sobre estas bases? ¿Cómo no nos van a avasallar si no somos capaces de unirnos para defender la democracia y la libertad, si no somos capaces de olvidar la política de comité, si no somos capaces de olvidar el pasado para construir el porvenir?

El pensamiento de la democracia progresista es moderno. Es un pensamiento que se nutre del movimiento de ideas de la política contemporánea; es un pensamiento amplio y generoso, abierto a todas las coincidencias.

No creemos tener todas las verdades, pero sí aspiramos a que nuestra verdad, con las otras verdades, puedan dar a este país la solución democrática y el futuro que reclaman. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Avila.

Sr. Avila. — El Poder Ejecutivo, al enviar su proyecto de ley, tiene el propósito de derogar todas las disposiciones represivas que no hayan sido expresamente dictadas por el organismo natural que establece nuestra Constitución Nacional, o sea, el Congreso de la Nación, y, a la par, sancionar otros instrumentos legales que resultan de emergencia en la materia.

Con la derogación de los decretos leyes represivos se quiere evitar toda posibilidad de aplicaciones contradictorias, ya que a través del primer decreto se elaboró una serie de decretos complementarios o modificatorios que han provocado el caos jurídico.

Por eso se tiende a derogar los preceptos que sancionan la mera opinión, puesto que esa medida no es compatible con el régimen instituido por nuestra ley fundamental, que resguarda y garantiza la libertad de pensamiento.

La Comisión de Legislación Penal se preocupó por efectuar un trabajo acorde con las necesidades que la hora impone, por lo que recabó

opiniones autorizadas en la materia, y así invitó a su seno a los doctores Jiménez de Asúa, Francisco Laplaza, Sebastián Soler y Ricardo Núñez, este último autor directo del proyecto elevado por el Poder Ejecutivo. Estos maestros coinciden en la necesidad de derogar los decretos leyes represivos, por estar en pugna con los principios constitucionales ya mencionados.

El profesor Núñez, cuya capacidad es reconocida no solamente en la provincia de Córdoba, sino en todo el país y, más aún, en el ámbito internacional del derecho, expresa que la mayoría de los decretos leyes represivos castigan el derecho de opinión, y propugna su supresión, pero también expone que no pretende que el Estado permanezca impasible frente a la acción nociva de los totalitarismos, cualquiera sea su color.

Con estos dos conceptos, el de la inconstitucionalidad de los decretos y el de no dejar inerte a la sociedad ante los ataques que puedan provenir de los enemigos del país y de la tranquilidad pública, se construye el esquema sobre el cual se cimienta el proyecto de ley que nuestros representantes ante la comisión respectiva han elaborado.

La dignidad y el resguardo de los derechos humanos, que comprenden especialmente los atinentes a la libertad en todos sus aspectos, están ínsitos en el ser argentino, porque son también el patrimonio de nuestros más caros sentimientos nacionales. No es precisamente ésta la hora más gloriosa de nuestras reivindicaciones del hombre en libertad. Nacimos luchando por ese objetivo, y nuestra historia, breve; pero intensa en gestas contra la opresión y contra toda suerte de limitaciones a los bien entendidos principios que enmarcan al hombre en la civilización, constituye el más preciado galardón de que nos podamos ufanar. Pero es verdad también que los enemigos de la libertad, aquellos que no vacilan en proclamarla, pero que viven al acecho para arrebatársela al menor descuido a quienes honradamente la ejercen, deben sujetarse a las leyes mediante las cuales el poder público tutela a la comunidad, como única manera de que ésta se desenvuelva en armonía en su camino hacia los grandes objetivos que constituyen, en definitiva, la meta de un pueblo.

No queremos retacear un ápice de valor al acto que esta Cámara ha de realizar con la sanción de la ley que discute sobre la base de los proyectos presentados a su consideración en el aspecto referido al levantamiento de las disposiciones represivas antes aludidas. No obstante, queremos ser bien claros. La libertad es para quienes aspiran a una convivencia en libertad, y nunca para los explotadores de la libertad de los demás. Vivimos una época de grandes perturbaciones. La desorientación se nos cuele desde afuera, y en no pocos casos se insufla desde adentro. Hay muchos factores, deletéreos algunos y ostensibles otros, que pugnan por destruir el

más preciado don que Dios pueda haber concedido al hombre. Los argentinos, que hemos aprendido a querer la libertad desde los días iniciales de nuestra existencia, sabemos muy bien dónde se encuentran esos factores negativos. Por eso, nos aferramos a la democracia como sistema dentro del cual es posible realizar la vida de acuerdo con las condiciones a que todo individuo perteneciente a un país civilizado puede aspirar.

¿Y cómo no hemos de aferrarnos a la democracia, cuando en esta hora de convulsión no hay país que no se intitule democrático? Aunque también debermos señalar la ironía y el sarcasmo que entraña esta enfática posición por parte de algunos gobiernos que son la negación misma de las virtudes propias de tal sistema. La democracia, empero, hostigada algunas veces, aceptada otras, debe defenderse. Debe defenderse contra la barbarie primitiva, reivindicada muchas veces hasta dentro de su propio seno, y no habrá gobierno, que represente con claro sentido de su responsabilidad a un pueblo ansioso de bienestar, que se desentienda de estos graves peligros. Por eso, nuestro partido luchará con todo el fervor de que son capaces sus hombres, con toda la pasión que tan nobles principios pueden despertar, para que en nuestra patria no haya víctimas de la arbitrariedad o del despotismo. Luchará por que la democracia impere limpia y airoosamente, pero en esa lucha aclaramos que no vacilaremos un instante en combatir a quienes aviesamente reniegan de ella, así sea el amparo de los falsos estandartes con que muy frecuentemente se la amenaza y trata de destruir. De ahí que votaremos por la derogación de normas cuyo análisis no interesa tanto como el efecto represivo que en un momento se tuvo en cuenta al dictarlas, no importa con qué justificativo o sin razón. Pero cuidaremos muy celosamente de que el cuerpo social se mantenga íntegramente unido en el orden y la concordia. Para los que atenten contra ese orden debe haber leyes que resguarden a la comunidad con todo el rigor que intereses tan sagrados reclaman.

Nuestro proyecto —ya lo hemos dicho— no difiere sustancialmente del que enviara el Poder Ejecutivo a la Honorable Cámara. En ambos se trata de poner punto final a una legislación determinada por hechos y circunstancias que confiamos nunca más impongan la necesidad de normas represivas especiales dictadas por gobiernos defacto. No obstante, hemos creído conveniente alterar el orden con que se estructuró el proyecto del Poder Ejecutivo. Nuestra pasión por los intereses de la colectividad nos ha ubicado en la posición de adjudicar prioridad a su defensa antes que a la derogación —legítima desde luego— de decretos que se consideran en este momento inoficiosos e inútiles, incongruentes con los fines de pacificación en que todos los argentinos estamos empeñados.

Queremos decir las cosas con entera franqueza. Y en ese sentido seguiremos. No titubearemos ni un solo instante en prohiar toda clase de leyes que castiguen los atentados contra la libertad, si los inadaptados no han alcanzado todavía a comprender que para un hombre en la democracia es tanto más doloroso privar de la libertad a los enemigos como verse despojados de la misma.

Por lo que se refiere a algunos aspectos del proyecto en disidencia que auspiciamos, he de decir que modificamos la ubicación y la redacción del proyecto incorporando como artículo 1º el artículo 4º del proyecto del Poder Ejecutivo. Debo aclarar que para aceptar este artículo 213 bis hemos tenido que vencer serias resistencias anímicas. También nosotros ansiamos vivir en libertad y tampoco queremos normas que en cualquier circunstancia y mal manejadas pueden ser mordazas para el pueblo argentino. Pero, desgraciadamente, los últimos sucesos en este país nos han despojado de todos los prejuicios que alimentábamos, tales como el de la calle Posadas, que costó tantas vidas a nuestra patria; el de Lanús, y otros tantos que hacen necesario no dejar inerte a la libertad al servicio o a disposición de cualquier desorbitado.

Aparte de la alteración del orden de los artículos, hemos efectuado algunas modificaciones. Aceptamos el inciso 1º, pero en cuanto al inciso 2º, que en el proyecto del Poder Ejecutivo expresa «Los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases», fue modificado en su última parte, en lo que se relaciona con la lucha de clases. Entendemos que las agrupaciones que sustentan ideologías distintas dentro de ese tipo de controversias, no pueden estar impedidos de trabajar y luchar por sus ideas en tanto su acción se mantenga dentro de la órbita permisible, que encuadre en el orden público, los derechos de terceros, la moral y las buenas costumbres. Es decir, que en nuestra supresión resguardamos núcleos ciudadanos de los posibles excesos de la autoridad.

Igualmente suprimimos el inciso 3º, que dice así: «Los que, pública o privadamente, instigaren a los militares o a los componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar u otros deberes inherentes a su estado.»

Suprimimos este inciso por considerar que sería inferir una ofensa gratuita a los señores componentes de las fuerzas armadas, no obstante la indudable buena fe que pudo haber inspirado la disposición, que su mantenimiento puede llegar a hacer dudar de la honestidad de estos hombres que tienen la obligación de defender nuestras fronteras, y en quienes debemos suponer la necesaria responsabilidad para actuar con total independencia de tales posibles presiones. Así mismo, señor presidente, la última parte de este inciso, cuando establece «u

otros deberes inherentes a su estado», es de una latitud tan grande que se convierte prácticamente en una norma peligrosísima para la libertad de los ciudadanos.

Hemos incorporado a nuestro despacho, se podría decir, en forma literal, algunos artículos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. También hemos hecho alguna modificación del artículo 6º de ese proyecto en el artículo 3º de nuestro despacho. En su última parte hemos hecho un agregado que consideramos de indudable importancia. El artículo originario decía así: «Artículo 222. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación.» Incluimos una pequeña cláusula, a saber: «monumentos y esculturas de próceres y hechos históricos». Este agregado responde al propósito de sancionar hechos que repugnan a la sensibilidad ciudadana. Interesa mucho menos el acto en sí, que daña en lo moral al país, pero cuya vergüenza alcanza más al orgullo que todo argentino tiene de su civilización, que el efecto perseguido por individuos desequilibrados cuyos impulsos los llevan a tan repugnantes atentados. Creer que la memoria de un prócer de la nacionalidad argentina puede menoscabarse manchando o destruyendo una estatua no es sólo producto de una falta de concepto, sino de imperdonable extravío.

Las leyes penales han de tutelar no sólo los bienes materiales, sino también los espirituales. Me pregunto: ¿cómo es posible que este tipo de actos que lesiona un entrañable acervo moral de la nacionalidad quede impune? Este es el criterio que ha prevalecido para solicitar la inclusión de esta figura delictiva.

Hemos suprimido los delitos designados como delitos contra la voluntad popular por considerar que ésa es materia para la reforma general del Código Penal, que se encuentra a estudio de la comisión. Además, consideramos que no es de tanta urgencia su inclusión.

Como artículo 5º de nuestro despacho hemos adoptado, con algunas modificaciones que especificaremos en la discusión en particular, el artículo 9º del proyecto del Poder Ejecutivo que legisla sobre los delitos contra la administración pública. Hemos coincidido totalmente en la necesidad de proveer al país de una legislación que contemple el enriquecimiento ilegítimo de los funcionarios. Es deplorable comprobar que esfuerzos inauditos se han puesto al servicio de un propósito tan noble como levantado para la sanción de leyes de esta naturaleza, durante mucho tiempo y en diversas oportunidades, sin que tan buenos esfuerzos fueran coronados por el éxito. Hoy, este Parlamento de la proporcionalidad evidenciará, con la sanción de esta norma, que lo que parecía inaccesible por décadas es una realidad, de la que todos los diputados que nos sentamos en estas bancas podemos, a

justo título, enorgullecernos. Es probable que la aplicación de estas normas aconseje algunas reformas encaminadas a perfeccionarlas. Ya lo decimos en el informe de nuestro proyecto cuando señalamos: «De acuerdo con la reforma proyectada, se presume como ilícito cualquier aumento excesivo del patrimonio de un funcionario o empleado público, salvo prueba en contrario a cargo de éste. La inversión de la prueba en materia penal, que es propia de la legislación excepcional y de emergencia, abarcará en su ámbito a un alto porcentaje de habitantes de nuestro país y será, sin duda, objeto de un estudio exhaustivo por parte de esta Honorable Cámara.»

Es decir, que aceptamos gustosos esa disposición, pero invitamos a la Honorable Cámara para que ponga lo mejor de su esfuerzo a efectos de lograr una norma que sea justa y cubra las necesidades de nuestro país. Entre tanto, que tienen la plena conciencia de su integridad es unánime aspiración de todos los hombres que tiene la plena conciencia de su integridad moral como funcionarios.

Nuestro proyecto concuerda con el del Poder Ejecutivo con respecto a la modificación de la legislación sobre el cheque.

Como ya lo expresáramos, en la parte final de nuestro proyecto proponemos derogar, no solamente los decretos leyes que indica el Poder Ejecutivo en su iniciativa, sino también todos los que guardan relación con ellos. Queremos poner un poco de orden en el caos jurídico creado por tantos decretos leyes suplementarios y complementarios.

Para concluir, deseo manifestar que con la sanción de este proyecto, la Cámara realiza un esfuerzo más en el sentido de marchar con la vista puesta en un futuro de unidad argentina, donde el pasado queda reducido a un ingrato recuerdo, aleccionador, por cierto. La historia de los pueblos es, precisamente, una sucesión de hechos positivos y negativos. Recojamos estos hechos positivos que, de una u otra manera, constituyen enseñanzas cuyo aprovechamiento incumbe a los hombres que no se detienen jamás en el camino del progreso que el destino tiene reservado a nuestro gran país. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Corresponde que haga uso de la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Lejarraga. — Si me permite, señor presidente...

El señor diputado Muñiz ha llegado esta tarde a la Capital Federal procedente de Comodoro Rivadavia y, advertido hace un momento de que le correspondía en el orden de lista hacer uso de la palabra, ha ido hasta su casa a buscar la guía de su disertación. Por ello, para no alterar el orden de los oradores, propongo que la Cámara pase a un brevísimo cuarto intermedio a fin de permitir que llegue el señor diputado Muñiz.

Sr. Musitani. — Podría proseguirse con el orden de los oradores, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — De esa manera se quebraría el orden prefijado por el que deben hacer uso de la palabra los miembros informantes de los distintos dictámenes, señor diputado Musitani.

Si hay asentimiento, se pasará a un breve cuarto intermedio.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 20 y 35.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Miguel P. Del Pero.

—A la hora 20 y 50:

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Señor presidente: el despacho que lleva mi firma, en disidencia parcial en algunos aspectos substanciales con el dictamen la mayoría de la comisión, declara nulos y consecuentemente inexistentes, afectados por vicio de inconstitucionalidad por violación de lo que ordenan los artículos 18, 67 inciso 11, y 68 a 73 de la Constitución Nacional, los decretos leyes que se enumeran en el dictamen, ratificando, de este modo, el criterio que sostuve en ocasión de debatirse en la Honorable Cámara los decretos leyes dictados por el último gobierno defacto, entre marzo de 1962 y octubre del año próximo pasado, en el sentido de que todo cuanto es materia penal ha sido reservado, por expresa disposición constitucional, al Honorable Congreso, vale decir, que solamente pueden establecerse disposiciones de tipo represivo por la vía de la ley.

Dicho principio, que sostuve en la oportunidad recordada, es de excepcional importancia en razón de que la legislación penal tiene directa e íntima vinculación con la salvaguardia de los derechos inherentes a la personalidad humana, especialmente a sus libertades. Por lo tanto, es cuestión sobre la cual el Honorable Congreso debe mantener un criterio severamente ajustado a los preceptos constitucionales, ejercitando él, y nadie más que él, las atribuciones que de manera expresa y categórica le concede la Constitución Nacional. Cualquier concesión o renunciamento en este orden de asuntos comporta grave responsabilidad para el Honorable Congreso, pues lleva consigo el abrir las puertas para que en cualquier circunstancia se pongan en vigencia, por el poder administrador, normas de tipo represivo de incalculable gravedad para la suerte del hombre argentino.

Entrando al estudio de los decretos leyes cuya nulidad auspicio en el artículo 19, advierto que incluyo entre ellos el que lleva el número 4.805/63 que no se menciona en el despacho de la mayoría. Se trata de un decreto muy importante, con disposiciones realmente trascendentes sobre admisión y expulsión de extranjeros, materia reservada, por lo tanto, a la competencia del Honorable Congreso y previos los estudios que, evidentemente, no aparecen realizados.

En el artículo 2º de mi despacho reclamo la derogación de la ley 13.234, sancionada en el año 1948, estableciendo normas para organizar la Nación para tiempo de guerra, las que serán adoptadas desde tiempos de paz; y también de la ley 13.985, llamada de represión de delitos contra la seguridad de la Nación.

Con respecto a la primera ley —13.234— considero superfluo cuanto pueda decir en apoyo de su derogación. Es una ley que todos conocemos, que muchos la han padecido y que ha sido aplicada, especialmente, para reprimir el movimiento obrero argentino. Es una ley que ha merecido la condenación unánime de las organizaciones de trabajadores, de casi todos los partidos políticos y, también, de las entidades dedicadas al estudio de los problemas de derecho, especialmente en el plano penal.

No entraré, en consecuencia, a analizar el articulado de la ley por ser sobradamente conocido, por haber sido experimentada durante dieciséis años y por haber merecido, como he dicho, condenación unánime, hechos más que suficientes para su inmediata derogación.

Sé que se me podrá observar que el problema está a consideración de una de las comisiones de la Honorable Cámara a mérito de un proyecto del diputado Palacios. Pero aun así afirmo que es ésta la oportunidad para su derogación. Al considerar la Honorable Cámara todo el cuerpo de legislación represiva que hemos execrado en reiteradas oportunidades, también debe caer la ley 13.234, conocida popularmente como ley Conintes, que comporta un verdadero agravio para el país.

No alcanzo a comprender la razón que ha tenido la mayoría de la comisión para aceptar la subsistencia de parte del articulado de la ley 13.985, sobre represión de los delitos contra la seguridad de la Nación. Esta ley, aprobada en octubre de 1950, mereció en varias oportunidades fuertes objeciones de todo tipo. Recuerdo que la comisión produjo despacho en veinticuatro horas y que la Honorable Cámara la consideró a tambor batiente.

Una de las características distintivas de la ley 13.985, reveladora del espíritu regresivo que la informa, consiste en que deja de lado el factor intencional en el sujeto activo del delito, circunstancia que no ocultó el Poder Ejecutivo en el mensaje dirigido al Congreso auspiciando la sanción de ese instrumento legal, sino que lo dijo expresamente. La ley adopta un criterio

objetivo, vale decir, que las sanciones previstas en ella se aplicarán por la sola manifestación de la conducta.

Es una ley redactada en términos dubitativos, de imprecisa tipificación de los delitos que crea con el evidente propósito, muchas veces señalado, de oponer un dique de contención a la acción del movimiento obrero, así como también a los partidos políticos cuando sus postulaciones no coinciden con el pensamiento y objetivos del Poder Ejecutivo.

Sin detenerme demasiado en el texto de la ley 13.985, recordaré el artículo 2º que castiga el espionaje. Dice así: «Será reprimido con prisión de uno a diez años el que procurare, buscare, revelar, remitiere o aprovechar noticias, documentos, informaciones u objetos de orden político, social, militar o económico que deban permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación.» Francamente, señor presidente, me pregunto si podemos tolerar la vigencia de un artículo como el que acabo de leer, de cuya trama no escapará nadie si se lo aplica con el criterio que he señalado, porque, evidentemente, da a los jueces una amplitud tal que será muy difícil eludir la pena en él establecida.

Por otra parte ¿qué significado o qué sentido tiene la expresión «que deban permanecer secretos»? ¿Quién determina que el documento ha de ser o no secreto? Se comprendería en alguna medida el artículo en el supuesto de documentos que por justificada razón hayan sido declarados secretos, pero el texto expresa en forma genérica «que deban permanecer secretos». ¿Qué clase de noticias o de informaciones son las que según el artículo deban permanecer secretas? No se puede pedir mayor imprecisión en la redacción de una prescripción penal. Si embargo, el artículo 2º queda vigente a tenor del despacho de la mayoría de la comisión.

El artículo 6º no es menos grave que el 2º pues por él se reprime con prisión de un mes a cuatro años a «todo aquel que sin autorización para ello entregue, remita, comunique, publique o difunda datos económicos, políticos, militares, financieros o industriales que, sin ser secretos o reservados, no estén destinados a su publicación o divulgación, y de los cuales haya tenido conocimiento o se le hubieren confiado en razón de su empleo, función, estado o misión». Aquí cae cualquiera; no escapa nadie. Hay una cantidad de información que no es secreta, a la que nadie ha dado tal carácter, que está en las manos del funcionario que la maneja y que llega al conocimiento público por distintas vías. De ser utilizada, hará incurrir al autor en el delito de espionaje. El hombre político que recibe noticias tanto confidenciales pero que no tienen carácter de secretas —como tantas veces ocurrirá— será procesado si las utiliza para explicar al pueblo algún problema de interés general.

Esto es inaceptable, intolerable, y comporta un verdadero atentado porque coloca a todos en la mayor inseguridad.

El artículo 79, primero del capítulo sobre sabotaje, dispone que «será reprimido con prisión de uno a veinticinco años el que por cualquier medio desorganizare, destruyere, deteriorare o inutilizare, en todo o en parte, temporal o definitivamente, documentos, objetos, materiales, instalaciones, servicios o industrias de cualquier naturaleza, con el propósito de perturbar, retardar o impedir el desarrollo militar, económico, financiero, social o industrial de la Nación. Cuando los actos fueran realizados al servicio o en beneficio de una potencia extranjera, se podrá imponer al culpable prisión perpetua».

Creo, señor presidente, que la sola lectura del artículo hace innecesario cualquier comentario sobre el mismo.

Una huelga de trabajadores, declarada sin otro propósito que el de defender los objetivos confesados como determinantes del paro, generalmente generada por las relaciones económicas obrero-patronales, pero que por el azar de las circunstancias ocasiona la destrucción de elementos de la fábrica o industria en la que trabajan los obreros declarados en huelga, puede significar la aplicación del artículo 79 a los autores del daño con la gravísima sanción contenida en él: de uno a veinticinco años de prisión.

¿Por qué no se deroga toda la ley, lisa y llanamente, como lo propongo en el despacho en disidencia? Es una mala ley que, al igual que la 13.234, ha concitado la repulsa virtualmente unánime del pueblo. ¿Es que la Nación está en guerra? ¿Hay algún peligro inminente en tal sentido? ¿Han ocurrido o están ocurriendo hechos que hagan necesaria la vigencia de un cuerpo legal de semejante naturaleza? De ninguna manera.

Felizmente nuestro país no confronta peligros de conflicto bélico con ningún otro, y en el orden interno, sin dejar de reconocer la existencia de acontecimientos fruto de las tensiones sociales, ninguno de ellos tiene importancia o significación para poner en manos del Ejecutivo una ley como la 13.985. Esta ley se la sancionó, al igual que la 13.234, para reprimir el movimiento obrero y la acción política adversa al gobierno que la propició.

Es evidente que a excepción de sucesos pequeños, sin mayor relevancia ni trascendencia, el país está en calma, animados nuestros compatriotas por el mejor propósito y poniendo el hombro para salir de situaciones bastante endemoniadas.

La ley 13.985 y la 13.234 deben ser derogadas por antidemocráticas, por los peligros ciertos que comportan para nuestra forma de vida, y, muy especialmente, para el movimiento obrero y para los partidos políticos.

La ley 13.985 debe ser derogada con absoluta tranquilidad de conciencia porque para la re-

presión de los delitos que prevé —traición, espionaje y sabotaje—, delitos que casi no se dan en nuestro país y de los que no se tienen noticias desde hace muchísimos años, bastan y sobran las actuales disposiciones del Código Penal. El delito de traición está previsto, por otra parte, en el artículo 103 de la Constitución Nacional, el que establece que «la traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse con sus enemigos prestandole ayuda y socorro. El Congreso —agrega el artículo— fijará por una ley especial la pena de este delito; pero ella no pasará de la persona del delincuente ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes de cualquier grado».

En cambio, el inconstitucional artículo 19 de la ley 13.985 dice: «Las acciones u omisiones previstas en la presente ley que constituyen ayuda y socorro a los enemigos de la Nación, serán calificadas de traición cuando hubieren sido cometidas por argentinos o por cualquier persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública.»

Si la Constitución define el delito de traición, es evidente que no puede haber otro delito con esta calificación que no sea el previsto en su artículo 103. Lo único que la Constitución ha dejado librado al criterio del Congreso es la fijación de la pena, lo que ya ha hecho al sancionar los artículos 214 al 218 del Código Penal.

Además no debe olvidarse que el delito de traición sólo puede darse en caso de guerra, como surge claramente del texto de la Constitución, que emplea las expresiones «enemigo de la Nación» y «tomar las armas contra ella».

Insisto, pues, en que el artículo 19 de la ley 13.985 lesiona una disposición constitucional. No me explico, entonces, a mérito de qué motivos el despacho de la mayoría de la comisión se opone a su derogación, así como de toda la ley, que es pésima, inspirada en los propósitos que he mencionado anteriormente.

El delito de espionaje está actualmente contemplado en los artículos 222, 223 y 224 del Código Penal. Cabe preguntarse cuántos procesos por espionaje se han iniciado en el país en los últimos quince o veinte años. No sé con exactitud si habrá habido algún caso; creo que no. Pero no deja de ser cierto que determinados personajes de alta alcurnia han podido moverse entre nosotros sin obstáculos, y tengo sobrados motivos para sospechar que muchos de ellos han estado complicados en actividades de espionaje.

Hace poco recibimos, auspiciada por un mal ciudadano argentino, la visita del señor Hjalmar Schacht, sujeto alemán comprometido en delitos de lesa humanidad en que incurrió el nazismo. No tengo la menor duda de que ha viajado a nuestro país a hacer espionaje para alguien. Y pocas sesiones atrás señalé que determinada embajada extranjera aparecía com-

prometida en harto sospechosas actividades, entrometiéndose en los asuntos políticos internos del país.

¡Qué cosa rara ocurre en nuestro país desde hace años, convertido en tierra de seguridad para sujetos de la especie de los que he nombrado, mientras la legislación represiva ha operado implacablemente, sin la menor consideración, para castigar al movimiento obrero y a los políticos empeñados en noble lucha por una nación libre y próspera, animados por un superior espíritu de justicia!

La existencia de leyes como las señaladas comporta —reitero— un verdadero agravio al pueblo trabajador; una lesión a nuestra organización democrática. Son cuerpos legales inspirados por los criterios penales del fascismo y del nazismo, es decir, del totalitarismo. Es una legislación que no se compadece con las normas del sistema penal democrático.

Agregaré que el artículo 7º de la ley 13.985 contempla el sabotaje material y moral. No insistiré en el detalle porque ya he necho referencia al mismo en los términos de brevedad que aconseja el estado de evidente fatiga de la Cámara. Por esa razón propicio en mi despacho, lamentando que no lo haya recogido el de la mayoría, la derogación de dos leyes que han sido combatidas desde el mismo día de su sanción, y de cuya aplicación tenemos una penosa experiencia: movilizaciones militares de trabajadores, persecuciones y prisiones de obreros por centenares.

Otro aspecto de mi despacho que traduce una disidencia casi total con el de la mayoría de la comisión, es el relacionado con el enriquecimiento ilegítimo de los funcionarios y las incompatibilidades con la función pública. He optado por reproducir íntegramente el proyecto presentado a la Honorable Cámara por nuestro correligionario diputado Alfredo L. Palacios, proyecto que resume —como lo expresa en los fundamentos que lo acompañan— los frutos de anteriores elaboraciones, entre las cuales figuran algunos despachos de años pasados que no llegaron a ser sancionados por el Honorable Congreso o que solamente lo fueron por una de las Cámaras pero sin llegar a convertirse en ley.

Muy sintéticamente esbozaré algunos comentarios. En el despacho de la mayoría no hay ninguna referencia a las incompatibilidades, y esto significa una omisión de importancia. En cambio, en el proyecto que propicio se las establece expresamente en el artículo 12, bajo el título «Actividades prohibidas». Se prohíbe a todo funcionario o empleado público realizar las actividades que se enumeran de manera muy concreta en los incisos a), b) y c).

Las incompatibilidades son asunto muy importante, señor presidente, porque ha sido común —y no estoy seguro de que en el futuro no se repita— la situación de funcionarios públicos de toda jerarquía, de la más distinta

importancia, que representaron o patrocinaron en forma directa o indirecta a particulares, entidades y empresas con intereses encontrados frente a los de los Estados nacional y provinciales y las municipalidades.

Para no entretener con detalles a la Honorable Cámara me limitaré a recordar los casos tantas veces denunciados, de funcionarios públicos que han representado y patrocinado erogaciones ante el Estado a empresas concesionarias, lo cual lleva consigo una grave incompatibilidad de orden moral. En días muy recientes hemos experimentado todos una gran vergüenza al conocer la conducta de ex procuradores del Tesoro al servicio de los intereses de empresas petroleras. No he olvidado que un ex ministro del Interior de la Revolución Libertadora, cuyo estudio era entonces y siguió siendo en los días que corren un centro de conspiración contra los intereses de la República patrocina y defiende a tenebrosos monopolios petroleros.

Si es que en verdad nos proponemos moralizar a fondo y de una buena vez la administración pública, raspando hasta el hueso toda la parte tomada por el proceso infeccioso que la afecta para concluir con situaciones incompatibles con la moral republicana, la ley debe establecer severas normas de conducta y no menos severas sanciones para reprimir la inmoralidad. Lo que ha ocurrido es muy grave. La ley debe comprender a todas las escalas del escalafón desde las más importantes hasta las más modestas, tipificando incompatibilidades para todos. El dictamen de la mayoría omite este capítulo que es fundamental porque atañe directamente —vuelvo a repetir— a la eficiente preservación de la moral en los funcionarios públicos.

Quiero subrayar el inciso c) del artículo 12 por el que se prohíbe a los funcionarios públicos formar parte o intervenir en la dirección o administración de empresas privadas o mixtas que tengan por objeto explotar concesiones o franquicias de la administración pública. Esto puede parecer una previsión exagerada. ¿Cómo puede ocurrir, en efecto, que un funcionario en actividad forme parte de los cuerpos directivos de empresas que explotan concesiones públicas. Sin embargo, no es así. El artículo recoge —para prever su repetición en el futuro— hechos que han sucedido en tiempos cercanos.

El actual artículo 265 del Código Penal limita las incompatibilidades de los funcionarios públicos a lo siguiente: «Los funcionarios públicos que directamente, por persona interpuesta o actuando simulado, se interesaren en cualquier contrato u operación en que intervengan por razón de su cargo.» Esto no basta; no es suficiente. Importa contar con prescripciones precisas y concretas. Aquí, en nuestro país, tenemos el antecedente cercano —y los hechos hay que exponerlos con todas las letras, aunque resulten de

lorosos— de un ex ministro de Comunicaciones del gobierno del doctor Frondizi convicto y confeso de haber representado a un poderoso *trust* internacional: la International Telephone and Telegraph Company, poderoso monopolio internacional de comunicaciones que ha sido procesado en Europa por delito de espionaje; es decir, una compañía que presta servicios de comunicaciones y, además, hace espionaje para determinados departamentos del gobierno norteamericano. El ex ministro de Comunicaciones a que aludo ha confesado, en juicio radicado en los tribunales de esta Capital, que no solamente se ha desempeñado como funcionario de esa empresa en la Argentina, sino que también ha integrado el directorio del *trust* en los Estados Unidos, percibiendo sus sueldos en dólares. ¡Y semejante personaje ha sido nada menos que ministro de Comunicaciones de la Nación!

Vale decir, que de un ciudadano con tales antecedentes y que ha tenido en sus manos el sistema de comunicaciones argentinas, rápidamente brota la fundada sospecha de que ha hecho del cargo ministerial un uso contrario a los intereses de la República, pues es mucho lo que ha podido saber con motivo de sus funciones. Todo, desde luego, sin la menor preocupación por las prescripciones de la ley 13.985. Valga el paréntesis para la referencia, que tiene relación con el objeto de una exposición y que sirve, así mismo, para calificar o descalificar moralmente a funcionarios de ese tipo, con los que la República debe terminar si es que realmente nos proponemos encarrilarla por las vías de la decencia, de la rectitud de conducta. El referido funcionario ha confesado, en su desvergüenza, —y pongo las pruebas a disposición de quienquiera consultarlas—, que luce en los actos oficiales dos condecoraciones que le han otorgado los dos gobiernos de un país en guerra civil, con el agregado de que las exhibe con orgullo porque con uno de esos dos gobiernos ha hecho un fructífero negocio para el consorcio a que me acabo de referir.

Está fresco todavía entre nosotros —para no tomar sino algunos aspectos o antecedentes de inconducta— el recuerdo de lo que ocurrió en el año 1936 con las malhadadas concesiones otorgadas por las ordenanzas 8.028 y 8.029 a las empresas filiales del monopolio internacional de electricidad.

En un libro que seguramente debe poseer la Biblioteca del Congreso, se resumen las conclusiones de la investigación llevada a cabo por nuestro eminente compatriota Rodríguez Conde, registrándose los nombres —que suman varias decenas— de funcionarios y de ex funcionarios de mediana y de alta jerarquía de la administración nacional y municipal directamente comprometidos en el triste negociado eléctrico.

Todo lo expuesto explica la razón de la previsión contenida en el proyecto del doctor Pa-

lacios al enumerar las actividades prohibidas por incompatibles con la función pública, ya que no solamente constituye hecho repudiable el incurrir en el delito de cohecho, en la coima, como lo llama el pueblo, sino que no es menos grave la inconducta de los funcionarios que perciben, por la vía de honorarios, u otras, retribuciones por los servicios que prestan a empresas extranjeras o nacionales cuyos intereses son encontrados con los del Estado nacional, provincial o municipal. Desde luego que cuando se trata de grandes monopolios, de *trust* o consorcios internacionales, esos intereses apátridas conspiran específicamente, además, contra los del pueblo trabajador.

Pido a los colegas firmantes del despacho de la mayoría, cuya sensibilidad moral conozco, a quienes sé preocupados por mejorar la administración y animados por superiores propósitos de bien común, como igualmente a todos los integrantes de la Honorable Cámara, que aumen los esfuerzos para terminar de una vez por todas, para siempre, con tan deplorables ejemplos de inconducta, de turbias complicidades, estudiando la posibilidad de mejorar el despacho mayoritario para establecer, por lo menos, el capítulo de las actividades prohibidas. Espero que mi sugestión sea recogida. No porque yo lo pida, que esto no tiene ninguna importancia, sino porque en nuestro país hay una historia reciente y otra lejana que nos enseña que no basta sancionar al coimero, pues hay delitos tan repudiables como el de la coima o de la coima disimulada bajo la apariencia de honorarios o retribuciones supuestamente legítimas en dinero.

El artículo 5º del despacho de la mayoría —tomo este despacho para las comparaciones porque me da pie para fijar con mayor precisión las divergencias fundamentales con el criterio que anima al que lleva mi firma— incorpora al Código Penal disposiciones relativas al enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; pero no tipifica con la necesaria exactitud, no dibuja con precisión el delito ni contempla todas las formas que éste puede ofrecer. En cambio, el artículo 1º del proyecto del doctor Palacios, que integra el despacho que suscribo en minoría, prevé, tanto como es posible en una ley de esta naturaleza —y digo tanto como es posible porque no se me escapa que los delinquentes de guante blanco, que son los que en gran mayoría componen como sujetos activos el cuadro de estos delitos, saben encontrar ranuras por las cuales escapar a las sanciones de la ley—, las distintas situaciones que pueden presentarse.

El artículo 1º contempla la situación. Establece, en efecto, que «todo funcionario o empleado público nacional, provincial, municipal o de instituciones, reparticiones autónomas o autárquicas, sea designado por nombramiento o elección, que se enriqueciere directamente o por interpuesta persona mediante el ejercicio ilegal o deshonesto de su cargo o de la influen-

cia derivada del mismo o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta por doble tiempo. Si el funcionario fuere designado por elección o juez o ministro la pena será de reclusión o prisión de cuatro a doce años e inhabilitación absoluta perpetua».

En cambio, en el artículo 5º del dictamen de la mayoría de la comisión se reprime con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años el funcionario o al empleado público que incurriera en ese delito. Advierto —si no he leído mal— que en el despacho de la mayoría, aparte de no aparecer suficiente y claramente tipificada la infracción, se ha omitido la distinción —para mí fundamental— entre funcionario por designación y funcionario por elección, como así mismo la que corresponde tratándose de jueces y ministros. La distinción importa para graduar la pena, mayor en la segunda hipótesis que en la primera, porque los funcionarios por elección, al incurrir en delito, son tan delincuentes como los primeros, los funcionarios por designación, ya que con su conducta delictuosa han comprometido la fe y la confianza depositada en ellos por los electores, fe y confianza que todo mandatario de la voluntad popular debe conservar con supremo celo, de tal manera de poder ofrecer al instante, sin un segundo de demora, su vida pública y privada al examen y al juicio de sus compatriotas.

Señalo lo de vida pública y privada porque, contra lo que algunos creen, no se divorcian de la realidad sino que marchan estrechamente vinculadas, a tal punto que constituyen una sola. Pero como no faltan quienes las diferencian, dejo señalado que el funcionario político debe tener, además de una vida pública intachable, una conducta privada tan ejemplar como la primera.

Para concretar mi pensamiento de tal manera que no quede un tanto librado a la interpretación en sus expresiones genéricas, diré que un abogado —y tomo este ejemplo particular porque es mi profesión—, sin apartarse del principio que lo obliga a guardar secreto de lo que en el ejercicio de su profesión llegare a saber por confesión de sus mandantes o clientes, debe tener sus bibliotecas y sus expedientes prontos para la investigación, especialmente para poder probar, ante el menor requerimiento, que como representante del pueblo no patrocina empresas concesionarias, no tiene vínculos profesionales con consorcios internacionales, no recibe honorarios de las turbias combinaciones monopolísticas, ni tampoco defiende causas que se contradicen con lo que debe ser la conducta del funcionario.

En ese orden de ideas importa, pues, advertir una diferencia fundamental entre el funcionario por designación y el funcionario por elección

para establecer sanciones o penas mayores que el segundo, ya que ellas deben graduarse de acuerdo a la personalidad del delincuente. A más cultos, versados o ilustrados, o a los de mayor responsabilidad cívica, política o social hay que sancionarlos con penas más graves. En este sentido se anota en el despacho de la mayoría una omisión que me parece importante acerca de la cual acaso podamos encontrar, en el curso del debate, una fórmula que contemple lo que para mí constituye un aspecto de verdadera significación.

Antes de proseguir quiero señalar que mientras el despacho de la mayoría modifica o complementa algunos de los artículos vigentes del Código Penal, el despacho que lleva mi firma está concebido con un sentido orgánico y, contemplando las distintas situaciones, se incorpora al Código Penal a la vez que deroga las actuales disposiciones, en el capítulo que lleva el título de Cohecho. Vale decir, insisto, que los artículos vigentes del Código Penal desaparecen, y en su lugar se incorporan los que contiene el despacho.

Hay un aspecto de significación en el despacho de la mayoría que lo comparto sin reticencias. Me refiero al principio de inversión de la prueba, principio que algunos no aceptan y critican. Yo lo acepto para esta clase de delitos, y creo que todos cuantos alguna vez podemos ser materia de investigación ante alguna imputación malevolente debemos aceptar la inversión de la prueba. ¿Qué significa, señor presidente, la luz roja que acaba de encenderse? ¿Acaso no tengo derecho a exponer durante una hora?

Sr. Antón. — Hace ya una hora que está hablando.

Sr. Presidente (Del Pero). — El señor diputado ha iniciado su exposición a las 20 y 53. Evidentemente, tiene derecho a hablar durante una hora, como representante del bloque.

Sr. Muñiz. — No; como informante de un despacho en disidencia.

Sr. Presidente (Del Pero). — El reloj de la Secretaría marcha correctamente e indica que faltan tres minutos para que venza el término.

Sr. Catalán. — Que se prorrogue el plazo.

Sr. Muñiz. — Solicito una breve prórroga.

Sr. Pizarro. — Que se conceda prórroga al señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — He achicado mucho mi exposición y procuraré comprimirla un poco más.

Sr. Presidente (Del Pero). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en uso de la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Prosigo, señor presidente.

Tenemos que aceptar complacidos el principio de la inversión de la prueba, pero no solamente enunciándolo, pues eso no basta. Hay que completarlo con algunas precisiones de modo que quienes deban explicar que el aumento de

bienes ha obedecido a causas lícitas, puedan hacerlo dentro de condiciones determinadas. Por eso el artículo 2º del proyecto que suscribo expresa que «salvo prueba en contrario, se presume enriquecimiento ilegítimo todo aumento de patrimonio, inclusive el del cónyuge, si el funcionario fuera casado y no mediare separación, que no proviniera de las siguientes causas...». Y aquí viene lo importante: «Para que el acrecentamiento patrimonial se considere legítimo, lícito, y libere de culpa al funcionario sospechado, debe obedecer a las siguientes causas: emolumentos legales del cargo; ejercicio de profesión, oficio o actividad lícita, compatible con la función pública...» Ahora se apreciará la directa correlación entre las disposiciones contenidas en el capítulo relativo a las actividades prohibidas y las tareas profesionales compatibles con la función pública. Si los aumentos provienen de emolumentos incompatibles, de actividades prohibidas, se ha caído en el delito.

El inciso c) se refiere al acrecentamiento natural de los bienes que se poseen al asumir el cargo, o que se adquieren lícitamente durante su ejercicio por herencia, legado, donación o ejercicio de derechos legítimamente adquiridos.

Tengo vivos deseos de continuar con algunos comentarios pormenorizados sobre disposiciones que conceptúo fundamentales y por las que nuestro partido ha luchado ahincadamente durante muchos años. Pero no lo haré, no podré satisfacer mis anhelos, en homenaje a que la Cámara se ha propuesto terminar en el día de hoy la consideración de este asunto.

Pero no puedo sustraerme a la necesidad de unas pocas palabras acerca de la importancia del Registro Nacional de Bienes, el que no ha sido contemplado en el despacho de la mayoría. En cambio, lo crea expresamente el artículo 5º de mi proyecto para todos los funcionarios por designación, por nombramiento y por elección sean nacionales, provinciales o comunales, permanentes o transitorios. Todos ellos están obligados a denunciar los bienes propios y de los del cónyuge dentro de los treinta días de asumir sus tareas.

Insisto en que una ley de esta naturaleza debe arbitrar un medio instrumental idóneo para que los funcionarios acrediten en cualquier momento, y de manera fehaciente, incuestionablemente, su estado patrimonial. Todos los funcionarios públicos, sin atención al origen de su designación, sean nacionales, provinciales o municipales, tienen la obligación de estar siempre prontos para probar su inocencia ante imputaciones de buena o mala fe. Para ello, nada mejor que el estado patrimonial protocolizado, al día, en el Registro Nacional de Bienes.

Los funcionarios no deben tener ningún inconveniente —he aquí otro aspecto importante— para que el director del registro, a través de las constancias del protocolo, advierta si se ha operado algún aumento sospechoso del patrimonio. Porque dejar librado a la denuncia pú-

blica o a los procesos sumariales en lo criminal o administrativo la comprobación de si ha habido o no acrecentamiento patrimonial, es abrir una puerta para que escapen por ella hábiles malhechores que operan con gran conocimiento del terreno y que se valen de los medios más diversos para eludir la sanción a que se han hecho acreedores.

Los funcionarios públicos debemos estar siempre prontos, reitero, para ofrecer al momento de nuestra designación el estado patrimonial; y quien con anterioridad a la sanción de la ley no lo haya hecho por inexistencia de prescripciones en ese sentido, está obligado, igualmente, a registrar inmediatamente el estado de su patrimonio al día del nombramiento, aunque esto se remonte a varios años de antigüedad.

Omito otras consideraciones sobre el tema. Mi exposición llega a su término. Además, es un poco tarde. En la Cámara casi no quedan colegas; nos salva la abnegación de los taquígrafos, obligados a no abandonar su mesa de trabajo.

Sr. Pizarro. — Y la abnegación del presidente.

Sr. Muñiz. — Así es.

Sr. Caro. — Y de algunos diputados.

Sr. Muñiz. — Y de algunos diputados. Son pocos los que quedan.

Sr. Murmis. — Todos atentos a su palabra.

Sr. Muñiz. — Pero no puedo menos que deplorar las ausencias, inexplicables en las actuales circunstancias, salvo que medie alguna razón muy atendible.

Continúo, señor presidente. La consolidación y defensa de nuestro sistema de vida republicano y democrático no se logrará con la aplicación de leyes represivas como las que ahora serán derogadas porque coartan el seguro, tranquilo y pleno ejercicio de las libertades, en especial el libre juego de los gremios de trabajadores, de los partidos políticos y de las entidades animadas de propósitos de progreso.

Lo que el país reclama con urgencia son leyes de muy distinta índole que, si somos capaces de sancionar muy pronto, evitarán inconvenientes y atenuarán las tensiones sociales. De lo contrario, irán en aumento. Lo que el país necesita es que el Código Penal, inspirado en un pensamiento democrático, ofrezca una estructura jurídica que defienda en primer término las libertades y los derechos del hombre, que nada está tan directamente vinculado con esos derechos y libertades, especialmente para el hombre de nuestros días, como el Código Penal.

Paralelamente, urge la sanción de leyes que terminen con los privilegios económicos y con las desigualdades sociales, posibilitando a todos una igualitaria y equitativa participación en el producido del esfuerzo nacional. No se deben confundir jamás, como ha ocurrido con los decretos leyes cuya derogación auspicio mi despacho, los justos y legítimos reclamos de un pueblo que se subleva contra la injusticia, contra un estado de cosas que no tolera más, con la defensa de los

privilegios de unos pocos que buscan por el atajo de la ley represiva la subsistencia de un orden social perimido.

Inspirado por los nobles propósitos del partido que represento, el Partido Socialista Argentino, nuestro bloque votará por la derogación de toda la legislación represiva, incluyendo entre ella, desde luego, a las dos leyes que he recordado.

Sr. Antón. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Muñiz. — Con todo placer, tratándose del señor diputado Antón.

Sr. Antón. — Yo tengo sobre mi banca el texto del decreto ley 4.805/63, que es uno que el señor diputado ha incluido en la lista de los que a su criterio deberían derogarse. Se trata de un decreto que trae una serie de regulaciones respecto de la entrada de extranjeros al país. Desearía saber cómo vincula el señor diputado esta norma con la legislación represiva.

Sr. Muñiz. — Estoy en contra de este decreto por varios motivos: porque las medidas que se relacionan con el ingreso de extranjeros a nuestro país y con su expulsión del mismo no pueden ser materia de un decreto ley. Tienen que ser —si es que alguien considera necesario legislar sobre el particular— objeto de una ley. El artículo 18 de la Constitución debe tener plena vigencia y efectividad en todo cuanto se relaciona con el orden penal.

Me opongo también al decreto ley que preocupa al señor diputado porque trae a mi memoria malos recuerdos, como el de la ley 4.144 y la de extrañamiento de extranjeros, fruto del miedo, del pánico de la oligarquía argentina de comienzos de siglo que vio en el movimiento obrero que se organizaba para pedir pan y libertad un peligro para la subsistencia de sus privilegios económicos. Y, por último, me opongo al decreto, señor diputado, porque solamente no habiéndolo leído puede haberme formulado la pregunta que ha escuchado la Honorable Cámara.

Para hacer más claro el porqué de mi oposición al decreto, diré así mismo que sería suficiente leerlo —lo que no haré por respeto a la Honorable Cámara— en todo su articulado, para que se aprecie sin la menor duda cómo pone en manos del Poder Ejecutivo, con una discrecionalidad y una arbitrariedad inaceptables, la facultad de aceptar o expulsar del país a ciudadanos por distintas causas. ¿Quiere algo más, señor diputado?

Sr. Antón. — Sí, señor diputado.

Sr. Muñiz. — Lo dice el decreto, pero le vuelvo a repetir que leerlo comportaría una falta de respeto de mi parte para con la Cámara a estas horas de la noche y del debate.

Sr. Antón. — ¿Si me permite una interrupción?..

Sr. Muñiz. — Sí, señor diputado.

Sr. Antón. — Quería aclararle al señor diputado que coincido plenamente con él en cuanto a que ésta es materia de legislación y no de un decreto ley. Más aún; y yo creo que cualquier materia legislativa debe estar contenida en una ley y que los decretos leyes son una aberración jurídica.

Ahora bien; yo, que he combatido, dentro de mis modestos medios, la ley 4.144, la ley de extrañamiento de extranjeros, lo único que quería preguntarle ahora al señor diputado es la vinculación con el asunto que estamos considerando, que no se refiere a extranjeros que habitan en el suelo argentino, sino a extranjeros que habitan fuera del territorio y que quieren ingresar al país. Al efecto establece una serie de condiciones para el ingreso, las que, de no ser cumplidas, implicarían la expulsión por haber entrado ilegalmente. Esto tiene una serie de defectos enormes, y yo no estoy, en principio, de acuerdo con ella, pero aclaro que no la vinculaba directamente a la legislación represiva. Es decir, que esta ley, que puede ser desastrosa, no la vinculo de ninguna manera con la legislación represiva, ya que lo único que hace es regular la entrada al país de extranjeros que viven fuera del mismo y establece las condiciones para ingresar, determinando que, de no ser cumplidas, los infractores podrán ser expulsados.

Sr. Muñiz. — Me parece que después de lo que el señor diputado ha dicho, a mí no me queda nada por agregar. De sus propias palabras surge que la ley tiene carácter represivo.

Si el Poder Ejecutivo puede expulsar a un ciudadano extranjero que ha ingresado al país...

Sr. Antón. — Ilegalmente.

Sr. Muñiz. — ...acogiéndose al llamado constitucional formulado a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar nuestro suelo, y el señor diputado considera que eso no es represión, tenemos, evidentemente, criterios diametralmente encontrados. Es un decreto ley típicamente represivo y por esa razón debe ser incluido dentro del cuadro de la legislación cuya derogación auspicio. Confío haber satisfecho al señor diputado Antón, que suele ser difícil de complacer, pero me parece que en este caso lo he logrado.

Para terminar expresaré, señor presidente, que al considerarse en particular el despacho mayoritario que servirá de base para recoger la voluntad de los señores diputados a través de las votaciones, haré las peticiones necesarias para completar algunos artículos y la inclusión de disposición de mi dictamen.

Sr. Presidente (Del Pero). — De conformidad con el artículo 158 del reglamento y de acuerdo con el plan de labor elaborado, la Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 15.